

Dossier:
Medio siglo después. La Guerra Fría
latinoamericana y los golpes de Estado
de 1973 en Uruguay y Chile

Varia

Historia y problemas del siglo XX

contemporánea

Volumen 17, número 1, 2023

Contemporánea (ISSN 1688-9746) es una revista académica de frecuencia semestral con artículos en español, inglés y portugués sobre historia y problemas del siglo xx en América Latina.



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Contemporánea se edita en Montevideo
con apoyo
de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Universidad de la República.

Contemporánea
ISSN: 1688-9746

Edición al cuidado del equipo
de la Unidad de Comunicación y Ediciones
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad de la República.

Archivo General de la Universidad de la República
Frugoni 1427
CP 11200
Montevideo, URUGUAY
Teléfonos: (+598) 24009155

Por suscripciones y canjes comunicarse con <revistacontemporanea2010@gmail.com>

Comité editorial

Jimena Alonso, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Inés Cuadro, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

María Eugenia Jung, Archivo General de la Universidad de la República

Aldo Marchesi, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Vania Markarian, Archivo General de la Universidad de la República

Diego Sempol, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Isabel Wschebor, Archivo General de la Universidad de la República

Jaime Yaffé, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Gabriela González, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Javier Correa, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Lucas D'Avenia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Pablo Alvira, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Editores de reseñas bibliográficas

Jimena Alonso, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Lucas D'Avenia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Comité asesor

Gerardo Caetano, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Álvaro Rico, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

José Rilla, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y Universidad Centro Latinoamericana de Economía Humana

Comité académico

Uruguay

Clara Aldrighi, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Alcides Beretta, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Magdalena Bertino, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República

Luis Bértola, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

María Camou, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Carlos Demasi, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Adolfo Garcé, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República

Raúl Jacob, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

María Inés Moraes, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República

Benjamín Nahum, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República

Adela Pellegrino, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Rodolfo Porrini, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República

Exterior

Carlos Aguirre, University of Oregon, Estados Unidos
Carlos Altamirano, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Claudio Barrientos, Universidad Diego Portales, Chile
Isabella Cosse, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Fernando Devoto, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Silvia Dutrenit, Instituto Mora, México

Eduardo Elena, Miami University, Estados Unidos

Carlos Fico, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil
Paulo Fontes, Fundación Getulio Vargas, Brasil

Marina Franco, Universidad Nacional San Martín, Argentina

Greg Grandin, New York University, Estados Unidos
Elizabeth Jelin, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina

Victoria Langland, University of California, Estados Unidos

Gerardo Leibner, Universidad de Tel Aviv, Israel

Pablo Piccato, Columbia University, Estados Unidos

Laura Reali, Universidad Paris VII, Francia

Eduardo Rey Tristán, Universidad de Santiago de Compostela, España

Marcelo Ridenti, Universidad Estadual de Campinas, Brasil

Luis Alberto Romero, Universidad Nacional San Martín, Argentina

Sinclair Thomson, New York University, Estados Unidos
Gonzalo Varela, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Verónica Valdivia, Universidad Diego Portales, Chile

Peter Winn, Tufts University, Estados Unidos

Eric Zolov, Stony Brook University, Estados Unidos

Contenido

Presentación de los editores	5
DOSSIER	
Medio siglo después. La Guerra Fría latinoamericana y los golpes de Estado de 1973 en Uruguay y Chile <i>Marcelo Casals y Vania Markarian</i>	7
El movimiento estudiantil argentino ante los golpes de estado y los años iniciales de las dictaduras en Uruguay y Chile (1973-1975) <i>Mariano Millán y Guadalupe Seia</i>	12
Afirmando la legitimidad revolucionaria. La solidaridad de Luis Echeverría y el PRI con la izquierda chilena tras el golpe de Estado de 1973 <i>Andrea Torrealba Torre</i>	30
La dictadura uruguaya ante los desafíos de la modernización de la Universidad de la República. El proyecto BID (1976-1984) <i>María Eugenia Jung</i>	45
Más allá de la «oposición/resistencia» o la «desmovilización/inmovilidad». Trabajadores y sindicalismo durante la última dictadura uruguaya <i>Sabrina Alvarez</i>	64
«Me está faltando un libro...». Entrevista a Álvaro Rico <i>Javier Correa Morales y Jaime Yaffé</i>	76
«Ya es tiempo, ¿no?». Trayectorias, deudas y futuros posibles de la historia y la historiografía de la dictadura militar chilena. Entrevista a Verónica Valdivia <i>Marcelo Casals</i>	107
Manuscrito «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el Penal de Libertad. Montevideo diciembre de 1990». Juan Pivel Devoto. Archivo General de la Nación/ Colección y Archivo Juan Pivel Devoto <i>Carolina Porley e Isabel Wschebor</i>	124
VARIA	
En apoyo a la Revolución: imágenes de solidaridad y prácticas vinculadas al cine entre Uruguay y Cuba (1960-1964) <i>Cecilia Lacruz</i>	136

Presentación de los editores

El surgimiento de la revista *Contemporánea: Historia y problemas del siglo xx* a comienzos de 2010 fue un hito en la consolidación del campo de estudios sobre la historia de los períodos más recientes en Uruguay y América Latina. En la presentación del primer número, sus editores expresaban: «aspiramos a una mayor densidad histórica en el análisis de los períodos más cercanos. Este es el punto de partida desde donde invitamos a participar de la reflexión sobre diferentes aspectos de la historia del siglo xx». El número que presentamos a continuación está especialmente vinculado con aquellas aspiraciones que dieron origen a esta revista y se insertan en un atmósfera de debate propiciada por aniversarios como el de los cincuenta años del golpe de Estado de 1973.

Durante el primer semestre de 2023, se produjeron de forma expansiva una multiplicidad de actividades culturales y académicas, en los que diferentes sectores del campo universitario, la sociedad civil organizada y el público en general han debatido y reflexionado en torno a la dictadura, a medio siglo del golpe. A su vez, diferentes eventos han impactado fuertemente en las miradas de nuestra sociedad frente a los pasados dictatoriales fruto del hallazgo reciente de restos

humanos en predios militares, la divulgación de importantes volúmenes de documentos producidos durante la segunda mitad del siglo xx y diferentes episodios de reconocimiento público y judicial de las responsabilidades del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos durante el período dictatorial.

Aquella vocación inicial de la revista *Contemporánea* nos encuentra hoy en el desafío de contribuir con el análisis de aquel pasado desde la investigación histórica, en el marco de estas conmemoraciones. Es así que el dossier central del presente número, coordinado por los historiadores Marcelo Casals y Vania Markarian, se propuso ampliar los marcos de reflexión sobre la historia de América Latina y el impacto de la Guerra Fría en el continente, a la luz de los golpes de Estado en Chile y Uruguay en 1973. A su vez, se trata de un dossier que integró en su propuesta entrevistas a destacados especialistas del período: Álvaro Rico y Verónica Valdivia e inaugura una sección vinculada a la publicación comentada de documentos inéditos para la investigación. En este caso, el inédito seleccionado proviene del archivo personal de Juan Pivel Devoto y refiere vestigios testimoniales de la prisión política de su hijo.

Finalmente, y en sintonía con los enfoques y análisis propuestos en el dossier, Cecilia Lacruz nos presenta un artículo en la sección *Varia* donde explora las relaciones entre Uruguay y Cuba a través de las imágenes cinematográficas producidas por los noticieros del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos entre 1960 y 1964.

Esperamos que disfruten de la lectura y será entonces hasta el próximo número, en diciembre de 2023, donde, entre otros trabajos, nos espera el dossier *Perspectivas recientes sobre la historia de la clase trabajadora latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX*, coordinado por Silvia Simonassi y Sabrina Alvarez.

Medio siglo después. La Guerra Fría latinoamericana y los golpes de Estado de 1973 en Uruguay y Chile

Marcelo Casals¹ y Vania Markarian²

A medio siglo de los golpes de Estado que dieron inicio a largas dictaduras en Uruguay y Chile, parece propicio observar ambos eventos en una historia más amplia en tiempos y espacios, la de la Guerra Fría latinoamericana. En los últimos años, una exitosa renovación historiográfica al norte y al sur del planeta ha propuesto una agenda de investigación abierta a la multidireccionalidad de aquellos procesos históricos que desembocaron en los «nuevos autoritarismos» de los años setenta en el subcontinente (Field Jr., Krepp y Pettinà 2020; Harmer 2014; Marchesi 2017; Pettinà 2018, entre otros). De esta renovación participan también estudios que en diferentes momentos han puesto atención en la capacidad a ratos olvidada de los actores locales latinoamericanos para moldear sus propias condiciones y tejer desde ahí relaciones transnacionales de colaboración, incluyendo, por supuesto, a aquellos que se identificaron con los proyectos contrarrevolucionarios de ambas dictaduras (Broquetas 2015; Casals 2023; Cosse y Markarian 1996; Kelly 2018; Marchesi 2001; Markarian 2005; Palieraki 2018; Perry 2020; Riquelme y Harmer 2014; Valdivia Ortiz de Zárate 2010, etcétera).

Sin ánimo exhaustivo, pero haciendo pie en esa renovación, desde Contemporánea convocamos a contribuciones que piensen los golpes de Estado de 1973 en ambos países como resultados de procesos de acumulación histórica de larga duración. Quisimos detectar investigaciones que pusieran énfasis en los sectores que coincidieron en la formulación de programas de transformación social que contravinieran las tradiciones democráticas desde fundamentos ideológicos y políticos con raíces rastreables en el devenir del siglo XX. Apelamos asimismo a trabajos sobre las dimensiones culturales y sociales de los regímenes resultantes en su capacidad para producir consenso y legitimidad para programas de transformación radical de sus respectivas sociedades, sin desatender el despliegue de represión y terror que suele señalarse como su rasgo más sobresaliente. Pretendimos, a su vez, fomentar la mirada comparativa y las perspectivas que estudian la circulación transnacional de ideas, personas y recursos para entender la ola autoritaria en la región más allá de las fronteras nacionales. Aspiramos, por último, a recibir reflexiones acerca de las cambiantes miradas sobre estos temas, especialmente sobre la producción que desde las ciencias sociales y la historiografía se viene elaborando desde hace ya cinco décadas sobre aquellas temáticas que siguen abiertas en el debate público de las sociedades latinoamericanas del siglo XXI.

¹ CIDOC, Escuela de Historia, Universidad Finis Terrae.

² Universidad de la República.

El resultado es el que ahora presentamos. Como suele pasar en un llamado abierto, hemos cubierto algunas de esas aspiraciones, pero otras quedan como tareas pendientes para futuros esfuerzos editoriales. Seguramente porque se trata de una mirada ya ineludible sobre estos temas, logramos captar perspectivas que no se ciñen a las fronteras nacionales, sino que miran las interrelaciones entre actores que las atravesaron para definir sus identidades políticas. Esto se refleja en los dos textos que abren el dossier. En ambos casos, se trata de aproximaciones a los sectores que resistieron el embate autoritario y no de estudios de las alianzas golpistas que se extendieron en la región y más allá, tema que quedó fuera de los artículos finalmente aceptados para publicación, pero que por cierto constituye un campo de estudios en expansión. Efectivamente, los textos de Mariano Millán y Guadalupe Seia, por un lado, y de Andrea Torrealba, por otro, se centran en la acción política de los opositores al avance autoritario, ya sea proyectando su actividad en espacios geográficos diferentes a sus países de origen o interpretando lo que pasaba afuera para construir sus posiciones políticas en tiempos turbulentos.

En el primero, los autores observan las formas en que el movimiento estudiantil argentino, especialmente en Buenos Aires, se plantó frente a los golpes de Estado de 1973 en Chile y Uruguay. Se ubican para eso en el floreciente campo de estudios de los movimientos estudiantiles latinoamericanos y remiten a tradiciones más antiguas de solidaridad transnacional, como la que proviene del reformismo con origen en la Universidad de Córdoba en 1918. Incorporan, además, como factor explicativo esencial, las redes de intercambio entre agrupaciones estudiantiles desplegadas en la región en la segunda mitad del siglo XX. Apelan también a la comprensión de la coyuntura específica a nivel nacional con los avatares del gobierno peronista de la época y sus rápidas derivas hacia el terrorismo de Estado. Estas diferentes escalas de análisis y un rico universo documental permiten a Millán y Seia aproximarse a través del actor estudiantil al impacto de los «nuevos autoritarismos» sobre el convulso mapa del Cono Sur.

En el segundo texto del dossier, Torrealba ofrece una mirada exploratoria a un tema que ha concitado gran interés entre protagonistas y estudiosos, como fue el impacto del exilio chileno en el gobierno mexicano encabezado por Luis Echeverría. Si, por un lado, México se convirtió en un lugar de acogida para miles de militantes que huían de las dictaduras del Cono Sur, este gesto solidario permitió a quien había sido sindicado como responsable de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968 mostrarse cercano a las izquierdas del continente. Con base en el análisis de los medios oficialistas, la autora muestra la apelación al supuesto legado revolucionario como mecanismo central de legitimación del régimen, incluyendo el declarado giro autoritario de los años setenta. Según Torrealba, el régimen mexicano habría equiparado el rol de las guerrillas locales con el de los militares chilenos en tanto expresiones de quiebra de una legalidad estatal, apuntando así a resolver la contradicción entre represión interna y apoyo decidido a los exiliados chilenos. El texto puede leerse también como una contribución a la creciente literatura que aborda el exilio como una cuestión central y de larga duración en la historia latinoamericana.

Ambos artículos, tal como pretendíamos en la convocatoria, incorporan de modo explícito el marco conceptual de la Guerra Fría como un conflicto global que se desarrolló en múltiples escalas, de lo local a lo transnacional, y donde los actores latinoamericanos participaron desde sus propios intereses, agendas y capacidades de acción. Se trata de un programa de investigación que viene dando valiosos frutos desde hace ya varios lustros, pero que sigue desdoblado sus coordenadas geográficas, cronológicas y teóricas. Esto redundará en la convivencia de visiones que argumentan su pertinencia y superioridad en disputas sobre la repetida apelación a la definición escalar de «lo global» (en expresiones como *global South* y *global sixties*) o la adscripción a giros historiográficos más o menos

recientes y hegemónicos (especialmente el *transnational turn*). Sin espacio para entrar ahora en esos deslindes, digamos que esto no ha impedido que se siga cultivando el estudio en escala nacional, concebida de modo renovado como un cruce específico entre fuerzas desplegadas en diferentes niveles durante ese conflicto bipolar y universalizante.

Todo esto para decir que los otros dos textos que ahora presentamos se ciñen a un caso nacional, el uruguayo, sin dejar de preocuparse por las circulaciones de ideas e influencias que lo atravesaron en ese mismo espacio y tiempo definidos por la Guerra Fría y su declinación abiertamente autoritaria local entre 1973 y 1985. María Eugenia Jung se concentra en el impacto de la dictadura uruguaya en la Universidad de la República, que al arrancar el período era la única institución de educación superior del país. Busca entender no solo la dimensión represiva, que redundó en el desmantelamiento de servicios y prácticas académicas laboriosamente contruidos, sino también la acción propositiva de las autoridades interventoras en vínculo con una institución, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía una agenda de larga data para la remodelación de las instituciones educativas en la región. Jung aporta también elementos para volver a pensar los esfuerzos de producción de consenso autoritario a través de diferentes políticas públicas, un tema que ha tenido importantes desarrollos en relación con las dictaduras del Cono Sur de los años setenta del siglo pasado y que buscamos capturar desde la convocatoria a este número de *Contemporánea*.

Para terminar, el artículo de Sabrina Alvarez se ubica en un registro diferente. Se aparta de los ejercicios anteriores de análisis del período y tema en cuestión para hacer un balance de lo producido desde la historia y las ciencias sociales, algo que también queríamos captar con este dossier. En este caso, la autora realiza un exigente examen de la reflexión sobre un asunto central: el papel de los trabajadores organizados durante los regímenes autoritarios de la región. Con foco en Uruguay, observa que esa producción se dividió entre quienes se afiliaban a una visión militante sobre la capacidad de oposición y resistencia del movimiento obrero y quienes adscribían, casi en espejo perfecto, a la tesis de la exitosa desmovilización de ese actor social durante las dictaduras. Ubicándose en una perspectiva que enfatiza la continuidad del conflicto entre capital y trabajo en los diferentes arreglos políticos del mundo capitalista, Alvarez propone una comprensión diferente del factor sindical y llama a explorar nuevas líneas de análisis a tono con desarrollos recientes en la región, especialmente en Argentina. Reclama prestar más atención a las diferentes tradiciones de organización obrera, a los determinantes territoriales y culturales del trabajo, al impacto de estos en la capacidad de protesta y negociación frente a las patronales y los representantes del gobierno, entre otros asuntos. Insta también a incluir la dimensión de denuncia de la responsabilidad y complicidad empresarial en la embestida represiva de la última dictadura.

Además de los artículos recién reseñados, incluimos otras dos formas de intervención en la discusión historiográfica que no son tan usuales en las revistas académicas, pero que *Contemporánea* se ha empeñado en integrar a sus páginas desde sus inicios: las entrevistas a investigadores y la divulgación de archivos, en este caso mediante la transcripción comentada de documentos. Queremos en este número temático inaugurar una sección de inéditos y por eso compartimos un conjunto de manuscritos del historiador uruguayo Juan Pivel Devoto, recientemente ingresados al Archivo General de la Nación. Se trata de anotaciones de lo que le transmitía su hijo cuando estaba preso en el Penal de Libertad como miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Transcritos por Carolina Porley e Isabel Wschebor, estos manuscritos permiten analizar aspectos poco conocidos de Pivel en su vínculo con la producción de carácter testimonial y en relación con el pasado reciente.

Asimismo, aprovechando la trágica sincronía de los golpes de Estado en Uruguay y Chile, decidimos incluir conversaciones con dos destacados historiadores del período: Álvaro Rico y Verónica

Valdivia. En ambas intervenciones queda expuesto el problema no siempre tematizado de la interrelación entre la biografía y el historiador, entre historia vivida e historia narrada, algo particularmente significativo cuando hablamos de las experiencias autoritarias recientes del Cono Sur. Su impacto es difícil de exagerar en las subjetividades de quienes las vivieron desde distintas posiciones.

En el caso de Álvaro Rico se trata de una trayectoria que ilustra varias de las peculiaridades del campo de estudios del pasado reciente en Uruguay. Fue a un tiempo protagonista y pionero analista de esa etapa. Entrevistado por Javier Correa y Jaime Yaffé, del comité académico de *Contemporánea*, repasó esas tempranas conexiones entre militancia política, persecución dictatorial e intereses académicos que lo llevaron a estudiar filosofía política en Moscú y, luego del retorno a Uruguay una vez finalizada la dictadura, a desarrollar una prolífica carrera académica en la Universidad de la República. Recién retirado de esos cargos, reflexionó también sobre su obra, clave para pensar el tramo autoritario desde el «camino democrático» que lo precedió hasta su perdurabilidad en la sociedad uruguaya contemporánea. Se detuvo asimismo en los avatares que lo llevaron a integrar el primer triunvirato de historiadores al que el gobierno encomendó investigar los delitos de la dictadura, quedando a cargo posteriormente del equipo que siguió examinando las responsabilidades criminales del Estado uruguayo durante ese período.

Verónica Valdivia, por otro lado, ha dedicado toda su carrera al estudio de la historia política chilena y su larga dictadura, ya sea directamente o bien a través de preguntas de investigación anexas, en directa relación con el frágil escenario político de la transición posautoritaria. Su obra no solo es fundamental en la fragmentada historiografía sobre la dictadura chilena, sino que también ha inspirado a nuevas generaciones de investigadores a hacerse preguntas más complejas sobre ese pasado reciente, en un camino aún en construcción por escapar de los silencios y limitaciones interpretativas de los esfuerzos tempranos por historiar el período. A medio siglo del golpe chileno no está de más hacer un alto en el camino para observar —y observarnos— críticamente en nuestros intentos académicos y ciudadanos por hacer sentido de una experiencia aún conflictiva y difícil de elaborar. A eso apunta la entrevista que le realizó Marcelo Casals para este número de *Contemporánea*.

Ambas entrevistas constituyen un llamado a imbricar el estudio de esa etapa de la historia con el presente del terrorismo de Estado como un tema abierto y aun contencioso en las sociedades latinoamericanas. Como vimos, la gran mayoría de los artículos del dossier examina facetas del fenómeno autoritario sin abundar en temáticas que hasta hace muy poco dominaban la agenda de investigación del campo de estudios que seguimos llamando *pasado reciente* aunque haya transcurrido ya medio siglo. Valga preguntarse, a propósito de esas etiquetas, hasta cuándo dura lo reciente de ese pasado o hacia dónde se extiende nuestro presente posautoritario. ¿A quién se le hubiera ocurrido llamar *reciente* a la Segunda Guerra Mundial o al nazismo cuando terminó la Guerra Fría? ¿Qué dice de nuestras formas de habitar el presente el hecho de que los sucesos de hace cincuenta años aún los consideremos como propios? Como sea que nos expliquemos ese fenómeno, al parecer las valoraciones del período —al menos en lo que a investigación académica se refiere— están cambiando. Para este dossier no recibimos ningún trabajo centrado en cuestiones como las violaciones de los derechos humanos, los reclamos de «verdad y justicia» y los trabajos de memoria, algo impensable hace solo un par de lustros atrás. ¿Podemos leer esa ausencia como una señal de renovación y consolidación de un campo que ya no necesita hilar sus preocupaciones tan estrechamente con los debates públicos? ¿Será que al encuadrarse en el aliento más largo de la Guerra Fría logra sostener su legitimidad como espacio académico consolidado sin apelar a su vigencia política inmediata? ¿Será simplemente un sesgo de la convocatoria que no se abrió explícitamente a esos asuntos? Las preguntas son pertinentes porque aluden al espíritu de balance historiográfico que suelen azuzar los aniversarios redondos.

Exceden, sin embargo, el propósito de esta introducción que no queremos cerrar sin caminar sobre nuestros pasos para volver a decir como tantos antes que nosotros a ambos lados de los Andes: «Nunca más dictadura».

Referencias bibliográficas

- BROQUETAS, M. (2015). *La trama autoritaria: derechas y violencia en Uruguay (1958-1966)*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- CASALS, M. (2023). *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- COSSE, I., y MARKARIAN, V. (1996). *1975: año de la orientalidad: identidad, memoria e historia en una dictadura*. Montevideo: Trilce.
- FIELD JR., T. C., KREPP, S., y PETTINÀ, V. (Eds.). (2020). *Latin America and the Global Cold War*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- HARMER, T. (2014). *The Cold War in Latin America*. En A. M. Kalinovsky y C. Daigle (Eds.), *The Routledge Handbook of the Cold War*. Londres-Nueva York: Routledge.
- KELLY, P. W. (2018). *Sovereign Emergencies. Latin America and the Making of Global Human Rights Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MARCHESI, A. (2001). *El Uruguay inventado: la política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su imaginario*. Montevideo: Trilce.
- MARCHESI, A. (2017). Escribiendo la Guerra Fría latinoamericana: entre el Sur «local» y el Norte «global». *Estudios Históricos (Rio de Janeiro)*, 30(60), pp. 187-202. <https://doi.org/10.1590/s2178-14942017000100010>.
- MARKARIAN, V. (2005). *Left in Transformation: Uruguayan Exiles in the Latin American Human Rights Network 1967-1984*. Nueva York: Routledge.
- PALIERAKI, E. (2018). Broadening the Field of Perception and Struggle: Chilean Political Exiles in Algeria and Third World Cosmopolitanism. *African Identities*, 16(2), pp. 205-218.
- PERRY, M. (2020). *Exilio y Renovación. Transferencia política del socialismo chileno en Europa Occidental, 1973-1988*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- PETTINÀ, V. (2018). *Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina*. Ciudad de México: El Colegio de México.
- RIQUELME, A., y HARMER, T. (Eds.). (2014). *Chile y la guerra fría global*. Santiago de Chile: RIL Editores-Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2010). ¡Estamos en guerra señores!: El régimen militar de Pinochet y el «pueblo», 1973-1980. *Historia*, 43(1), pp. 163-201.

El movimiento estudiantil argentino ante los golpes de estado y los años iniciales de las dictaduras en Uruguay y Chile (1973-1975)

The Argentine Student Movement against the Coups and during the Initial Years of the Dictatorships in Chile and Uruguay (1973-1975)

Mariano Millán y Guadalupe Seia¹

Resumen

En este artículo ofrecemos una descripción de las acciones y posicionamientos del movimiento estudiantil argentino, con especial atención al de Buenos Aires, en solidaridad con los pueblos de Chile y Uruguay frente a los golpes de Estado de 1973.

El presente escrito sitúa dichas acciones en una coyuntura histórica precisa y difícil de parangonar: el final de los largos años sesenta a escala local durante el tercer peronismo, signado por una institucionalización fallida y luego por el terrorismo de Estado.

El análisis de la acción estudiantil está anclado en tres variables complejas: la tradición del internacionalismo reformista en Argentina; los ciclos de la política nacional y regional; y, la coyuntura universitaria nacional. En función de estas, realizamos un análisis cualitativo de diversas y heterogéneas fuentes documentales.

Palabras clave: Movimiento Estudiantil, Dictaduras, Cono Sur, Solidaridad Transnacional, Internacionalismo Reformista

Abstract

In this article we aim to describe the actions and positions of the Argentine student movement, especially in Buenos Aires, in solidarity with the people of Chile and Uruguay in the face of the 1973 coups.

This text situates the above-mentioned solidarity actions in a unique historical conjuncture: the end of the so-called long sixties at the local level during the third Peronism government (1973-1976), marked by a failed institutionalization process and followed by State terrorism.

The analysis of student actions is anchored in three complex variables: the tradition of reformist internationalism in Argentina; the cycles of national and international politics; and the local universities situation. Based on these, we developed a qualitative analysis of diverse and heterogeneous documentary sources.

Keywords: Student Movement, Dictatorships, Southern Cone, Transnational Solidarity, University Reform Internationalism

¹ Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Introducción

El 16 de septiembre de 1973, unas veinte mil personas marcharon por las calles de Buenos Aires para repudiar el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular. Entre cánticos y pancartas, se podía leer una que exclamaba «¡Chile, Uruguay, Argentina por la liberación de América Latina!» (Marchesi, 2019, p. 151). Como destaca el historiador uruguayo, por aquellos meses la militancia revolucionaria del Cono Sur consideraba a Buenos Aires como un refugio y un centro para la resistencia ante la ofensiva contrarrevolucionaria en América Latina. Los sucesos posteriores demostraron que Argentina no quedaría al margen del proceso continental, incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este trabajo describimos las acciones y posicionamientos del movimiento estudiantil argentino, con especial atención al de la Universidad de Buenos Aires (UBA), epicentro de la contienda universitaria durante el tercer peronismo, frente a los golpes de Estado de 1973 en Uruguay y Chile, entendidos como parte de una experiencia global de solidaridad.² Asimismo, analizamos los usos políticos y universitarios de los acontecimientos en los países vecinos que realizaron las agrupaciones estudiantiles y las autoridades nacionales y universitarias. El examen de las miradas estudiantiles sobre las dictaduras uruguaya y chilena ofrece una clave de lectura de los modos en los cuales las organizaciones de alumna/os pensaban la política y sus conexiones con la vida universitaria. A su vez, nuestro análisis diacrónico mostrará los cambios en ambas dimensiones al compás de los sucesivos avances de las fuerzas contrainsurgentes en el país y el subcontinente. Sostenemos que las acciones y reflexiones estudiantiles se comprenden en el marco de una tradición heredada de la Reforma de Universitaria de 1918, resignificada en el escenario de los «largos años sesenta» y en las distintas etapas de la Guerra Fría en el continente. Por ello, en el presente artículo trabajamos sobre tres variables: la tradición del internacionalismo reformista en Argentina, que incluye lecturas y usos de los procesos políticos internacionales dentro del movimiento y en la interacción con las autoridades; los ciclos de la política nacional; y la coyuntura universitaria nacional, en ambos casos contándose también las posiciones del gobierno.

Este escrito dialoga con dos campos en consolidación: el de la historia transnacional de la Guerra Fría Latinoamericana y el de los movimientos estudiantiles. En este último las investigaciones sobre el ciclo de la Reforma Universitaria a principios del siglo XX y los «sesenta globales» ocupan un lugar relevante. Nuestro trabajo aborda las vacancias de lo acontecido entre el final del radical ciclo de los «largos años sesenta» y el inicio de una etapa de repliegue y reconfiguración del movimiento estudiantil argentino y sudamericano. Como proponen Tanya Harmer y Martín Álvarez (2021), estudiamos un fenómeno local inserto en un proceso global y continental.

Para ello, realizamos un análisis cualitativo de diversas fuentes documentales: prensa comercial y militante de Argentina, Chile, Uruguay y otros países³; materiales de agrupaciones estudiantiles.

2 Existe una prolífica producción académica sobre las diversas experiencias de exilio y solidaridad con la población chilena y uruguaya bajo dictadura (Markarian, 2006; Power, 2009; Lastra, 2021; Casola, 2021; Badan Ribeiro y Ayala, 2022; Cristía y Camacho Padilla, 2022). En el mundo universitario, en particular, surgieron organizaciones para relocalizar académicos, por ejemplo, en la academia del Reino Unido (Perry, 2021) y otras preexistentes, como la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) procuraron desplegar una tarea similar a nivel regional. Por su parte, la Organización Continental Latino Americana de Estudiantes (OCLAE) y la Unión Internacional de Estudiantes (UIE), condenaron los golpes, la intervención y la represión sobre las universidades.

3 Consultada en Hemerotecas de la Ciudad de Buenos Aires y en el *Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika* (Berlín, Alemania).

tiles y de las Federaciones de Buenos Aires (FUBA) y Argentina (FUA)⁴; la revista mensual de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE)⁵; comunicaciones de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)⁶; y fuentes secundarias recuperadas a partir de informes y literatura especializada.

El artículo está organizado en tres secciones. En la primera ubicamos al movimiento estudiantil latinoamericano como objeto de estudio en perspectiva transnacional, particularmente durante la Guerra Fría. Luego, recuperamos aportes teóricos para precisar qué entendemos por activismo transnacional, movimientos de solidaridad e internacionalismo. En la tercera sección, describimos y analizamos las formas de solidaridad estudiantil ante los golpes de Estado en Chile y Uruguay y las utilidades de los eventos de los países vecinos en la disputa local.

El movimiento estudiantil latinoamericano en clave transnacional

El desarrollo de una historia transnacional de nuestro continente condensa esfuerzos por superar varios obstáculos. Entre ellos, el lugar marginal que hasta hace pocos años tenía América Latina en la historia global, mayormente escrita desde Estados Unidos y Europa Occidental (Brown, 2015); y, como observó Aldo Marchesi (2017), la preeminencia de historiografías nacionales, tanto como iniciativas estatales y como por consecuencia de la escasez de recursos.

En los últimos años los estudios globales sobre la Guerra Fría han sido un espacio fértil para la construcción de miradas historiográficas sobre y desde América Latina, donde se cuentan estudios comparativos, de conexiones internacionales (entre Estados) y transnacionales (redes y relaciones no estatales). Asimismo, las investigaciones sobre movimientos de solidaridades y exilios subrayaron la relevancia de las interacciones sur-sur, lo cual propició nuevos marcos para pensar geografías, agencias e identidades (Harmer y Álvarez, 2021). No obstante, la literatura sobre ciertos actores u organizaciones políticas aún mantiene un foco local o nacional, lo que supone una paradoja pues, como plantea Marchesi (2017), se analizan movimientos internacionalistas con una lente nacional.

Este fenómeno es observable en el movimiento estudiantil en América Latina que, nació y se desarrolló con una fuerte identidad continental (Portantiero, 1978; Marsiske, 2003; Bergel, 2018; Buchbinder, 2018; Rodríguez, 2018; Bustelo, 2021), mientras que su campo de investigación se ha conformado a través de estudios de caso locales o nacionales.⁷ Sin embargo, aquí también hubo novedades durante la última década, con la proliferación de trabajos comparativos y de carácter transnacional fundamental pero no exclusivamente⁸ sobre los «sesentas globales» (Zolov, 2018; Chen Jian, et al., 2018; Mc Adams y Monta, 2021), entre ellos, los de Luciani (2019), Pensado (2018), Califa y Millán (2019) y Millán (2012, 2013a, 2013b y 2018). Autores como Carlos Celi Hidalgo (2018) y Andrés Donoso Romo (2022) han intentado construir una definición sociohistórica más general sobre el movimiento

4 Disponibles en el Centro de Documentación e Investigación de la Culturas de Izquierda (Cedinci), el Archivo del Partido Comunista argentino (Buenos Aires, Argentina) y otros acervos digitales.

5 Disponible en la Biblioteca del *Ibero-Amerikanischen Institut* (Berlín, Alemania).

6 Disponibles en el Acervo Virtual «Henning Jensen Pennington» de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). (<http://dspaceudual.org>) [Última consulta: 18 de junio de 2023].

7 La clásica colección coordinada por Renate Marsiske (1999, 2002, 2006, 2015, 2017) es muestra de ello. También, compilaciones como las de Bonavena y Millán (2018) y Ordorika, Rodríguez-Gómez y Gil Antón (2019). Para un estado de la cuestión, véase Pis Diez y Seia (2022).

8 Sobre otros períodos, existen investigaciones comparativas sobre los movimientos estudiantiles bajo dictaduras en Uruguay, Chile y Argentina (González Vaillant y Seia, 2022; Seia, 2022a); entre 1970 y 1990 en Chile, España y México (Errázuriz Tagle, 2013; Muñoz Tamayo, 2015).

estudiantil en nuestro continente, con miradas centradas en las formas de organización o en el rol de la educación. Por su parte, los trabajos de Nicolás Dip (2020) e Imanol Ordorika (2022) también proponen una mirada latinoamericana⁹ que brinda claves para enmarcar nuestro análisis: pensar lo político y lo universitario en términos de tensiones más que primacías, estudiar los procesos nacionales de manera comparativa y conectada, considerar los legados del movimiento de la Reforma, atender a la «gama» de experiencias de las izquierdas y situar los casos de estudio en el marco de oleadas continentales. Aquí, seguimos a Ordorika y ubicamos nuestro objeto en el final de la etapa del pasaje de la «Reforma a la revolución» (en los años sesenta y setenta), con elementos que prefiguran la siguiente, de lucha por la democracia y contra el ajuste neoliberal (en los ochenta y los noventa).

Un antecedente relevante para este trabajo se encuentra en los trabajos que reconstruyen experiencias concretas de solidaridad transnacional o de intercambio entre militancias de diversas geografías nacionales desde Argentina, aunque no exclusivamente.¹⁰ Se destacan las indagaciones sobre el impacto de la Revolución Cubana entre los universitarios y el rechazo a la invasión estadounidense de Santo Domingo en 1965 (Pis Diez y Ghilini, 2017; Pis Diez, 2019, 2022; Califa, 2011, 2013, 2014); los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes entre 1970 y 1980 (Vommaro, 2021); las misiones de solidaridad con la Revolución en Nicaragua (Fernández Hellmund, 2015) y con las Jornadas Nacionales de Protesta contra la dictadura en Chile (Seia, 2022b).

Algunas notas teóricas para el análisis de las solidaridades transnacionales

Tal vez debido al peso del Estado-nación en la definición de los objetos y perspectivas de las ciencias sociales, como problematizara Norbert Elías (1989), las movilizaciones y activismos transnacionales han planteado varios desafíos para su conceptualización. Al respecto, Thomas Olesen afirma que los movimientos de solidaridad son

actores genuinamente globales en el sentido de que su principal motivación está relacionada con las condiciones y el sufrimiento de otros lejanos. [...] encarnan y desarrollan una conciencia global en la que los destinos de las personas en todo el mundo están moral y políticamente interrelacionados. (Anheier y Juergensmeyer, 2012, p. 1587).

Aquellos movimientos pueden ser interpretados como formas de activismo transnacional que, Donatella Della Porta ha definido como «... la movilización de reivindicaciones colectivas por parte de actores ubicados en más de un país y/o dirigidas a más de un gobierno nacional y/u organización gubernamental internacional u otro actor internacional» (en Anheier y Juergensmeyer, 2012, p. 20). Para la socióloga italiana, las protestas transnacionales tienen la capacidad de producir «efectos relacionales, cognitivos y afectivos» sobre los activistas y los movimientos sociales en cada lugar (p. 22).

Mientras Bernhard Bayerlein (en Anheier y Juergensmeyer, 2012) ha destacado al internacionalismo comunista como uno de los movimientos transnacionales más salientes del siglo XX, Marcel Van der Linden (2019) ha sostenido la importancia del internacionalismo proletario. El historiador da cuenta de los diversos modos, no todos vinculados a la izquierda política, en que el internacionalismo se ha constituido a partir de acciones de un grupo de un país que deja de lado sus intereses nacionales

9 Dip se basa en la UBA, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de México. Ordorika toma los casos más salientes de cada etapa, para el siglo XX, Argentina en 1918 y México en 1968, 1987 y 1999.

10 Musotti y Blaz Rodríguez (2019) analizaron la solidaridad que el movimiento estudiantil mexicano recibió durante 1968 y, Gapenne (2022) estudió las recepciones y circulaciones durante las movilizaciones de ese año en Francia y Uruguay. Seia (2023) atendió los posicionamientos de la OCLAE ante las dictaduras en Chile y Argentina.

de corto plazo en beneficio de un grupo de otro país, con la intención de promover sus intereses de largo plazo como miembros de una clase transnacional.

Durante la Guerra Fría, varios colectivos de «militantes internacionalistas» autolocalizados en una «comunidad imaginada revolucionaria del Tercer Mundo» protagonizaron numerosas prácticas de solidaridad transnacional (Badan Ribeiro y Ayala, 2022). Según Hatzky y Stites Mor (2014, p. 129-130) el activismo transnacional supone vínculos con movimientos de solidaridad internacional del pasado y el compromiso con la realidad local. A su vez, dichos autores han señalado que, para la izquierda latinoamericana, la solidaridad transnacional representó un medio para denunciar ocupaciones militares, dictaduras y violaciones de derechos humanos.

Estos elementos auxilian nuestro análisis de las experiencias del movimiento estudiantil argentino. Es fundamental tener presente la prolongada tradición Reformista en Argentina que, más allá de alguna etapa en particular, ha presentado una fuerte identidad latinoamericanista. Identidad que se ha transformado con sucesivas tomas de posición ante eventos internacionales, pero ha sostenido el rechazo a los autoritarismos, las dictaduras, el militarismo, el imperialismo y el fascismo; y la reivindicación de las formas democráticas, los derechos civiles, políticos y sociales, y a las universidades como instituciones al servicio de las mayorías (y, por extensión, de las fuerzas que enfrentaban a las potencias). Estos elementos, lejos de ser una «esencia» del Reformismo, adquieren contenidos e inscripciones cambiantes, incluso en lapsos tan breves como el que analizamos aquí.

La solidaridad estudiantil en la Argentina peronista

La movilización contra la avanzada fascista del imperialismo

Durante los últimos días de junio de 1973 tuvieron lugar tres acontecimientos históricos en el Cono Sur. El 20 ocurrió la «Masacre de Ezeiza», una emboscada de la derecha justicialista a la izquierda partidaria en las inmediaciones del aeropuerto donde regresaría Perón a la Argentina, lo que prologó la renuncia del presidente Héctor Cámpora y su reemplazo por Raúl Lastiri, cuñado del ministro José López Rega, personaje emblemático del terrorismo de Estado anterior a 1976. Una semana después el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el parlamento y prohibió la actividad de partidos y sindicatos, en un giro autoritario sobre un régimen que llevaba más de un lustro agregando medidas de excepción. Pasadas dos jornadas se produjo el «Tanquetazo» en Santiago de Chile, golpe de Estado fallido contra Salvador Allende. Los tres acontecimientos tenían sus diferencias, pero eran avanzadas contrarrevolucionarias, con participación de fracciones de las FFAA, de grupos paramilitares como el Comando de Organización, la Juventud Uruguaya de Pie, el Frente Nacionalista Patria y Libertad, y de redes anticomunistas transnacionales como la CIA o Propaganda Due (P2).

Más allá de las expectativas depositadas la Argentina como «retaguardia estratégica para los militantes revolucionarios de los países limítrofes» (Marchesi, 2019, p. 153), la situación política local se caracterizaba por una elevada y violenta conflictividad social y por la yuxtaposición entre las tensiones de la interna peronista y las de la Guerra Fría. En los comicios de marzo de 1973, se había impuesto el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), un explosivo mosaico de colectivos en cuyos extremos gravitaban la «Tendencia Revolucionaria», formada por quienes veían en el peronismo el instrumento para una transformación radical (Montoneros y la Juventud Universitaria Peronista [JUP], entre otros) y la «Ortodoxia», compuesta por grupos parapoliciales de inspiración nacionalista y anticomunista, la mayoría de la dirigencia sindical, fracciones empresarias y el propio Perón. Para esos años, Marina Franco (2012) describe el proceso de construcción de un «enemigo interno», en el marco de más de 8500 hechos armados de carácter político entre 1973 y 1976 (Marín, 1984).

La «Tendencia Revolucionaria» obtuvo numerosos cargos en el Ministerio de Educación y en las Facultades, especialmente en las porteñas, donde el ex comunista Rodolfo Puiggrós fue ungido rector de la rebautizada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (UNPBA), centro de intensas disputas políticas (Friedemann, 2021). Las agrupaciones y Centros Estudiantiles (la JUP, el Movimiento de Orientación Reformista [MOR] comunista, los radicales de Franja Morada, los maoístas del Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda [FAUDI] y Tendencia Universitaria Popular Antimperialista y Combativa [TUPAC], los guevaristas y trotskistas) buscaron profundizar los cambios pedagógicos ensayados en los años anteriores (evaluaciones grupales, nuevos planes de estudio, etc.), y desplazar profesores y funcionarios identificados como «el continuismo» de la dictadura saliente. Muchos de ellos estaban vinculados con el radicalismo y el peronismo y con los poderes del Estado. Por ello, volviendo sobre la tensión entre lo político y lo universitario, es menester señalar que muchos de los conflictos en las Facultades se inscribieron en la lucha política, generalmente intrapartidaria, y no faltó ocasión para que cada bando instrumentase a los grupos más extremos, al tiempo que estas formaciones se escudaban en tales pujas para intervenir en el ámbito universitario (Califa y Millán, 2023).

El movimiento estudiantil se activó en junio de 1973 ante las intentonas golpistas en los países vecinos. El sello internacionalista, y sobre todo el carácter conectado de las experiencias universitarias resulta evidente, pues en Argentina no se contemplaba una amenaza local inminente, ya que el contexto estaba signado por las expectativas en el nuevo gobierno democrático. Pablo Bonavena (1992: julio 1973, p. 65) reconstruyó que, a mediados de junio, en ocasión del 55 aniversario de la Reforma Universitaria, la FUA-La Plata, conducida por el MOR, organizó un acto en solidaridad con Chile y Vietnam donde se observa la articulación de las dimensiones de lo universitario y lo político, como se desprende de la reafirmación del compromiso con el proceso de «liberación nacional» en la UBA. Por su parte, la FUBA responsabilizó al imperialismo y a la oligarquía por la «Masacre de Ezeiza» y por su ofensiva contra el proceso de transformación en Argentina. En esa clave, el estudiantado porteño convocó a un acto solidario con «el pueblo hermano de Chile, atacado por la derecha al servicio del imperialismo». Durante julio y agosto se reiteraron posicionamientos similares de Federaciones, Centros y asambleas de todo el país. Asimismo, Bonavena (1992) registró movilizaciones en adhesión a la huelga de los trabajadores en Uruguay contra el golpe y actos de solidaridad con «el pueblo combatiente» de ese país y también de Chile, convocados por los Centros y respaldados por autoridades y trabajadores de distintas Facultades (julio 1973, pp. 12, 18, 22, 25, 33, 37, 5657 y agosto 1973, p. 22).

La coyuntura política y universitaria de septiembre de 1973 estuvo signada por la campaña electoral que llevó a Perón a su tercera presidencia. Inmediatamente después del golpe de Estado en Chile se multiplicaron las expresiones de solidaridad en toda Argentina. El 11 de septiembre, cientos de personas se congregaron en la puerta de la Embajada chilena en Buenos Aires, para expresar su solidaridad con el pueblo vecino. Este tipo de concentraciones se replicaron en diferentes ciudades. Para las organizaciones políticas locales, el golpe de Estado liquidaría una de las experiencias más radicales de la región, a la vez que fortalecía la presencia del imperialismo norteamericano y la cruzada anticomunista de la derecha argentina (Casola, 2021). En el movimiento estudiantil había acuerdo con esta línea de interpretación, no obstante, también había expresiones en otro sentido, como la de Jorge Obeid de la JP:

No somos amigos del tipo de declamación antiimperialista que hemos escuchado en los últimos días. La mejor forma de solidarizarse con el pueblo uruguayo, chileno y boliviano no es [...] publicando solicitadas [...] sino profundizando nuestro trabajo, y la propuesta de unidad nacional [...] conducida por el Movimiento Peronista, el general Juan Perón

y la clase trabajadora. [...] para que no tengamos que llorar dentro de seis meses la caída del general Perón.¹¹

Por su parte, ante la prensa italiana Perón afirmaba que los peronistas eran

... decididamente antimarxistas [...] Allende cayó víctima de su propio sectarismo [...] Las vicisitudes chilenas cerraron la única válvula de seguridad de que disponían los guerrilleros argentinos. [...] A Cuba le advierto que no haga el juego que hizo en Chile [...] Si la guerrilla insiste, sucederá lo que en Santiago, donde la responsabilidad no fue de los militares sino de los guerrilleros (Entrevista en el *Giornale d'Italia*, citada en Anguita y Caparrós, 2011, pp. 304-305).

Desde el 12 de septiembre tuvieron lugar numerosos actos de solidaridad en el marco de movilizaciones estudiantiles en ciudades como Neuquén, General Roca, Bahía Blanca y La Plata. Incluso, según describe Bonavena (1992), en las marchas obrero-estudiantiles de Córdoba y Tucumán para conmemorar un nuevo aniversario del asesinato de Santiago Pampillón, también se manifestaron en defensa del pueblo trasandino. También, en la Universidad Nacional de San Luis, se realizó una asamblea donde, a propuesta de la trotskista Juventud Socialista de Avanzada, se tomó su edificio y se partió en una manifestación luego reprimida por la policía (septiembre 1973, pp. 4-9). En dicha casa de estudios y en la Universidad Nacional de Cuyo (ubicada en la provincia de Mendoza, limítrofe con Chile) emitieron proclamas de solidaridad con el pueblo chileno.¹² Mauricio López Amílcar, rector en San Luis y pastor evangélico, colaboró activamente en la recepción de personas que llegaban desde Chile.¹³ Asimismo, las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata dispusieron, en forma excepcional, la admisión de alumnos provenientes de Chile y Uruguay con la sola presentación de una declaración jurada, aunque no podemos precisar los alcances de dichas decisiones en el tiempo.¹⁴

El 18 de septiembre (aniversario de la independencia chilena) se desarrollaron movilizaciones en La Plata, Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Pampa y Buenos Aires contra «el golpe fascista» de Chile. En ellas se destacó, sobre todo en las crónicas de la izquierda, la participación de secundarios y la presencia de las Federaciones Universitarias.¹⁵ Las Juventudes Políticas Argentinas (JPA) analizaron la posibilidad de enviar voluntarios en caso de ser requeridos para la «resistencia»¹⁶ y acusaron a

los gorilas golpistas, a la reacción chilena, al imperialismo y a la CIA, de haber desatado y llevado a cabo una feroz campaña de asesinatos sistemáticos tratando de ahogar la heroica lucha de los patriotas chilenos en defensa de su gobierno popular y las conquistas obtenidas [...] el golpe de estado es parte de un plan continental orquestado por el imperialismo y sus sirvientes, la dictadura brasileña, ante el avance impetuoso de las luchas liberadoras. Los

11 «La JP extrae experiencias de la crisis chilena», *La Opinión*, 13/9/1973, p. 13.

12 Res. n.º 838, 15/9/1973, en Carta a UDUAL, 8/10/1973.

13 Fue secuestrado y desaparecido en su domicilio en la ciudad de Mendoza el 1/1/1977.

14 UDUAL había solicitado a las universidades miembro felicitar el traslado de profesores y estudiantes desplazados por la coyuntura política en Chile primero y Uruguay, después. También condenó la violación de la autonomía universitaria y solicitó al resto de las unidades académicas iguales pronunciamientos. (Cartas UDUAL, 13/9/1973; 2/10/1973; 29/10/1973)

15 «Unánime repudio del pueblo al golpe fascista», «Funeral Cívico», *La Voz Latinoamericana*, n. 8, octubre de 1973, s/p; «Chile: lucha y solidaridad contra el terror», *OCLAE*, n. 2, febrero 1974; «Chile. Las tareas de solidaridad», *No Transar*, n. 127, octubre 1973, p. 5. «La federación secundaria de Lanús de movilizó por Chile», *Política Obrera*, n. 171, septiembre 1973, p. 18; «Enseñanzas de la movilización por Chile», *Avanzada Socialista*, n. 77, septiembre 1973, p. 6.

16 «Voluntarios argentinos listos para ir a Chile», *Expreso*, 16/9/1973.

resultados de esos planes encuentran dramática expresión en Paraguay, Bolivia, Uruguay, y hoy en Chile.¹⁷

En octubre, la FUA-La Plata organizó dos actos en solidaridad con Chile, con los auspicios de la UIE y la Coordinadora de Movimientos de Ayuda a Chile (Comachi): en Derecho y en Medicina de la UBA. Como vemos, la solidaridad era motorizada por una amplia gama de actores del reformismo y la izquierda universitaria. Bajo una serie de significados compartidos, coincidían en la acción los sectores combativos del peronismo y del radicalismo, el comunismo, el socialismo, trotskistas y maoístas.

Por aquellos meses los ataques de la derecha peronista al movimiento estudiantil hacían evidente el comienzo de cambio en las relaciones de fuerzas. En *Las Bases*, órgano oficial del Partido Justicialista, se afirmaba: «Para el 12 de octubre debemos tener el control absoluto [...], erradicando a estos grupos minúsculos», destacando: «El Líder definió [...] una lucha frontal contra el marxismo, [...] al que calificó de lacra».¹⁸ También, aparecían los primeros números de la revista *El Caudillo*, pródiga en amenazas contra las izquierdas y los reformismos universitarios (Besoky, 2010). Según el comunista Jorge Kreyness, estas acciones eran «agresiones fascistas» comparables a las del «golpe gorila de Chile». Asimismo, exigía el respeto de la vida del secretario general del Partido Comunista chileno Luis Corvalán, los dirigentes estudiantiles Osiel Núñez y Antonio Leal y todos los presos políticos. Ese mismo mes, la UIE organizó en Buenos Aires el Seminario Internacional «El rol de los estudiantes y sus organizaciones por los cambios en la Universidad en correspondencia con el proceso Nacional-Liberador de América Latina», donde se discutió la importancia de combatir al «imperialismo y la reacción» en el ámbito educativo y universitario (Bonavena, 1992: octubre 1973, pp. 25/6).

La utilización del término *gorila*, que en la cultura política argentina se destina al antiperonismo conservador y a la autoproclamada «Revolución Libertadora» instaurada mediante el golpe de Estado de 1955, y los paralelismos entre la represión en Argentina y los eventos de Chile, evidencian un ida y vuelta entre lo nacional y lo internacional en los marcos analíticos y políticos del movimiento estudiantil. La imagen del «gorila» aparece en numerosos documentos, más allá de las diferencias entre agrupaciones, como puede notarse dos años después en la consigna de FAUDI «No a otro 55» en defensa de Isabel Perón.¹⁹

La «bordaberrización», como se conoció en Argentina, incorporó a Uruguay en la lista de las dictaduras junto a Bolivia (1971) y Brasil (1964). No obstante, el gobierno peronista exhibió su amistad con Montevideo. Poco después de la intervención de la Universidad de la República,²⁰ Perón y Bordaberry conversaron sobre «... el tema de los exiliados orientales en la Argentina, muy especialmente, los llegados de Chile (eufemismo utilizado para no mencionar a los Tupamaros)», preocupación que marcaba un «nuevo rumbo en la política rioplatense».²¹

Es observable una disparidad en las reacciones ante los golpes de Estado en Uruguay y Chile. El elevado grado de continuidad de numerosas figuras y prácticas, como el mismísimo presidente, así como el aval explícito de Perón, ayudan a comprender que el gobierno de Bordaberry suscitara reacciones más acotadas y menos encendidas. No obstante, gracias al impulso de los exilios, como ha señalado Vania Markarian (2006), Buenos Aires se había convertido en un centro muy relevante para la oposición a la dictadura oriental. En la capital argentina surgieron y se consolidaron organizaciones como

17 «Llamamiento Histórico a las Juventudes Políticas», *La Voz Latinoamericana*, n. 8, octubre de 1973, s/p)

18 «Acabar con la quinta columna», *Las Bases*, n. 62, octubre 1973, p. 3.

19 «La Universidad junto al pueblo peronista, ¡no a otro 55!», en *La Opinión*, 9/4/1975, p. 10.

20 «Inquietud Estudiantil», *Excelsior*, 2/11/1973; «Bordaberry y la universidad», «Uruguay: no más cuartel Tupamaro», *El Heraldo de México*, 3/11/1973.

21 «Abrió Perón un nuevo rumbo diplomático al coincidir con el gobierno uruguayo», *La Opinión*, 20/11/1973, p. 1.

el Movimiento Argentino Antiimperialista de Solidaridad Latinoamericana (Maasla), la Comisión de Solidaridad con Chile y la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), la Comachi y el Movimiento Argentino de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo (MASPU), impulsadas por las organizaciones políticas de izquierda locales y a partir de las conexiones transnacionales.²²

Durante aquel histórico septiembre de 1973, en Argentina se elevaron las tensiones en el Frejuli, con fuertes repercusiones en el ámbito universitario. Poco antes de la votación, José Pablo «el Tala» Ventura, dirigente de la JUP, defendía la gestión de Puiggrós y denunciaba la «campana maccartista» con una lógica transnacional:

Así como el cerco en el Cono Sur es la expresión de la ofensiva imperialista a nivel internacional, en el ámbito nacional el imperialismo ha optado por infiltrarse dentro de las filas del peronismo [...] a través de figuras [...] como la burocracia sindical y algunos vacilantes y oportunistas [...] en la Universidad, los que encabezan la ofensiva contra la intervención son las camarillas profesoras [...] («La JUP insiste en la defensa de la actual política universitaria», *La Opinión*, 20/09/1973, p. 10).

Horas después del triunfo de Perón, Montoneros asesinó al dirigente sindical metalúrgico José Ignacio Rucci. En respuesta, grupos paramilitares se cobraron la vida Enrique Grinberg, cuadro de la JUP en la Facultad porteña de Ciencias Exactas y Naturales, y atentaron contra numerosos locales universitarios. Al cabo de una semana los principales diarios difundieron el «Documento Reservado del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista», la directriz oficial para la depuración interna del peronismo. En sus párrafos caracterizaba la situación nacional y partidaria como una «guerra contra la infiltración marxista», llamaba a denunciar a los conspiradores y autorizaba el ejercicio de la violencia armada (Franco, 2012). Ese mismo día se confirmó el desplazamiento de Puiggrós. Poco antes *La Opinión* se hacía eco de una versión donde se yuxtaponía los conflictos de la Guerra Fría, la interna partidaria y la puja universitaria:

[...] Mayoría, que suele reflejar [...] [a] la más pura ortodoxia peronista, informaba que [...] en la reunión que mantuvo el líder justicialista con dirigentes del justicialismo en Olivos habría condenado 'la lacra marxista' permitida en el ámbito universitario desde 1955...²³.

La salida del rector fue analizada por numerosos trabajos (Bonavena, 2007; Dip, 2017; Friedemann, 2021; Califa y Millán, 2023), pero ninguno se detuvo en la dimensión transnacional del cálculo de Perón en la UBA, al mirar los acontecimientos regionales:

La designación de Puiggrós estuvo insertada en [...] una estrategia distinta. Cámpora pensaba que la movilización constante de la juventud obraría como disuasivo capaz de proteger al gobierno. Perón no [...] Cita [...] el ejemplo chileno. Allí, la existencia de fuertes organizaciones guerrilleras se mostró [...] impotente para equilibrar la ofensiva militar pero, en cambio, sirvió para unificar a los mandos sublevados y abatir los escrúpulos legalistas [...]. En Brasil y en Bolivia la historia se desarrolló en la misma forma. También en Uruguay, donde la más sólida formación irregular de Latinoamérica fue el prólogo al actual estado de cosas.²⁴

Por aquellas semanas también comenzaron a circular testimonios sobre los dramas humanos en la Embajada en Santiago y en varios puntos de la frontera. Los maoístas de Vanguardia Comunista

22 Casola (2021) ha destacado la importancia de las redes transnacionales enmarcadas en el Movimiento Comunista Internacional, tanto a nivel organizativo como político-ideológico. Así, para el internacionalismo reformista y la militancia comunista local, el concepto y la tradición del antifascismo resultaron fundamentales para la solidaridad con la oposición más general a la dictadura chilena.

23 «Un cúmulo de versiones supone el deterioro de Rodolfo Puiggrós», *La Opinión*, 30/9/1973, p. 8

24 «Perón adoptó la resolución de atacar en forma sorpresiva un campo conflictivo», *La Opinión*, 3/10/1973, p. 11.

denunciaron que se habían negado solicitudes de asilo a extranjeros, dejado en manos de Carabineros los traslados al aeropuerto e incluso la «devolución» de refugiados en territorio nacional.²⁵ Para el gobierno de Perón no siempre la vida de los argentinos se encontraba por encima de las relaciones con la Junta Militar. Relata Marchesi que, en una reunión entre el embajador trasandino y el canciller Alberto Vignes a raíz de la muerte de ciudadanos argentinos vinculados a la Unidad Popular en territorio chileno, el canciller se excusó en las presiones del Congreso y expresó que: «Sería lamentable que por este tipo de gente se lleguen a perjudicar nuestras relaciones.» (2019, p. 154).

Meses después, una carta en *El Descamisado* denunciaba la captura y probable devolución de 36 ciudadanos chilenos por un Regimiento de Junín de Los Andes.²⁶ Un análisis clásico de la política exterior pensó estas actitudes en vistas del interés por contrarrestar la formación de un eje Brasilia-Santiago (Moneta, 1979, p. 249). Estudios contemporáneos subrayan los vínculos del líder justicialista con la red contrainsurgente P2, movilizadas en el Cono Sur ante la posibilidad de un «contagio» de la vía chilena al socialismo, perspectiva que espantaba al capital italiano debido al peso electoral del PC en la península (Bonavena, 2021).

Hacia el final del año las manifestaciones para incidir en la realidad latinoamericana fueron perdiendo peso en la militancia estudiantil. Durante estos meses se desarrollaron los comicios de los Centros de Estudiantes y Federaciones. En la UBA, la JUP y sus aliados (el MOR y una fracción de Franja Morada) se impusieron por amplio margen y la FUBA fue rebautizada Federación Universitaria para la Liberación Nacional de Buenos Aires (FULNBA), en un intento por separar a la entidad de su pasado antiperonista (Dip, 2017; Califa y Millán, 2023). Su Congreso eligió como presidentes honorarios a Salvador Allende, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo y Eva Perón, y llamó a convertir a la universidad en una herramienta al servicio del pueblo y de la reconstrucción nacional. Asimismo, sostuvo que «las conquistas del gobierno no aniquilaban al enemigo imperialista» que se encontraba reordenando sus fuerzas para avanzar, como en Uruguay y Chile, que se habían sumado a los gobiernos «títeres» de Brasil, Bolivia y Paraguay. En ese punto, denunció la «política de aniquilamiento de las fuerzas populares en la lucha por la liberación».²⁷

Los comicios en otras universidades arrojaron sendas victorias reformistas. La FUA-Córdoba, dirigida por Franja Morada y el MNR y con representación del FAUDI, denunciaba las medidas ortodoxas de Perón y exigía cambios en la política universitaria. También alertaba sobre el reagrupamiento de corrientes para concretar una «restauración a la chilena».²⁸ Su XXIII Congreso contó con la participación de las Federaciones y Uniones Estudiantiles de Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela y, entre sus resoluciones, sostuvo: «el fortalecimiento del movimiento estudiantil argentino podría contribuir al fortalecimiento de la unidad antiimperialista de los estudiantes latinoamericanos».²⁹

Desde este momento notamos un cambio en el activismo estudiantil: pervive el repudio de los golpes, con más énfasis el de Chile, pero predomina la «causa chilena» como una especie de temible espejo anticipatorio, considerado una forma de fascismo. Se producía incluso una paradoja. Mientras el MOR difundía las tesis comunistas sobre Chile, donde se advertía que los grupos ultraizquierdistas había jugado un papel de provocadores útiles a la reacción; maoístas y trotskistas veían confirmadas

25 «Lo que hace el gobierno argentino», *No Transar*, noviembre 1973, n. 128, p. 9.

26 *El Descamisado*, 22/1/1974, n. 36.

27 «Preferimos el desorden en libertad que el orden en esclavitud», *El Descamisado*, n. 33, p6p. -7

28 *Nueva Hora*, diciembre 1973, n. 13.

29 *Nueva Hora*, enero de 1974, n. 14.

sus posiciones sobre la responsabilidad histórica de las corrientes moderadas en Chile, que dejaron crecer al golpismo; algo similar a lo que observó Marchesi para la izquierda revolucionaria. Más allá de lo interesado de las conclusiones, esas fuentes evidencian la continuidad de campañas estudiantiles por Chile y su importancia para dichas agrupaciones.

Entre el temible espejo anticipatorio y la revalorización de la democracia

En el verano de 1974 se produjeron golpes de Estado provinciales en Buenos Aires y Córdoba, se endureció el Código Penal, se decretó la prescindibilidad de los empleados públicos y se aprobó una nueva ley de asociaciones profesionales que favorecía a las direcciones gremiales ortodoxas (Franco, 2012). La disputa intraperonista se agudizó y una parte de Montoneros, y también de la JUP, rompió con sus dirigentes para alinearse con Perón. En el terreno universitario, tras el pacto entre peronistas y radicales, se promulgó una legislación que reconocía algunas conquistas, pero prohibía la militancia en los claustros e indicaba el ambiguo término de «subversión» como causal de intervención del Poder Ejecutivo (Buchbinder, 2014).

En ese contexto los comunistas relanzaron su revista *Línea*, con el objetivo de intervenir en los debates universitarios, difundir los logros de los países socialistas y ser «parte activa de la solidaridad con el pueblo chileno», para lo cual cada número contaba con al menos una nota al respecto.³⁰ Definían a Navarro, el policía que había asaltado la gobernación cordobesa, como «un Pinochet de provincia» y acordaban con el dirigente montonero Mario Firmenich: «... Córdoba no es más que un ensayo general, algo parecido a lo que ya hicieron en Chile, algo superior a lo que han hecho acá en el 55 [...] Si este proceso sigue así, vamos a terminar [...] en un “pinochetazo”». ³¹ Como vemos, la gama de las izquierdas, los reformismos y las corrientes combativas compartían aspectos de su mirada sobre Chile.

Argentina continuó recibiendo personas exiliadas, aunque su territorio se volvía más peligroso a medida que se fortalecían las posiciones de la ortodoxia peronista. Parte de la bibliografía sobre exilios ha marcado la diferencia entre las presidencias de Perón y su viuda, Isabel, que se condice con el ejercicio de la represión (Rojas Mira y Santoni, 2012; Casola, 2017; Lastra, 2021). No obstante, en febrero de 1974, ante la perspectiva de que Argentina se convirtiera en «refugio de la izquierda revolucionaria», como antes había sido su vecino trasandino, Perón autorizó a la Policía Federal a cooperar con los servicios de seguridad de Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, otorgó permiso a esas agencias extranjeras para operar en territorio nacional, arrestar y trasladar personas sin proceso judicial (Marchesi, 2019, p. 172).

El 1.º de mayo de 1974 Perón expulsó a Montoneros de la Plaza de Mayo, lo que marcó la ruptura definitiva entre el caudillo y la izquierda juvenil de su movimiento. Pocos días después Pinochet visitó brevísimamente Buenos Aires.³² El arribo del dictador revitalizó la «causa chilena» en el movimiento estudiantil. Numerosas organizaciones emitieron comunicados donde se enumeraban «las persecuciones, torturas y crímenes cometidos por el régimen». ³³ En particular, la Juventud Radical Revolucionaria (JRR) resaltaba «... la natural repugnancia que siente nuestro pueblo a todo régimen

30 *Línea*, 23/3/1974, n. 1, p. 2.

31 *Ibidem*, p. 4.

32 «La reunión Perón-Pinochet y sus implicancias», *Cronista Comercial*, 4/5/1974; «Ásperas reacciones en Bs. As.: anunciada visita de Pinochet», *Expreso*, 12/5/1974; «Magistrados, legisladores, partidos políticos e instituciones manifiestan su repudio a Pinochet», *La Opinión*, 16/5/1974.

33 «Después de la partida proseguían las exteriorizaciones de repudio», *La Opinión*, 17/5/1974, p. 8.

político que se funde sobre la persecución y la muerte, cualquiera sea el rincón de la tierra [...]».³⁴ Como vemos, no aparecen el imperialismo o las perspectivas de liberación latinoamericanas. Nos encontramos ante los primeros signos de un cambio de época, verdaderos matices que prefiguran algunos rasgos de la tercera oleada prodemocrática del movimiento estudiantil latinoamericano del siglo XX.

La FULNBA convocó a una manifestación y al hacerlo, se refirió a un «genocidio»: «... expresamos nuestro repudio a quien representa al imperialismo y el genocidio del pueblo chileno».³⁵ La Federación también organizó un evento con el Centro de Estudiantes de Ingeniería, con el apoyo de trabajadores y autoridades locales.³⁶ El mismo día, en horas de la noche tuvieron lugar al menos dos numerosos actos: uno en la Plaza del Congreso de Buenos Aires y otro en el centro de Rosario. En la ciudad santafesina el clima político fue tenso y culminó con el asesinato de un integrante de la ultraderechista CNU. La policía atribuyó la responsabilidad al Partido Comunista argentino, aunque los cronistas de la prensa citaron otras versiones.³⁷ Días después, la JP ligada a Montoneros retomaba las tesis antiimperialistas y entendía la realidad nacional a partir de la operatoria de fuerzas transnacionales, pero etiquetadas con términos argentinos. Consideraba que existía había un plan para impedir la liberación en esta parte del continente, y que apoyado

... en los gorilas brasileños y chilenos, el imperialismo monta[ba] el cerco exterior contra la Argentina e instrumenta en lo interno, a través de la CIA, a la reacción nativa, [...] dentro y fuera del gobierno, a la burocracia sindical traidora, etc. a impulsar el desabastecimiento [...], las provocaciones y atentados, etc., todo esto destinado a [...] hacer retroceder al gobierno.³⁸

En paralelo, las Juventudes Políticas Argentinas expresaban una mirada «democrática» emergente: consideraban a Chile «un prodromo (sic) del golpe militar de derecha», y anunciaba que en gira por Perú, Panamá, Cuba y México acordaron avanzar en una conferencia juvenil continental.³⁹

El 1.º de julio falleció el presidente Perón y fue sucedido por su viuda y vicepresidenta. Durante el gobierno de Isabel Perón, se agudizó la violencia política, con especial intensidad en la represión estatal y paraestatal (Franco, 2012). En las universidades, desde la segunda parte de 1974, bajo la llamada «Misión Ivanissevich» por el apellido del nuevo ministro de Educación, comenzó el ejercicio del terrorismo de Estado (Millán, 2020). Las nuevas intervenciones desplazaron a los funcionarios afines a la «Tendencia», anularon las incipientes modificaciones académicas, establecieron duras normas de disciplina y dieron pase libre a grupos parapoliciales que ya habían mostrado su poder de fuego en los meses previos. La Misión costó más de 100 vidas de universitarios/as y, bajo el rectorado de Alberto Ottalagano, la UBA fue la primera casa de altos estudios sometida al extremismo derechista (Izaguirre, 2011; Besoky, 2017).

A pesar de la situación, durante septiembre varias agrupaciones, Centros y Federaciones de Buenos Aires y Córdoba organizaron actos de solidaridad y homenaje al pueblo chileno en el aniversario del golpe de Estado (Bonavena, 1992: septiembre 1974, pp. 2, 9, 9 y 20). Las organizaciones estudiantiles analizaban la situación nacional a la luz de las experiencias en los países vecinos. Los

34 «La Juventud Radical Revolucionaria», *La Opinión*, 14/5/1974, p. 17.

35 «Repudio estudiantil al viajero», *La Opinión*, 16/5/1974, p. 8.

36 «Acto estudiantil. Repudiaron en Ingeniería la visita de Pinochet», *Cronista Comercial*, 16/5/1974.

37 «Después de la partida proseguían las exteriorizaciones de repudio», *La Opinión*, 17/5/1974, p. 8.

38 «La Juventud Peronista propone el diálogo con los partidos», *La Opinión*, 18/5/1974, p. 1.

39 «Una propuesta de coalición formulan mañana las JPA en asamblea nacional», *La Opinión*, 24/5/1974, p. 8.

trotskyistas posadistas llamaban a la unidad para no fortalecer a la derecha.⁴⁰ El comunismo condenaba la «violencia terrorista» de izquierda por hacer «un llamado a la guerra civil» que solo favorecía al golpismo pinochetista,⁴¹ una idea con raíces transnacionales, como se observa en la condena del PC de Chile al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Marchesi, 2019, p. 135). En paralelo, los maoístas identificaban dos tendencias golpistas: una que buscaba «un pinochetazo» proyanqui y otra prosoviética bajo un «disfraz nacionalista».⁴²

En aquel peligroso contexto, el movimiento estudiantil redujo las acciones directas callejeras y priorizó las reuniones con parlamentarios, sindicalistas y otros representantes de la «política burguesa» (Califa y Millán, 2023). Por ejemplo, el Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la UBA se reunió con Ricardo Balbín, máximo dirigente de la Unión Cívica Radical, para solicitarle ayuda para la liberación del estudiante chileno Salvador Soler Feederpield (Bonavena, 1992: marzo 1975, p. 4). En Ingeniería, había sido detenido otro alumno trasandino, Rolando Alberto Zanzi Vogouroux.⁴³ Mientras en Argentina crecían los secuestros y asesinatos, al otro lado de la frontera era detenido (para luego ser desaparecido) el ex presidente de la Federación de Estudiantes de Chile y dirigente de la Juventud Socialista Carlos Enrique Lorca Tobar, lo que generó la inmediata condena de la FUA, Franja Morada y el MNR (Bonavena, 1992: julio 1975, p. 14).

En el invierno de 1975 tuvo lugar una gran crisis económica y una huelga general que, entre otras consecuencias, terminó con la gestión de Ivanissevich en la cartera educativa. El reformismo albergó la tímida expectativa de que terminase el «terrorismo de derecha» (Millán y Califa, 2023, p. 187-191). El MOR, a su vez, consideró «fascistas» a los grupos parapoliciales, al igual que a Pinochet, y sostenía que «su objetivo es ... crear un clima de caos y terror que paralice a las masas [...] y facilite las condiciones para un “pinochetazo” [...]».⁴⁴

Al cumplirse el segundo aniversario del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1975, el comunismo colocó un enorme cartel con el rostro del presidente y sus últimas palabras en el patio interior de la Facultad de Arquitectura de la UBA. La policía intentó retirarlo sin éxito, gracias a la presión estudiantil. Al rato fue descolgado en una nueva acometida, pero inmediatamente recolocado por la militancia, apoyada por casi mil alumnos/as que coreaban estribillos por Chile. Minutos después «... una brigada de la guardia de infantería [...] con un impresionante despliegue bélico (itakas, lanza gases y cascos) rodeó el cartel, lo desprendió, [...] lo destrozó y pisoteó». Esto enfureció a la comunidad universitaria que gritaba y silbaba en los pasillos de la Facultad.⁴⁵

Hacia finales de 1975 las dificultades del gobierno eran enormes, se agudizaba su pérdida de legitimidad y crecía la inestabilidad política. Para el reformismo, la escalada de violencia, especialmente represiva, y el contexto regional preanunciaban un golpe de Estado. El MOR y Franja Morada, en un intento por contener el terrorismo a nivel universitario, reclamaban el cumplimiento de la legislación vigente y buscaban el diálogo con los militares para proteger la institucionalidad, para lo cual resaltaban la lejanía de los reformistas respecto de la «subversión».⁴⁶ Los comunistas sostenían que la

40 *La Voz Proletaria*, septiembre 1974.

41 Comunicado MOR, septiembre 1974; Comunicado Federación Universitaria Tecnológica, diciembre 1975.

42 Comunicado conjunto de los Centros de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, y de Arquitectura Universidad Nacional de Córdoba, septiembre 1974.

43 Comunicados de JUP y JSA, junio 1975.

44 *Línea*, agosto 1975, n. 7, p. 4.

45 *Línea*, septiembre 1975, n. 8, p. 6.

46 «Condena universitaria al terrorismo de ambos signos», *La Opinión*, 13/12/1975, p. 24.

llamada *Misión Ivnissevich*, sería «apenas un botón de muestra» a la luz de la situación chilena y la posibilidad concreta de un golpe de Estado.⁴⁷ Concluían que en la universidad debían realizarse las elecciones de Centros de Estudiantes, organismos que expresaban «la voluntad de miles de estudiantes que no quieren ver en nuestro país un nuevo Chile, bajo dos consignas: CONTRA el terrorismo de ultraderecha [...] CONTRA las provocaciones de la ultraizquierda».⁴⁸ Aquel año, a pesar del contexto represivo, se realizaron al menos 42 comicios (Califa y Millán, 2023). Observamos entonces una nueva modalidad de la tensión entre lo universitario y lo político, que nos habla de las mudanzas desde los movimientos del 68 a los ochenta. El reformismo se desplazaba desde una sinergia entre la lucha antiimperialista y popular y las transformaciones universitarias a otra signada por la defensa de la institucionalidad democrática en dos planos: a nivel nacional y en las Facultades. Ese giro hacia posiciones defensivas se nutrió de lecturas sobre procesos transnacionales, porque los sucesos y perspectivas para las universidades y el movimiento estudiantil argentino fueron pensados a la luz de la experiencia chilena. A la vez, y no solo en este sector, emergieron los primeros brotes de ciertas matrices ideológicas de la llamada «teoría de los dos demonios», mirada que, como observó Marina Franco (2011), tenía «fuerte raigambre en la experiencia percibida por muchos entre 1973 y 1976» (p. 45).

A modo de cierre

En el presente artículo reconstruimos las acciones y posicionamientos del movimiento estudiantil frente a los golpes de Estado y las dictaduras de Uruguay y Chile y los usos políticos de los acontecimientos de aquellos países en la contienda política y universitaria local, tanto los realizados por las organizaciones de estudiantes como por las autoridades nacionales durante el tercer peronismo. En septiembre de 1973 diversos grupos de estudiantes lanzaron numerosos comunicados de repudio y desarrollaron una gran cantidad de manifestaciones. Desde ese momento, parte de la actividad regular de muchas corrientes incluyó la difusión de las noticias sobre los sucesos en los países vecinos, así como interceder ante autoridades universitarias, partidarias y nacionales para auxiliar a personas exiliadas. En 1974, ante la breve visita de Pinochet, el movimiento estudiantil regresó a las calles para repudiar al dictador, mientras que desde ese año en adelante se cuentan varias acciones de homenaje, como la colocación de la gigantografía del rostro de Salvador Allende en la Facultad de Arquitectura de la UBA por parte de la militancia comunista, en septiembre de 1975.

Las posiciones y usos políticos de los eventos en el Cono Sur por parte de actores locales también resultan relevantes para comprender la evolución de la vida universitaria y del movimiento estudiantil en Argentina. Desde el punto de vista de los sucesivos gobiernos, las posiciones públicas sobre las dictaduras fueron distintas: de amistad con Bordaberry y de distancia circunspecta con la Junta de Pinochet. El ejemplo de Chile sembró en Perón tal temor a ser derrocado que exacerbó sus posiciones antimarxistas y represivas, galvanizando sus convicciones sobre la necesidad de moderar los cambios sociales reclamados y/o en curso. Señalamos que la caída del rector Rodolfo Puiggrós se explicaba también por esta lectura transnacional del caudillo justicialista. Al mismo tiempo marcamos la afiliación de los gobiernos de Perón y su viuda y vicepresidenta, «Isabelita», en las redes de la inteligencia del Cono Sur, con formas de cooperación completamente ajenas a Estado de derecho.

En lo que respecta a las posiciones del movimiento estudiantil, resulta observable la continuidad de una tradición del internacionalismo reformista, resignificado en los largos años sesenta, signado además por el diálogo con la izquierda del peronismo. En ese sentido, la tensión entre aspectos uni-

47 *Línea*, octubre 1975, n. 9, p. 2.

48 *Ibidem*, p. 9.

versitarios y políticos en las prácticas de la militancia estudiantil incluyó elementos de la política internacional, ya sean posicionamientos, acciones de solidaridad o utilización de determinados eventos para caracterizar actores y aspectos de las coyunturas nacional y universitaria.

Por otra parte, debido a su localización temporal en el final de los largos años sesenta y de una etapa continental y nacional de radicalización estudiantil, las prácticas y significados sobre los alzamientos militares en 1973 se comprendieron desde las matrices del pensamiento revolucionario, con el foco puesto en la lucha antiimperialista y popular. El activismo frente a los golpes fue generalizado, con manifestaciones y actos en decenas de ciudades. Aquellas asonadas fueron leídas, entonces, como iniciativas para abortar procesos de liberación, donde se inscribían los proyectos de transformación universitaria en Argentina. La caracterización de «fascista», al igual que en otras etapas, fue empleada con poca rigurosidad intelectual, pero con el convencimiento del carácter reaccionario e inmoral de los regímenes de Montevideo y Santiago.

Sin embargo, la mirada estudiantil fue tomando otros matices conforme se fortalecían los sectores más reaccionarios del peronismo, en especial a partir de la Misión Ivanissevich y el ejercicio del terrorismo de Estado. En primer término, los embates de los funcionarios y el accionar parapolicial fueron codificados cada vez más reiteradamente como «fascistas» o «pinochetistas». En segundo lugar, los gobiernos vecinos, especialmente el de Chile, fueron repudiados por sus crímenes y su carácter antidemocrático. Los posicionamientos no siempre excluían la orientación socioeconómica de las dictaduras, pero el énfasis se estaba desplazando hacia la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. La perspectiva universitaria no se dirigía ya al impulso de transformaciones en planes de estudio y de investigación, ni en nuevas y más estimulantes iniciativas pedagógicas. El imperativo era la protección de las Facultades respecto del ejercicio del terrorismo de derechas. Por ello, el reformismo y la mayoría de las izquierdas en la universidad fueron marcando su distancia con las perspectivas más radicales, fundamentalmente con la lucha armada revolucionaria, a las que tildaron de «provocadoras». A sus ojos, la defensa de la democracia exigía tomar esa distancia e incluso intentar algún tipo de diálogo con los propios militares argentinos, entre quienes suponían había una mayoría respetuosa de las normas constitucionales. Aquella iniciativa solo consiguió el desaire en los cuarteles y luego de 1976 no encontraríamos algo similar. Sin embargo, si hacemos abstracción de esas anécdotas, en los meses previos al establecimiento de la última dictadura en Argentina ya encontramos elementos que prefiguran varios rasgos del tercer ciclo del movimiento estudiantil latinoamericano del siglo XX, donde los principales reclamos y objetivos se encuentran anclados en la restauración democrática.

Referencias bibliográficas

- ANGUITA, E. y CAPARRÓS, M. (2011). *La voluntad* (tomo 3). Buenos Aires: Booket.
- ANHEIER, H., y M. JUERGENSMEYER. (Eds.). (2012). *Encyclopedia of Global Studies*. Thousand Oaks: SAGE.
- BADAN RIBEIRO, C. y AYALA, M. (2022). Exilios latino-americanos e solidaridade transnacional durante a Guerra Fria. *Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad*, (29), 135-143.
- BERGEL, M. (2018). *Los viajes latinoamericanos de la Reforma Universitaria*. Rosario: Humanidades y Artes Ediciones.
- BESOKY, J. (2010). La revista El Caudillo de la Tercera Posición: órgano de expresión de la extrema derecha. *Conflicto Social*, 3(3), 7-28.
- BESOKY, J. (2017). La gestión del ministro Ivanissevich y la derecha peronista: los 100 días de Ottalagano. *Folia Histórica del Nordeste*, (29), 145-174.
- BONAVENTA, P. (1992). *Las luchas estudiantiles en Argentina 1966-1976. Informe de Beca de Perfeccionamiento*. Buenos Aires: Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires.

- BONAVERA, P. (2021). Algunos apuntes sobre la Operación Gladio, la contrainsurgencia en Europa y su llegada a la Argentina a través del peronismo. *IV Jornadas de Sociología de la UNCUYO*.
- BONAVERA, P. (2007). El Rector que no fue. La lucha de los estudiantes de la UBA contra la designación del odontólogo Alfredo Banfi en octubre de 1973. En P. Bonavena, J. S. Califa y M. Millán (Comps.), *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente* (pp. 229-244), Buenos Aires: Cooperativas.
- BONAVERA, P. y MILLÁN, M. (Eds.) (2018). *Los '68 latinoamericanos. Movimientos estudiantiles, política y cultura en México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia*. Buenos Aires: CLACSO-IIGG.
- BROWN, M. (2015). The Global History of Latin America. *Journal of Global History*, 10(3), 365-86.
- BUCHBINDER, P. (2014). La Universidad y el tercer peronismo: nota sobre el debate parlamentario en torno a la ley Taiana. En M. Millán (Ed.), *Universidad, política y movimiento estudiantil en Argentina entre la Revolución Libertadora y la democracia del 83* (pp. 183-201). Buenos Aires: Final Abierto.
- BUCHBINDER, P. (2018). La Reforma Universitaria en vísperas de su centenario: notas sobre su historiografía. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani»*, (49), 176-186.
- BUSTELO, N. (2021). Reformar las universidades, revolucionar las sociedades. La expansión de un movimiento estudiantil de América Latina. *Almanaque histórico latinoamericano*, (31), 161-182.
- CALIFA, J. (2011). El movimiento estudiantil reformista contra el Plan CAFADE. Cientificismo, imperialismo, reestructuración universitaria y lucha política (1959-1960). *Redes*, 17(32), 161-184.
- CALIFA, J. (2013). El temprano impacto de la Revolución Cubana en el movimiento estudiantil argentino. El caso de la Universidad de Buenos Aires. 1959-1962. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], *Questions du temps présent*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.64973>
- CALIFA, J. (2014). *Reforma y Revolución. La radicalización política del movimiento estudiantil de la UBA 1943-1966*. Buenos Aires: Eudeba.
- CALIFA, J. y MILLÁN, M. (2019). Las experiencias estudiantiles durante los «azos» argentinos en perspectiva latinoamericana. *Contenciosa*, (9), 1-20.
- CALIFA, J. y MILLÁN, M. (2023). *Resistencia, rebelión y contrarrevolución. El movimiento estudiantil de la UBA, 1966-1976*. Buenos Aires: Edhasa.
- CASOLA, N. (2017). Una escala peligrosa. Los refugiados chilenos en Buenos Aires durante el tercer gobierno peronista (1973-1976). *Divergencia*, 6(8), 11-32.
- CASOLA, N. (2021). ¡Abajo el fascismo! Denuncia antidictatorial, solidaridad y apoyo del Partido Comunista Argentino con el exilio chileno (1973-1990). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, [En línea], *Questions du temps présent*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.86140>
- CELI HIDALGO, C. (2018). *Movimientos juveniles: cambios y permanencias en las formas organizativas de los movimientos estudiantiles universitarios en América Latina* (Tesis doctoral en Estudios Latinoamericanos). Ciudad de México: UNAM.
- CHEN, J., (ed.) (2018). *The Routledge Handbook of the Global Sixties: Between Protest and Nation-Building*. Abingdon-Nueva York: Routledge.
- CRISTÍA, M. y CAMACHO PADILLA, F. (2022). Del ímpetu revolucionario a la defensa de los derechos humanos. Trayectorias militantes entre Europa y el Cono Sur durante la Guerra Fría (1966-1990). *Cuadernos de Historia. Serie economía y Sociedad*, (29), 320-349.
- DIP. N. (2017). *Libros y alpargatas. La peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974)*. Rosario: Prohistoria.
- DIP. N. (2020). Cuatro caminos de interpretación. Política, izquierda y cuestión universitaria en la historia reciente latinoamericana. *Contemporánea*, (12), 123-138.
- DONOSO ROMO, A. (2022). Movimientos estudiantiles en América Latina: bases para una aproximación sociohistórica. *Perfiles Latinoamericanos*, 30(60), 1-21.
- ELÍAS, N. (1989). *El proceso de la civilización*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- ERRÁZURIZ TAGLE, J. (2013). *Movimiento estudiantil en el tránsito de dictadura a democracia. Madrid (1969-1980) y Santiago de Chile (1986-1997) en perspectiva comparada* (Tesis doctoral, UCC-UAM, Madrid). Recuperado de <https://repositorio.uam.es/handle/10486/661866?show=full>.

- FERNÁNDEZ HELLMUND, P. (2015). *Nicaragua debe sobrevivir. La solidaridad de la militancia comunista argentina con la Revolución Sandinista (1979-1990)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- FRANCO, M. (2011). La «depuración» interna del peronismo como parte del proceso de construcción del terror de Estado en la Argentina de la década del 70. *A Contracorriente*, 8(3), 23-54.
- FRANCO, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y «subversión», 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- FRIEDEMANN, S. (2021). *La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. La reforma universitaria de la izquierda peronista, 1973-1974*. Buenos Aires: Prometeo.
- GAPENNE, C. (2022). *Circulación transnacional de la información y construcción del evento. El Mayo francés en Uruguay (1968-1974)* (Tesis doctoral, Universidad de la República, Montevideo, y Université Lumière Lyon 2, Lyon). Recuperado de <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/35565>.
- GONZÁLEZ VAILLANT, G. y SEIA, G. (2022). *Estudiantes movilizados durante la transición a la democracia: algunos apuntes comparados sobre dos casos a orillas del Río de la Plata*. Trabajo presentado en las VI Jornadas de Investigación del Archivo General de la Universidad de la República, Montevideo.
- HARMER, T. y A. ÁLVAREZ (Eds.). (2021). *Toward a Global History of Latin America's Revolutionary Left*. Gainesville: University of Florida Press.
- HATZKY, C. y STITES MOR, J. (2014). Latin American Transnational Solidarities: Contexts and Critical Research Paradigms. *Journal of Iberian and Latin American Research*, 20(2), 127-140.
- IZAGUIRRE, I. (2011). La Universidad y el Estado terrorista. La Misión Ivanishevich. *Conflicto Social*, 5, 287-303.
- LASTRA, S. (2021). Entre Chile y Argentina. Análisis para una historia del exilio chileno entre dictaduras y democracias (1973-1990). *Revista de Historia Regional. Sección Historia*, (45), 1-16.
- LUCIANI, L. (2019). Movimientos estudiantiles latinoamericanos en los años sesenta. *Historia y Memoria*, (18), 77-111.
- MARCHESI, A. (2017). Escribiendo la Guerra Fría latinoamericana: entre el Sur «local» y el Norte «global». *Estudios Históricos*, 30(60), 187-202.
- MARCHESI, A. (2019). *Hacer la revolución. Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del Muro*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- MARÍN, J. (1984). *Los hechos armados, un ejercicio posible*. Buenos Aires: CICSO.
- MARKARIAN, V. (2006). *Idos y recién llegados: la izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos, 1967-1984*. Ciudad de México: Uribe y Ferrari Editores..
- MARSISKE, R. (2003). *Movimientos estudiantiles en América Latina: Argentina, Perú, Cuba y México 1918-1929*. Ciudad de México: CESU-UNAM.
- MARSISKE, R. (Comp.) (1999, 2002, 2006, 2015, 2017). *Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina*, v. I-V. Ciudad de México: IISUE.
- MC ADAMS J. y MONTA A. (2021). *Global 1968. Cultural Revolutions in Europe and Latin America*. Nueva York: Notre Dame Press.
- MILLÁN, M. (2012). Movimiento estudiantil y procesos políticos en Argentina y Brasil (1964-1973). *Século XXI*, (2), 73-112.
- MILLÁN, M. (2013a). Estudiantes y política en el Río de La Plata (1966-1973) Un estudio comparado de los casos de Argentina y Uruguay. *RIES*, (6), 85-112.
- MILLÁN, M. (2013b). Estudiantes y Política en Argentina y Chile (1966-1973). *Izquierdas*, (16), 31-54.
- MILLÁN, M. (2018). Un análisis crítico de las interpretaciones sobre los movimientos estudiantiles de los '60. En P. Bonavena y M. Millán (Eds.), *Los 68 latinoamericanos* (pp. 23-52). Buenos Aires: CLACSO-IIGG.
- MILLÁN, M. (2020). El movimiento estudiantil y la violencia política en Argentina, 1966-1976. *Cuadernos de Marte*, (18), 89-137.
- MONETA, J. C. (1979). La política exterior del peronismo (1973-1976). *Foro Internacional*, (20), 220-276
- MUÑOZ TAMAYO, V. (2015). *Generaciones. Juventud universitaria e izquierdas políticas en Chile y México (Universidad de Chile-UNAM 1984-2006)*. Santiago de Chile: LOM.
- MUSOTTI, S. y BLAZ RODRÍGUEZ, S. (2019). Redes latinoamericanas de solidaridad con el movimiento estudiantil del 68 mexicano: desde la universidad a la calle. *Cuadernos de Marte*, 10(17), 183-213.

- ORDORIKA, I. (2022). Student Movements and Politics in Latin America: A Historical Reconceptualization. *Higher Education*, 83(2), 297-315.
- ORDORIKA, I., RODRÍGUEZ-GOMÉZ, R. y GIL ANTÓN, M. (Coords.) (2019). *Cien años de movimientos estudiantiles*. Ciudad de México: UNAM, PUEES.
- PENSADO, J. (2018). Entre perdigones, provocadores y noticias apócrifas: un caso comparativo a la represión estudiantil estatal durante el movimiento estudiantil del '68 en México y Uruguay. En V. Markarian (Ed.), *Movimientos estudiantiles del siglo XX en América Latina*. Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.
- PERRY, M. (2021). British Academia's Response to the *coup d'état* in Chile: The Case of Academics for Chile. *Bulletin of Latin American Research*, (41), 373-386.
- PIS DIEZ, N. (2022). *El movimiento estudiantil de La Plata en los tempranos sesenta (1955-1966). O la historia de una guerra fría también propia*. La Plata-Los Polvorines: UNLP-UNGS.
- PIS DIEZ, N. y GHILINI, A. (2017). Universidad, política y revolución entre la Argentina y el Perú: una reconstrucción histórica desde la trayectoria de Jorge Carpio (1960-1974). *E-L@TINA*, 16(61), 21-38.
- PIS DIEZ, N. y SEIA, G. (2022). La universidad y sus actores: entre lo local y lo global desde una mirada situada. *Esboços*, 29(51), 174-187.
- PORTANTIERO, J. C. (1978). *Estudiantes y política en América Latina*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- POWER, M. (2009). The U.S. Movement in Solidarity with Chile in the 1970s. *Latin American Perspectives*, 36(6), 46-66.
- RODRÍGUEZ, L. (2018). Los estudiantes reformistas y su proyección latinoamericana: los Congresos Internacionales (1921-1957). *Revista del IIICE*, (44), 11-24.
- ROJAS MIRA, C. y SANTONI A. (2013). Geografía Política del exilio chileno: los diferentes rostros de la solidaridad. *Perfiles Latinoamericanos*, 21(41), 123-142.
- SEIA, G. (2022a): Cultura, arte y política estudiantil en las universidades de Chile y Argentina bajo dictadura. Notas para la investigación comparativa. En I. Meza Huacuja (Ed.), *Culturas juveniles y contracultura en Iberoamérica, siglo XX*. Ciudad de México: SIJ-UNAM.
- SEIA, G. (2022b). *Solidaridad transnacional entre los movimientos estudiantiles de Chile y Argentina durante las Jornadas de Protesta Nacional contra la dictadura de Augusto Pinochet (1983-1986)*. Trabajo presentado en el III Coloquio de Historia de las Juventudes «Juventudes y Espacios: Miradas desde la Historia», Instituto Mora.
- SEIA, G. (2023). *Solidaridad Transnacional y Movimiento Estudiantil Latinoamericano bajo Dictaduras. Notas sobre los casos de Chile y Argentina, a través de la mirada de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes*. Trabajo presentado en el *Colloquium zur Geschichte Lateinamerikas, Lateinamerika-Institut, Berlin Freie Universität*, Berlín.
- VAN DER LINDEN, M. (2019). *Trabajadores y trabajadoras del mundo. Ensayos para una historia global del trabajo*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- VOMMARO, P. (2021). La producción social de las juventudes en tiempos de Guerra Fría: discursos y sentidos en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. En Schneider, A., *América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría (257-284)*. Buenos Aires: Teseo.
- ZOLOV, E. (2018). Los sesentas fueron globales. *Lento*, (62), 9-19.

Afirmando la legitimidad revolucionaria. La solidaridad de Luis Echeverría y el PRI con la izquierda chilena tras el golpe de Estado de 1973

Asserting Revolutionary Legitimacy. Luis Echeverría and PRI's Solidarity with the Chilean Left after the 1973 Coup d'État.

Andrea Torrealba Torre¹

Resumen

Este artículo analiza las contradicciones entre la política nacional de Echeverría en México y su postura frente al golpe de Estado en Chile. A partir del análisis de la visita de Salvador Allende a México en 1972 y el seguimiento que el diario *El Día* hizo al golpe de Estado en Chile en 1973 se evidencia la paradoja entre apoyar el régimen de la Unidad Popular mientras se llevaba a cabo una política de contrainsurgencia. En primer lugar, todo esto deja ver la caducidad del aparato presidencialista en México y cómo el uso de la fuerza armada y la adopción del tercermundismo funcionaron como una estrategia de legitimación. En segundo lugar, se analiza la visita de Allende y el golpe de Estado como dos momentos clave para mostrar la paradoja. Para concluir, se explica cómo es posible darle sentido a esta supuesta contradictoria política mexicana y se reflexiona sobre la oportunidad de poner a dialogar las perspectivas historiográficas de los «sesenta globales» y los «setenta subversivos».

Palabras clave: Luis Echeverría, Guerra Sucia, contrainsurgencia, Golpe de Estado en Chile.

Abstract

This article analyzes the contradictions between Echeverría's national policy in Mexico and his position towards the coup d'état in Chile. From the analysis of Salvador Allende's visit to Mexico in 1972 and the coverage of the coup d'état in Chile in 1973 made by the *El Día* newspaper, it becomes evident the paradox between supporting the Popular Unity regime while carrying out a counterinsurgency policy. Firstly, all this shed light on the expiration of the presidentialist apparatus in Mexico and how the use of armed force and the adoption of Third Worldism functioned as a legitimization strategy. Second, this paper analyzes Allende's visit and the coup d'état as two key moments in order to show the paradox. To conclude, it explains how it is possible to make sense of this supposedly contradictory Mexican policy and considers the opportunity to bring the historiographical perspectives of the «global sixties» and the «subversive seventies» into dialogue.

Keywords: Luis Echeverría, Dirty War, counterinsurgency, coup d'état in Chile.

¹ Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción y debate historiográfico

El 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado militar rompió con el pacto democrático que el Ejército había jurado a las instituciones chilenas y al gobierno de la Unidad Popular. Al otro lado del hemisferio, militares mexicanos llevaron a cabo operaciones contrainsurgentes en contra de grupos revolucionarios; sin embargo, el gobierno mexicano reiteró su apoyo al gobierno de Allende y denunció la utilización de la fuerza bruta hacia el pueblo chileno. La disparidad de los actos del gobierno mexicano, frente a la aceptación del exilio chileno y frente a los movimientos político-sociales críticos al régimen, plantea cuestionamientos sobre los complejos vínculos entre la capacidad internacional de la diplomacia mexicana y la política nacional *priista* durante el período de la llamada *Guerra Sucia* (1964-1982).

El artículo tiene el objetivo de exponer la siguiente paradoja: cómo concebir la simultaneidad durante el gobierno de Echeverría entre el acercamiento con la izquierda chilena y el despliegue de la política de represión que sostuvo durante su presidencia. Para evidenciar esta contradicción me baso en el análisis de los discursos producidos en torno a la visita de Salvador Allende a México en 1972, así como las notas que se publicaron en fechas inmediatas al golpe de Estado en Chile en el diario mexicano *El Día*. Dicho diario, órgano mediático extendido por toda la república y afín al gobierno es un vehículo que permite acceder a la postura oficial del régimen. Argumento que el gobierno de Echeverría construyó un símil entre el levantamiento militar en Chile y los grupos subversivos en México; aunque ideológicamente divergentes, ambos compartieron el objetivo de romper la legalidad del régimen vigente en cada país. En este sentido, que el gobierno de Echeverría haya denunciado el golpe de Estado se lee como un reforzamiento a las instituciones legítimas y, de esa manera, los movimientos en contra del sistema aparecen entonces como una amenaza a ese orden.

El enfoque metodológico de este artículo responde a los cuestionamientos que provienen desde la historia transnacional (Conrad, 2017) y la Guerra Fría Global (Westad, 2017). Suscribo la idea propuesta por Tanya Harmer (2011) para comprender la Guerra Fría en América Latina desde una visión donde los actores políticos latinoamericanos son productores de sentido y autores de la Guerra Fría Interamericana. Así, los conflictos político-ideológicos que aquí presento son acontecimientos que muestran una relación de poder entre grupos de diferentes posturas y latitudes, que más que influenciados o dirigidos por los poderes mundiales —Estado Unidos o la Unión Soviética— son responsables de sus acciones y dueños de sus propias convicciones. Advierto, en sintonía con William Booth (2021), que «no es suficiente preguntarnos cuándo y cómo la Guerra Fría tuvo lugar en América Latina e importar marcos teóricos de otros espacios para resolverlo. Debemos preguntarnos, en cambio, cuándo y cómo la Guerra Fría fue latinoamericana» (p. 1129). En esa misma línea, disiento de las posturas historiográficas que observan al pasado mexicano como único y excepcional; en cambio, reparo en indicar las semejanzas de la experiencia política mexicana en relación con sus similares latinoamericanas. Propongo entonces abonar a aquellos estudios que defienden la importancia de engrosar los análisis históricos que resaltan la magnitud de la represión perpetrada por el Estado mexicano y que ponen en duda las interpretaciones sobre la *pax priista* y su carácter de dictablanda única en el continente (Gillingham y Smith, 2014).

Así como se ha construido una narrativa acerca de la particularidad del régimen *priista* en contraposición con las experiencias políticas latinoamericanas, también ha sido poderosa la mitificación en torno a la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en México. Las interpretaciones sobre este hecho han recalcado su particularidad, imaginándolo como el evento más violento y cruel sobre la población. Esta exageración —sin menoscabar su gravedad— impide el entendimiento del funcionamiento del aparato de represión ejercido por el Estado mexicano y reduce la capacidad

para explicar su sistematicidad en espacios rurales o ajenos a la capital. A su vez, se ha conformado un cúmulo de explicaciones que coinciden con que este evento fue el origen de la lucha por la democracia mexicana, ensombreciendo otros movimientos que ciertamente cooperaron en su construcción (Allier Montaño, 2021).

A pesar de la gravedad de estos hechos los estudios sobre violencia estatal desde las ciencias sociales en México se han desarrollado sobre todo poniendo énfasis en los mecanismos de hegemonía, control e inclusión; es de manera reciente que se ha tratado de manera más académica el funcionamiento de los dispositivos del terrorismo de Estado durante la Guerra Sucia. Dentro de los esfuerzos por complejizar la realidad política y social entorno al 68 se han publicado textos importantes como [*Tiempo suspendido*] de Camilo Vicente Ovalle (2019), que exhibe el funcionamiento del aparato de contrainsurgencia del Estado mexicano; la compilación *Mexico: Beyond 1968* coordinada por Jaime Pensado y Enrique Ochoa (2018), donde reúnen una docena de artículos que revisan la brutal historia de las luchas clandestinas y la represión estatal más allá del mito del 68; por último, el libro coordinado por Fernando Calderón y Adela Cedillo, *Challenging Authoritarianism* (2012), que sentó las bases para visualizar la profundidad de las grietas que los movimientos de resistencia generaron en la estructura gubernamental del PRI. Así, este artículo busca abonar a la discusión sobre los usos y abusos de la violencia durante la Guerra Sucia y ponerlos en diálogo con los procesos políticos y sociales latinoamericanos.

El debate sobre la visita de Allende evidencia las paradojas de la realidad política mexicana, que fluctuaron entre la política de apertura democrática, el tercermundismo y la contrainsurgencia. El acercamiento al gobierno chileno reforzaba la propuesta de democratización y tercermundismo, por parte del ejecutivo mexicano, a la vez que justificaba la campaña de contrainsurgencia. Estos elementos resaltan a la luz de las dos interpretaciones historiográficas hegemónicas sobre el gobierno de Echeverría: los «sesenta globales» (*global sixties*) y los llamados «setenta subversivos». Los estudios más recientes desde ambas perspectivas han logrado matizar el mito del 68 mexicano al evidenciar las escalas diversas de los movimientos críticos al régimen antes y después de Tlatelolco, cuestión fundamental para los propósitos de este artículo.

Los «sesenta globales» se entienden como una unidad de sentido histórico que reconcilia diferentes caminos historiográficos: aquellas investigaciones en torno a los estudios de la Guerra Fría (*Cold War Studies*) y aquellas referentes a los estudios sobre la nueva izquierda (*New Left Studies*) durante la década del sesenta (Zolov, 2020). Acompañando esta categorización también es común encontrar que se conoce a este período como los *largos sesenta*, la cual es una expresión historiográfica que proviene de la idea braudeliana de entender el tiempo como una unidad analítica. En este sentido, siguiendo a Diana Sorensen (2007), los sesenta deben ser entendidos como una categoría heurística, más que cronológica. Para Latinoamérica, si bien la discusión encausada a resolver este problema ha sido superficial, Eric Zolov sostiene que la periodicidad más adecuada es comenzar los *largos sesentas* en 1958 con el cambio de la política exterior del vicepresidente Nixon conocida como la política «del buen vecino» y terminar con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en 1973 (Zolov, 2014). Desde esta perspectiva la insurgencia de los grupos disidentes se explica desde sus características culturales y sus vínculos con los procesos transnacionales (Zolov, 2018).

Por otro lado, la propuesta de los «setenta subversivos» es resaltar los elementos violentos de dicha década, poniendo atención en la interpretación del impacto social y político de los movimientos de insurgencia, así como a la sistemática represión gubernamental (Pensado y Ochoa, 2018, p. 9). Desde esta perspectiva, el gobierno de Echeverría se explica desde la dinámica de resistencia y represión, haciendo énfasis en las características nacionales. La fortaleza de esta aproximación me-

todológica es que evidencia la importancia de afianzar los estudios históricos de un período que ha intentado ser silenciado desde los aparatos del Estado. Su debilidad, por otro lado, es que se obvia o limita el peso de actores internacionales y se restringen los elementos culturales que formaron también parte de las movilizaciones.

Me parece que el análisis aquí presentado permite pensar en que la construcción de legitimidad en el gobierno de Echeverría, tanto en la apertura diplomática como en la política de contrainsurgencia, evidencia los puntos de convergencia entre las perspectivas de los *global sixties* y los «setenta subversivos». Propongo no pensarlos como dos compartimentos explicativos divergentes, sino como una oportunidad para visualizar que ambos son parte de la experiencia histórica de los años setenta y que es necesario ponerlos a dialogar. El estudio aquí presente sirve como bisagra donde confrontar ambas perspectivas interpretativas; o incluso como una ventana para comprender las superposiciones de ambos modelos explicativos. La estrategia por parte del gobierno mexicano para no seguir perdiendo el poder presidencial se inserta tanto en una discusión de los largos y globales sesentas como en las discusiones sobre el auge insurgente y represivo de los setenta. De esta forma no solo se entiende el tercermundismo en tanto política global, como tampoco solo se entiende la contrainsurgencia en tanto política antisubversiva nacional.

Caducidad del presidencialismo

Para demostrar el argumento de este artículo es pertinente comprender cómo el presidencialismo, base del poder hegemónico del PRI, comenzó a resquebrajarse entre la década de los sesenta y setenta. Las muestras de la caducidad del régimen llevaron a la búsqueda de nuevas formas de legitimidad, entre las que resaltó el uso desmedido de la violencia de Estado y el proyecto de conseguir un papel diplomático preponderante en la región. El auge del autoritarismo durante el gobierno de Echeverría fue una muestra de la fuerza represora del Estado para recuperar el poder que la imagen del presidente había perdido durante los últimos años. A su vez, el acercamiento a la izquierda latinoamericana y el liderazgo diplomático a través de la defensa del tercermundismo funcionaron como una estrategia para establecer un nuevo modo de legitimidad.

Durante los primeros treinta años del régimen de partido único (1928-1958) la heterogeneidad de poderes locales y regionales se fue alineando al poder presidencial, el cual tuvo la capacidad de regular y arbitrar los conflictos entre los diferentes actores políticos. El pináculo de la fuerza política condensada en la figura del presidente se expresó en la facultad para nombrar a su sucesor sin temor a generar una crisis al interior del gobierno o frente a los otros poderes del Estado. La hegemonía del «señor presidente» constituyó uno de los elementos característicos del presidencialismo *priista*; su poder se extendió a tal escala que, como lo anota Pozas Horcasitas (2014), «la nominación por el PRI como candidato era casi la designación al cargo, procesado electoralmente» (p. 16).

Además del control de los poderes regionales y el dominio sobre el poder legislativo y judicial, la manipulación de los medios de comunicación fue central para consolidar el presidencialismo. En el supuesto de legitimidad proveniente de la revolución, la mutua colaboración entre medios de comunicación y gobierno resultó primordial para afianzar la imagen de un partido único y hegemónico (Sánchez y Anderson, 2018). En la Constitución de 1917 quedaron establecidas las pautas que orientaron dicha vinculación; en el artículo tercero de la Ley sobre Delitos de Imprenta se desplegaron los dispositivos que le permitieron al gobierno garantizar el control sobre los medios. Por ejemplo, cualquier comunicación que tuviera como objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones del país o a las Entidades Políticas que la forman sería considerada como un ataque al orden y la paz

pública. Del mismo modo, la ley dictaba que toda manifestación o expresión pública que provocara a la anarquía, al motín, sedición, rebelión o desobediencia de los mandatos legítimos de la autoridad sería ilegítima.² En el contexto de guerra civil en el cual se inscribió esta ley era clara la importancia de denunciar las publicaciones que incitaban a la desobediencia y a la rebelión, pues el objetivo último de dicha ley —y del gobierno constitucionalista— era la pacificación de un país que llevaba casi siete años en conflicto. Sin embargo, esta misma ley aplicada en el contexto de Guerra Fría se interpretó de manera muy diferente, pues la desobediencia, la rebelión, el motín o la injuria en contra de las autoridades del país se relacionaron con movimientos revolucionarios, posiblemente motivados por potencias extranjeras.

Ya que el partido único y hegemónico fue un partido en el gobierno y un partido del gobierno, cualquier crítica hacia el PRI no era solo una afrenta al Estado, sino también a la patria y a los valores nacionalistas (Meyer, 1995). Por lo tanto, aquellos movimientos sociales que sostuvieron una crítica al gobierno sufrieron las consecuencias de ser calificados como contrarrevolucionarios y antipatrióticos. Aunado a esto, en el contexto ideológico de la Guerra Fría, aquellos movimientos que no se adscribieran a la retórica nacionalista-*priísta* fueron catalogados como antinacionalistas y disruptivos del orden revolucionario oficial. Para lograr el desprestigio público de estos grupos el control mediático fue fundamental para el régimen. Es importante resaltar que no toda la prensa fue manipulada completamente por el Estado (Del Palacio, 2015), pero en general funcionó como una fuente para conocer la postura del gobierno frente a ciertos temas coyunturales. Al entender entonces la prensa como un espacio de construcción de la opinión pública, pero también como un medio de comunicación del discurso oficial del ejecutivo, esta me permite comprobar la postura del gobierno frente a los sucesos chilenos y mostrar la falta de representación de los mecanismos de violencia utilizados por Estado.

La paridad entre el partido único y el Estado hizo pensar por mucho tiempo que el poder gubernamental era ilimitado. Sin embargo, la creencia de un partido *priísta* todopoderoso no permite matizar espacios y grupos que conformaron una oposición activa al régimen y que fueron partícipes también de la vida pública durante dichos años. Así, es discutible que la presidencia tuviera un poder total sobre las instituciones que conformaban al gobierno y al Estado, pues la delimitación y relativización del poder real del presidente recayó en los márgenes de las instituciones que —como defiende Soledad Loaeza (2013)— contenían y daban forma a su poder. Durante la época más álgida del poder presidencialista (1928-1958) este encontró limitaciones como la situación geopolítica derivada de la vecindad con Estados Unidos, la Constitución, la separación de poderes, el juego de sucesión presidencial y las dinámicas geopolíticas. Aun así, mantuvo un control férreo sobre la opinión pública, el mapa político nacional y el discurso homogeneizador en torno a la vigencia de las demandas emanadas de la Revolución mexicana.

Esta facultad cohesionadora estuvo sustentada en la conformación de una cultura nacional revolucionaria integradora. A partir del crecimiento demográfico y los procesos de urbanización experimentados durante la década de los cincuenta y sesenta, emergieron grupos sociales que rompieron con la unicidad de la ideología nacional. Esta diversificación ideológica produjo grietas en la unidad cultural, simbólica y discursiva que había dado consistencia al nacionalismo de Estado sobre el que estaba edificado el presidencialismo (Pozas Horcasitas, 2014, p. 18). Durante los años sesenta el país fue testigo del incremento de las demandas sociales de diferentes grupos que buscaron hacer notar su inconformidad por vías pacíficas y legales. Campesinos, telegrafistas, ferrocarrileros, mineros, médicos, estudiantes —ellos y otros grupos de un abanico ideológico amplísimo— tanto en espacios rurales como urbanos, exigieron mejores condiciones de vida, mayores garantías democráticas, mejores

2 Ley sobre Delitos de Imprenta, Constitución General de la República Mexicana, 1917, pp. 1-2.

salarios. Sin embargo, sus demandas fueron recibidas con violencia, y su lucha pronto viró hacia la clandestinidad y la resistencia armada. La heterogeneidad, y a veces contradicción, de las ideologías detrás de los movimientos opositores al régimen (Pensado y Ochoa, 2018) y la incapacidad de este para circunscribirlos en el discurso oficial es una de las razones que ayudan a comprender el inicio de la Guerra Sucia (1964-1982). El término *guerra sucia* surgió con el objetivo de visibilizar cómo el enfrentamiento entre el Estado y la sociedad se llevó a cabo entre grupos con fuerzas desiguales. Lo «sucio» de la guerra hace alusión en sentido figurado a las acciones criminales del terrorismo de Estado (Oikión Solano y García Ugarte, 2006, p. 16).

La reacción por parte del Estado se concentró en la utilización de la fuerza militar, de la policía de investigación (Dirección Federal de Seguridad, DFS) y de grupos paramilitares. Las prácticas de captura, tortura y desaparición sistemática fueron las principales herramientas de lo que Camilo Vicente Ovalle nombra el circuito de detención-desaparición (Vicente Ovalle, 2019). La política de contrainsurgencia fue la práctica legal e ilegal de persecución, represión, detención, captura, incomunicación, tortura, desaparición y asesinato llevado a cabo por parte del Estado mexicano (Rangel Lozano, 2015). Estas operaciones de contrainsurgencia guardan similitudes con las prácticas de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) implementadas en los regímenes cívico-militares del Cono Sur durante los años setenta.³ Según Vicente Ovalle la contrainsurgencia, como una estructura clandestina de la represión en México, tuvo un nivel de refinamiento muy similar al resto de los países latinoamericanos y se originó en la década del sesenta en el momento en el que grupos de servicios de inteligencia y de seguridad nacional surgieron dentro de la estructura legal de la policía y el ejército, los cuales tuvieron como objetivo combatir los nuevos grupos de la disidencia organizada. El carácter de cooperación entre policía y ejército fue una característica fundamental del alza en la violencia estatal, como lo anota Sierra: «los hechos más atroces de la contrainsurgencia mexicana siempre ocurrieron cuando la policía y los militares unieron sus fuerzas para combatir la guerrilla» (Sierra, 2003, p. 26). El distintivo de este tipo de represión fue el anticomunismo y la percepción de una insurgencia nacional generalizada (Vicente Ovalle, 2019).

Frente a la incapacidad de sostener un discurso homogeneizador que incluyera a los nuevos grupos sociales surgidos de los procesos de industrialización y la urbanización, el régimen *priísta* se encontró frente a la disyuntiva de recuperar la concentración del poder presidencial. La violencia fue una parte integral para mantener la modernización del país a manos del partido dominante. La habilidad para controlar la disidencia fue fluctuante, pero claramente sistemática en la década del setenta (McCormick, 2018, p. 266). El reto no fue menor y la estrategia para legitimar la figura del presidente se sostuvo en dos pilares: la eliminación de aquella oposición que no accediera a unirse al discurso oficial y la búsqueda de convertir a México en un poder central para la diplomacia de la región latinoamericana y tercermundista.

«La defensa de iguales principios seguirán siendo solidarios»

Para lograr ubicar a México como un modelo de política exterior y concentrar en el presidente las facultades para negociar entre los poderes de la región, sobre todo entre Estados Unidos, Cuba y el resto de los países latinoamericanos, es necesario considerar dos momentos claves en el fortalecimiento de dicho papel. El primero de ellos se encuentra inmerso en la política diplomática de Echeverría respecto al

3 A pesar de que la política de represión estuvo justificada desde el discurso anticomunista, esta llegó a grupos que no necesariamente fueron marxistas (como sindicalistas o intelectuales) e incluso tuvo repercusiones en ciudadanas y ciudadanas que no tenían ningún tipo de vínculo con la guerrilla o las disidencias.

acercamiento de los países pertenecientes al tercermundismo: la visita de Salvador Allende al territorio mexicano en 1972. El segundo de ellos estalló a partir de los golpes de Estado en el Cono Sur y la política de apertura al exilio defendida por el mandatario mexicano. Ambos sucesos permiten comprender cómo el acercamiento a la izquierda latinoamericana fue utilizado como una política para legitimar el papel de México a nivel regional y las operaciones de contrainsurgencia en una escala interna.

En diciembre de 1972 Salvador Allende hizo un viaje por la República mexicana, acompañado por el presidente Luis Echeverría y su familia. Son famosas las palabras que el presidente chileno compartió el 2 de diciembre de ese año en la Universidad de Guadalajara, por lo que no las mencionaré aquí; menos conocidas son las palabras del presidente mexicano al presentar a Salvador Allende al público universitario. Luis Echeverría, parado enfrente de una pancarta gigantesca que exponía «La defensa de iguales principios seguirán siendo solidarios» presentó al mandatario chileno de la siguiente manera:

Dispongamos pues a escuchar a un amigo de México que lucha en su patria por las más altas y nobles y difíciles causas y que ha venido a encontrar en nuestra patria una simpatía, un apoyo, un entendimiento y una solidaridad que queremos que encuentre en toda América Latina.⁴

Después de pronunciar estas palabras se escuchó al maestro de ceremonias exclamar con orgullo, respecto Allende: «El líder intrépido, con nosotros». Es clara la admiración que sentía Echeverría frente al presidente chileno. Se puede incluso concluir que este es en gran medida un modelo a seguir para el mexicano. También es notable el respeto y emoción del público universitario. Predominaron las palabras de solidaridad (tanto en la presentación como en la manta), las imágenes de valentía por parte del pueblo chileno y la propuesta de apoyo incondicional.

Frente a la visita de Allende en México tanto grupos conservadores y una parte de la izquierda mexicana expresaron su escepticismo respecto a la visita de Allende, su discurso y supuesta amistad con Echeverría. Por un lado, para los sectores empresariales la implicación de cercanía con un gobierno que se proclamaba abiertamente socialista, como el chileno, levantó suspicacias; en un ambiente cada vez más tenso entre Echeverría y los grupos empresariales la visita de Allende pudo ser interpretada como una afrenta (Arriola y Galindo González, 1984). Por otro lado, para la mayor parte de los grupos opositores surgidos en los sesenta, la retórica de izquierda adoptada por el presidente mexicano fue leída como una fachada para esconder las acciones de un régimen que cada vez se mostraba más autoritario y violento (Dillingham, 2018, p. 114).

A nivel internacional, la relación oficial con un gobierno socialista había sucedido con anterioridad cuando México se negó a retirar las relaciones diplomáticas con Cuba y defendió la permanencia de la isla en la Organización de Estados Americanos. Aunque esta postura contradujo la línea marcada por los Estados Unidos le permitió a México consolidarse como un poder mediador en la región. La fortaleza diplomática jugó en beneficio de la política interna, pues como anotan Calderón y Cedillo (2012), Cuba se acercó tanto al gobierno mexicano que negó el apoyo a las guerrillas mexicanas en los setenta (p. 5).

En el contexto de la pérdida de legitimidad que he enunciado anteriormente, la aproximación al gobierno de la Unidad Popular le daba la oportunidad al Estado mexicano para incluir en su discurso a grupos de izquierda que se sintieran atraídos por el socialismo chileno y así, accedieran a ver en el gobierno mexicano un régimen aceptable; también, fungió como justificación de la represión misma, pues al construirse una imagen de izquierda oficial resultó problemática una postura de oposición al régimen si en principio se compartía la misma postura. Por último, a nivel internacional México se

4 Discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, 1972.

posicionó como el eje de negociaciones entre los países socialistas latinoamericanos y Estados Unidos (Thornton, 2020). En este sentido, si bien la visita de Allende fue vista con recelo por parte de las autoridades estadounidenses, la cercanía de Echeverría con el vecino del norte fue una garantía que permitió una libertad de acción inesperada. Al final, Nixon y Kissinger prefirieron sostener una relación de cooperación con el gobierno mexicano al cual podían recurrir para influenciar las dinámicas de la región (Dillingham, 2018, p. 113). La solidaridad con el pueblo chileno no fue solo un discurso que defendió Echeverría durante la visita de Allende, sino que la retórica de acercamiento se mantuvo durante los siguientes meses, sobre todo mediante la publicación de notas periodísticas en los medios afines al gobierno.

El Día. Vocero del Pueblo de México fue una publicación periódica que nació en 1962 bajo la dirección de José Luis Camacho López (Chavarría Galindo, 2001). La estructura del diario era común para la época: una portada con el objetivo de exponer las noticias más relevantes, el editorial, una sección de política nacional y otra de economía, varias páginas dedicadas a publicidad, cuatro planas correspondientes a noticias internacionales y el cierre del periódico les pertenecía a las noticias de la farándula y el deporte. Sin embargo, en comparación de otros diarios mexicanos, esta contó con una sección enfocada en problemas internacionales del Tercer Mundo. En sus páginas es posible encontrar el seguimiento de las Conferencias Tricontinentales en la Habana (1966) y también en Argelia (1973), las cuales se construyeron a partir de la vinculación que el diario tenía con *Le Monde*. También resalta el papel central que se le dio en esa sección a América Latina, indicador de que existió una decisión editorial para compartir los vínculos políticos y culturales con el resto de los países latinoamericanos. Estos detalles permiten concluir que *El Día* se encontraba en consonancia con la política diplomática del gobierno mexicano, pues se destaca de manera constante el papel del gobierno mexicano en Latinoamérica y su preocupación por el tercermundismo a nivel internacional. No es de sorprender que el seguimiento de la realidad chilena fuera extenso en la prensa mexicana en la medida en que existía una admiración por las instituciones del país austral, una suerte de reflejo de lo que la clase política mexicana creía ser.

El primero de septiembre de 1973 —y durante todo el mes— *El Día* dispuso una plana completa para publicaciones respecto al acontecer político chileno. En una de las notas expuso: «la ultrazquierda chilena estima que está latente aún el peligro de un golpe de Estado para reemplazar al gobierno de coalición izquierdista por una junta militar».⁵ Al día siguiente, en la misma sección nombrada «América Latina», apareció una crítica en contra de la oposición democrática por no apoyar al gobierno de la Unidad Popular bajo el titular «La DC rechazó la proposición para reiniciar el diálogo con el gobierno».⁶ Resulta particularmente interesante que la prensa mexicana expusiera un apoyo implícito a la izquierda marxista al publicar un comunicado del MIR y que se declarase crítica a la postura de la Democracia Cristiana, partido que podría parecerle más moderado y que de hecho resultaba mucho más afín a su postura política.

La nota publicada el tres de septiembre contiene declaraciones del ministro del Interior chileno, Carlos Briones:

Este gobierno ha dado y da muestras mucho más que suficientes de su auténtica vocación democrática, de su sometimiento al orden jurídico e institucional del país y de su respeto irrestricto a la libertad de expresión que en estos últimos días ha degenerado en un verdadero libertinaje.⁷

5 *El Día*, 1 de setiembre de 1973, p. 6.

6 *El Día*, 2 de setiembre de 1973, p. 6.

7 *El Día*, 3 de setiembre de 1973, p. 6.

Resulta clara la importancia de la democracia como un valor a respetar y defender, una democracia que además se visualizaba legítima, justa y adecuada para la vida latinoamericana. Esta postura fue repetida en diferentes notas durante los días de septiembre y defendida no solo por el diario en general, sino también por las notas de opinión del analista oficial del diario, Hernando Pacheco, encargado de la sección de comentarios internacionales.

En la sección internacional del diario, el 11 de septiembre el gran titular es «Allende confía que pronto será solucionada la crisis que vive Chile».⁸ *A posteriori* esta nota resulta ingenua, pues acaso horas después de ser publicado el número de aquel fatídico día, Allende ya no se encontraba con vida. Sin embargo, también fueron recurrentes notas que expresaron sospechas y advertencias sobre un posible golpe de Estado. Por ejemplo: «en medios periodísticos locales corrió hoy el rumor de que habrían presentado su renuncia los ministros militares que representan al Ejército, la Marina y la Aviación en el gobierno de Allende».⁹

El miércoles 12 de septiembre de 1973 en la portada del diario apareció una fotografía de Luis Echeverría y Salvador Allende, acompañados de sus esposas, cuando el dirigente chileno realizó una visita al país mexicano en 1972. Sobre esta fotografía, ocupando el ancho del papel, se lee: «Sobre el cadáver de Allende, se instaló el poder militar»; los subtítulos de la nota anuncian: «Unidades blindadas y la fuerza aérea entraron en acción para reducir la resistencia del palacio presidencial» y «Proclaman los golpistas la “lucha por la liberación del país del yugo marxista”».¹⁰ También en la portada se publicó un extracto del discurso del presidente Echeverría en solidaridad con el pueblo chileno y un aviso de la Cámara del Senado mexicano. Tanto en la nota principal, como en los comunicados del gobierno, el carácter de las declaraciones es de denuncia y repudio al golpe de Estado, pues fue considerado como un acto que violaba toda institucionalidad propia de una democracia fuerte —como la de Chile, pero también, como se insinuaba, la mexicana—. La postura oficial del gobierno mexicano se expresó en frases como «es un duro golpe a la lucha del Tercer Mundo» o «fiel a su política de no intervención y de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos».¹¹ Es visible, entonces, cómo el golpe de Estado en Chile fue utilizado por el gobierno mexicano para dar a conocer su postura antiimperialista —proveniente de una tradición diplomática del no intervencionismo—, pero también para reforzar el liderazgo en la región al defender valores tercermundistas.

El golpe de Estado en Chile fue leído desde la experiencia histórica mexicana, vinculándolo con una experiencia nacional, si bien lejana, no por eso olvidada. La toma inconstitucional del poder por parte del general Victoriano Huerta en 1911 y el subsecuente asesinato del presidente electo democráticamente, Francisco I. Madero, fue la referencia inmediata y profunda con los golpes de Estado. Esta experiencia, que había provocado la Revolución mexicana, un estallido social sin parangón y una violencia cotidiana presente todavía en la memoria colectiva, funcionó como el referente al cual se vinculaba la experiencia chilena. Por esto, un golpe de Estado representaba más que una violación a la legalidad o al pacto político, era la oportunidad para un estallido social que podría derivar en guerra civil. «Deseamos que por sobre esta fuerza de la sinrazón contra el derecho, la constitución, la ley y la democracia triunfe la voluntad popular de los trabajadores del pueblo»,¹² exclamó el diputado veracruzano Fidel Herrera, líder del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario (MNJR), partido

8 *El Día*, 11 de setiembre de 1973, p. 6.

9 *El Día*, 1 de setiembre de 1973, p. 6.

10 *El Día*, 12 de setiembre de 1973, p. 1.

11 *Idem*.

12 *Ibidem*, p. 6

de las juventudes *priístas*.¹³ Un golpe de Estado estaba relacionado no solo con el rompimiento de las garantías democráticas y sus instituciones, sino con el estallido social y violento. Así, no es extraño que ley, democracia, Constitución y derecho fueran elementos que debían permanecer unidos a la voluntad popular.

En el editorial titulada «Sangre que hará historia: la del presidente Allende» la relación con ese pasado mexicano es explícito:

En México nuestros padres supieron mucho de esto. La sangre de Francisco I. Madero, el Presidente Mártir, anunció el torrencial desbordamiento de sangre mexicana que ocurriría poco después. Victoriano Huerta, con su deslealtad criminal, desafió a las potencias superiores de la historia; se abrieron entonces las compuertas de la gran violencia popular y de la revolución profunda.

Hay un hondísimo sentido humano en las palabras en que el presidente Echeverría desea al pueblo de Chile que reencuentre su camino en la paz y la democracia. Pero aunque los pueblos y los gobiernos de vocación popular quieran la paz y practiquen la tolerancia democrática ¿no seguirán los imperialistas norteamericanos y sus aliados de la reacción latinoamericana despreciando las más severas lecciones de la historia contemporánea?¹⁴

Francisco I. Madero y Salvador Allende fueron dibujados como presidentes mártires que sufrieron la violencia del ejército por defender un cambio social y popular. El ejército mexicano y el chileno, apoyados por la oligarquía nacional y la intervención estadounidense, rompieron con la voluntad popular, la cual extendió su representación más allá de las fronteras nacionales, pues esta aparece como una fuerza regional, homogeneizadora, latinoamericana. El editorial comenzó haciendo una descripción de la democracia chilena que «ha sido interrumpida por la violencia desencadenada desde los cuarteles»¹⁵ y denunciando el rompimiento del pacto legal que el ejército había firmado con el gobierno. Este acto, además, habría manchado al Ejército: «se ha cubierto de ignominia, ha negado de un solo golpe su razón de ser institucional».¹⁶ Otras referencias a esta similitud son visibles en notas posteriores, como cuando el senador Óscar Tapia declaró «Los ideales de Madero y Allende son patrimonio del Tercer Mundo».¹⁷ El Ejército chileno se habría comportado de manera fascista, antipatriótica; se le consideró traidor a la causa popular chilena y «de los pueblos de América Latina y de los pueblos todos del Mundo».¹⁸ En el discurso *priísta* no hay nada más grave que no tomar en cuenta las demandas populares. Así, el poder de cambio seguía recayendo en el pueblo chileno, pues este era «protagonista de su historia» y «decidirá por sí mismo su destino, más allá de intromisiones ilícitas del exterior».¹⁹

El equipo editorial de *El Día* entendió la lucha chilena de Allende como una lucha latinoamericana, pues «sería falso no advertir ni comprender que la lucha del pueblo chileno es parte indivisible y muy sensible de la gran lucha latinoamericana; de la lucha de todos los países que quieren vivir en paz y libertad».²⁰ En este sentido, así como Francisco I. Madero se había sacrificado por la revolución

13 *El Día*, 12 de setiembre de 1973, p. 6.

14 «Editorial. Sangre que hará historia: la del presidente Allende...», *El Día*, 1973, p. 1.

15 *Idem*.

16 *Idem*.

17 *El Día*, 15 de setiembre de 1973, p. 6.

18 «Editorial. Sangre que hará historia: la del presidente Allende...», *El Día*, 1973, p. 1.

19 *Idem*.

20 *Idem*.

mexicana, «Allende, Héroe y Mártir de la Legalidad»²¹ había dado su vida por evidenciar el intervencionismo yanqui y su muerte mostraba el peligro constante en que se encontraban las naciones latinoamericanas frente a los grupos que buscaron romper con el devenir revolucionario.

Habría existido, entonces, una cierta sensibilidad compartida entre países tercermundistas que les acercó en el contexto de la Guerra Fría a pesar de sus claras diferencias políticas ¿Cómo es posible que un partido dominante como el PRI pudiera coincidir en política exterior con una coalición de partidos de izquierda que propuso una vía al socialismo como la de la Unidad Popular? Según Eduardo Devés, el tercermundismo fue una corriente de pensamiento desarrollada en los países de Asia, África y América Latina que, en torno a la Conferencia de Bandung (1955) y después en el Movimiento de Países No Alineados (1961), configuraron una política internacional de apoyo y cooperación entre los países que buscaron conformar un tercer eje dentro de la dinámica bipolar de la Guerra Fría (Devés Valdés, 2017). El origen del concepto es posible rastrearlo hasta 1952, cuando el demógrafo Alfred Sauvy mencionó la importancia de que Francia retomara el poder colonial que había perdido y así se posicionara como un tercer eje influyente en la política internacional (Palieraki, 2023). A pesar de este origen colonialista, el tercermundismo pronto se resignificó desde los países del Tercer Mundo como una suerte de sentimiento regional abanderado por las élites intelectuales en lucha por la descolonización (Alburquerque, 2015).

El gobierno de la Unidad Popular asumió una postura tercermundista tanto en la descripción de su gobierno como en la práctica de la diplomacia. Esa fue también la seña de identidad del gobierno de Echeverría. Ahora bien, explicar las políticas internacionales del mandatario mexicano como una forma de desviar la atención sobre la represión interna resulta simplista; en cambio, es necesario evidenciar cómo Echeverría buscó ser un actor activo dentro de las dinámicas de la Guerra Fría a pesar de las limitantes que implicó dirigir al país más cercano a Estados Unidos (Zolov, 2018, p. 25). Dentro del campo de acción internacional, logró abrir una embajada en Beijing, entrevistarse con Mao Zedong y proponer la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados —tal vez uno de sus más grandes éxitos en política internacional— (Rodríguez, 2022). Este documento, también conocido como «Carta Echeverría», fue una propuesta del presidente mexicano frente a las Naciones Unidas con el fin de «establecer y mantener un orden económico y social que sea justo y equitativo» para los países en vías de desarrollo (*Carta Echeverría*, 1974).²² Fue, en síntesis, una propuesta tercermundista para garantizar las condiciones de desarrollo independientemente de la ideología que estuviera detrás de la decisión. En este sentido, el presidente mexicano defendió la libertad económica a pesar del contexto bipolar, posicionándose así crítico del intervencionismo y del imperialismo de ambos polos.

Vuelvo a presentar entonces la paradoja que nos concierne: mientras el gobierno de Echeverría tenía una postura de apertura hacia afuera, hacia dentro la política era de control y represión social. Políticos de izquierda chilenos —incluidos militantes marxistas, intelectuales y dirigentes sindicales, grupos de la sociedad civil, obreros, jóvenes y una diversidad de personas afines al gobierno de la Unidad Popular— fueron bienvenidos al país, mientras que disidentes políticos mexicanos y grupos sociales en resistencia —que tenían el objetivo de transformar de manera radical un régimen que no había cumplido con las demandas sociales de la Revolución— eran brutalmente reprimidos, asesinados, desaparecidos (Vicente Ovalle, 2019).

21 *Idem.*

22 Carta de derechos y deberes económicos de los Estados (Carta Echeverría), resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1974.

Para explicar la lógica detrás de esta paradoja me remito de nuevo al análisis hemerográfico. La primera narrativa sobre el golpe de Estado presente en *El Día* es la caracterización de la experiencia de la Unidad Popular como un gobierno afín a las causas mexicanas revolucionarias, simbolizadas en el PRI en general, y en el gobierno de Echeverría en particular. En este sentido, los valores que defendió la Unidad Popular son considerados un espejo de las garantías democráticas y sociales que se han construido en México a partir de los gobiernos posrevolucionarios. La solidaridad con el pueblo chileno «que ha sido traicionado» es casi un deber diplomático y humanitario para el gobierno mexicano: el valor de esta acción conllevó a salvar la vida de miles de exiliados chilenos, pero también tuvo un objetivo político nacional. Sin embargo, esta misma convicción de la defensa de aquello que se consideraba correcto y la presión de grupos —tanto externos como internos de la política a su alrededor— llevaron a Echeverría a presidir uno de los gobiernos más crueles y violentos en la historia del PRI. Los grupos reprimidos durante su mandato y la cantidad de presos políticos se multiplicaron y llevaron a una de las tragedias menos estudiadas, pero más profundas de la historia mexicana en las últimas décadas. La eliminación de la guerrilla en México se fraguó en la política de desaparición llevada a cabo por los militares y la DFS entre 1964 y 1982. Según el estudio de McCormick, los números duros indican que al menos siete mil personas fueron torturadas, tres mil fueron presos políticos y más de tres mil fueron desaparecidos o asesinados (McCormick, 2018, p. 256).

La contrainsurgencia fue entonces un mecanismo para contener las demandas sociales y políticas provenientes de disidentes, que en el marco discursivo del gobierno eran considerados contrarrevolucionarios. Su actuar, al salirse del pacto revolucionario de 1917, se escapaba también de la ley. La represión no convierte al gobierno en turno menos revolucionario, al contrario, lo eleva como el defensor de la verdadera Revolución y es en este punto que se vincula con el proyecto chileno. El cambio legítimo y popular se encontraba en torno a la propuesta de la Unidad Popular y en específico en Salvador Allende como aquel guía y protector de la patria chilena; era así un símil a aquellos presidentes mexicanos posrevolucionarios que habían defendido el régimen popular revolucionario. Allende, de ese modo, fue considerado como un héroe a la par que los revolucionarios mexicanos. En esa misma línea, el pueblo chileno perseguido por la junta militar sería una representación del pueblo mexicano huyendo de la dictadura de Victoriano Huerta. La afinidad con el exilio chileno no es una muestra de contradicción ideológica, es más bien un reforzamiento de la idea de un gobierno heredero de los valores revolucionarios y defensor de las causas justas.

Reflexiones finales

El pasado de los años setenta es, como aseguró Melgar Bao (2006), una historia caliente (p. 26). La contradicción del gobierno de Echeverría entre la política interna de contrainsurgencia y la postura internacional (antiyanqui y solidaria con América Latina) es el centro de la discusión que presento en este artículo. Frente al golpe de Estado, considerado como una traición a la legalidad constitucional chilena, el pueblo mexicano debía —según Echeverría y el PRI— entrever una lección que le llevara a vivir bajo las normas de la Constitución vigente. En este sentido, como ya lo hemos anotado, al vincularse Echeverría con la causa de Allende y de los perseguidos chilenos, expresaba su rechazo total a la dictadura militar presidida por Pinochet y así, lograba construir un vínculo simbólico entre los golpistas chilenos y aquellos grupos mexicanos que buscaban romper con la legalidad emanada de la Revolución mexicana. Es obvio que la guerrilla mexicana nada tenía que ver con el levantamiento en contra del gobierno de la Unidad Popular; sin embargo, en el discurso antirrevolucionario ambos congeniaban en considerarlos como agentes del rompimiento del régimen. En ese sentido, tan contrarrevolucionaria resultaba la junta militar chilena como los grupos guerrilleros mexicanos.

El golpe de Estado en Chile fue leído como «una lección para México», pues «el drama de Chile nos obliga a vivir más de acuerdo con la Constitución»,²³ defendía Echeverría.²⁴ La apertura democrática del presidente mexicano se consolidó a partir de la construcción de una imagen política arraigada al legalismo, al constitucionalismo y al tercermundismo. De esta manera buscó escapar y ocultar su responsabilidad en la política de contrainsurgencia. La lección para México consistía en no salirse de los márgenes institucionales: la advertencia era clara. La prensa en México —sobre todo aquella vinculada oficialmente con el gobierno— ayudó a construir esta imagen a partir de tres narrativas: una mirada solidaria y bondadosa con el pueblo chileno que estaba siendo reprimido; con la denuncia de la fuerza militar por parte del ejército austral; y, por último, al no hacer público el sistema de represión mexicana en contra de los grupos guerrilleros.

Desde los estudios actuales es posible concluir que la violencia ejercida por el régimen autoritario en Chile y la represión en México se acercaron en métodos, objetivos y despliegue. Sin embargo, el gobierno mexicano rompió relaciones con la Junta militar, reiteró su apoyo al destruido régimen de la Unidad Popular, condenó la fuerza utilizada durante la toma de la Moneda y de las pesquisas posteriores, asiló a miles de chilenos exiliados y construyó la imagen de un Salvador Allende mártir. Así, la violencia estatal que se llevaba ejerciendo en México desde los años sesenta se enmascaró detrás de la legalidad que le dio la institucionalización de la revolución al partido oficial. El control del gobierno sobre los medios de comunicación apoyó a la creación de la narrativa de un país mexicano democrático y de izquierda no marxista; sin embargo, gracias a las investigaciones más recientes sobre la contrainsurgencia en México es posible no solo comprender el mecanismo de represión, sino también resignificar las relaciones de México con América Latina y leer desde otro lugar la postura del gobierno mexicano frente al golpe de Estado en Chile.

El vínculo con el gobierno de Allende fue parte de las estrategias del PRI para contener las movilizaciones críticas al gobierno. La apertura democrática y la retórica oficial tercermundista permitieron el desarrollo de espacios políticos y soporte institucional a ciertas iniciativas progresistas. La apertura de las fronteras mexicanas para el recibimiento de miles de exiliados chilenos, entre ellos la familia del difunto expresidente, son muestra de este compañerismo —y acaso— acercamiento político. De igual manera, la condena al régimen pinochetista y la interrupción de las relaciones diplomáticas entre ambos países son ejemplo de la postura que el gobierno mexicano tomó respecto a la dictadura, lugar que ocupó también frente a las similares experiencias argentina y uruguaya. El golpe de Estado en Chile es entonces leído como una forma de afianzar la postura del gobierno mexicano hacia afuera como líder del tercermundismo, la libertad y la solidaridad; e, internamente, como un gobierno que permitió expresiones dentro de la legalidad que este construyó, es decir, aquella afín a la postura hegemónica del PRI.

Referencias bibliográficas

- ALBURQUERQUE, G., (2015). Tercermundismo en el Cono Sur de América Latina: Ideología y sensibilidad. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 1956-1990. *Tempo e Argumento*, 6(13), 140-173. <https://doi.org/10.5965/2175180306132014140>
- ALLIER MONTAÑO, E. (2021). *68 el movimiento que triunfó en el futuro: Historias, memorias y presente. intelectuales y el Estado*. Bonilla Artigas Editores- | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

23 *El Día*, 13 de septiembre, 1973, p. 1

24 *Idem*.

- ARRIOLA, C., y GALINDO GONZÁLEZ, J. G. (1984). Los empresarios y el Estado en México, 1976-1982. *Foro Internacional*, 25(2), 118-137.
- BOOTH, W. A. (2021). Rethinking Latin America's Cold War. *The Historical Journal*, 64(4), 1128-1150. <https://doi.org/10.1017/S0018246X20000412>
- CALDERÓN, F., y CEDILLO, A. (Eds.). (2012). *Challenging authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the dirty war, 1964-1982*. Nueva York: Routledge/Taylor y Francis Group.
- CHAVARRÍA GALINDO, S. (2001). *Los cambios de la prensa escrita a raíz de la aplicación del modelo neoliberal: El Nacional, el Día, la Prensa y el Unomasuno* (Tesis para optar por el título de Licenciado de Licenciatura en Comunicación y Periodismo), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México.
- CONRAD, S. (2017). *Historia Global. Una nueva visión para el mundo actual*. Madrid: Crítica.
- DILLINGHAM, A. S. (2018). Mexico's Turn Toward the Third World: Rural Development Under President Luis Echeverría. En J. Pensado y E. Ochoa (Eds.), *Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, radicals, and repression during the Global Sixties and subversive seventies* (pp. 113-133). Tucson: The University of Arizona Press.
- DEVÉS VALDÉS, E. (2017). *Pensamiento Periférico*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- DEL PALACIO, C. (2015). *Pasado y presente. 220 años de prensa veracruzana (1975-2015)*. Ciudad de México: Editorial Veracruzana.
- GILLINGHAM, P., y SMITH, B. T. (2014). *Dictablanda: Politics, work, and culture in Mexico, 1938-1968*. Durham: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Duke University Press.
- HARMER, T. (2011). *Allende's Chile and the Inter-American Cold War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- HERRERA CALDERÓN, F., y CEDILLO, A. (Eds.). (2012). Challenging authoritarianism in Mexico: Revolutionary struggles and the dirty war, 1964-1982. Nueva York: Routledge/Taylor & Francis Group.
- LOAEZA, S. (2013, agosto). Dos hipótesis sobre el presidencialismo autoritario. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LVIII (218), 53-72. Recuperado de <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcyps/article/view/42660>
- MCCORMICK, G. (2018). Torture and the Making of a Subversive During Mexico's Dirty War. En J. Pensado y E. Ochoa (Eds.), *Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, radicals, and repression during the Global Sixties and subversive seventies* (pp. 254-272). Tucson: The University of Arizona Press.
- MEYER, L. (1995). *Liberalismo Autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*. Ciudad de México: Océano.
- OIKIÓN SOLANO, V., y GARCÍA UGARTE, M. E. (2006). *Movimientos armados en México, siglo XX*. Michoacán: El Colegio de Michoacán.
- PALIERAKI, E. (2023). The Origins of the 'Third World': Alfred Sauvy and the Birth of a Key Global Post-War Concept. *Global Intellectual History*, 1-30. <https://doi.org/10.1080/23801883.2023.2166558>
- PENSADO, J. M., y OCHOA, E. (Eds.). (2018). *Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, radicals, and repression during the Global Sixties and subversive seventies*. Tucson: The University of Arizona Press.
- POZAS HORCASITAS, R. (2014). *Los límites del presidencialismo en las sociedades complejas: México en los años sesenta*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.
- RANGEL LOZANO, C. E. G. (2015). *México en los sesenta. ¿Guerra sucia o terrorismo de Estado? Hacia una política de memoria*. Chilpancingo: Universidad Autónoma de Guerrero.
- RODRÍGUEZ EVERAERT, A. S. (2022, julio 12). Luis Echeverría Álvarez Was a Demagogue With Big Dreams. *Foreign Policy*. Recuperado de <https://foreignpolicy.com/2022/07/12/mexican-president-luis-echeverria-alvarez-dead-obituary/>
- SÁNCHEZ, S. A., y ANDERSON, P. (2018). La prensa mexicana en la justificación del anticomunismo, 1959-1970. *HistoReLoHistorelo. Revista de historia regional y local*, 10(20). Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/histo/v10n20/2145-132X-histo-10-20-00165.pdf>
- SIERRA, J. L. (2003). *El enemigo interno. Contrainsurgencia y Fuerzas Armadas en México*. México: Universidad Iberoamericana / -Plaza y Valdés.
- SORENSEN, D. (2007). *A Turbulent Decade Remembered. Scenes from the Latin American Sixties*. Stanford: Stanford University Press.
- THORNTON, C. (2020). A Mexican New International Economic Order? En T. Field, S. Krepp, y V. Pettinà (Eds.), *Latin America and the Global Cold War* (pp. 301-342). Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

- VICENTE OVALLE, C. (2019). *[Tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980*. Ciudad de México: Bonilla Artigas.
- WESTAD, O. A. (2017). *La Guerra Fría. Una historia mundial*. Barcelona: Galaxia Gutemberg.
- ZOLOV, E. (2014). Introduction: Latin America in the Global Sixties. *Cambridge University Press*, 70(3), 349-362.
- ZOLOV, E. (2018). Integrating Mexico into the Global Sixties. En J. Pensado y E. Ochoa (Eds.), *Mexico Beyond 1968. Revolutionaries, radicals, and repression during the Global Sixties and subversive seventies* (pp. 19-32). Chapel Hill: The University of Arizona Press.
- ZOLOV, E. (2020). *The Last Good Neighbor: Mexico in the Global Sixties*. Durham: Duke University Press.

La dictadura uruguaya ante los desafíos de la modernización de la Universidad de la República. El proyecto BID (1976-1984)

The Uruguayan dictatorship faced with the challenges of modernizing the University of the Republic. The IDB project (1976-1984)

María Eugenia Jung¹

Resumen

Este artículo analiza el proyecto de mejora de la Universidad de la República elaborado por un equipo de asesores extranjeros y nacionales en el marco de un convenio firmado en 1976 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno uruguayo en el contexto más general de las políticas que la dictadura uruguaya impulsó en relación con la única universidad con que contaba el país hasta ese momento. Pone el énfasis en la pretensión modernizadora del régimen al reponer ideas, iniciativas y proyectos dirigidos a modificar las orientaciones generales, estructuras académicas y el perfil de los egresados al tiempo que analiza sus vínculos con las demandas las derechas locales en relación con la Universidad en las décadas previas al golpe de Estado. Para ello, se repasan, en primer lugar, las tímidas modificaciones académicas y curriculares que se implementaron entre 1973-1976. Mientras se desarrollaban variadas acciones para cancelar la disidencia y asegurar el control de la vida universitaria, las

autoridades interventoras pusieron en marcha nuevos planes de estudios en casi todos los servicios universitarios, ponderando el perfil técnico y aplicado de la enseñanza universitaria. En segundo lugar, se detiene en el análisis del convenio con el BID, el proceso de elaboración y aprobación así como los frenos para su implementación.

Palabras clave: Universidades, Derechas, Dictaduras, Intervención, Uruguay

Abstract

This article analyses the project to improve the Universidad de la República, drawn up by a team of foreign and national advisors in the framework of an agreement signed in 1976 between the Inter-American Development Bank (IDB) and the Uruguayan state, within the more general framework of the policies that the Uruguayan dictatorship promoted in relation to the only university in the country at that time. It emphasises the regime's modernising

¹ Archivo General de la Universidad, Universidad de la República

pretensions by reintroducing ideas, initiatives and projects aimed at modifying general orientations, academic structures and the profile of graduates, while analysing its links with the demands of the local right wing in relation to the university in the decades prior to the coup d'état. In order to do so, it first reviews the timid academic and curricular modifications that were implemented between 1973-1976. While various actions were carried out to cancel dissidence and ensure control of

university life, the authorities implemented new curricula in almost all university services, emphasising the technical and applied profile of university teaching. Secondly, it analyses the agreement with the IDB, the process of drafting and approval, as well as the obstacles to its implementation.

Keywords: Universities, Rights, Dictatorship, Intervention, Uruguay

Introducción

En 1976 el Estado uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica de Recuperación para la elaboración de un Plan de mejoramiento y expansión de la Universidad de la República. Así, entre 1977 y 1978 se movilizaron importantes recursos humanos —consultores extranjeros y nacionales, autoridades, docentes y funcionarios de la Universidad— con el propósito de recopilar información y elaborar una serie de diagnósticos y recomendaciones sobre un amplio espectro de asuntos: equipamiento y planificación física, carreras tecnológicas cortas, investigación científica y tecnológica, formación y perfeccionamiento del personal docente, organización y administración, entre otros. Como resultado emanaron orientaciones y propuestas de acción futura, imbuidas del espíritu planificador de la época, de perfil modernizador y tecnocrático. La experiencia constituyó, sin dudas, una oportunidad para implementar una reestructura académica de la Universidad de la República, que, sin embargo, terminó fracasando.

Este artículo analiza los contenidos del proyecto en cuestión, el proceso de elaboración y aprobación así como los frenos para su implementación en el marco más general de las políticas que la dictadura uruguaya impulsó en relación con la única universidad con que contaba el país hasta ese momento. Pone el énfasis en la pretensión modernizadora del régimen al reponer ideas, iniciativas y proyectos dirigidos a modificar las orientaciones generales, estructuras académicas y el perfil de los egresados al tiempo que analiza sus vínculos con las demandas de las derechas locales en relación con la Universidad en las décadas previas al golpe de Estado. Se inscribe, por tanto, en un campo de estudios en expansión, con signos evidentes de renovación en sus enfoques y temáticas, tanto en la región como en el ámbito local. Esta producción historiográfica ha desplazado su foco de interés desde las consecuencias de la represión y los procesos políticos en sentido estricto, temas que habían dominado las investigaciones sobre el pasado reciente, hacia el examen de los mecanismos de legitimación social, buscando, a su vez, abordar otras facetas menos conocidas de los procesos autoritarios (Marchesi y Markarian, 2012; Cosse y Markarian, 1996; Marchesi, 2001; Marchesi, 2009; Correa Morales, 2018; Correa Morales y Marchesi, 2022). Aquellas perspectivas también impactaron en las narrativas sobre los avatares de la Universidad de la República asociados a las prácticas represivas y las devastadoras consecuencias académicas, sin abundar en las concepciones, proyectos y realizaciones del gobierno dictatorial. En contraste, en aras de la renovación del campo y la recuperación de nuevos acervos documentales, investigaciones más recientes han restituido sus intenciones refundadoras en relación con el espacio educativo así como las transformaciones que se concretaron, con efectos perdurables en democracia, complejizando la mirada sobre el período (Markarian, 2015; Islas, 1995; Duffau, 2007; Wschebor, 2014; Bucheli, 2022).

Asimismo, reconoce antecedentes en un significativo corpus bibliográfico sobre los procesos de modernización conservadora de las universidades y los sistemas científicos que llevaron adelante las dictaduras del Cono Sur (Patto Sá Motta, 2014; Rodríguez y Soprano, 2009; Bekerman, 2010). En particular, el libro de Rodrigo Patto Sá Motta, *As universidades e o regime militar*, presenta una interpretación sólida sobre la exitosa modernización del sistema universitario durante la última dictadura cívico-militar que gobernó Brasil, a la vez que introduce nuevas claves explicativas globales sobre el proceso dictatorial. Patto abunda en las complejidades de las políticas universitarias que combinaron el empuje modernizador con las prácticas represivas en un doble movimiento: destructivo y constructivo, represivo y modernizador. Va más lejos aún al demostrar que ese impulso de signo conservador se reapropió del legado de la tradición anterior, en particular de los proyectos de reforma en danza en los sesenta y, especialmente, de la experiencia de la Universidad de Brasilia liderada por el antropólogo e intelectual de izquierda Darcy Ribeiro. Resulta persuasiva, además, la utilización de la categoría

«modernización conservadora», acuñada por el sociólogo Barrington Moore en los años sesenta para explicar los procesos de desarrollo económico y su relación con los regímenes totalitarios, poniendo en tela de juicio la relación virtuosa entre modernización y democracia postulada por las ciencias sociales. Su aplicación al estudio de las políticas universitarias de la dictadura brasileña es de gran rendimiento analítico porque permite plantear dos cuestiones relacionadas: la existencia de una derecha modernizante que buscó cambios estructurales en la educación superior, en sintonía con el proyecto de modernización que sustentó (no sin fricciones internas) el régimen, y la permanente tensión entre los aspectos reactivos y los proyectuales o propositivos de esa derecha que se nos presenta como un actor más complejo de lo que suele considerarse.

También en Uruguay, en los largos sesenta, de manera convergente con la radicalización política, variadas expresiones de derecha buscaron articular un programa modernizante que osciló entre la depuración ideológica y la transformación de las estructuras académicas (que contempló la creación de otras universidades públicas o privadas). Recordemos que, desde mediados de la década del cincuenta del siglo XX, en el marco del auge de los desarrollismos y las teorías de la modernización, actores de diversas procedencias y signos ideológicos venían discutiendo sobre la necesidad de transformaciones en las universidades en sintonía con debates más generales sobre el papel social de las instituciones de producción de conocimiento y los modelos universitarios. Mientras los reformistas y sus críticos, pertenecientes a una amplia gama de izquierdas, apuntaron a superar el perfil profesionalista, la escasa inserción en la sociedad y el insuficiente desarrollo de la investigación científica, otros grupos, frecuentemente alineados con las derechas políticas y sociales, también reclamaron cambios que permitieran superar las tendencias academicistas y doctorales, dieran respuesta a la masificación y terminaran con un ambiente de excesiva politización. En sintonía con estos procesos, la «generación reformista» uruguaya —así llamada por sus frecuentes apelaciones al legado de la Reforma Universitaria de Córdoba e integrada por un conjunto heterogéneo de docentes e investigadores de diversas procedencias disciplinarias y tradiciones político-ideológicas— bregó incansablemente por una transformación académica que fortaleciera la investigación científica al tiempo que iba afianzando su influencia en la Universidad a partir de una tensionada alianza con una generación estudiantil más combativa que sus predecesoras. Acaso el punto más alto de estos impulsos renovadores fue la presentación en 1967 de un ambicioso plan de reconversión integral elaborado por el entonces rector Óscar J. Maggiolo (Markarian, 2020).

En la orilla de enfrente, buena parte de las derechas vernáculas preocupadas por las orientaciones generales que iba tomando la dirigencia universitaria y el incremento del activismo estudiantil y su injerencia en los órganos de cogobierno, tentaron propuestas para implementar modificaciones académicas. Este movimiento modernizante cristalizó a fines de 1968, con la formación del Movimiento pro Universidad del Norte, en Salto. De raigambre anticomunista, esta organización recogió para sí una vieja aspiración localista y logró aglutinar a un conjunto de actores locales, sociales y políticos vinculados a las derechas de la época, así como a buena parte del elenco gubernamental. El ministro de Cultura, Federico García Capurro, médico y representante del coloradismo antibatllista y católico, fue una figura clave en la articulación de los variados intereses en juego en un programa de modernización conservadora de la educación superior. Impulsó para eso la reestructura de todo el sistema educativo mediante dos proyectos: la instalación de un Consejo Superior de Enseñanza (Cosupen), que buscaba la coordinación de la enseñanza, pero recortando las autonomías de cada rama de la educación pública (primaria, secundaria y educación técnica) y dando mayor injerencia al Poder Ejecutivo, y la fundación de lo que llamó la «Universidad para el desarrollo», cuyo germen sería la Universidad del Norte (Jung, 2018). Sus opiniones, frecuentemente replicadas por la prensa

conservadora, alimentaron los debates en torno al futuro de educación superior, fecundos durante el período en que permaneció en su cargo. En su visión las características, organización y fines de la proclamada Universidad del Norte o, en su propia formulación «Universidad para el Desarrollo», estarían dirigidos a un perfil de profesionales orientado a cubrir las «necesidades del ambiente». En línea con una serie de ideas, propuestas y experiencias de circulación regional y global, y a contrapelo del mencionado reformismo, García Capurro enfatizó la necesidad de instaurar carreras cortas de carácter técnico y aplicado, organizadas con criterios de eficiencia y volcadas al mercado.²

La dictadura instalada en 1973 canceló buena parte de estas discusiones previas sobre el futuro de la universidad uruguaya. No obstante, son evidentes las líneas de continuidad entre las políticas implementadas en este período con las ideas y propuestas de las derechas en el período precedente, aun cuando sus aspiraciones fueron apenas parcialmente satisfechas. Esta constatación nos lleva, una vez más, a la pregunta sobre la existencia o no de un proyecto de modernización conservadora de la universidad uruguaya por parte del régimen cívico militar (Markarian, 2015). El artículo postula que, pese a las pretensiones modernizantes declaradas en todos los documentos, las autoridades dictatoriales, nacionales y universitarias, no lograron formular una propuesta de reestructuración global del sistema universitario. Las dificultades —y finalmente el fracaso— para implementar el Plan de mejoramiento y expansión de la Universidad de la República, elaborado en el marco del convenio de cooperación con el BID, que puso a disposición financiamiento y asesoramiento, son más que elocuentes al respecto. Esta afirmación no supone convalidar una interpretación según la cual la dictadura en la Universidad fue solamente represión y destrucción de las estructuras académicas del período anterior; hubo en estos años transformaciones con efectos duraderos en el período posterior.

Con base en el análisis de fuentes documentales de diversa procedencia —documentación institucional como los informes de los consultores del BID y los expedientes de secretaría de la Udelar y proveniente de archivos privados disponibles en el Archivo General de la Universidad (AGU) así como la prensa periódica³—, las páginas que siguen repasan, en primer lugar, las tímidas modificaciones académicas y curriculares implementadas entre 1973-1976, momento «comisarial» del régimen según la periodización del politólogo Luis Eduardo González. Mientras se desarrollaban variadas acciones para cancelar la disidencia y asegurar el control de la vida universitaria, las autoridades interventoras pusieron en marcha nuevos planes de estudios en casi todos los servicios universitarios que privilegiaron una orientación técnica y práctica de la formación superior, en sintonía con algunas de las demandas de las derechas. En segundo lugar, se detiene en los avatares del proyecto de mejora de la Universidad de la República elaborado por el equipo de asesores extranjeros y nacionales en el marco del convenio firmado en 1976.

Entre la «normalización» y la reorientación académica, 1973-1976

El 27 de octubre de 1973, a cuatro meses del golpe de estado cívico militar explotó una bomba en la Facultad de Ingeniería en un confuso episodio en el que murió el militante estudiantil Marcos Caridad Jordan. Al día siguiente el Poder Ejecutivo, mediante el decreto n.º 921/973, dispuso la intervención de la Universidad, que quedó bajo control directo del Ministerio de Educación y Cultura, suspendió toda la actividad académica y ordenó el arresto de todos los miembros del Consejo Directivo Central. El ministro de Educación y Cultura, el profesor de historia Edmundo Narancio,

2 *BP Color*, edición extraordinaria del 90.º aniversario de *El Bien Público*, 27 de noviembre de 1968.

3 Agradezco a Matías Rodríguez Metral por haber puesto a mi disposición valioso material procedente de la prensa periódica del período.

fue designado como rector interventor interino.⁴ La decisión fue recibida con júbilo por distintas vertientes de las derechas, que venían desde tiempo atrás reclamando medidas enérgicas por parte de las autoridades nacionales respecto a la principal casa de estudios, considerada un centro de subversión izquierdista (Markarian, 2015; Jung, 2022).

Como ocurrió en otros ámbitos de la administración pública, la dirección de los asuntos universitarios quedó en manos de civiles con trayectoria en la institución. Los decanos y rectores designados eran —o habían sido— docentes universitarios y, en su mayoría, habían ocupado posiciones directivas durante las décadas anteriores. A partir de la aprobación de la ley orgánica de 1958 manifestaron discrepancias con las orientaciones generales y la actitud opositora al creciente autoritarismo gubernamental que fue asumiendo la conducción universitaria a la vez que iban perdiendo incidencia a medida que una generación de jóvenes de izquierda y más combativos se integraban a ella. Algunos se erigieron como declarados enemigos de la representación estudiantil, plegándose a las agrupaciones autodenominadas «demócratas», que oscilaron entre los reclamos de intervención y la creación de otras universidades en el país. El régimen dictatorial les brindó la oportunidad de recuperar sus posiciones y poner en práctica algunas de sus ideas (Markarian, 2015; Jung, 2022). Este fue el caso del ministro de Educación y Cultura y primer rector interventor, Narancio, quien había sido apartado de la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias a comienzos de los años sesenta por diferencias con los estudiantes y parte del cuerpo docente.⁵ Ante esta «usurpación», Narancio desplegó a través del diario *El País* una constante prédica contra la institución, acusándola de ser una usina de la ideología comunista. En 1969 fue propuesto para ocupar el cargo de rector de la mencionada Universidad del Norte que impulsó parte de las derechas de la época (Jung, 2018).

Con estos apoyos las autoridades interventoras iniciaron un proceso de «normalización» que supuso el cercenamiento de la autonomía, el desmantelamiento de los organismos de cogobierno y el despliegue de un conjunto de prácticas represivas para la depuración del plantel docente y administrativo y de disposiciones de control ideológico de funcionarios y estudiantes. La ola de sumarios y destituciones junto a la renuncia de buena parte del cuerpo de profesores e investigadores tuvo como consecuencia el alejamiento de académicos de destacada trayectoria, determinando que algunos servicios universitarios, que habían contribuido al desarrollo de la investigación científica, fueran diezmados y terminaran circunscribiendo sus actividades a la enseñanza (Rico, 2003; Duffau, 2007; Islas, 1995; Markarian, 2015).⁶

Aun así, desde el comienzo, el régimen expresó su voluntad de transformar la Universidad. En los cónclaves (reuniones periódicas entre autoridades civiles y mandos militares realizados en distintas ciudades del interior) estuvo planteada la necesidad de una reestructuración del sistema educativo con el fin de «adecuarlo a las exigencias del momento histórico dentro del tradicional estilo de vida oriental» (Universidad de la República, 1978). Los documentos oficiales muestran la coexistencia de la jerga desarrollista y de la planificación con la retórica nacionalista que exaltaba los valores patrióticos, el estilo de vida nacional o la importancia de la familia en la formación de los educandos. Bajo la influencia del pensamiento desarrollista de las décadas anteriores, se apelaba a la asociación entre educación y desarrollo; que en la visión de las autoridades dictatoriales suponía el ajuste de aquella a

4 Registro Nacional de Leyes y Decretos, Decreto 921/973, 28 de octubre de 1973.

5 Legajo de Edmundo Narancio, Archivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.

6 Véase circular 50/76, «Reglamento de Estudios y declaración jurada de comportamiento estudiantil», 16 de marzo de 1976, en AGU.

los planes del Gobierno y las demandas del sector productivo. Es posible observar que a lo largo de todo el período el régimen se mantuvo entre la reacción a la situación universitaria previa al golpe y los intentos de reformulación académica. Sin embargo, esta intención modernizante no se plasmó en un plan o una política previamente establecida y chocó con las directrices de ajuste económico del equipo económico comprometiendo las posibilidades de implementar cambios de fondo.

Aun así las autoridades dictatoriales declararon reiteradamente que urgía avanzar en una reforma académica así como en la modificación de los marcos legales de la Universidad, definiendo un estatuto orgánico que sustituyera al de 1958, causante, para una variedad de actores sociales, políticos y universitarios, de la politización de los centros de estudio. Sin embargo, a pesar de los reiterados anuncios gubernamentales y de la presión de varios sectores políticos que habían apoyado el golpe de Estado, la ley orgánica no fue derogada. Más aún, en no pocas ocasiones las autoridades universitarias se apoyaron en el marco legal anterior para justificar decisiones institucionales o académicas.⁷

Si bien entre 1974-1976 no hubo transformaciones académicas de carácter general, sí se llevó a cabo una renovación de planes de estudio que introdujo cambios en los perfiles de la formación universitaria en la mayoría de los servicios que componían la Universidad. Estos compartían una concepción que contrastaba radicalmente con los intentos reformistas del período previo a la intervención, al enfatizar los contenidos aplicados o prácticos de las asignaturas, el fomento a los títulos intermedios garantizando una salida laboral temprana y la eliminación de materias que se consideraban «peligrosas», anticipando algunas de las propuestas que más tarde incluiría el proyecto de mejoramiento del BID.⁸ Estas ideas reconocen antecedentes en la prédica de actores políticos y sociales de derecha en los años anteriores al golpe. Como fue mencionado, con un discurso que priorizó el criterio de eficiencia y la adecuación al mercado para alcanzar el «desarrollo» del país y superar la situación de estancamiento, estas fuerzas abogaron por una reorientación de la enseñanza universitaria que formara técnicos para el mercado. En 1968, por ejemplo, el Ministro de Cultura del presidente Jorge Pacheco Areco, Federico García Capurro, llamaba a implementar carreras intermedias y de especializaciones en áreas como ingeniería, química, agronomía y medicina para satisfacer las necesidades productivas y del sector privado a la vez que dio gran impulso a la iniciativa de crear otra universidad en el norte uruguayo que contrabalancara la influencia de la Universidad de la República.⁹ A más de un lustro de la intervención a la Universidad, García Capurro, ahora miembro del Consejo de Estado, reafirmaba estos conceptos al afirmar que

7 Véase *El País*, 10 de marzo de 1981, p. 7, «Comunicado de la Universidad de la República a través de la DINARP»: «En el transcurso del año 1979, en cumplimiento de objetivos precisos establecidos en el IV Cónclave de Gobierno celebrado en Solís en diciembre de 1977 que expresaron que se debían “mejorar los rendimientos de escolaridad de todos los niveles” y “propiciar el ingreso selectivo a las Facultades, acorde con las necesidades de desarrollo del país, de modo que accedan a ellas los más aptos, sin otra distinción que la que emane de sus talentos y virtudes”: luego de consultarse a las cátedras respectivas y de tener la anuencia de las más altas autoridades gubernamentales, se dictó una resolución con fecha 26 de octubre, por la cual el Ministerio de Educación y cultura, en su carácter de Interventor de la Universidad de la República (Decreto 921/73 de 28 de octubre de 1973) y de acuerdo con las atribuciones que la Ley establece en su artículo referente al Consejo Directivo Central (Art. 21.º de la ley 12.549 de 29 de octubre de 1958), implantó una prueba de admisión a la Universidad de la República, con la doble característica de prueba de aptitud académica y de conocimientos específicos relacionados con la carrera que se pretende cursar. [...] A este respecto debe concluirse en que el establecimiento de condiciones de admisibilidad de estudiantes a las dependencias universitarias, es privativa de la Universidad; potestad y competencia que nacen de la Constitución y de las disposiciones de la Ley orgánica de la Universidad de 29 de octubre de 1958, que dispuso que se desarrollara —en todos los aspectos de su actividad— con la amplia autonomía».

8 La Universidad al momento de la intervención estaba compuesta por diez facultades y 11 escuelas.

9 *Tribuna Salteña*, 18 de junio de 1969 y *BP Color* edición extraordinaria del 90.º aniversario de *El Bien Público*, 27 de noviembre de 1968. Véase Jung (2018).

cuando yo instituí en el papel la Universidad del Norte, siendo Ministro de Educación, tenía en mente la proliferación de centros docentes en los que se impartirían carreras intermedias, de interés para el medio socio-económico de cada zona del país.¹⁰

Con matices y variaciones esta fue la tendencia que siguieron las autoridades universitarias durante la intervención a la Universidad.

En esa línea, por ejemplo, el decano de la Facultad de Ingeniería Alfredo De Santiago (1974-1977) al pasar raya al primer año de intervención, celebraba el logro de la ansiada «despolitización» para la «verdadera nacionalización de la Universidad», despejando el camino hacia la modernización de la enseñanza de la ingeniería, cuya finalidad principal, decía, era capacitar «ingenieros modernos». Con ese espíritu, los institutos de investigación, que habían tenido fecunda actividad académica antes de la intervención, fueron reorientados en sus funciones para volcarse a las tareas de asesoramiento al Estado y al sector privado. En paralelo, el nuevo plan de estudios ideado por De Santiago fortaleció el profesionalismo a la vez que instauró carreras cortas, estudios graduales y titulaciones intermedias que posibilitaran «poner en circulación, rápidamente, [en forma] escalonada, a esos jóvenes con superior preparación y disciplinas, antes de culminar la meta actual de la profesión de ingeniero». La división en etapas de la trayectoria académica creaba un mercado a la vez que regularizaba situaciones curriculares existentes. Un par de años más tarde los informes producidos en el marco del convenio entre el BID y la Universidad destacarían la experiencia de esta Facultad en relación con las carreras breves y titulaciones intermedias, que sería tomada como modelo a replicar en el resto de los servicios universitarios (BID, 1978). Vale decir, que las modificaciones introducidas contradecían punto por punto las aspiraciones y logros, por otra parte objeto de enconadas disputas, que los ingenieros reformistas trabajosamente habían llevado a cabo en las décadas anteriores para revertir el modelo profesionalista que había predominado en la Universidad. En buena medida, gracias a estos esfuerzos esta facultad había sido pionera en el desarrollo de las ciencias básicas y de la investigación académica (Markarian, 2020).

Asimismo, según De Santiago, estos cambios permitirían resolver la indefinida prolongación de las carreras, que obedecía a la «irracionalidad de sus planes y programas», y la deserción estudiantil que había alcanzado el 83 % de los ingresos, según datos que presentaba. El temprano abandono de los estudios había acentuado el déficit de ingenieros a la vez que había elevado el costo por egresado, un indicador que en el año y medio de intervención había descendido a un 32 %, destacaba. La reducción y la mejora de la eficiencia del gasto universitario, de acuerdo con las directivas del equipo económico, fue un tópico constante en los documentos universitarios y de las autoridades nacionales (De Santiago, 1975).¹¹ Lo cierto, es que la orientación hacia la formación práctica y la implementación de ciclos técnicos caracterizaron en mayor o menor medida la mayoría de los cambios curriculares aprobados en estos años.¹²

Mientras se ponían en marcha estos cambios, las autoridades debieron enfrentar algunos de los problemas que arrastraba la enseñanza universitaria desde hacía varias décadas: la masificación del

10 *El País*, 5 de agosto de 1979, p. 8., «Entrevista a Federico García Capurro».

11 Los títulos intermedios que se concedían: Bachiller en Ingeniería civil, Bachiller en Ingeniería industrial Mecánica y Bachiller en Ingeniería Industrial eléctrica-Electrónica.

12 En la Facultad de Química, por ej., una vez aprobados los tres años del ciclo básico, el estudiante obtenía el diploma de Bachiller en Química. En la Facultad de Arquitectura el nuevo plan dio prioridad al perfil técnico del egresado, contemplando a su vez la creación de una carrera intermedia de «Empresario», con duración de 3 años, que comenzaría en 1977 (véase Universidad de la República, 1976, p. 52 y 75). En la Facultad de Ciencias Económicas la innovación más significativa promovida por el decano interventor Cr. Nilo Berchesi fue la expedición del título de Perito en Economía y Administración a los tres años de la carrera (véase Bucheli, 2022, p.118

estudiantado, la concentración de la matrícula en Derecho y Medicina, las altas tasas de deserción y la duración de las carreras por encima del tiempo estipulado en los planes de estudios, asuntos que habían sido detectados, y sobre los que existía una vasta reflexión acumulada en ámbitos académicos, por universitarios vinculados al reformismo y la Comisión de Inversiones y Desarrollo (CIDE), organismo técnico de planificación creado en 1960 durante el primer gobierno del Partido Nacional, en el marco de los lineamientos de la Alianza para el Progreso en América Latina.

Es claro también que la drástica disminución de la plantilla docente causada por las masivas destituciones y renuncias había agudizado estos problemas. Datos oficiales indican que entre 1976 y 1977 ingresaron 793 docentes para cubrir las vacantes. Los nuevos ingresos, sin embargo, no eran suficientes frente a una matrícula estudiantil que no paraba de crecer. El número de estudiantes universitarios (entre facultades y escuelas) había escalado de 18.650 en 1968 a 26.280 en 1974, dos años más tarde esa cifra era de 32.000 (BID, 1978).¹³ Por otra parte, las políticas económicas de contención del gasto público tuvieron impacto directo en el presupuesto universitario, que experimentó una baja del 25 y 26 % (1967-1970) al 16 y 17 % (1973-1975) (Markarian, 2015)¹⁴

Pese a que algunos actores sociales y políticos valoraron positivamente el crecimiento estudiantil como expresión del «resurgimiento espiritual» y la «auténtica nacionalización y democratización de la enseñanza», tanto el Poder Ejecutivo como las autoridades universitarias debieron idear mecanismos para responder a la demanda en ascenso. A partir de 1976 se anunció la posibilidad de limitar el ingreso a la Universidad mediante pruebas de admisión, una modalidad que había sido puesta en práctica con éxito en la Facultad de Medicina un año antes.¹⁵ De acuerdo con los anuncios, se planeaba generalizar la medida al resto de las facultades, lo cual se concretó en 1981, cinco años más tarde. En las vacilaciones para su implementación seguramente influyó la resistencia de algunos sectores políticos que polemizaron sobre el asunto en la restringida «esfera pública» de esos años (Marchesi, 2009, pp. 344-356 y 379-384).

La revista *Búsqueda*, acorde a sus convicciones liberales, se expresó contraria al cercenamiento de la libertad de los jóvenes de elegir libremente la profesión. Subrayaba que el verdadero problema que enfrentaba la educación superior en Uruguay era «el monopolio que ejerce la universidad estatal».¹⁶ Se declaraban «partidarios de la competencia en todos los terrenos. Amamos el mercado libre, y para las ideas no menos que para los bienes materiales», afirmaban. *Búsqueda* reinstalaba de esta forma el debate sobre el monopolio de la educación superior por parte del Estado y la Universidad de la República, un debate que había alcanzado relativa centralidad a comienzos de los años sesenta cuando parte del catolicismo vernáculo junto con sectores conservadores del Partido Nacional elevaron un proyecto de ley para establecer una Universidad privada y católica en Uruguay. Entre 1976 y 1983 este medio de prensa inició una campaña a favor a la que más tarde se fueron sumando otras voces, como algunos representantes de la Iglesia Católica y medios de prensa vinculados al Partido Nacional, entre ellos el ahora oficialista *El País*. Recién en los estertores del régimen, a fines de 1984, se satisfizo la demanda de las derechas liberales, en ese entonces representadas por el Semanario *Búsqueda*, también de los liberales conservadores del Partido Nacional y de sectores del catolicismo, al decretar la habilitación de universidades privadas, dando paso a la creación de la Universidad Católica del

13 En 1968 el gasto por alumno era de 927, 1183 en 1969, 1042, en 1970. A partir de 1973 el gasto por alumno descendió: 600 en 1973, 651 en 1974, 560 en 1975 y 607 en 1976 (BID, 1978, p. 51).

14 Véase BID (1978, p. 48). Acerca de los cálculos de evolución del presupuesto universitario véase Markarian (2020).

15 *El País*, 12 de diciembre de 1976.

16 *Búsqueda*, julio de 1976.

Uruguay. Sin embargo, hasta ese momento el régimen dictatorial no fue favorable a la eliminación del monopolio estatal sobre la educación superior.¹⁷

Tampoco fue contemplada la concreción del proyecto de crear otra universidad en el interior, un reclamo que cómo se vio habían impulsado sectores de las derechas en alianza con diversos actores sociales y políticos en los sesenta. En cambio, tras las gestiones del Movimiento pro Universidad del Norte, de profusa actividad desde 1968, en 1975 se instalaron en Salto cursos universitarios de las facultades de Agronomía, Veterinaria, Ingeniería y Arquitectura. La concesión parcial a las demandas de este movimiento parecía más dirigida a contemplar una serie de iniciativas y obras de «notable jerarquía» en el departamento (y del país) como la construcción de la represa de Salto Grande, proyecto de carácter binacional con Argentina, «la interconexión carretera y ferrocarrilera por sobre la Represa» y el desarrollo de la actividad turística.¹⁸ En esta oportunidad también el énfasis estuvo en la formación universitaria fundamentalmente técnica para el mercado, lo que originó disconformidad entre aquellos sectores que desde los espacios locales continuaron reclamando la descentralización universitaria.¹⁹

En medio de este panorama, en 1976 la gran reforma educativa para la transformación del «nuevo Uruguay» continuaba pendiente:²⁰ Un año después el Cónclave realizado en el balneario Solís definió pautas más concretas para la Universidad de la República que apuntaban al establecimiento de nuevas carreras y de títulos intermedios, «en el entendido de que con ellos aumentará el número de opciones a los estudiantes y facilitará así su introducción en el mercado de trabajo», profundizando las acciones que venían implementándose. También se afirmó la voluntad de intensificar el desarrollo en ciencia, tecnología e investigación, en la formación de docentes y en el perfeccionamiento de la metodología de la enseñanza y de la organización administrativa (Universidad de la República, 1978; D'Avenia, 2015). Se aludía así al convenio de cooperación técnica con el BID firmado en diciembre de 1976. Recordemos que la dictadura uruguaya se acopló a la idea de la planificación y confió en el conocimiento especializado y en los técnicos civiles a quienes, por ejemplo, había delegado la conducción de algunas áreas específicas como la política económica (Presidencia de la República, OPP, 1972; Yaffé, 2009). Por lo tanto, no es de extrañar que recurriese a un organismo internacional y a los expertos para llevar adelante la expansión de la educación superior.

Proyecto BID-Universidad: un plan de reconversión integral, 1976-1985

El Convenio de Cooperación Técnica de Recuperación Contingente (ATC-TF [SP] 1513-UR) firmado en 1976 adjudicó al gobierno uruguayo 100.000 dólares, a los que se sumaban 25.000 dólares de la contraparte local, para la elaboración de un Plan de mejoramiento y expansión de la Universidad de la República (BID, 1977). Recordemos que el BID, también conocido como el «banco universitario», por sus líneas de crédito y asistencia a instituciones de educación superior, manifestó tempranamente su interés en apoyar a la universidad uruguaya.²¹ A mediados de los años sesenta autoridades universi-

17 *Búsqueda*, julio de 1976, enero 1977, febrero de 1977 y mayo 1978. Véase *El País*, 5 de agosto 1979, p. 8, «[Federico] García Capurro: la Universidad privada es una idea saludable». Véase Jung (2021).

18 *Tribuna Salteña*, 22 de abril de 1975, p. 3.

19 *El País*, 11 de abril de 1977, p. 7, «La Universidad del Norte es viable, Juan Silva Vila».

20 *El País*, 8 de diciembre 1976, p. 1, «Universidad impulsan una reforma educativa» y *Diario de Sesiones del Consejo de Estado*, 6 de abril 1976.

21 Sobre el BID véase Tussie (1997).

tarias y representantes de ese organismo internacional conversaron con el propósito de coordinar una eventual ayuda técnica y financiera. En ese momento la agenda incluyó varias de las propuestas que luego se incorporarían al más ambicioso programa de reestructuración integral de la institución hasta entonces, presentado en julio de 1967 al Consejo Directivo Central por el rector Oscar J. Maggiolo.²² Sin embargo, el incremento de las polémicas por la recepción de fondos extranjeros que se produjo a partir de esos años canceló las posibilidades de un acuerdo.²³ Mejor suerte tuvieron las negociaciones con las autoridades de la Universidad del Trabajo del Uruguay, institución de enseñanza media orientada a la formación técnica. En 1970, el BID aprobó un préstamo para impulsar un programa de expansión de la matrícula estudiantil en esa área con el objetivo de cubrir la demanda nacional «técnicos y operarios industriales de nivel intermedio, y de obreros calificados para los sectores básicos de la industria del país» (BID, 1971).

Ese interés finalmente se concretó una década más tarde con el convenio mencionado. El préstamo permitió movilizar entre 1977 y 1978 a técnicos extranjeros y nacionales, autoridades, docentes y funcionarios de la Universidad con el propósito de recopilar y sistematizar información, elaborar diagnósticos y proponer recomendaciones sobre un amplio espectro de asuntos. El resultado fue un documento de casi mil páginas preparado por un equipo de asesores extranjeros y nacionales a cargo del especialista en Planeamiento de la Educación Superior, el argentino José Alberto Landi, que incluía un análisis del estado general de la enseñanza universitaria y un programa de reforma global de la institución. El informe fue acompañado de un conjunto de estudios específicos por sector.

El informe técnico general refería de modo tangencial a la retórica nacionalista propia del régimen, cuyo marco de referencia eran las resoluciones del gobierno, y, en cambio, se dedicaba a exponer en un lenguaje técnico, pretendidamente neutral y apolítico, habitual en documentos de la época, información sistematizada, ilustrada con cuadros y estadísticas, sobre la que se asentaban los diagnósticos, y lineamientos futuros. Contenía además estudios de demanda de servicios educativos y un cálculo de costos y de financiamiento, de acuerdo a pautas de eficiencia. El proyecto abrazaba una concepción que ponía en el centro el conocimiento aplicado y tecnológico y un perfil de profesional universitario orientado a la satisfacción de las demandas del mercado. Aunque recogía en buena medida la filosofía del régimen en relación con la educación superior, era más ambicioso y amplio en sus alcances y propósitos.

En concreto, proponía robustecer la Universidad en áreas de interés principal por su vínculo con el sector productivo, la infraestructura y la investigación científica y tecnológica: ciencias básicas, «raíz de todo avance tecnológico»; ciencias agropecuarias, base de la economía del país y ciencias tecnológicas para el desarrollo de la industria. Con esa finalidad definía un vasto programa de fortalecimiento del cuerpo de docentes e investigadores de la institución, creación de carreras acordes con las necesidades del desarrollo del país y con perspectivas ocupacionales, planificación curricular, racionalización de las estructuras académicas y administrativas, fomento a las tecnologías de alimentos, expansión de áreas de ingeniería y enfermería, mayor desarrollo a las carreras tecnológicas cortas y ampliación de la cobertura universitaria más allá de la zona metropolitana (BID, 1978).

22 Memorando para rector interino sobre entrevista con representante del BID, Distribuido no.0104/66, 10 marzo 1966, Archivo Roberto Markarian, caja 5, AGU.

23 «Informe FEUU sobre contrato del BID. Análisis de contrato con Universidad de San Marcos», documento firmado por Rafael A. Guarga, delegado estudiantil a la comisión de estudio de política universitaria en relación con la ayuda extranjera y «Seminario de integración económica y social de América Latina. Montevideo, nov. 65. FEUU-UIE Trabajo informativo presentado por FUA (Argentina). El BID y la Universidad Argentina», Archivo Roberto Markarian, caja 5, AGU.

Los recursos previstos buscaban superar las graves carencias detectadas, principalmente, la escasez de investigadores y profesores y la baja calidad del cuerpo docente en funciones. Buena parte de las carencias señaladas eran de larga data; se agravaron en las nuevas circunstancias signadas por el desmantelamiento de estructuras académicas y la emigración o alejamiento de investigadores de destacada trayectoria. De acuerdo con la información elaborada por los consultores, los docentes que habían ingresado entre 1973 y 1976, en su mayoría jóvenes de baja formación académica, constituían el 27,6 del total de docentes universitarios (2870). De estos, el 22 % no contaba con título de grado, el 58,5 % tenía entre 21 y 39 años, 48 % eran ayudantes o asistentes, 72 % tenía otro trabajo fuera de la Universidad, 75 % no había publicado ningún libro y 45 % ningún artículo, 50 % no realizaba tarea de investigación alguna. También se destacaba que el 73 % no contaba con estudios de posgrados, un dato que no debería llamar demasiado la atención si se tiene en cuenta que estos no estaban generalizados en el país. Si se agregan las cifras de profesionales emigrados en el período 1973-1975, se comprende la insistencia del informe en la «falta angustiada de recursos humanos». Una de las acciones prioritarias, por tanto, era captar, formar y retener personal calificado (Alsina, 1978, pp. 8-9).

Por ende, las principales recomendaciones y el grueso de las inversiones previstas estaban destinados al fortalecimiento docente mediante la contratación de investigadores con altas calificaciones, cursos de posgrados nacionales o en el exterior, expansión de la dedicación exclusiva, incremento de las retribuciones salariales y otorgamiento de becas para el perfeccionamiento de los docentes; aspectos sobre los que se había avanzado muy tímidamente en la etapa previa al golpe de Estado. Era imprescindible generar condiciones materiales que atrajeran a profesionales e investigadores uruguayos residentes en el país o en el exterior. Junto a la renovación de equipos, materiales y mobiliario, el plan preveía la ampliación de la planta física de la Universidad y la creación de un «Centro de Ciencias» que agruparía en un mismo terreno los servicios dedicados a la investigación (BID, 1978, pp. 4-6).

Se sugería la conformación de un grupo de científicos que «investigue, asesore, participe en los proyectos de envergadura nacional» como garantía de un «progreso estable y autónomo» (Alsina, 1978, p. 9). Para ellos se planeaba contratar profesores e investigadores para la conformación de núcleos de investigación y enseñanza en ciencias básicas, agropecuarias y tecnológicas, que a su vez debían formar con nivel de posgrado a profesores ayudantes, de los cuales surgirían los investigadores de alto nivel que la Universidad requería (BID, 1978, p. 886). Las facultades beneficiarias de la inversión serían las de Agronomía, Arquitectura, Humanidades y Ciencias, Ingeniería, Química y Veterinaria. Por último, se destacaba la necesidad de destinar atención y esfuerzos a las ciencias de la salud que, si bien tenían un importante grado de desarrollo y calidad en relación con los otros sectores analizados, dada su relevancia y las carencias detectadas, requerían de inversiones para mantener el nivel alcanzado y evitar su deterioro (BID, 1978, p. 67).

La creación de nuevas carreras «más prácticas» y «menos largas» ajustadas a las exigencias del desarrollo económico del país con rápida salida laboral fue otro tópico relevante en el Proyecto BID y al que se dedicó una de las consultorías sectoriales. El experto en carreras cortas el brasileño Agnelo Correa Vianna, las definía como estudios superiores, de una duración entre uno a tres años, dirigidos a la preparación para el desempeño de funciones especializadas a «un nivel de mando o supervisión intermedia» en áreas claves de la economía (industria, comercio, comunicaciones y turismo) (BID, 1978, pp. 16-21). Se contemplaba, además, la localización de algunas de ellas en el interior del país a la vez que se recomendaba fortalecer el centro universitario de Salto donde funcionaban desde 1975 los cursos de primer y segundo año de las carreras de Ingeniería, Arquitectura, Agronomía y Veterinaria y crear uno nuevo en Paysandú (departamento vecino) para atender a las poblaciones cercanas así como «a la infraestructura ya existente y a los programas de inversión públicos y privados que se

llevan a cabo en ese sector y que lo llevan a constituir un polo de desarrollo sobre la margen del Río Uruguay», decía el informe.²⁴ Esto permitiría frenar la migración de jóvenes hacia la capital uruguaya a la vez que se garantizaba contar, en plazos más acotados, «tal como lo solicitaran las comunidades locales», de profesionales con la capacitación adecuada a las necesidades de la región (Correa Vianna, 1978, p. 65). Estas medidas, además, aspiraban a superar la rigidez del modelo curricular que caracterizaba a la Universidad (BID, 1978, p.274). Desde esta perspectiva, era necesario llevar adelante un proceso de planificación que generara las condiciones para dar una respuesta pronta y efectiva a las demandas cambiantes del mercado (BID, 1978, pp. 60 y 274). Es claro que la propuesta también buscaba satisfacer antiguos reclamos de descentralización universitaria por parte de grupos localistas, así como de buena parte de las derechas a fines de los años sesenta que la dictadura no había contemplado totalmente.

Un año después de conocerse los resultados de la consultoría, el gobierno anunció un nuevo cambio de planes de estudio previsto para 1980 de acuerdo con las directivas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) de abreviar las carreras existentes y establecer nuevas de nivel intermedio. Los cambios propuestos venían a profundizar los esfuerzos del rector interventor anterior Edmundo Narancio.²⁵ El anuncio a la prensa lo hizo el entonces rector interventor Jorge Anselmi antes de su partida a Washington, donde se reuniría con representantes del BID para negociar sobre las condiciones del préstamo para el «desarrollo de los cursos superiores».

Efectivamente, el 10 de diciembre de 1980 el Poder Ejecutivo y el presidente del BID firmaron un contrato de préstamo de 32,5 millones de dólares para la ejecución del proyecto de mejoramiento de las condiciones académicas y de infraestructura de la Universidad de la República. En julio de 1981 el gobierno avaló el contrato y definió un aporte local de 14 millones de dólares.²⁶ De acuerdo con el informe del BID, los recursos se concentrarían fundamentalmente en fortalecer las dependencias centrales de la Universidad y las facultades vinculadas a los sectores fundamentales ya mencionadas en el informe técnico. Para el consultor argentino José A. Landi, la Universidad de la República se encontraba ante «una oportunidad única en su historia»: «Tenía a su disposición 46,5 millones de dólares para invertir en su mejoramiento académico en los próximos cuatro años. Muy pocas universidades en el mundo tienen ante sí una situación siquiera comparable».²⁷

Se estableció entonces un grupo de trabajo para analizar el plan y su adecuación a las políticas de la Universidad, que definió un Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y recién en abril de 1982 fue creada una Unidad Ejecutora (UE) dependiente del Rectorado. El contador Mario Esquibel fue designado director administrativo, mientras Landi era contratado como coordinador general de la ejecución del proyecto.²⁸ Sin embargo, su puesta en marcha se vio obstaculizada por trabas de distinta índole. En primer lugar, surgieron desavenencias irreconciliables entre el Consultor argentino y la

24 Más específicamente, y sin perjuicio de avanzar en la descentralización universitaria, se recomendaba la instalación de las carreras de Enfermería, Perito en Ingeniería (mecánica), Electrotecnia y Electrónica, en Salto y de Perito en Ingeniería (mecánica), Tecnología textil y Tecnología del cuero, en Paysandú. Véase (BID, 1978), p. 63.

25 *El País*, 28 de julio de 1979, p. 8.

26 Decreto-ley n.º 15.155. Recuperado de <http://www.imo.com.uy/bases/decretos-leyes-originales/15155-1981/1>

27 «Informe final del Dr. José A. Landi. Consultor en Planeamiento Universitario (Coordinador del Proyecto de Mejoramiento de la Universidad de la República)», 31 de diciembre de 1983. Expediente 914. Informe de José Landi, caja 57, subfondo institucional. Secretaría General, AGU.

28 El plan se organizó en cuatro subproyectos: Mejoramiento Institucional, Ampliación y Mejoramiento del Personal Docente y de Investigación, Mejoramiento de la Planta Física y Mejoramiento de los Equipos y Materiales para la enseñanza y la investigación, sobre creación de Unidad Ejecutora véase decreto- ley n.º 15.359, 24 de diciembre de 1982.

UE, en particular con su director, Mario Esquibel. Mientras Landi se quejaba de ser excluida su participación, el director administrativo endilgaba al consultor un «comportamiento un tanto autónomo y desorganizado», «poco propenso al funcionamiento de equipo». Esto sumado a que percibía una retribución muy superior con respecto a los funcionarios técnicos de la Unidad, «sometidos a mayores responsabilidades». Las rispideces, con la consecuente ida y vuelta de notas y expedientes, se hicieron insostenibles al punto que a fines de 1983 el rector interventor Luis Menafrá decidió no renovar el contrato de arrendamiento al consultor externo.²⁹

En segundo lugar, los conflictos se originaban en la propia ubicación de la Unidad Ejecutora como una oficina más de la burocracia universitaria, bajo la dependencia jerárquica de la Dirección General de Planeamiento Universitario, a contrapelo de las recomendaciones emanadas del Proyecto BID que establecían que el organismo ejecutor debía disponer de amplia autonomía, mecanismos de resolución ágiles y eficientes y de personal calificado de alta dedicación y salarios acordes. Al contrario, la UE estaba condicionada a la habitual lentitud que caracterizaba a la administración universitaria, supeditada a aprobaciones, autorizaciones y controles múltiples externos e internos. Por ende, las decisiones eran sustanciadas mediante expedientes que debían recorrer las distintas escalas jerárquicas universitarias y, en ocasiones, del Estado, según denunciaba Landi en varias de sus notas a las autoridades universitarias. Mario Esquibel, en cambio, argumentaba que el origen de los problemas estaba en el diseño mismo del proyecto, que no precisaba con claridad las tareas a cargo de la UE y establecía plazos muy acotados para la ejecución del plan, lo que mostraba un gran desconocimiento del funcionamiento administrativo de la Universidad y del Estado uruguayo.³⁰

Lo cierto es que a fines de 1983 la ejecución del proyecto se encontraba en una situación de parálisis. En materia de infraestructura se había avanzado apenas en la elaboración de un par de proyectos arquitectónicos, pero no se había concretado ninguna de las licitaciones programadas para la ejecución de las obras. Lo mismo ocurrió con la contratación de docentes altamente calificados, la selección de becarios para estudios de posgrado en el país y en el exterior o la adquisición de equipos y materiales que ni siquiera habían comenzado el proceso de ejecución. En cambio se avanzó de manera parcial en el fortalecimiento de la oferta de carreras cortas tanto en Montevideo como en las ciudades de Paysandú y Salto, para cuya implementación se había creado en 1982 una comisión coordinadora.³¹ Un año más tarde se habían reforzado un par de carreras alojadas en la Facultad de Ingeniería (Electrotécnica y Electrónica), creado cinco nuevas, y había otras proyectadas para 1984.³² El avance en esta área en buena medida se explica por la sintonía con las políticas que venía imple-

29 «Informe de Cr. Mario Esquibel ante eventual renovación de contrato de Consultor en Planeamiento Universitario. Director de Unidad Ejecutora Proyecto UNI-BID», 14 de octubre de 1983; «Resolución de Rector interventor de la Universidad de la República, Luis A. Menafrá», 15 de octubre de 1983; «Informe de progreso desde el 1.º de julio hasta el 30 de setiembre de 1983. Presentado por el consultor en Planeamiento Universitario del Proyecto Universidad-BID Dr. José A. Landi». En expediente 914, caja 57, subfondo institucional. Secretaría General, AGU.

30 En notas de José A. Landi y Mario Esquibel, en expediente 914. Informe de José Landi, caja 57, subfondo institucional. Secretaría General, AGU.

31 La directora de la División de Secretaría Técnica de la Dirección General de Planeamiento Universitario, Suevia Sánchez Calzal, fue designada coordinadora general.

32 Las carreras nuevas fueron: Producción Industrial, Instrumentación Industrial, Electrotecnia, Electrónica, alojadas en la Facultad de Ingeniería, Archivología, en la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Comercialización, con especialización en comercio exterior, en la Facultad de Ciencias Económicas. «Unidad ejecutora del proyecto UNI-BID», 4 noviembre de 1982 e «Informe de Mario Esquibel al rector interventor de la universidad Luis A. Menafrá, del director de Unidad ejecutora Proyecto UNI-BID», 6 de diciembre de 1983, carpeta 9398, caja 51, subfondo institucional. Secretaría General, AGU.

mentando el régimen desde el inicio de la intervención a la vez que se benefició de experiencias que estaban en marcha en algunas facultades, especialmente la Facultad de Ingeniería.

A estas alturas las comisiones pagadas al BID a cuenta de los retrasos en la marcha del proyecto superaban el millón de dólares a los que se agregaban los gastos en salarios del personal contratado y funcionamiento de la oficina ejecutora. El total de los desembolsos hasta el momento correspondía a 1,1 millones de dólares sobre el total de 32,5 millones del préstamo concertado. Ante esta situación, en enero de 1984 el gobierno uruguayo decidió cancelar el préstamo renunciando «al saldo no desembolsado del préstamo no. 382/OC-UR». Se cerraba de esta forma un «largo y penoso camino», según consignaba el diario *El País*.³³ En mayo el rector interventor Gonzalo Lapido dispuso el cese de la UE.

Los cambios en la coyuntura política nacional, que tuvieron impacto directo en la vida universitaria, también condicionaron este desenlace. En noviembre de 1980, un mes antes de la firma del contrato de préstamo con el BID, el proyecto constitucional plebiscitado por el gobierno militar con la intención de legitimarse había sufrido una dura derrota. Se fueron abriendo entonces espacios todavía velados para expresar la disidencia. En ese marco, por ejemplo, la generalización del examen de ingreso a la Universidad constituyó una ventana de oportunidad para manifestar el descontento con el régimen, habilitando las primeras acciones organizadas por parte de los actores universitarios.³⁴

Estas expresiones de insatisfacción fueron en ascenso a medida que la breve bonanza económica llegaba a su fin. En 1982, dos días antes de la fecha prevista para las elecciones internas de los partidos políticos, el gobierno anunció la libre flotación del peso uruguayo provocando una devaluación que triplicó el precio del dólar y desencadenó una grave crisis económica. El manejo de la economía y sus consecuencias, en particular la agudización del endeudamiento externo a causa de la fuga de capitales y de la caída de las reservas internas netas, despertaron las críticas de sectores que hasta entonces habían apoyado al régimen. También otros actores que habían permanecido silenciados, ya fueran organizaciones sociales existentes antes de la dictadura o movimientos con nuevas características y repertorios de acción, expresaron más abiertamente su oposición (Gillespie, 1995; Caetano y Rilla, 2004, p. 359). En el espacio universitario, los estudiantes cobraron un protagonismo creciente a través de la organización de instancias de reorganización gremial y de variedad de actividades de denuncia a la intervención y a la dictadura, cuyo corolario fue la fundación en 1982 de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP). En 1983 se sumó la Comisión Inter Egresados para la Universidad (CIEPU), y en 1984 la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) y la Asociación de Funcionarios de la Universidad (AFUR).³⁵ En este contexto, la Universidad entró en una etapa de inestabilidad. A modo de ejemplo, solo en 1981 hubo cuatro cambios de rector, lo que obstaculizó la planificación o la definición de lineamientos a mediano y largo plazo.³⁶

El diario *El País*, abandonando su actitud de apoyo y colaboración a las políticas del gobierno, adjudicó la responsabilidad del fracaso del Proyecto BID en primer lugar, a la falta de respaldo por

33 «Trasposición de rubros. Resolución sobre la utilización de partidas presupuestales y trasposición de rubros», 26 de octubre de 1984, carpeta 9750, caja 73, subfondo institucional. Secretaría General, AGU. Véase *El País*, 18 de febrero de 1984, «El préstamo Universidad-BID».

34 *El País*, 4 de abril de 1981, p. 7, y 6 de marzo de 1981, p. 5.

35 *Diálogo*, año 1, n.º 0, octubre de 1981.

36 Jorge Anselmi (1976-1981); Raquel Lombardo (como rectora interina julio y setiembre de 1981); Enrique Viana Reyes (setiembre-diciembre de 1981); Luis Antonio Menafrá (diciembre de 1981-enero de 1984); Gonzalo Lapido (enero y diciembre de 1984) sustituido por Blas Rossi en calidad de rector transitorio hasta marzo de 1985.

parte de las autoridades universitarias, sujetas a cambios de titularidad frecuentes; en segundo lugar, a las dificultades administrativas y la lentitud en la toma de decisiones.» Pero, ante todo consideraba que se había carecido de una política de mediano plazo, impidiendo finalmente la puesta en práctica de lo que consideraba un «buen proyecto de reorganización interna.» Estos factores, a los que se sumaban los costos que suponía mantener un préstamo que no estaba siendo ejecutado, habían determinado la decisión del Poder Ejecutivo de cancelar el contrato con el BID. Es claro, como se dijo, que los cambios políticos que se visualizaban en el marco del proceso de reinstitucionalización del país precipitaron esta resolución.³⁷

Con las próximas elecciones en el horizonte, en agosto de 1984 el Poder Ejecutivo decretó el cese de la intervención. Las autoridades interventoras que pasaron a ser «transitorias» fueron rechazadas por las gremiales universitarias, que convocaron a una elección para la designación de Consejos Interinos encargados de conducir la institución hasta la asunción del nuevo gobierno en marzo de 1985. Las elecciones de los consejos se realizaron entre setiembre y octubre de 1984 y fueron reconocidas por la Concertación Nacional Programática (Conapro) garantizando de este modo su aceptación por parte del próximo gobierno resultante de las elecciones nacionales. El proyecto BID caía en el olvido, mientras la Universidad de la República iniciaba el camino hacia la restitución de sus marcos legales.

Conclusiones

A lo largo del período la dictadura uruguaya priorizó las actividades de enseñanza a costa de un repliegue de las actividades de investigación a la vez que orientó la formación universitaria hacia la creación de carreras cortas y la reformulación de otras existentes para satisfacer las demandas del mercado. Esta forma de concebir la educación superior sintonizaba con la prédica de buena parte de las derechas en el período anterior. En los años sesenta, en un contexto general de revisión del papel social de las universidades, y a contrapelo del reformismo universitario y sus declinaciones de izquierda, un sector de las derechas más propositivo en alianza con otras fuerzas sociales y políticas fue delineando formas alternativas para adecuar la enseñanza superior a las necesidades del «desarrollo nacional». Se perfiló entonces un programa de modernización universitaria en conexión con ideas de circulación regional y global impulsadas por organismos y consultores internacionales, tendientes a transformar las instituciones universitarias de acuerdo a criterios de eficiencia, volcándolas al servicio del mercado.

En esta dirección apuntaron los cambios de planes de estudios impulsados por el régimen en los primeros años de la intervención. Sin embargo, en un primer momento el régimen no definió un rumbo claro para la educación superior y tampoco contó con recursos para implementar cambios profundos en un contexto de restricción presupuestal del Estado. Más tarde, al igual que ocurrió en los países vecinos, recurrió al asesoramiento técnico y al apoyo financiero de organismos internacionales, en este caso el BID, para implementar una reforma integral del sistema universitario. La consultoría reforzó la concepción tecnocrática y modernizante a la vez que contempló parte de las demandas de las derechas locales. Pero fue más allá al brindar una mirada más amplia y abarcativa sobre el futuro de la Universidad, proponiendo objetivos más ambiciosos que incluyeron el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Ahora sí se contaba con un plan y una cantidad ingente de recursos para llevarlo a cabo. Sin embargo, no logró concretarse.

37 *El País*, 18 de febrero de 1984, «El préstamo Universidad-BID».

El fracaso en la implementación del proyecto se debió a varios factores, internos y externos. Entre los primeros, se destacan las trabas internas propias de las inercias de una burocracia lenta y pesada a las que se sumaron las rispideces entre el consultor externo y las estructuras administrativas. Se advierte, además, la ausencia de un colectivo de profesores o investigadores, o algo similar a lo que podría definirse como una «comunidad científica», o actores universitarios comprometidos con las transformaciones académicas. Tampoco se manifestó un liderazgo, menos aún políticas claras, por parte de las autoridades interventoras o a nivel nacional que empujaran el proyecto. Queda abierta la cuestión acerca de cómo se procesaron los equilibrios internos entre las autoridades interventoras, los consultores nacionales y los externos.

Más allá de las definiciones generales y el énfasis en la educación técnica, la dictadura no tuvo un proyecto de acción claro hacia la enseñanza universitaria, ni parece haberla considerado un área estratégica para el desarrollo del país, y en consecuencia, no fue capaz, por ejemplo, de llevar adelante una estrategia de cooptación de científicos o investigadores dentro y fuera del país que impulsaran desde dentro una reestructura académica como lo había hecho el régimen brasileño (Patto Sá Motta, 2014). Eso explica en parte el desaprovechamiento de la oportunidad que significó el Convenio con el BID.

Por último, no puede desconocerse la influencia de una realidad nacional que había cambiado radicalmente. De la relativa estabilidad que parecía haber logrado el régimen, a partir de 1980 se abrió una etapa de progresiva apertura política que afectó la interna universitaria. El movimiento opositor en la Universidad, liderado por los estudiantes, fue incrementando los niveles de organización y protesta, obligando a las autoridades interventoras a pasar a posiciones defensivas.

En suma, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, como en Brasil, las tentativas refundacionales del régimen no tuvieron el éxito esperado. Esto no significa que no haya habido realizaciones, las hubo y con efectos duraderos, como la creación de nuevas carreras que perduraron tras la reinstalación democrática. Queda pendiente, sin embargo, un examen más profundo de los cambios producidos en el período. También, resulta relevante avanzar en el conocimiento del papel de los organismos internacionales en la definición de una agenda de cambios en relación con la educación y los sistemas científicos, asuntos sobre los que hay una vasta literatura en la región. Más concretamente, es preciso analizar con más detalle el papel del BID en el contexto de los gobiernos dictatoriales en la región (Tussie, 1997; Bekerman, 2010; Castiglioni, 2021).

Referencias bibliográficas

- ALSINA, F. A. (1978). *Ciencias Básicas. Informe Final*. Montevideo: Universidad de la República.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (1971). *Undécimo informe anual 1970*. Washington: BID. Recuperado de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Undecimo-informe-anual-del-banco-interamericano-de-desarrollo-1970.pdf>
- BID (1977). *Informe Anual de 1976*. Washington: BID.
- BID (1978). Proyecto de expansión y mejoramiento de la Universidad de la República. En *Programa Udelar, BID*. Montevideo: Archivo General de la Universidad, Universidad de la República.
- BEKERMAN, F. (2010). Modernización conservadora: la investigación científica durante el último gobierno militar en Argentina. En F. Beigel (Dir.), *Autonomía y dependencia académica*. Buenos Aires: Biblos.
- BUCHELI, G. (2022). Investigación en economía en la dictadura y la apertura democrática (1973-1985). En V. Amarante, P. Azar, M. Bruno, G. Bucheli, M. Bucheli, Cáceres Artía, ... M. I. Moraes, *Miradas sobre la investigación en economía en Uruguay. Sesenta años del Instituto de Economía* (pp. 103-142). Montevideo: Instituto de Economía-Facultad de Ciencias Económicas y de Administración-Archivo General de la Udelar, Universidad de la República .
- CAETANO, G., y RILLA, J. (2004). *Historia contemporánea del Uruguay*. Montevideo: CLAEH-Fin de Siglo.

- CASTIGLIONI, L. (2021). Apuntes para una historia crítica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). *Cuadernos de Economía Crítica*, 7(14), 107-128.
- CORREA MORALES, J. (2018). *Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno, 1973-1980*. Montevideo: Fin de Siglo.
- CORREA MORALES, J., y MARCHESI, A. (2022). Dossier: Cultura y dictadura: nuevos enfoques sobre la cultura del autoritarismo. *Contemporánea. Historia y Problemas del Siglo XX*, 16(2), 307-309.
- CORREA VIANNA, A. (1978). *Carreras tecnológicas cortas. Informe final*. Montevideo: Universidad de la República.
- COSSE, I., y MARKARIAN, V. (1996). *El Año de la Orientalidad*. Montevideo: Trilce.
- D'AVENIA, L. (2015). Revisando continuidades. La agenda educativa de los cónclaves gubernamentales (1973-1981) durante la dictadura cívico-militar uruguaya. *Políticas Educativas*, 9(1), 188-207 Recuperado de <https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/article/view/63327>
- DE SANTIAGO, A. (1975). *Un bienio de intervención- nov. 1973 - noviembre 1957*. Montevideo: Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.
- DUFFAU, N. (2007). Prohibido usar el mate: represión y resistencia, 1973-1985. En E. Ruiz (Ed.), *Una poderosa máquina opuesta a la ignorancia: 100 años de la Facultad de Agronomía*. Montevideo: Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
- GILLESPIE, C. (1995). *Negociando la democracia. Políticos y generales en el Uruguay*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria-Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- ISLAS, A. (1995). La Facultad intervenida, 1973-1985. En B. París de Oddone (Ed.), *Historia y memoria: medio siglo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1945-1995* (pp.169-146). Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
- JUNG, M. E. (2018). *La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista. El Movimiento pro-Universidad del Norte de Salto (1968-1973)*. Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República.
- JUNG, M. E. (2021). Derechas partidarias y católicos conservadores en pos de una universidad privada y católica en Uruguay, 1961-1966. *Revista de História da UEG*, 10(02). Recuperado de <https://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/view/11666>
- JUNG, M. E. (2022). La Universidad de la República bajo la lupa de las derechas (1958-1973). En M. Broquetas y G. Caetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura* (pp.171-187). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- MARCHESI, A. (2001). *El Uruguay inventado*. Montevideo: Trilce.
- MARCHESI, A. (2009). «Una parte del pueblo uruguayo, feliz, contento, alegre.» Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura. En C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, Á. Rico y J. Yaffé, *La dictadura cívico militar. Uruguay 1973-1985*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- MARCHESI, A., y MARKARIAN, V. (2012). Cinco décadas de estudio sobre la crisis de la democracia y el autoritarismo en Uruguay. *Contemporánea. Historia y Problemas del Siglo XX*, 3(3).
- MARKARIAN, V. (2015). La Universidad intervenida. Cambios y permanencias de la educación superior uruguaya durante la última dictadura (1973-1984). *Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación*, (4).
- MARKARIAN, V. (2020). *Universidad, revolución y dólares*. Montevideo: Debate.
- PATTO SÁ MOTTA, R. (2014). *As universidades e o regime militar: Cultura política brasileira e modernizacao autoritária*. Río de Janeiro: Zahar.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) (1972). *Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977*. Montevideo: OPP.
- RICO, Á. (2003). *La Universidad de la República desde el golpe de Estado a la intervención. Cronología de hechos, documentos y testimonios, junio a diciembre 1973*. Montevideo: Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Universidad de la República.
- RODRÍGUEZ, L., y SOPRANO, G. (2009). La política universitaria de la dictadura militar en la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado de <http://nuevomundo.revues.org/56023>.

- TUSSIE, D. (1997). *El Banco Interamericano de Desarrollo*. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires-Flacso.
- UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1978). *Resoluciones de los cónclaves gubernamentales: San Miguel, Colonia Suiza, Montevideo, Solís*. Montevideo: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la República.
- UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1976). 30 años de intervención. Montevideo: División Publicaciones y Ediciones
- WSCHEBOR, I. (2014). Cine, Universidad y política audiovisual: el Departamento de Medios Técnicos de Comunicación de la Universidad de la República, 1973-1980. *Contemporánea. Historia y Problemas del Siglo XX*, 5(5).
- YAFFÉ, J. (2009). Proceso económico y política económica durante la dictadura 1973-1984. En C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, *La dictadura cívico militar 1973-1985*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Más allá de la «oposición/resistencia» o la «desmovilización/inmovilidad». Trabajadores y sindicalismo durante la última dictadura uruguaya

Beyond «opposition/resistance» or «demobilization/immobility». Workers and unionism during the last Uruguayan dictatorship

Sabrina Alvarez¹

Resumen

La producción histórica sobre el devenir de los trabajadores y el sindicalismo durante la última dictadura uruguaya comenzó durante el propio período de facto. Estuvo atravesada por dos grandes interpretaciones. Una asumió que los trabajadores y el sindicalismo se opusieron y resistieron a la dictadura. La otra que estos actores fueron desmovilizados y quedaron inmovilizados luego de la huelga general de 1973. Ambas han matizado las lecturas posteriores contribuyendo al conocimiento del tema, aunque dejando varios asuntos pendientes en los que indagar. En la primera parte de este texto presento un breve repaso de la literatura sobre el tema producida desde el período dictatorial hasta los años dos mil. En la segunda, analizo sintéticamente el sindicalismo durante la dictadura. En la tercera, trazo algunas líneas sobre el papel de los trabajadores en el período. Por último, repaso temas y problemas que entiendo merecen ser profundizados.

Palabras clave: Sindicalismo, Trabajadores, Dictadura, Uruguay

Abstract

During the latest Uruguayan dictatorship, social scientists and historians published some works on the role played by workers and unions to face the current situation. These analyses can be summarized in two great interpretations. One of them assumed that workers and trade unionism opposed and resisted the dictatorship. The other one proposed that these actors were demobilized and remained immobilized after the general strike of 1973. Both have shaped the production about this issue, contributing to the knowledge on the subject, but leaving several issues open to investigation. In the first part of this essay, I present a brief overview of the literature about the subject, produced from the authoritarian period to the 2000s. In the second section, I synthetically analyze unionism during the dictatorship. In the third part, I propose some ideas about the role of workers in the period. Finally, I review some issues and problems that deserve further analysis.

Keywords: Unionism, Workers, Dictatorship, Uruguay

¹ Departamento de Historia Americana, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República

Introducción

Los aniversarios son momentos propicios para revisar de qué forma hemos analizado lo pasado y plantearnos otras interrogantes a partir de las inquietudes del presente. Con este ensayo quiero compartir algunas ideas y preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de un proceso de investigación que comenzó hace diez años en el marco de un proyecto a demanda de una organización sindical y que fueron derivando en un intento de formulación académica a través de distintas instancias individuales y colectivas. Admito, también, que me atraviesa una preocupación por la temática en tanto trabajadora y militante sindical.

Tal como intento reflejar en el título del ensayo, mi objeto es bastante amplio y difuso. Porque ¿quiénes son los trabajadores? ¿Aquellos que se autoidentifican como tales o quienes no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir? ¿Y el sindicalismo en un período de proscripción? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo funciona? En este texto no busco dar respuesta a estas preguntas, sino asumir una visión lo más abarcativa posible que permita dar cuenta de las distintas aristas de estos tópicos. Estas y otras interrogantes que irán apareciendo a lo largo del texto son, además, parte de una investigación que se encuentra en su etapa inicial. De todos modos, dado el carácter ensayístico del artículo, no quiero dejar de plantear interrogantes latentes que pueden servir de orientación a otras indagatorias y que, a su vez, expresan la preocupación por la forma en la que se ha tratado el asunto hasta el momento en Uruguay. El objetivo es, entonces, partiendo de la dicotomía interpretativa que ha alimentado la literatura sobre la clase trabajadora y el sindicalismo uruguayo en dictadura por décadas (inmovilismo vs. resistencia), dar cuenta de otros asuntos que se podrían abordar.

El cruce de las variables clase trabajadora, sindicalismo y dictadura amerita una justificación. Entiendo que en la historia reciente de Uruguay nos falta conocer mejor el papel de los trabajadores, sus organizaciones gremiales y sus relaciones con distintos actores sociales, políticos y económicos. Más aún si se tiene en cuenta que, a partir del gobierno de Jorge Pacheco Areco (fines de 1967) y, en especial, desde el golpe de Estado de 1973, una parte importante del sindicalismo fue objeto principal de la represión (fundamentalmente por su vínculo con las izquierdas) y la clase trabajadora padeció el impacto de las medidas económicas implementadas en paralelo a transformaciones legales en los mecanismos de búsqueda de conciliación del conflicto capital-trabajo.¹ Además, nos puede ayudar a comprender su devenir posterior. Todo lo cual se puede ver enriquecido al problematizar las reacciones no monolíticas de integrantes de «la clase» (Massano y Zorzoli, 2021; Araya, 2015; Álvarez, 2012).

El texto está organizado en cuatro partes. En la primera, presento un brevísimo repaso de la literatura sobre el tema producida desde el propio período dictatorial hasta las nuevas indagaciones desarrolladas desde los años dos mil. En la segunda, analizo sintéticamente al sindicalismo uruguayo durante la dictadura. En la tercera, trazo algunas líneas sobre el papel de los trabajadores en el período. Por último, repaso algunos temas y problemas que, entiendo, merecen ser profundizados.

¹ Cabe señalar que, a diferencia de Chile, en Uruguay no tenemos indicios de que haya existido un plan laboral. Dentro del campo de la historia económica ha sido objeto de debate la caracterización del modelo económico de la dictadura uruguayo. A pesar de ello, hay un relativo consenso que sugiere que la política económica fue bastante improvisada y ecléctica y que la imposición del neoliberalismo llegó a pleno en la década de los noventa. De todos modos, la presencia e influencia del Ing. Alejandro Vegg Villegas es una clara muestra de que la tendencia neoliberal se imponía como lógica económica a través del Estado. Sin intención de hacer historia contrafactual, me animo a decir que, parte del avance neoliberal de los noventa no se puede explicar sin tener en cuenta el efecto de algunas medidas e ideas neoliberalizadoras que se fueron instalando en la dictadura. En este sentido, entiendo que poner en diálogo los procesos nacionales puede ayudar a identificar las particularidades y los elementos comunes, las sincronías y asincronías.

«Oposición/resistencia» o «desmovilización/inmovilidad»

Durante la dictadura y la transición se publicaron textos (varios desde el exterior) que buscaban entender los móviles del golpe de Estado y el papel asumido por la clase trabajadora y el sindicalismo ante este acontecimiento. Entre estos, identifiqué dos interpretaciones del proceso que, partiendo del análisis de algunos historiadores argentinos, se sintetizan en que la clase trabajadora y sus organizaciones fueron «desmovilizadas/inmovilizadas» o que ofrecieron su «resistencia/oposición» al régimen (véanse Venero, 2010; Carminatti, 2017).

Por un lado, los textos del investigador Antonio Dutra y el economista Julio Millot (1981), el politólogo estadounidense Howard Handelman (1981), el sociólogo Jorge Lanzaro (1981 y 1986), el historiador argentino Ricardo Falcón (1982), el sociólogo Gustavo Cosse (1985a y b), el investigador Martín Gargiulo (1985 y 1986) y el politólogo estadounidense Paul W. Drake (1986) plantearon que la clase trabajadora, luego de la huelga general de 1973, no logró expresar su oposición al régimen de facto producto de la desmovilización que la hizo entrar en una etapa de repliegue y receso hasta la inmovilidad. Por otro lado, hay textos como el de la historiadora Lucía Sala y el sociólogo Jorge Landinelli (1984), el periodista y militante cristiano José Bottaro (1985), los militantes y escritores Jorge Chagas y Mario Tonarelli (1989) y el maestro, escritor y militante Yamandú González Sierra (1989) que postularon que los trabajadores y el sindicalismo fueron un bastión de resistencia y oposición a la dictadura. Asumiendo el riesgo de la generalización, estas dos grandes interpretaciones tiñeron las lecturas posteriores. Como señalaré más adelante, si bien representan un aporte para el estudio del devenir de los trabajadores y el sindicalismo en el Uruguay de la dictadura, plantean algunos límites.

El interés que hubo en los ochenta por explicar el papel del sindicalismo y los trabajadores ante la dictadura disminuyó notoriamente en los noventa en el contexto del avance neoliberal, el presunto «fin de la clase trabajadora», la pérdida de poder del sindicalismo y una nueva crisis económica que tuvo un fuerte impacto en los trabajadores. El politólogo Francisco Pucci publicó en 1992 el libro *Sindicatos y negociación colectiva*, en el que, al abordar el período dictatorial, abonó básicamente la tesis de la «desmovilización/inmovilidad» del movimiento sindical. Por otra parte, en esa década se publicaron textos elaborados por militantes sindicales y organizaciones en los que se repasaba la historia de distintos sindicatos. En la parte relativa a la dictadura, reforzaban la idea de la «resistencia/oposición» de la clase trabajadora al régimen (Bouzas, 1997; Eyherabide, 1993; Ruiz Valente, 1992).

En los dos mil, quizá como consecuencia del impacto de la crisis de 2002 y la proximidad del trigésimo aniversario del golpe de Estado, creció el interés por el estudio del papel de los trabajadores y el sindicalismo durante la última dictadura. Los trabajos del antropólogo Álvaro de Giorgi (2000) y la socióloga Alicia Morón (2003) trajeron algunas novedades, por sus perspectivas de análisis, fuentes empleadas e indicios respecto del tema. En el caso de De Giorgi aportó una periodización novedosa del accionar del movimiento sindical durante la dictadura en la que incorporó las dimensiones microsocial e identitaria como variables del quehacer gremial. Por su parte, Morón se preocupó por analizar en detalle las políticas impulsadas entre 1973 y 1976 orientadas a contener las expresiones colectivas de descontento en el ámbito laboral. Otro trabajo destacable es el apartado «La represión al movimiento sindical» del tomo III de la *Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)* (Rico, 2008). En este texto se encuentra información proveniente de fuentes inéditas producidas por servicios de inteligencia a partir de las que se puede reconstruir algunos hechos y dinámicas de la persecución de la que fueron objeto, principalmente, los militantes de organizaciones filiales de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Esta información invita a hacerse otras preguntas que permiten complejizar los abordajes precedentes: ¿qué rol cumplieron

los empresarios y patrones en la persecución a los militantes sindicales?, ¿se beneficiaron por la posibilidad de despedir a trabajadores?, ¿de qué forma?

También en este período de creciente presencia del movimiento sindical y de nuevas generaciones de militantes sindicales (e investigadores), se publicaron trabajos exploratorios con enfoques de larga duración sobre distintas organizaciones sindicales que contienen capítulos o apartados destinados a analizar el período dictatorial. Cabe destacar que varios de estos textos se elaboraron a pedido de las propias organizaciones que confiaron esta tarea a investigadores de la Universidad de la República. Esto evidencia una mayor, aunque aún insuficiente, preocupación de las organizaciones por conocer su historia.² Por lo general, estos textos reiteran la misma periodización (huelga general de junio-julio de 1973, etapa de repliegue y resistencia entre 1974 y 1979, resurgimiento y reorganización entre 1980 y 1984) y sostienen la interpretación de que el sindicalismo y la clase trabajadora «resistieron» y se «opusieron» a la dictadura.

En el entorno de la segunda década de los dos mil, se publicaron trabajos centrados específicamente en el sindicalismo uruguayo durante la dictadura. Estos contribuyen en la revisión de algunas ideas instaladas respecto del papel del sindicalismo y la clase trabajadora durante el pasado reciente, profundizando en aspectos hasta entonces no contemplados como el sindicalismo «democrático» y «libre», organizaciones sindicales y de trabajadores en clave territorial, análisis del sindicalismo con perspectiva de género y la observación de dinámicas propias del mundo laboral y productivo (Ciganda, 2007; Demasi, 2014-2017; Porrini, 2018; Sosa, 2019, 2021, 2022; Alvarez, 2021; Suárez, 2021, 2022). Por su parte, el historiador argentino Daniel Dicósimo (2019) ensayó una lectura novedosa en clave comparada respecto del papel del sindicalismo uruguayo y argentino durante las dictaduras y transiciones.

Como plantearé en los próximos apartados, la forma en la que se ha analizado el tema, si bien representa un aporte, impone ciertos límites. Primero, porque los trabajos existentes tienen un carácter exploratorio o celebratorio. Segundo, porque en la mayor parte de los casos se parte de una mirada principalmente político-institucional. Cuando incorporan aspectos económicos, lo hacen con fines descriptivos, sin entrar en mayores detalles respecto de las dinámicas propias de distintos sectores productivos y laborales y su interacción con las formas de organización y movilización. Los aspectos sociales, culturales, territoriales e identitarios comenzaron a explorarse, pero aún queda mucho por indagar.

Una parte del sindicalismo desmovilizado e inmovilizado

El sindicalismo uruguayo, liderado por la CNT al momento del golpe de Estado, se encontraba movilizado reclamando fundamentalmente por dos dramáticos problemas afrontados a lo largo de la década de los sesenta: mejoras salariales y libertad de presos sindicales. Desde su proceso fundacional entre 1964 y 1966, la CNT fue transformándose en un agente de coordinación para la lucha de distintos sectores populares a través de expresiones de solidaridad y elaboración programática que excedían a los reclamos específicos de los trabajadores. Fue uno de los principales objetos de la represión intensificada a partir de junio de 1968 con la implementación de Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco.³ En esos años, demostró capacidad de organizar y movilizar a

² Para ver un listado completo de esta bibliografía: Sabrina Alvarez y Álvaro Sosa (2019).

³ La implementación de Medidas Prontas de Seguridad está prevista desde la primera Constitución de Uruguay (1830) para enfrentar «casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior». Para ello le garantiza al Poder Ejecutivo facultades que le permitan mantener el orden institucional (Kierszenbaum, 2012). A lo largo

un creciente número de trabajadores y logró generar mecanismos de negociación, resistencia y confrontación a la avanzada autoritaria y a la implementación de medidas de redistribución regresiva del ingreso. Especialmente en 1972, en el marco de la desarticulación de la principal guerrilla (el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) y el receso de la movilización estudiantil, protagonizó numerosos conflictos por la liberación de los presos sindicales y la recuperación salarial.

El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue respondido de inmediato con la huelga general, cumpliendo con el mandato autoimpuesto en el proceso fundacional de la CNT y ratificado en los primeros congresos ordinarios.⁴ En el marco de la huelga general, el gobierno de facto tomó algunas decisiones tendientes a quebrarla y desarticular a las organizaciones nucleadas en el entorno de la CNT. También rápidamente buscó generar simpatía en la población trabajadora con una campaña que pretendía involucrarla en el «nuevo Uruguay». A menos de un mes de levantada la huelga, el régimen buscó «refundar»⁵ el sindicalismo uruguayo excluyendo a las expresiones sindicales de izquierda, entendidas por el gobierno como antinacionales y antidemocráticas. Ese intento fracasó y lo que le sucedió fue la directa persecución y desarticulación del sindicalismo cenetista.

Pero es justo decir que la CNT tenía diversas corrientes internas (Alvarez, 2021) y que dentro del sindicalismo uruguayo existían al momento del golpe de Estado, además de la CNT, por lo menos otras dos expresiones sindicales. Por un lado, el amplio espectro de los sindicatos identificados como «independientes» y, por otro, la Confederación Uruguaya de Trabajadores (CUT), fundada en 1969. En 1970, según un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US Department of labor. Bureau of Labor Statistics, 1971), los sindicatos identificados como independientes tenían unos 60.000 afiliados, los de la CUT 50.000 y los de la CNT 200.000.⁶ Si bien es notoria la predilección de los trabajadores afiliados a alguna organización sindical por la vertiente «cenetista», no es despreciable el número de adscriptos a otras corrientes.

La CNT nucleaba, de modo predominante, a sindicatos conducidos por militantes identificados con las izquierdas. Si bien según su estatuto era independiente de cualquier central sindical internacional y partido político a nivel local, algunas de sus filiales lo eran también de organizaciones internacionales como la Federación Sindical Mundial y muchos militantes y dirigentes eran miembros de partidos políticos locales. La CUT, por su parte, es un actor político-sindical de la época muy poco conocido. Cuando se lo menciona es para contraponerlo a la opción presuntamente legítima de la clase trabajadora uruguaya (la CNT). Lo cierto es que los relatos sobre el sindicalismo uruguayo de los sesenta y la dictadura aún están muy atravesados por la visión más cercana a la CNT que estigmatiza a las organizaciones no alineadas con ella como «amarillas», «pro patronales» o «pro yankees». Pero, si tomamos en cuenta la auto-identificación de la CUT, su antecesora Confederación Sindical del Uruguay y su sucesora la Confederación General de Trabajadores del Uruguay, estas se inscribían dentro del sindicalismo libre y democrático (Sosa, 2019 y 2022). Como se verá más adelante, hay al-

de los cincuenta y los sesenta se implementaron para reprimir movilizaciones sindicales, particularmente en sectores estratégicos que ofrecían servicios públicos como transportes, combustibles y electricidad.

- 4 Convención Nacional de Trabajadores (1971). Comisión de organización. II Congreso ordinario de la CNT. Proyecto de resolución. En: Archivo del CEIU-FHCE. Colección Ponce de León-Vilaró.
- 5 Apelo a la periodización ensayada por Álvaro Sosa (2022) para historizar las políticas del régimen orientadas al mundo del trabajo. Plantea que hay tres períodos: «reglamentación fundacional» (1973-1974), «reestructuración de los mecanismos de mediación capital-trabajo» (1974-1981) y «reglamentación transicional» (1981-1985).
- 6 Según explica el autor en el Prefacio de la edición consultada, estos informes, que remiten a distintas partes del mundo, pretendían proveer material a los empresarios estadounidenses que estuvieran empleando trabajadores en el exterior, así como a especialistas en sindicatos y trabajo, economistas consultores y estudiantes. Dado este objetivo, es probable que la información se aproximara a la realidad del momento.

gunos indicios que, entiendo, nos obligan a estudiar con mayor detenimiento a las filiales y militantes de esta corriente para entender mejor su proceder y recién, a partir de eso, contraponerlo con el de la CNT.

En el correr de los años de dictadura la CNT y algunas de sus filiales fueron ilegalizadas. Otras no, y se mantuvieron activas como la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Dadas las restricciones impuestas por el régimen en cuanto al tipo de reclamos que podían hacer los trabajadores y la forma en las que estos se debían expresar, el margen de acción de las organizaciones que se mantuvieron legales fue extremadamente acotado y se tendió a la individualización de los mecanismos de reclamo laboral (Sosa, 2022; Pisón, 2019). En este sentido, se puede sostener la idea de que el sindicalismo mayormente estuvo inmovilizado.

Sin embargo, cabe destacar el papel que cumplió el coordinador de la CNT en el exilio, en especial al visibilizar la situación en Uruguay y presionar al gobierno de facto a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Bottaro, 1985). Incluso, algunas organizaciones cenetistas reconfiguraron su accionar y se orientaron, fundamentalmente, a resistir los intentos de destruirlas. A su vez, adaptándose, a las nuevas reglas del juego impuestas mediante la violencia, hicieron reclamos que buscaban paliar el impacto de las políticas económicas.⁷

Además, en mayo de 1974 se conformó la Confederación General de Trabajadores del Uruguay (CGTU), que fue la continuidad de la ya mencionada CUT (Bottaro, 1985). Durante los primeros años del régimen, esta confederación mantuvo buenos vínculos con el gobierno, formando parte de la delegación uruguaya en las conferencias de la OIT y presentando posturas alineadas con las del régimen de facto (Sosa, 2022).

Sin embargo, más allá de lo que quedó registrado en documentación oficial y la prensa, la lectura de otras fuentes permite considerar diversas dimensiones del accionar de las organizaciones sindicales no cenetistas y sus propias tensiones con el régimen. Por ejemplo, en abril de 1981 se presentó ante la Comisión de trabajo y seguridad social del Consejo de Estado una delegación de la CGTU para tratar asuntos relativos a las condiciones de trabajo en la industria del cuero y afines. El reclamo por mayores controles y la creación de instancias tripartitas para el sector no era nuevo, pero el presentado en ese momento respondía a la inmediatez de la situación planteada por la muerte de cuatro trabajadores en una curtiembre.⁸ El episodio evidencia, por una parte, la disconformidad de la CGTU y una de sus filiales (la Unión de Trabajadores de Paycueros, integrante de la Federación de Trabajadores Textiles, Cuero y Vestuario) con la forma en la que el gobierno atendía el problema de las condiciones de trabajo en un sector productivo que generaba importantes ganancias. Por otro lado, muestra que, si bien la CGTU era simpática con el régimen de facto, no podía dejar de expresar el reclamo de sus representados y, desde una concepción distinta a la «cenetista», desarrollar actividades de tipo sindical (CTSS, 1981).

7 De esto se encuentran ejemplos en las actas de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Consejo de Estado. En Archivo del Poder Legislativo.

8 En 1969, un número del periódico *Tribuna Sindical* registró información relativa a las pésimas condiciones de trabajo en Paycueros y cómo impactaba en la salud de los trabajadores. También mencionaron las múltiples gestiones a nivel local y nacional para que se atendiera la alarmante situación. «Paycueros carece de mínima higiene». P. 2. En documento 3032. Asunto «Congreso de la Confederación uruguaya de trabajadores». Archivo DNU-CEU. El problema de la accidentalidad laboral durante la dictadura merecería un estudio específico. La historiadora brasileña Dra. Ana Beatriz Ribeiro (2022) sugiere que el aumento de la accidentalidad y la mortalidad laboral es una muestra del incremento de la explotación de la mano de obra. Si bien no cuento con datos de todo el período, hay indicios respecto de la profundización de esta problemática durante la dictadura uruguaya.

Las conexiones de este sindicalismo con otros actores de relevancia nos son aún desconocidas y ameritarían estudios específicos. Lo que sabemos es que la CUT durante la huelga general sacó una declaración en respaldo y que dirigentes de la CGTU participaron de conferencias anuales de la OIT. También, de acuerdo a los avances en la investigación desarrollada por Álvaro Sosa (comunicación personal, 19 de mayo, 2023) hay indicios de que, en el marco de conflictos obrero-patronales liderados por filiales de la CGTU, sus dirigentes buscaban el apoyo de militares para que mediaran. Esto, desde su concepción político-sindical, no se contradecía con su predisposición a cooperar en el proceso de «reconstrucción nacional».

Este caso, creo, obliga a pensar al sindicalismo uruguayo en sus múltiples vertientes y formas (no solo aquellas nucleadas en el entorno de la CNT, como ha prevalecido) tomando distancia de las valoraciones y discursos propios de los actores analizados.⁹ De hecho, al intentar trazar un mapa del sindicalismo uruguayo en los años previos al golpe, me encontré con un sindicalismo mucho más diverso (o menos unificado) que el que emergió del proceso de reorganización sindical en la transición (Alvarez, 2021).

A medida que se recrudecía la instalación del régimen civil-militar, el sindicalismo «cenetista» dentro del país debió transformar profundamente su forma de acción para intentar sortear las consecuencias de la represión de la que fue objeto. Varios militantes pasaron a la clandestinidad, otros se exiliaron y cientos fueron encarcelados. Los que lograron mantenerse en sus puestos de trabajo y sostener la organización sindical debieron adaptarse a las férreas limitaciones que impuso el régimen a la actividad gremial. Una tarea de relevancia fue la de apoyar a las familias de detenidos y exiliados que perdieron su principal fuente de ingresos. Hasta donde llegan los conocimientos por el momento, parece ser que a partir de la etapa denominada «dictadura transicional» se incorporaron a la organización y conducción del sindicalismo reorganizado nuevas capas de militantes, muchos de ellos sin experiencia sindical previa a la dictadura.

Por su parte, los dirigentes y militantes cenetistas exiliados crearon hacia 1979 un organismo coordinador. Su principal acción estuvo orientada al apoyo de los exiliados, las familias en Uruguay (a través de ayudas monetarias) y la denuncia internacional tendiente a generar presión sobre el gobierno dictatorial (Bottaro, 1985; Coraza, 2007). También, de acuerdo a lo que plantea la historiadora argentina Mónica Gordillo (2019), en el exilio militantes sindicales argentinos y uruguayos comenzaron a tejer redes de contacto a través de la Central Latinoamericana de Trabajadores. Los vínculos establecidos a partir de la oposición a los regímenes de facto se habrían sostenido en las transiciones y aperturas contribuyendo en la renovación del sindicalismo en la región. El Plenario Intersindical de Trabajadores, ya con la sigla PIT-CNT, participó de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur que surgió en 1986 con el apoyo de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (subregional de la Confederación Interamericana de Organizaciones sindicales libres [CIOSL]) (Carrau, 2008).¹⁰

9 Como señalaba párrafos atrás, es común encontrarse que, al mencionar a las organizaciones sindicales no cenetistas, se las catalogue como «amarillas», «pro patronales» o «pro yanquis». Sin negar la existencia de prácticas de ese tipo, creo que es necesario hilar más fino en el análisis. Al estudiar a los ferroviarios pude encontrarme con un mapa de prácticas y concepciones sindicales bastante más complejo que el que aparecía a simple vista. Para realizar este ejercicio recomiendo la lectura del libro del historiador británico Daniel James *Resistencia e integración* (1990), cuya primera edición en inglés es de 1988, y el capítulo de Daniel Dicosimo «Los dirigentes sindicales y la última dictadura. Entre “interlocutores válidos” y “curadores” del patrimonio gremial» (2021).

10 Sería interesante analizar el proceso por el que la CNT (y su sucesor, PIT-CNT) pasó de oponerse sistemáticamente a la CIOSL y las corrientes del sindicalismo libre y democrático a participar de organizaciones impulsadas por estas. Quizá las propias circunstancias de persecución, vida y encuentros en el exilio y las discusiones en torno a la democracia y revolución que se dieron en este período ayuden a explicarlo.

Volviendo al caso uruguayo, de acuerdo a datos sistematizados por Cristina Zurbriggen, Luis Senatore, Natalia Doglio y Gerardo Caetano (2003), entre 1985 y 2001 el PIT-CNT perdió la mitad de sus afiliados, el mayor porcentaje entre los trabajadores del sector privado. Esto como reflejo, especialmente, de la «reforma laboral velada» que se impuso en Uruguay en la década de los noventa (Supervielle y Quiñones, 2000). De todos modos, varios de los cambios que se aceleraron en esa década ya se habían delineado durante el período dictatorial.

Algunos trabajadores resisten

De acuerdo al planteo de estudiosos especializados en el sindicalismo, la clase trabajadora y la conflictividad laboral, la resistencia es un elemento constitutivo de las relaciones capital-trabajo (Edwards, 1986; Hyman, 1989; Van der Linden, 2019). Ante estas relaciones, los Estados nación y sus múltiples estructuras de ejercicio del poder han variado sus funciones, pero, por lo general, han tendido a favorecer los intereses capitalistas. Se podría decir que lo particular del período dictatorial es lo extremo de la puesta en función del aparato estatal a favor de la reproducción y acumulación de capital de algunos grupos empresariales. Uno de los efectos de las dictaduras instaladas desde los sesenta en el cono sur fue limitar al máximo las posibilidades de expresar oposición y proponer alternativas. En el mundo del trabajo, esto significó la casi imposibilidad (o la práctica inutilidad) de presentar reclamos y la adaptación a las exigencias de unas nuevas modalidades de producción y distribución del ingreso en un contexto de transformaciones del modelo económico a escala global (Harvey, 2009; Hirsch, 1992).

Los textos mencionados en la primera parte de este ensayo, ubicados en alguna de las posturas dicotómicas, se enfocan en analizar el accionar de los trabajadores en el período priorizando sus demandas orientadas, fundamentalmente, al gobierno, el impacto de las políticas económicas en sus salarios, condiciones laborales y condiciones de vida. También presentan algunos casos de oposición y resistencia a través de acciones como «volanteadas», actos de sabotaje, expresiones de solidaridad y actividades culturales y deportivas. Las menciones a la interrelación de autoridades del régimen, trabajadores y grupos económicos y patronales son prácticamente inexistentes. Además, aquellos textos que buscan analizar el devenir de los trabajadores y el sindicalismo durante la dictadura (en especial en los momentos «más oscuros») lo hacen desde una perspectiva teleológica que busca explicar el resurgir del sindicalismo en los ochenta y la conformación del PIT-CNT en tanto actor político relevante en la transición.

No niego que algunas acciones desarrolladas por trabajadores y militantes hayan tenido como cometido derrotar al régimen y recuperar la democracia, pero también se observan otros móviles específicamente laborales como mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Estos, creo, nos estarían hablando más de la resistencia a la explotación capitalista que al régimen de facto (o, en última instancia, a los dos). También cabe pensar, desde la batería de herramientas que aporta el análisis de la conflictividad laboral, los mecanismos por los cuales los trabajadores consintieron, aceptaron o se resignaron a ejecutar una serie de actividades durante determinada cantidad de horas por día, en ciertas condiciones a cambio de una retribución.

Algunos indicios han ido surgiendo en las investigaciones recientes y obligan a seguir investigando y analizando por qué los trabajadores consintieron o resistieron a los cambios impuestos en materia laboral y en qué medida modificaron sus actitudes a lo largo del período. La respuesta puede ser obvia: en un período de persecución y terrorismo de Estado, con transformación del marco normativo laboral y rebajas salariales los trabajadores, estas no tenían más opción que aceptar las condiciones impuestas. Si esto fue así para el conjunto de los trabajadores, nos merecemos tratar de

comprender cuáles fueron y cómo se procesaron los mecanismos del terror en el mundo del trabajo, cómo se articulan con los cambios normativos y económicos, quienes fueron los beneficiados y los perjudicados.

Sin embargo, cuando analizamos a la clase trabajadora y al sindicalismo, por más que los mencionamos en singular, estamos tratando de actores con dinámicas complejas y variopintas. Entre estos se encuentran múltiples realidades atravesadas por las particulares posiciones geográficas, productivas, políticas, sociales, culturales, etarias. Por ejemplo, un trabajador (con oficio) de los talleres ferroviarios de Peñarol había, probablemente, ya atravesado diversas situaciones de conflicto con gerentes y mandos medios en torno a las condiciones de trabajo e, incluso, la manera de resolver algunos asuntos productivos de su sector. El carácter de trabajador con un oficio especializado, lo convertía en agente necesario para el funcionamiento de la empresa y de difícil sustitución. Esto le daba mejores condiciones para, individual o colectivamente, resistir al impacto de la imposición de mayor demanda de trabajo, tal como se procesó en la Administración de Ferrocarriles del Estado a partir de la intervención militar en abril de 1973 (con la que, incluso, podía estar de acuerdo). Por su parte, un peón de vía y obras contratado para trabajar en distintos puntos de la línea férrea era fácilmente sustituible y tenía menor capacidad de ejercer presión. Probablemente no tenía mayor alternativa que aceptar las condiciones, no solo porque pudiera estar de acuerdo con el régimen militar, sino, porque, en un período de incremento del desempleo y subempleo y de deterioro del salario real, no tenía mejor opción para garantizarse un ingreso. Presumo que estas condiciones eran más duras si la radicación de su cargo (muy posiblemente en calidad de contratado zafra) era en una localidad pequeña.

Pero si bien sabemos que, en promedio, durante la dictadura empeoraron las condiciones de trabajo y vida de los asalariados, también sabemos que, al menos en ciertos lapsos, hubo mejoras en algunos sectores productivos (Yaffé, 2010; Macadar, 1982; Canzani y Notaro, 1984). Es por esto que es necesario desarrollar estudios detenidos que combinen múltiples dimensiones (productivas, geográficas, políticas, identitarias) para comprender mejor un tema tan complejo. En este sentido, tener en cuenta los avances producidos en otros países de la región, sin perder de vista la especificidad del caso nacional, resulta ineludible.

Asuntos pendientes

Observo que la producción histórica sobre los trabajadores y el sindicalismo uruguayo en la última dictadura ha seguido ritmos similares a los de otros países de la región. Sin embargo, los avances son muy magros. Esto resulta particularmente llamativo si se tiene en cuenta el peso del sindicalismo en las dinámicas colectivas nacionales en las décadas posteriores a la dictadura, que lo tuvo como protagonista de la resistencia a la avanzada neoliberal de los noventa y como agente de presión política durante los gobiernos del Frente Amplio luego de 2004.

Por otra parte, me interesa subrayar que, hasta el momento, no ha habido denuncias de trabajadores por delitos de lesa humanidad perpetrados con complicidad empresarial durante el período de la dictadura. Esto hace pensar que no existieron centros clandestinos de detención en plantas industriales como los casos paradigmáticos de Ford o el Ingenio Ledesma en Argentina. Pero, más allá de los crímenes de lesa humanidad, sectores empresariales con connivencia del régimen se vieron beneficiados por la eliminación de derechos constitucionales como el de huelga y por la práctica del terrorismo de Estado orientada a limitar cualquier tipo de oposición.

Entiendo que es necesario, en el marco de las luchas por verdad, memoria, justicia y reparación de las víctimas que se vienen dando en la sociedad uruguaya, comenzar a incorporar el problema de la

responsabilidad y complicidad empresarial. Porque las patronales pudieron, durante esos años, imponer con particular impunidad otras reglas en el ámbito laboral, ante la inoperancia de la fiscalización estatal y la falta de contralor por parte de los trabajadores. Porque el problema de la explotación laboral diaria, del trabajo ejercido en condiciones insalubres y peligrosas, frente a la necesidad de adquirir los bienes básicos de subsistencia, se exacerbó en aquel período y sentó las bases de una forma de vinculación con el trabajo y la vida que tiene consecuencias hasta el presente. Porque los cambios impuestos transformaron, también, al sindicalismo.

Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ, R. (2012). El plan laboral y la negociación colectiva: ¿origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, (35-36). Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/pdf/bihaar/n35-36/n35-36a04.pdf>
- ÁLVAREZ, S. (2021). *Entre «moderados» y «radicales». Aproximación a las respuestas colectivas de trabajadores ferroviarios (1967-1972)* (Tesis de maestría en Ciencias Humanas [inédita], Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo).
- ÁLVAREZ, S., y SOSA, Á. (2019). Transformaciones de la clase trabajadora uruguaya en tiempos de dictadura (1973-1985). Estado de la cuestión y coordenadas para su estudio. *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda*, (15). Pp. 143-162.
- ARAYA, R. (2015). *Movimiento sindical en dictadura. Fuentes para una historia del sindicalismo en Chile. 1973-1990*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- BOTTARO, J. (1985). *25 años de movimiento sindical uruguayo. La vida de A.S.U.* Montevideo: Avanzada.
- BOUZAS, C. (1997). *La generación de Cuesta*. Montevideo: s. d. e.
- CANZANI, A., y NOTARO, J. (1987). *Los asalariados: condiciones de vida y de trabajo*. Montevideo: FCU.
- CARRAU, N. (2008). *La coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Un actor con mirada regional en el Mercosur*. Montevideo: FES.
- CARMINATI, A. (2017). Introducción. En A. Carminati, *Los trabajadores del cordón industrial del Gran Rosario ante la dictadura militar (1976-1983)* (Tesis doctoral [inédita], Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario).
- CHAGAS, J., y TONARELLI, M. (1989). *El sindicalismo uruguayo bajo la dictadura (1973-1984)*. Montevideo: Del Nuevo Mundo.
- CIGANDA, J. P. (2007). *Sin desensillar... y hasta que aclare. La resistencia a la dictadura, AEBU, 1973-1984*. Montevideo: Cauce.
- COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL [CTSS] (1981). Industria del cuero. Planteamiento. Versión taquigráfica de la sesión celebrada en el día 1.º de abril de 1981. Acta n.º 129. Montevideo. Marcial Bugallo (presidente). Nilo J. Suburu (secretario).
- CORAZA, E. (2007). El exilio uruguayo en España 1973-1985: redes, espacios e identidades de una migración forzada (Tesis doctoral [inédita], Universidad de Salamanca, Salamanca).
- COSSE, G. (1985a). Notas acerca de la clase obrera, la democracia y el autoritarismo en el caso uruguayo. En L. W. Goodman, P. Winn y A. Gillespie (Comps.), *Uruguay y la democracia* (pp. 87-108). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- COSSE, G. (1985b). Clase obrera, democracia y autoritarismo. En C. Filgueira (Comp.), *Movimientos sociales en el Uruguay de hoy* (pp. 79-119). Montevideo: Clacso-CIESU-Ediciones de la Banda Oriental.
- DE GIORGI, Á. (2000). El caso uruguayo. En Á. de Giorgi y S. Dominzain, *Respuestas sindicales en Chile y Uruguay bajo las dictaduras y en los inicios de la democracia* (pp. 87-135). Montevideo: Universidad de la República.
- DEMASI, C. (Dir.). (2014-2017). *Construyendo resistencia: el SUNCA durante la dictadura (1973-1985)*. Montevideo: SUNCA-Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
- DICÓSIMO, D. (2019). El movimiento sindical en la transición de las dictaduras militares a la democracia. Un ensayo de comparación de las experiencias en Argentina y Uruguay. *Claves. Revista de Historia*, 5(9), 329-358.

- DICÓSIMO, D. (2021). Los dirigentes sindicales y la última dictadura. Entre «interlocutores válidos» y «curadores» del patrimonio gremial. En L. Zorzoli y J. P. Massano (Eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales* (pp.235-254). Carolina del Norte: A Contracorriente.
- DRAKE, P. W. (1986). Los movimientos urbanos de trabajadores bajo el capitalismo autoritario en el Cono Sur y Brasil 1964-1983. *Cuadernos del CLAEH*, 11(40), 25-53.
- DUTRA, A., y MILLOT, J. (1981). Sistema político y relaciones de clase en el Uruguay contemporáneo. En *Encuentro para discutir la realidad económica y social uruguaya, México 18-21 de julio de 1980*. Ciudad de México: Unidad de Investigación Latinoamericana.
- EDWARDS, P. K. (1986). Introduction. En P. K. Edwards, *Conflict at work. A Materialist Analysis of Workplace Relations* (pp. 1-16). Oxford: Basil Blackwell.
- EYHERABIDE, G. (1993). *Historia de ASU. 33 años de lucha popular*. Montevideo: Contexto.
- FALCÓN, R. (1982). Conflicto social y régimen militar. La resistencia obrera en argentina (marzo 1976-marzo 1981). En B. Gallitelli y A. Thompson (Eds.), *Sindicalismo y regímenes militares en Argentina y Chile* (pp. 91-140). Ámsterdam: CEDLA.
- GARGIULO, M. (1985). El movimiento sindical uruguayo: de la reactivación a la concertación. En L. W. Goodman, P. Winn y A. Gillespie (Comps.), *Uruguay y la democracia* (pp. 61-80). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- GARGIULO, M. (1986). El desafío de la democracia: la izquierda política y sindical en el Uruguay post-autoritario. *Cuadernos del CLAEH*, 11(38), 17-45.
- GONZÁLEZ SIERRA, Y. (1989). *Reseña histórica del movimiento sindical uruguayo (1870-1984)*. Montevideo: Ciedur-DATES.
- GORDILLO, M. (2019). Redes de sindicalismo «movimentista» en el Cono Sur: algunas conexiones argentino-uruguayas. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, 10(10), 83-100.
- HANDELMAN, H. (1981). Labor-Industrial Conflict and the Collapse of Uruguayan Democracy. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 23(4), 371-394.
- HARVEY, D. (2009). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- HIRSCH, J. (1992). Fordismo y posfordismo, la crisis social actual y sus consecuencias. En J. Hirsch, W. Bonefeld, S. Clarke, E. Peláez, J. Holloway y A. J. Plá, *Los estudios sobre el estado y la reestructuración capitalista* (pp. 13-50). Buenos Aires: Tierra del Fuego.
- HYMAN, R. (1989). *Strikes*. Londres: Macmillan.
- JAMES, D., (1990). *Resistencia e integración*. Buenos Aires: Sudamericana.
- KIERSZENBAUM, L. (2012). «Estado peligroso» y Medidas Prontas de Seguridad: Violencia estatal bajo democracia (1945-1968). *Contemporánea. Historia y Problemas del Siglo XX*, 3(3), 97-114.
- LANZARO, J. (1981). Elementos para un estudio sobre el desarrollo del movimiento obrero. En *Encuentro para discutir la realidad económica y social uruguaya, México 18-21 de julio de 1980*. Ciudad de México: Unidad de Investigación Latinoamericana.
- LANZARO, J. (1986). *Sindicatos y sistema político. Relaciones corporativas en el Uruguay 1940-1985*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- MACADAR, L. (1982). *Uruguay 1974-1980: ¿un nuevo ensayo de reajuste económico?* Montevideo: Estudios CINVE. EBO.
- MASSANO, J. P., y ZORZOLI, L. (2021). Introducción. En J. P. Massano y L. Zorzoli (Eds.), *Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales* (pp. 9-43). Carolina del Norte: A Contracorriente.
- MORÓN, A. (2003). El estado y la cuestión sindical en los inicios de la dictadura (1973-75/76). En *III Jornadas de Historia Económica*, Asociación Uruguaya de Historia Económica, Montevideo.
- PISÓN, M. (2019). El impacto de la dictadura en la jurisprudencia laboral. *Derecho Laboral*, 62(273), 155-172.
- PORRINI, R. (2018). Trabajadores y sindicatos uruguayos durante la dictadura (1973-1985). Consensos y resistencias. Recuperado de http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/dicsind_porrini.pdf
- PUCCI, F. (1992). *Sindicatos y negociación colectiva (1985-1989)*. Montevideo: CIESU.
- RIBEIRO, A. B. (2022). Acidentes e doenças do trabalho como manifestação da superexploração da força de trabalho no Brasil da ditadura empresarial-militar. En: L. R. Correa, M. Almeida de Carvalho Silva y R. Martins

- (Orgs.), *Repressão aos trabalhadores e responsabilidade empresarial nas ditaduras do Cone Sul*. (pp. 93-114). Río de Janeiro: PUC-Rio.
- RICO, Á. (2008). La represión al movimiento sindical. En Á. Rico (Coord.), *Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985). Tomo III*. (pp. 183-286). Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación Científica-Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
- RUIZ VALENTE, H. (1992). *Contribución a la historia de AEBU*. Montevideo: Imprenta Grafinel.
- SALA, L., y LANDINELLI, J. (1984). Cincuenta años del movimiento obrero uruguayo. En P. González Casanova (Coord.), *Historia del movimiento obrero en América Latina* (pp. 251-329). Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores.
- SOSA, Á. (2019). «Libres», «democráticos» e «internacionalistas». La Confederación Sindical del Uruguay en los años cincuenta. *Claves. Revista de Historia*, 5(8), 95-122.
- SOSA, Á. (2021). Disciplinar, estigmatizar y reglamentar. Sindicalismo clasista, derechas y Estado durante el autoritarismo y la dictadura (1967-1985). En M. Broquetas (Coord.), *Historia visual del anticomunismo en Uruguay (1947-1985)* (pp. 128-160). Montevideo: CSIC, Universidad de la República.
- SOSA, Á. (2022). Estado, políticas laborales y organizaciones sindicales en el Uruguay de la dictadura (1973-1985). En M. Broquetas y G. Caetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura*. (pp. 301-313). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- SUÁREZ, J. (2021). Los trabajadores de OSE ante la crisis, la unificación del movimiento sindical y el autoritarismo de Estado (1960-1982). Manuscrito inédito en S. Álvarez, A. Martínez, C. Perugorría y J. Suárez, *Agua, trabajo y lucha. Una historia de FFOSE*, Federación de Funcionarios de OSE, Montevideo.
- SUÁREZ, J. (2022). La clase trabajadora en el Cerro ante la reestructuración del capital y el autoritarismo (1973-1980). Trabajo presentado en el marco del Proyecto Vinculación Universidad, Sociedad y Producción. Modalidad 2: *Memorias, historias y re-construcción de la comunidad barrial del Cerro. Primera Fase (1969-1980)*. Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República.
- SUPERVIELLE, M., y QUIÑONES, M. (2000). La instalación de la flexibilidad en Uruguay. *Estudios Sociológicos*, XVIII (3), 581-615.
- Tribuna Sindical* (1969). «Paycueros carece de mínima higiene». P. 2. En documento 3032. Asunto «Congreso de la Confederación uruguaya de trabajadores». Archivo DNII-CEIU.
- U. S. DEPARTMENT OF LABOR. BUREAU OF LABOR STATISTICS (1971). *Labor Law and Practice in Uruguay*. BLS Report 392.
- VAN DER LINDEN, M. (2019). Formas de resistencia. En M. Van der Linden, *Trabajadores y trabajadoras del mundo. Ensayos para una historia global del trabajo* (Trad. Lucas Poy) (pp. 165-282). Buenos Aires: Ediciones CEHTI.
- VENERO, F. (2010). Trabajadores y dictadura. Un balance crítico sobre la producción historiográfica. En A. Schneider y P. Ghigliani (Comps.), *Clase obrera, sindicatos y Estado. Argentina (1955-2010)* (pp. 129-147). Buenos Aires: Imago Mundi.
- YAFFÉ, J. (2010). Dictadura y neoliberalismo en Uruguay (1973-1985). Ponencia remitida para ser presentada en las *Séptimas Jornadas de Historia Económica*, Asociación Uruguaya de Historia Económica, Montevideo.
- ZURBRIGGEN, C., SENATORE, L., DOGLIO, N., y CAETANO, G. (2003). *Los sindicatos frente al impacto de la transformación del mercado laboral ¿Crisis de desaparición o crisis de transformación?* Montevideo: FESUR.

«Me está faltando un libro...»

Entrevista a Álvaro Rico

Javier Correa Morales y Jaime Yaffé^{1,2}

Álvaro Rico Fernández nació en Montevideo en febrero de 1953. Sus últimos años de educación secundaria coincidieron con los de un país que caminaba «lenta, democrática y autoritariamente» hacia una larga dictadura. Su militancia política, la persecución dictatorial y sus intereses académicos lo hicieron recorrer desde recónditos lugares de la región hasta la fría y soviética Moscú, donde completó sus estudios y residió por casi una década. Desde su retorno a Montevideo en 1985 comenzó una prolífica carrera académica en la Universidad de la República, de la que acaba de retirarse. Sobre varios de estos asuntos conversamos —el día que se cumplía el 49.º aniversario del golpe de Estado de 1973— con el autor y coordinador de un importante número de obras originales y exhaustivas, que contribuyeron a la consolidación de la historia reciente como campo de estudio y a conocer las responsabilidades criminales del Estado uruguayo durante ese período.

¿Cuáles fueron los hitos principales de tu formación, desde la etapa escolar hasta los estudios universitarios?

Mi primera formación fue salesiana, en la escuela y liceo de San Francisco de Sales (Maturana). Luego hice Preparatorios de Derecho en el Juan XXIII, también salesiano. Así que tengo muchos años de educación en la enseñanza privada y de carácter religioso, siempre vinculado a esa congregación. Pero claro, los estudios de Preparatorios, como se llamaban en aquel tiempo, se dieron en el año 1971, un año removedor desde el punto de vista político, sobre todo por el surgimiento del Frente Amplio (FA) y las elecciones nacionales que modificaron el sistema bipartidista en Uruguay. Podría decir que pertenezco a esa generación del 71, en tanto participe de una experiencia social y política, no solamente educativa, a partir de lo que fueron esos cambios en el país y el continente. En el caso particular del colegio Juan XIII recuerdo haber participado en una experiencia pionera como fue la creación del primer comité del FA en la enseñanza privada. Después de ese periplo educativo inicial, la verdad es que yo siempre estuve muy interesado en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, esa era mi vocación, la historia en particular y la filosofía. Entonces continué mis estudios en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la vieja sede de la Aduana.

¿En qué año ingresaste a Humanidades y Ciencias?

En 1972. Me acuerdo por varios hechos. Eran tiempos complicados para la continuidad de los estudios ya a nivel universitario. Fue el año más sangriento por razones políticas en el Uruguay pre-dictadura. No obstante, para los jóvenes con vocación por las ciencias sociales, y además andábamos apurados por la vida, teníamos a mano la tentación de cursar el Ciclo Básico de Derecho, que permitía, de alguna manera, adquirir

1 Entrevista realizada en el domicilio del entrevistado en Montevideo el lunes 27 de junio de 2022.

2 Universidad de la República.

en un año un panorama más completo de Sociología, Ciencia Política, Historia de las Ideas y Economía Política, además con excelentes profesores. Entonces, en ese mismo año ingresé también a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, más que nada para hacer el Ciclo Básico. Luego sí, me volqué por entero a la Facultad de Humanidades en la licenciatura de Filosofía, aunque mi asistencia ese año se vio resentida por un viaje largo que me tocó realizar.

Mil novecientos setenta y tres resultó ser otro año emblemático en la historia reciente del país, así como lo había sido 1971, fue muy revulsivo para una parte de mi generación, que con 18 o 20 años de edad asumió compromisos políticos intensos. 1973, el año del golpe de Estado, de la huelga general de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), de la implantación de la dictadura e inicios de la resistencia. Recuerdo la ocupación de la Facultad de Derecho durante los 15 días de la huelga, y toda una serie de actividades de resistencia a la dictadura que se organizaron desde la Universidad de la República, desde la Federación de Estudiantes (FEUU) en particular, en las que modestamente participé, como tantos otros estudiantes y docentes, junto a los trabajadores y trabajadoras.

Por último, debería señalar entre estos antecedentes una experiencia que fue formativa, aunque no universitaria. En 1972, militando en la Juventud Socialista (JS), surgió la posibilidad de viajar a Cuba para participar en una actividad promovida por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD), que había decidido la construcción de una secundaria básica en el campo, en el municipio de Caimito-Guayabal, cerca de La Habana, como demostración de solidaridad con Cuba y con la participación de estudiantes de varios países del mundo. Me tocó ser parte de la delegación uruguaya en dicha experiencia. Esto significó conocer el proceso, vivir dos meses en la Isla, trabajar en la construcción en una zona rural, y luego recorrer el país viendo de cerca la experiencia del socialismo y sus dificultades, principalmente las consecuencias del bloqueo norteamericano. Pero también ese viaje me permitió, de casualidad, conocer la experiencia chilena ya que, debido a las dificultades para retornar a Uruguay tuve que permanecer en Santiago de Chile casi tres meses, justamente, durante el gobierno de la Unidad Popular (UP), entre mediados y fines del año 72, cuando se vivía una situación de conflicto social y político muy agudo. Creo que la posibilidad de conocer en carne propia, y casi al mismo tiempo, la experiencia cubana y la chilena me aportó no solo políticamente, sino también vivencial y reflexivamente, tanto elementos de convicción como de dudas, sobre lo que realmente sucedía en esos países y en la región, no solo en Uruguay, en la convulsionada década de los años setenta.

¿Así que fue fruto de una casualidad que estuvieras en Chile justo en esa particular coyuntura del gobierno de la UP? ¿Qué hiciste en esos tres meses?

Sí, el viaje a Cuba tuvo un objetivo muy definido, trabajar en la construcción de una secundaria, pero en Chile quedé varado, nadie se hacía cargo de mi pasaje de regreso a Montevideo. Por lo tanto, hasta que no se resolvió ese asunto me quedé ahí, quietito, a cargo de la JS chilena, viviendo en casa de una familia de militantes de muy escasos recursos en la zona de la Quinta Normal. Ello me permitió asistir como oyente a reuniones del PS chileno y a actos de la UP y ver la participación entusiasta de la gente y la ebullición de los debates, conocer en el terreno algunas experiencias de trabajo y conversar con sus participantes, también pasaba muchas horas caminando por el centro de Santiago para matar el tiempo y entonces pude apreciar directamente en las calles el proceso de radicalización y enfrentamientos a través de las movilizaciones que se sucedían en forma permanente. Recuerdo al pasar que, si bien mi referencia organizativa en Chile era la JS, la persona con quien trataba directamente el tema de mi retorno a Montevideo era con un dirigente comunista que tenía el vínculo con la FMJD y se encargaba de los trabajos voluntarios bajo el gobierno de la UP, el profesor Juan Manuel Guerrero, quien fue secuestrado y asesinado años después, en 1985, junto a otros dos dirigentes comunistas, por la dictadura de Augusto Pinochet en el conocido «caso degollados».³

3 Secuestro y asesinato pro degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile por parte de Carabineros ocurrido en marzo de 1985.

Así que, después de estar dos meses en Cuba y tres en Chile, regresaste a fines del 72 para iniciar en el 73 tu segundo año de estudios universitarios.

Un segundo año que, debido al viaje, no era tal en cuanto a mi avance real en el plan de estudios, pero sí, en cuanto al tiempo que llevaba cursando en la Universidad.

Y durante ese segundo año te agarró la huelga general de la CNT y la ocupación de los locales universitarios dispuesta por la FEUU.

Me recuerdo saliendo de casa a la madrugada y volviendo a pie de noche tarde (no vivía lejos), con los temores de mi madre Isabel y los consejos de mi padre Hugo, ocupando y haciendo guardia en la puerta de la Facultad de Derecho, en el edificio central de la Universidad (Humanidades no se ocupó) cercada por la Policía, en aquellos fríos días de la huelga general, así como la multitudinaria movilización del 9 de julio. La huelga se levantó con asambleas estudiantiles muy largas, numerosas y tumultuosas, como fue característica en todas las facultades, pero particularmente en Humanidades, con discusiones muy, muy radicalizadas entre las distintas tendencias, sobre todo relacionadas con las razones del levantamiento, si había sido una victoria o una derrota la resistencia al golpe demostrada en esos 15 días y cómo proseguir la lucha contra la dictadura.

Ahí también, en plena huelga general, se procesó la división de los socialistas. Un sector muy numeroso, sobre todo integrantes de las Brigadas Juveniles Socialistas (BJS), tanto la de estudiantes de Secundaria (la BES) como la de los universitarios (la BUS), renunció o fue expulsado del Partido y de la Juventud. Dichos militantes habían ingresado en la clandestinidad, que había sido decretada por el presidente Pacheco en diciembre de 1967 y desde 1968 participaron activamente en el proceso de renovación del PS. Después del retorno a la legalidad en enero de 1971, propiciaron el recambio generacional de la militancia, participaron en la etapa fundacional del FA y en las discusiones internas que posibilitaron superar anteriores posturas ideológicas ambivalentes respecto a la lucha armada así como adoptar definiciones partidarias marxistas-leninistas y de carácter frenteamplista, todo lo que permitió obtener un buen resultado electoral en noviembre de 1971 y la expansión de la organización a nivel barrial y en el interior. Celebrado el 37 Congreso del PS en diciembre de 1972, fueron electos por abrumadora mayoría y en plancha única los veintinueve miembros del Comité Central (CC) entre quienes expresaban la línea dominante de la organización. Meses después, en mayo de 1973, siete de los miembros de esa máxima dirección partidaria, aquellos más identificados con el intento de impulsar una política de alianzas entre socialistas y comunistas dentro del FA, fueron expulsados. La mayoría del CC, que permaneció en sus cargos, había asumido una posición contraria, y tras acusaciones de ser «infiltrados» del PC en el PS, los expulsaron del Partido apenas un mes antes de que se consumara el golpe de Estado por parte del presidente Juan María Bordaberry. Esa decisión activó, en plena huelga general contra la dictadura, la voluntad de numerosos miembros de la Juventud y del Partido de desafiliarse y adherir al Partido Comunista (PCU) y la Juventud Comunista (UJC), movimiento de ruptura del cual yo formé parte. Es más, en un anuncio premonitorio de lo peor que después vendría, ante la denuncia de un compañero, la Comisión de Disciplina del PS me sancionó a mi retorno de Chile, suspendiéndome la afiliación por dos años, la sanción más grave antes de la expulsión. Entonces, digamos que el quiebre de la democracia en el país también significó para mí y para muchos otros militantes, la ruptura de la fidelidad socialista y la afiliación a los comunistas.

Volviendo al tema de la evaluación de la huelga en Humanidades, estaba diciendo que se realizó como en otras facultades una asamblea muy numerosa que terminó en una pelea descomunal. Recuerdo que quien me seguía para bajarme a la fuerza de la mesa en la que me había subido durante mi intervención era Eduardo Piazza, luego profesor en el CEIU y gran amigo de trabajo desde hace 50 años. En aquel tiempo estábamos muy enfrentados por posiciones políticas. Pero bueno, luego, una vez consolidado el golpe de Estado y un poco más tarde, en octubre, decretada la intervención de la Universidad, en la Facultad de Humanidades vino un período de militancia con muchísimas dificultades, además de que estábamos aislados allá en zona

de la Aduana. Claro está, eso sucedió después del «veranillo» militante y de los festejos por el gran triunfo de la FEUU y los sectores democráticos y antidictatoriales en las primeras elecciones universitarias con voto obligatorio, que se celebraron bajo el régimen dictatorial, en setiembre de 1973, aunque la otra cara de ese gran logro resultaba ser, al otro día, el fatídico 11 de setiembre, el golpe de Estado en Chile contra el gobierno del presidente Salvador Allende.

En ese contexto, ¿avanzaste en tus estudios?

La verdad es que, si bien asistía a los cursos de Filosofía, sobre todo a los que más me interesaban del primer ciclo, aprobé pocas materias, apenas tres o cuatro: Metodología del Estudio Filosófico, con los profesores Cristina Arregui y Jesús Caño Guiral; Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, con el profesor Homero Altesor; Epistemología I, con Ricardo Meerhoff; y creo que también Filosofía Antigua y Medieval, con Jesús Caño Guiral. En Derecho había cursado y terminado las materias del Básico. No avancé más que eso porque la mayor vigilancia en la Facultad, sobre todo tras la intervención, dificultaba mucho la militancia y por ende la presencia física para asistir a los cursos.

¿Hasta qué año estudiaste en Humanidades?

Hasta el 75, estuve cuatro años, del 72 al 75, aunque ya el 75 resultó aún más complicado. Desde 1974 tenía una militancia semiclandestina en la UJC en el Sector Universitario. Asistía de vez en cuando a algunos cursos y seguí en mi casa paterna un tiempo más, pero la militancia se hacía más reservada y con muchos cuidados. El propio portero de la Facultad era un colaborador de la policía y elaboraba un parte diario denunciando a la seccional de la zona a quienes concurrían a la sede del viejo Hotel Nacional, la sede de la facultad en la Aduana. Todo ese panorama determinó que fuera desatendiendo bastante la continuidad de los estudios, si bien intentaba por distintos medios seguir vinculado a la facultad. También se me complicó enormemente lo laboral. Me ganaba la vida desde los 18 años como profesor de karate (aunque no lo crean, en aquella vida era cinturón negro, integraba la selección nacional y había participado en varias competencias internacionales). Con un socio, montamos un gimnasio en un edificio de apartamentos recién inaugurado frente al Palacio Peñarol, y además viajaba algunos días a la semana al interior a dar clases en varias localidades (Santa Lucía, Durazno), hasta que salió en los diarios publicada mi requisitoria y tuve que pasar rápidamente a la clandestinidad en enero de 1976. Obviamente, la sociedad comercial y deportiva se rompió, las idas al interior se cancelaron y también mi asistencia a la facultad. Todo se canceló.

¿Por qué en esos cuatro años no rendiste más exámenes de los pocos que mencionaste?

Como les decía, desde la Intervención en adelante traté por distintos medios de mantener el vínculo con la facultad, hasta último momento. Por ejemplo, si resultaba peligroso ir al edificio nos reuníamos en boliches de la zona o en el Club Neptuno o en los locales del SUANP, del SUGU, del SAG, o de otros sindicatos de la zona, y visitábamos en sus casas a algunos compañeros de mayor confianza. Era una forma de conservar el vínculo con los estudiantes y de militar en la universidad. En la medida de las posibilidades asistía a clases en aquellos cursos en los tenía mayor interés, pero el objetivo de progresar en la carrera y terminarla en plazos razonables fue dejando de ser una meta de vida alcanzable por entonces. El conjunto de inseguridades que generaba el contexto político y la realidad más cercana (detención de amigos y compañeros), incluso la propia situación familiar dado que mi hermana Beatriz había caído presa y fue torturada en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNI) a causa de una movilización de los estudiantes del liceo Miranda, acentuaba las dudas sobre si tenía algún sentido a futuro intentar avanzar en una carrera universitaria o en otras realizaciones personales. A pesar de ser joven y llevarte el mundo por delante, empezabas a dudar sobre poder continuar y menos aún terminar los estudios o poder mantener el trabajo y estar cerca de la familia, ya que podías caer preso o te podía suceder algo peor a causa de la dictadura y la represión. Eso se confirmó para mí al inicio de 1976.

¿Te afectó de algún modo el hecho de que se fuera deteriorando la calidad académica de la enseñanza tras la intervención?

Bueno, ahí, en ese tema, a fines del 73 la intervención fue un cambio radical. Y es cierto, frente a profesores detenidos y exiliados o expulsados por negarse a firmar la Declaración de Fe Democrática, o ante otros docentes impuestos por la intervención y muchos cursos que fueron eliminados por razones ideológicas o porque no tenían las personas afines ideológicamente para cubrir esas materias, la oferta académica era mucho menor y pobre. Además te cambiaban en forma arbitraria a cada momento y sin aviso los horarios. Entonces, por ese lado también, no había mucho incentivo para avanzar en la carrera. En el 75 yo era responsable de la parte gremial del Regional 1 del Sector Universitario de la UJC que dirigía Mercedes *Mecha* Espínola y que nucleaba a Humanidades, Derecho, Ciencias Económicas, el Instituto de Profesores Artigas y algún otro centro que ahora no recuerdo. Ahí la militancia llevaba más tiempo, mayor dedicación, también mayores cuidados, entre ellos no estar en tu casa mucho tiempo, de noche menos, ni seguir frecuentando ámbitos públicos donde pudieran encontrarte o detenerte, y eso fue todo un gran trastocamiento de la rutina estudiantil y familiar que uno tenía. A fines del 75 (en octubre) se desató la Operación Morgan dirigida contra el PCU, y fundamentalmente a inicios del 76 (en enero, febrero) se inició la gran represión contra la UJC, en especial contra el Sector Universitario. Y bueno, ahí me fueron a buscar a casa y quedé requerido públicamente. Eso hizo que me desafectara rápidamente de los lugares que frecuentaba en la legalidad, tanto familiares como de estudio y de trabajo.

¿Hasta cuándo permaneciste en Montevideo?

Hasta el 76, hasta febrero o principios de marzo. Ahí me voy a Argentina y, de inmediato, el 24 de marzo, me agarra el golpe en aquel país. Llegué a Buenos Aires sin vínculos, digamos, sin conexiones con la organización. Me fui en un momento en el cual el cerco en Montevideo era muy muy apretado y las posibilidades de contactos más arriba para consultar eran inexistentes porque habían prácticamente desmantelado los organismos de dirección en la Operación Morgan y había caído presa buena parte de la dirección del PC, de la UJC y del Sector Universitario. Entonces, yo salí una noche en ómnibus de ONDA, y a pie crucé el puente Paysandú-Colón, luego en tren (no me acuerdo qué trayecto realicé, pero fue interminable, creo que fui hasta Corrientes porque no pasaba ninguno), hasta que finalmente logré llegar a la capital, tratando de poner cierta distancia al cerco represivo en Uruguay. Fue muy difícil esa noche despedirse de los padres y de mi compañera de entonces, sin saber qué nos pasaría. Al poco tiempo, ya en Buenos Aires, logré revincularme a través de un encuentro casual en un bar de la Avenida Santa Fe con quien había sido secretario del círculo de la UJC en Humanidades, Roberto Pereira, un estudiante avanzado de Filosofía, quien, junto con Geza Sary, sostuvo el aparato técnico de funcionamiento del PCU en Buenos Aires, haciendo el nexo entre Moscú, donde residía Rodney Arismendi y la dirección interior en Uruguay, dirigida por León Lev hasta 1979. En tantos años cumpliendo esa misión en la más absoluta clandestinidad, nunca fueron detectados por los aparatos de seguridad. En Argentina tenía una situación personal bastante precaria. Me alojé provisoriamente en casa de unos tíos a quienes visitaba siempre en vacaciones desde que cumplí los 14 años. Mi tío Valentín era asturiano, un medio hermano de mi abuelo, partidario de Franco (los Rico republicanos se instalaron en Uruguay y los Rico franquistas en Argentina), pero los tíos fueron muy solidarios conmigo en los cinco o seis meses que permanecí con ellos. No obstante, su casa en la calle Gallo era también frecuentada por un primo mío, hermano de Aldo Rico, que era un militante pesado de la Triple A. No me sentía seguro de permanecer por más tiempo, a pesar del vínculo familiar, aunque tampoco me sucedió nada. No fue sencillo resolver el tema laboral por la falta de papeles, permiso de residencia y otros, ante los cada vez mayores controles a los extranjeros y el temor de quedar detenido en el mismo edificio de Migraciones cuando iba a renovar los permisos, como había sucedido con tantos compatriotas. Algunos luego fueron trasladados por la fuerza a Uruguay. Terminé vendiendo frazadas en el Gran Buenos Aires ofrecidas por una empresa textil familiar, propiedad de un comunista argentino al que me presentó otro compañero uruguayo exiliado que trabajaba allí desde tiempo atrás y gozaba de la confianza del dueño, por eso no me pedían papeles.

Salía del apartamento en Buenos Aires todos los días a las cinco de la mañana para llegar a la zona alejada de ventas después de casi dos horas de viajar en ómnibus y tren suburbano en medio del enjambre apurado de argentinos que salían a trabajar de madrugada, con un frío bárbaro en invierno. Una vez en el lugar, el equipo de vendedores se reunía para planificar la recorrida y salíamos a pie golpeando las manos en cada casa o rancho, empezando por las zonas más alejadas de la ruta («lo más lejos del asfalto», nos aconsejaban los más veteranos). Por tanto, había primero que caminar mucho, esquivando los perros y el barro cuando llovía, antes de poder encontrar un posible cliente y después volver, muchas veces sin vender nada. Las frazadas, colchones y hasta una plancha que cargábamos en «las chantas» y sobre la espalda se vendían a crédito y a pagar en muchas cuotas. La clientela eran sectores populares que vivían muy modestamente. Todo terminó para mí un día que estábamos vendiendo en Puerta 8 de Campo de Mayo cuando una patrulla militar, seguramente en un procedimiento de rutina para controlar documentos, entró en el bar donde nos reuníamos cada mañana para dividir la mercadería y volvíamos después a hacer la rendición de las ventas al final de la jornada y entregar las frazadas sobrantes. Perdí ese empleo sin ir a averiguar qué era lo que había pasado en ese operativo. Por las dudas, tampoco volví más a la empresa textil.

Después del golpe de Estado de marzo del 76 se vivía una situación muy complicada en Argentina, en particular la represión contra los extranjeros y exiliados que por miles vivían en ese país luego del retorno a la democracia y bajo el gobierno peronista de Héctor Cámpora. Pero esa situación se deterioró con la presidencia de Perón, y luego de su muerte con el gobierno de Isabel Martínez, antes del golpe militar del Gral. Jorge Rafael Videla, debido al incremento diario de la violencia por los grupos guerrilleros y el accionar de la Triple A. Esto motivó la decisión partidaria de evacuar a decenas de militantes exiliados de Buenos Aires, salvo un núcleo clandestino que aseguraba el funcionamiento y los vínculos con Uruguay. Por supuesto que permanecieron en Argentina otros uruguayos que eran miembros del partido, pero que residían desde tiempo atrás en la legalidad, tenían documentación argentina y trabajo estable, incluso habían comprado o alquilado una vivienda para ellos y sus familias. Por todas esas razones, les resultaba más difícil un nuevo desarraigo apresurado, salvo que existiese riesgo de vida o requisitoria. Lo peor aún no había llegado en materia represiva y desapariciones de uruguayos en Argentina.

Yo estaba solo, no tenía compromisos familiares, tampoco tenía una posición consolidada de vivienda, trabajo o estudio, aunque en este último sentido había hecho averiguaciones para inscribirme en la carrera de Ciencia Política en la Universidad de El Salvador. A pesar de que era una opción privada y costosa la podía asumir con el sueldo de vendedor de frazadas que me reportaba dinero-contado enseguida de cada venta. Creo que fue una buena decisión de la dirección partidaria que los militantes que eran estudiantes, y ni que hablar también los que eran docentes, pudieran continuar sus estudios en el exterior o ejercer en otras universidades de la región, pensando no solo en su formación, sino siempre en la posibilidad —que se sentía como no muy lejana en aquel tiempo— de retornar al paisito y poder volcar los conocimientos adquiridos en el exilio. Y bueno, ahí las opciones de destinos que se abrieron para salir al exterior fueron México, donde viajó la mayoría, Cuba, adonde partió otro grupo numeroso, y los países socialistas, hacia donde fue un núcleo menor, más que nada para estudiar. Y como yo había estudiado en Montevideo, y me consideraba estudiante de Filosofía todavía, se me abrió esa posibilidad real de seguir formándome y en ese campo. Entre los países socialistas estaba la posibilidad de ir a la República Democrática Alemana o a la Unión Soviética. Finalmente terminé en Moscú.

¿Por qué a Moscú? ¿Cuál era la diferencia con Alemania como destino? ¿Tuvo que ver con tu condición de estudiante de Filosofía?

No, podría haber sido también la RDA, adonde fueron otros compañeros. No había diferencias, y menos en materia de Filosofía. Quizás puede haber incidido la existencia o no de cupos para exiliados o refugiados que ofrecieran los gobiernos y las universidades de cada uno de los países socialistas. Recordemos la gran cantidad de chilenos y argentinos, muchos con familias, que estaban exiliados en Europa del Este.

¿Vos tomaste la decisión sobre a dónde te irías desde Buenos Aires?

Yo no participé en la propuesta que se me hizo de las opciones por países y centros de enseñanza. Eso sí, se me consultó sobre la situación personal y la opinión que me merecía la propuesta, en mi caso, en una larga conversación que sostuve en Buenos Aires antes de tomar la decisión. En esa coincidencia de cosas se concretó la posibilidad y fui a estudiar a la Unión Soviética, a la Universidad Lomonosov de Moscú, la primera universidad de Rusia, fundada en 1755. Allí di continuidad, luego de haber pasado un año por el aprendizaje del idioma ruso (porque había que hacer un curso preparatorio de idioma intensivo y obligatorio), de retomar los estudios universitarios y de Filosofía, abandonados por la fuerza en Uruguay. Permanecí allí nueve años en total, casi una vida.

¿Cuándo llegaste a Moscú?

Debe haber sido en noviembre del 76.

¿Tuvo que hacer alguna estadía previa?

No, desde Buenos Aires hicimos escala en Roma y de ahí a Moscú.

¿Fuiste el único uruguayo?

No, a la Universidad Lomonosov fui con Luis Senatore, los dos a Filosofía. Luis venía de estudiar Sociología y de un corto exilio en México, porque se había refugiado en la embajada mexicana en Montevideo. Otros compañeros y compañeras, no muchos, fueron a la Universidad de Amistad de los Pueblos «Patricio Lumumba».

Reconstruyamos tus primeros pasos en Moscú: llegaste en noviembre de 1976, estuviste un año estudiando ruso, y en 1978 retomaste los estudios de Filosofía.

Sí, retomé los estudios en el 78, hasta el 83, y me recibí con el título de Magister en Filosofía. Luego, del 83 al 85, cursé el doctorado en la misma Universidad Lomonosov. Al poco tiempo de retomar mis estudios universitarios en Moscú cayó presa mi madre, Isabel Fernández, en setiembre de 1979. Estuvo varios meses secuestrada, sin saber mi familia nada de ella, en el centro clandestino El Sótano en el Edificio de la Aduana y luego fue al penal de mujeres de Punta de Rieles, hasta enero de 1982. No supe de esa desgracia enseguida, sino bastante tiempo después. Recuerden que en ese entonces las comunicaciones eran por carta y que tampoco había una línea epistolar directa entre Montevideo y Moscú. Por razones elementales de seguridad las cartas desde Montevideo eran enviadas primero a la casa de una familia amiga que vivía en Helsinki y de allí me eran reenviadas a Moscú. A veces se perdían y pasaba entonces medio año o más sin noticias familiares. Cuando terminé los estudios, en 1983, existían mejores condiciones políticas para poder volver a Uruguay dada la mayor apertura política existente después de las elecciones internas de los partidos autorizados por el régimen. Algunos exiliados habían retornado o se habían acercado al país, instalándose en Buenos Aires o en Río Grande. Tuve una conversación sobre el tema con dirigentes partidarios en Moscú y finalmente se decidió que concluyera allí mi formación a nivel de posgrado. Por lo tanto, volví a Uruguay recién en mayo del 85, con el retorno a la democracia, casado con una chilena exiliada, Mariana, y con un hijo de un año nacido en Moscú, José Miguel.

Con los primeros llamados docentes que se abrieron en la Facultad de Derecho al finalizar la intervención y reorganizarse la Universidad de la República con sus autoridades legítimas, en forma autónoma y cogobernada, pude ingresar, en el año 1986, como asistente interino (grado 2) en Ciencia Política y en Historia de las Ideas. También en el año 86 entré como ayudante interino (grado 1) en Humanidades, en el Centro de Estudios Uruguayos (CEU), como se llamaba en aquel tiempo, y más tarde como ayudante en Filosofía de la Historia, la Cátedra del recordado profesor Manuel Claps.

Pienso en perspectiva que tuve mucha suerte al conseguir trabajo en forma rápida y en lo que había estudiado, y que esa mezcla inicial de varias disciplinas al final resultó una buena combinación, no me desanimó

ni me dispersó, sino que me incentivó, para dictar seriamente las clases, a interiorizarme con rapidez de una gran cantidad de autores, sobre todo nacionales (que por supuesto no estaban accesibles en Rusia), acercarme a nuevas escuelas de pensamiento, y abordar problemas específicos de la Ciencia Política, Historia de las Ideas y Filosofía de la Historia que yo no había tenido oportunidad de estudiar o de profundizar durante mi formación en Moscú. No solo porque allí cursé y me especialicé en una disciplina muy específica, donde el materialismo dialéctico e histórico era la filosofía «oficial» dentro del marxismo, y eso ya era una gran limitante, sino también por las dificultades prácticas que tuve para dominar un idioma tan difícil como el ruso y poder leer con fluidez y comprender autores y temas de filosofía de por sí muy complejos.

Pero, digamos que en un tiempo corto y con mucho esfuerzo y dedicación, con ayuda de la familia —agreguen ustedes todas las dificultades con un hijo pequeño, poca plata y la inversión de horas que llevaba resolver la reinstalación cotidiana en el país luego de diez años de ausencia—, fui procesando esa lectura y relectura de temas, problemas y autores que me permitieron enfocar las clases ante los estudiantes con un pluralismo de ideas que hasta entonces no poseía, e incluso ir superando mi inexperiencia en materia de enseñanza. Comencé a diversificar mi formación, intercambiar con profesores y alumnos y desestructurar mi pensamiento. Además, el trabajo en Humanidades me permitió empezar a investigar de entrada (1986) en los temas del pasado reciente del Uruguay, sobre todo abordando el período 1968-1985: la crisis de la democracia, el golpe de estado, la dictadura y la transición a la democracia. En esa línea seguí consecuentemente por más de treinta años.

¿A qué se debió que, teniendo formación en Filosofía, te insertaras en la carrera docente en otras disciplinas como la Ciencia Política o la Historia de las Ideas?

Ahí había un problema de llamados, de oferta de cargos. Los de Derecho fueron los primeros llamados a cargos contratados en la Udelar, que se abrieron en un número importante bajo la modalidad de interinato. Y entraron conmigo muchos desexiliados. No fue de la misma manera en Humanidades, en particular en Filosofía. Además, con seguridad hubo algún llamado, pero yo no tenía méritos específicos acumulados en la disciplina como para poder hacerlos valer en una evaluación académica rigurosa. Había estudiado y concluido la carrera, pero no tenía producción escrita ni enseñanza.

¿A esa altura no habías publicado nada todavía?

Tenía las tesis de posgrado mimeografiadas, en ruso, pero no estaban publicadas.

¿Habías dado clases en Moscú?

No, solamente las clases en ruso que formaban parte del plan de estudio como práctica docente para estudiantes de la carrera. Por lo tanto, tampoco tenía experiencia de enseñanza acumulada. Yo decía que fue una buena combinación los cargos en Derecho y en Humanidades, por suerte, desde el mismo inicio de la reinserción laboral en Uruguay, no solo porque me permitió insertarme en la Universidad y tener un trabajo remunerado desde mi llegada al país, sino porque también, en cierto modo, me desplegó muy temprano el universo contagioso de la Ciencia Política. Era algo que a mí siempre me había interesado, desde mis intentos fallidos de inscribirme y cursar en Buenos Aires y en la elección de mis opciones para que los estudios de Filosofía en Moscú tuvieran un cierto énfasis en Filosofía Política. Lo otro fue que el cargo en Humanidades, en el CEU, me ofrecía de entrada la oportunidad, por un lado, de investigar sistemáticamente (el cargo era de investigador) y, por otro lado, relacionado a la realidad uruguaya, en particular, al período de la dictadura y la restauración de la democracia. Y si a eso se le agrega que el director del Centro era el profesor José Pedro Barrán y que compartía mi trabajo con un núcleo de docentes muy calificados, todo lo vivía como un regalo o recompensa para un noble docente que se iniciaba en la carrera universitaria retornado al país luego de casi diez años de exilio, y eso me daba más ánimo a la hora de aportar a la tarea colectiva de la reconstrucción de la Universidad y del país luego de la dictadura. Ni que hablar que el contexto era de entusiasmo e ilusión generalizadas tras el fin de la dictadura, vivíamos un «optimismo democrático» que potenciaba los estados de ánimo y los proyectos personales.

¿Abí trabajaste con José Pedro Barrán y con Lucía Sala?

Ambos, Lucía en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) y José Pedro en el CEU. Los centros se crearon en Humanidades por decisión del Consejo de Facultad inmediatamente después de finalizada la intervención y de reinstaladas las autoridades legítimas con el decano Mario Otero (que había estado preso y luego exiliado en México) al frente de la institución. Y, justamente, se crearon como un ámbito institucional diferente a las licenciaturas o institutos, para profundizar en la investigación sobre el período de la dictadura con el argumento de no olvidar, de restituir y acercarse a la verdad sobre la tragedia ocurrida en el país.

¿De quién fue la iniciativa de crear esos dos centros de estudios?

Fue del Consejo de la Facultad.⁴

¿Entonces se puede decir que el impulso a la historia reciente nació en el propio Consejo de Humanidades?

Sí, al menos en la Universidad y a nivel de un ámbito institucional especializado. El Consejo hizo una apuesta en ese sentido con la creación del CEL y del CEU. No fue fácil, supongo, porque Humanidades era una facultad organizada en torno a los institutos clásicos de carácter disciplinario y su organigrama académico estaba muy estructurado sobre la base de las licenciaturas. Fue una apuesta fuerte, además, por la decisión y la aceptación de que José Pedro Barrán fuera el primer director del CEU y de que Lucía Sala, que había vuelto de un prolongado exilio en México, se encargara de la dirección del CEL. O sea, se puso al frente de los centros a dos profesores titulares que eran referentes de la historiografía nacional.

Así que tu participación en ese emprendimiento que daría origen a la historia reciente como campo empezó en 1986 como ayudante interino grado 1.

Sí, era grado 1 interino. Empecé la carrera docente desde abajo mismo y recorrí todo el escalafón mediante concursos, que tampoco fueron fáciles porque en la Universidad, al menos en aquellos tiempos, un título de Moscú no puntuaba lo mismo que un título de París VIII o de la UNAM, aunque fuera de posgrado. Otra cosa que tiene que ver con el tema de la institucionalidad fue esa novedosa propuesta de estudiar la historia reciente. En efecto, el objetivo del CEU era inicialmente elaborar una cronología de la historia reciente de Uruguay, y eso estaba muy matizado como meta. Yo creo que Barrán entendía muy bien, y todos lo acompañamos, que, a través del rescate de los hechos, su datación, su organización cronológica y documentada, se iba a poder lograr una reconstrucción histórica ordenada frente a la abigarrada y convulsionada sucesión de acontecimientos fundamentales que caracterizaron el período 67-85. Y que también así se podía contribuir a alcanzar un mayor grado de veracidad o autenticidad en materia de producción historiográfica sobre la historia reciente del país, en la medida que, una vez recuperada la democracia, esa etapa devino muy disputada políticamente en interpretaciones y negaciones tras la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad.

Ese enfoque en torno a la cronología podía contribuir más que si se promovían líneas de investigación de corte ensayístico por investigadores individuales o el abordaje de problemas o temas más abstractos y transversales como, por ejemplo, proponerse a estudiar el miedo o la represión bajo la dictadura. José Pedro defendía mucho la cronología, no solo como un gran instrumento ordenador, sino también como una auténtica metodología para la reconstrucción de los hechos del pasado reciente, además de que aportaba a una mayor objetividad en la pretensión de búsqueda de la verdad de lo sucedido realmente. El profesor Carlos Demasi estaba en el CEU desde su fundación, yo ingresé un año después, y él fue quien asumió la tarea de coordinar ese trabajo. También estaban como docentes Jorge Landinelli y Sara López. Nos dedicamos entonces a elaborar el primer

4 El 5 de julio de 1985 el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias aprobó la creación del CEL y del CEU. Cinco años después, cuando en marzo de 1990 la Facultad de Humanidades y Ciencias pasó a llamarse Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se llevó adelante una reestructura de sus institutos y departamentos. Entre otras innovaciones durante el transcurso de ese año el CEL y el CEU fueron red denominados como Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (CEIL) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Véase: <https://fhce.edu.uy/menu-secundario-estudios-interdisciplinarios-centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos-historia/>.

tomo de la cronología con múltiples entradas, es decir, no era una cronología circunscripta a los temas políticos y la represión, sino que buscaba contextualizar más ampliamente los acontecimientos en clave comparada (se registraban los hechos regionales y mundiales), incorporando además otras dimensiones de la realidad: cultural, social, sindical, económica, internacional, además de extractos parciales de documentos significativos que transcribíamos. En síntesis, eran cinco columnas temáticas documentadas. Finalmente, el libro se publicó en 1996. Después siguió un segundo tomo coordinado también por Carlos Demasi que abarcó el período 1973 a 1980, publicado en 2004, y con la participación en el equipo de Oribe Cures y de Rosario Radakovich.

El primer tomo va del 67 al 73.

Sí, *La caída de la democracia*,⁵ después viene *El régimen cívico-militar*.⁶ Nunca salió el tercer tomo que refería a la transición a la democracia del 80 al 85. Lo que pasa es que fue muy artesanal la construcción de la cronología, dio un laburo bárbaro. La fuente principal para su armado era la revisión de prensa, fuentes abiertas con las noticias y documentación que encontrábamos en los diarios y revistas, ordenadas por fechas y según las distintas entradas temáticas de la cronología. Recordemos que, fruto de la ley de impunidad, no había acceso a documentación estatal original de la época de la dictadura, ni qué decir de la represión, sus organismos y responsables, las víctimas y las circunstancias de sus muertes y desaparición forzada. Después, en un segundo momento, resultó un trabajo enorme transformar la información recopilada en un libro, porque no existía un formato editable que pudiera abarcar la extensión dispar de las cinco columnas a lo largo de una sola hoja, además de los documentos y fotos de época que se incluían. Por último, el volumen del conjunto de la investigación, nada menos que tres tomos. Hubo que hacer una inversión muy grande que, gracias a la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), donde estaba el inolvidable Carlos Fuques como responsable de ediciones, se pudo resolver. Fuques nos dijo de entrada que esos libros eran un aporte muy importante para saber lo que había sucedido en el país después de más de una década de mentiras, falsa información y secretos de la dictadura, y, por lo tanto, eso se publicaba aunque FCU fuera a pérdida. Cumplió, y acertó en todo.

Volviendo un poco a lo personal, como ya señalé, estos proyectos me introdujeron en el estudio sistemático de la historia reciente, y por ahí empecé a acumular datos, lecturas y posibles enfoques a través de intercambios con los colegas y discusiones. El trabajo en el Ciclo Básico de Derecho (en los cursos de Ciencia Política y de Historia de las Ideas) me aportó reflexiones teóricas y conocimientos de otras experiencias históricas latinoamericanas y europeas en el intento por especializarse en la investigación del período en el Uruguay y del fenómeno del autoritarismo y de las dictaduras en la modernidad, y por volcar algunos de sus resultados en la enseñanza de Ciencia Política. Lo de incursionar también en la enseñanza de la Filosofía en Humanidades lo intenté en algún llamado más, sin resultado, pero finalmente yo mismo cerré esa búsqueda, porque además estaba muy entusiasmado con la perspectiva de seguir investigando y acumulando en la línea en la que ya estaba.

¿Cómo siguió tu carrera en la Universidad?

En 1988 obtuve el régimen de Dedicación Total (DT) en la Universidad de la República. Fue otro momento muy importante en mi carrera docente, temprano, muy temprano, de las primeras DT después de la dictadura. Creo que en primer lugar se reacomodó un poco la situación de los docentes que tenían DT antes de la dictadura, se los reincorporó, e inmediatamente después vinieron los primeros nuevos llamados en los que tuve suerte y méritos en la evaluación para poder ingresar. Unos años después concentré la labor docente en Humanidades (solo en el CEU) y dejé Derecho. La presentación a la DT me obligó a hacer un proyecto, y ese proyecto de investigación tuvo que ver con algo que para mí era importante en aquel momento político del país, que era el llamado *tercer batllismo*, que incluía entonces la propuesta del presidente Sanguinetti y del Foro Batllista para la renovación ideológica del Partido Colorado y la presencia de jóvenes en la Corriente

5 Demasi (1996).

6 Demasi (2004).

Batllista Independiente, o en otros agrupamientos colorados, y el restablecimiento de centros de estudio e investigación. Bueno, yo pensé en aquel contexto que era muy importante dedicarle un esfuerzo de reflexión y de investigación que después se transformó en una línea de trabajo que sostuve durante muchos años, y que en términos más generales se centraba en el estudio de la democracia posdictadura: la impunidad, la reconstrucción de los relatos de la «excepcionalidad» de la sociedad uruguaya, la revitalización de las ideas liberales y el anticomunismo «ilustrado». Y, sobre todo, cómo la política y los políticos profesionales usaban la historia reciente de la dictadura a través de sus interpretaciones amplificadas por los grandes medios para revertir los ejes explicativos de la etapa pre-dictadura y nunca llegar a explicar la dictadura misma. Esto era sustituido por un «consenso acrítico», de rechazo a la dictadura, como parte de los buenos modales y ritos de la democracia liberal. También se escamoteaba así analizar la responsabilidad política de los partidos tradicionales en un proceso autoritario que fue «cívico-militar», no solo militar. Aquí la «teoría de los dos demonios» y luego del «maligno» resultaron funcionales a ese descentramiento.

¿El de Ciencia Política que dictas en Humanidades ha sido siempre tu curso principal en materia de enseñanza?

Sí. Resultó que el profesor Javier Gallardo del Instituto de Ciencia Política, que dictaba en Humanidades el curso de Ciencia Política, concentró sus funciones docentes a la Facultad de Ciencias Sociales cuando esta se creó en 1991. Y entonces en 1992 gané por concurso el cargo de profesor adjunto efectivo (grado 3) para hacerme cargo de esa materia que dicto hasta el presente. El curso en lo fundamental tiene tres módulos. Hay una parte de autores y teorías clásicas insertas en el contexto histórico en que se produjeron: reforma protestante, contractualistas, marxistas, socialdemócratas, pensadores democráticos, liberales, elitistas, conservadores, entre otros; una segunda parte sobre democracia, teoría del Estado, partidos políticos y actores sociales; y una tercera sobre América Latina y Uruguay, incluido el estudio de las dictaduras de «nuevo tipo» en el Cono Sur.

¿Abi habrás podido satisfacer tu interés por la Filosofía Política.

Sí, tengo una reflexión sobre eso, pero antes les iba a completar el panorama de mi trayectoria universitaria. Desde el 2003 hasta el 2010 ejercí la dirección del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Fue otro momento de inflexión académico-institucional en la Facultad de Humanidades vinculada a los centros porque se intentó, mal o bien, incorporar en forma pionera en la Udelar la «interdisciplina», y abordar un objeto de estudio a través de distintas perspectivas transversales, no solo disciplinarias. Eso tenía que ver también con la diversificación del perfil docente de los cargos del Centro: lingüística, letras, antropología, historia. En ese marco del CEIU recuerdo que hicimos una convocatoria muy amplia para organizar desde la Universidad de la República un evento académico internacional que resultó muy importante y calificado, con asistencia numerosa, en la Intendencia de Montevideo, con motivo de los 30 años del golpe de Estado y la dictadura en el Uruguay, en el año 2003. También en ese tiempo fui responsable de diferentes proyectos y equipos de investigación sobre temáticas del pasado reciente que fueron seleccionados y financiados con apoyos de CSIC, ANII o la Intendencia de Montevideo (Departamento de Cultura). Destaco, entre otros, al Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (Geipar) que coordiné, integrado además por Vania Markarian, Aldo Marchesi, Carlos Demasi y Jaime Yaffé. Fui director del CEIU hasta mi elección como Decano de la Facultad en el 2010. Ejercí ese cargo durante dos períodos: de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018.

Debo mencionar algo importante. En el año 2005, en el marco de un convenio entre la Udelar y la Presidencia de la República, se llevaron adelante las Investigaciones Históricas y Arqueológicas sobre Detenidos Desaparecidos. Fui designado por la Presidencia de la República como uno de los tres coordinadores de la investigación histórica, junto con los profesores José Pedro Barrán y Gerardo Caetano. Luego realizamos una división interna de trabajo y por otras ocupaciones que tenían José Pedro y Gerardo, quedé como coordinador del trabajo del equipo, que llegó a contar con veintiún investigadores en distintos momentos, responsabilidad que cumplí durante once años, desde 2005 hasta 2016.

No trataré de hacer ahora una evaluación política y académica, ni mucho menos, de mi administración de la Facultad como decano, pero sí aprovecho la oportunidad para resaltar, aparte del trabajo académico personal que ya relaté, algunos ejemplos de lo que considero logros institucionales y colectivos alcanzados a través de mis ocho años de gestión y la del Consejo de la facultad: la reforma de los diez planes de estudio de licenciaturas y tecnicaturas; la inauguración del programa de doctorado con sus seis menciones disciplinarias; el desarrollo y descentralización de la facultad en el interior del país, con nuevas carreras y tecnicaturas y la radicación de grupos de investigación; la aprobación del plan director de gestión y del nuevo organigrama académico de la facultad; la creación del Programa Humanidades Digitales y Abiertas; el desarrollo de una intensa cooperación con ANEP y con el Consejo de Formación en Educación; la promoción del título de Doctora Honoris Causa a Luisa Cuesta otorgado por la Udelar; la participación en la dirección del Instituto Confucio; la concreción de la curricularización de la extensión; la tramitación del predio para una nueva sede de la facultad y mejoras de las condiciones en el edificio-sede.

Pero en mis dos períodos como decano también acontecieron momentos difíciles, y pongo dos ejemplos extremos que de manera simplificada lo ilustran: el robo nunca aclarado al laboratorio del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), espacio modesto que instalamos con mucho esfuerzo y financiamiento de la facultad, y por sobre todo la amenaza a la integridad física de los integrantes del equipo universitario de arqueólogos que investigaban sobre desaparecidos y asesinados en el marco del acuerdo con la Presidencia de las República. Esto podía haber tenido consecuencias incalculables, en la medida que en el laboratorio se encontraban en ese momento restos de personas asesinadas bajo la dictadura que habían sido exhumados por disposición de la Justicia, y que fueron depositados allí para hacerles un peritaje técnico y verificar si existían secuelas de golpes *pre mortem* que permitieran comprobar torturas y determinar la forma de muerte. Extrañamente esa sección del laboratorio no fue revisada por quienes entraron, aumentando aún más el enigma sobre los objetivos concretos del accionar ilegal y provocador de los servicios, que, por otra parte, permanece impune. El otro hecho a destacar durante mi segundo mandato, de distinto tipo que el anterior, refiere a que tuve que desempeñarme durante casi cuatro años sin el auxilio de asistentes académicos ante la negativa de uno de los órdenes a votarlos por ciertas razones que invocaban en aquel entonces. En ese período en particular fue todo muy difícil, de mucho trabajo y dedicación.

Con la elección al Rectorado de la Udelar del profesor Rodrigo Arim, en 2019 fui designado por el Consejo Directivo Central presidente del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República (SRI), hasta 2021, ámbito de trabajo novedoso y de nuevos aprendizajes para mí, y que además debí cumplir en la época más difícil de la pandemia, con buena parte de las actividades, principalmente las de movilidad, suspendidas por la emergencia sanitaria mundial. Desde enero del año pasado, 2022, me desempeño como secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), red fundada en 1991 con participación muy destacada del exrector de la Udelar Jorge Brovetto, que actualmente nuclea a 41 universidades públicas de seis países del continente, y que tiene su sede en nuestra capital. Asimismo, hasta diciembre del presente año, 2023, fecha límite para jubilarme como docente en la Universidad al cumplir los setenta años de edad, seguiré desempeñándome como codirector del CEIU y profesor titular de la materia Introducción a la Ciencia Política para estudiantes de Historia.

Ese ha sido, en resumen, mi periplo universitario de casi cuarenta años.

Bueno, te faltó mencionar que en 2014 te postulaste como candidato al rectorado de la Udelar.

Sí, es cierto. Fue un honor y una experiencia muy buena a pesar de no haber logrado ser electo, y además, a pesar de que ese periplo político tuvo momentos poco agradables, con obstáculos y zancadillas de todo tipo que se interpusieron intencionalmente en el camino a mi candidatura. Pero, sí, el resultado en 2014 fue adverso y terminó con la elección final del profesor Roberto Markarian como nuevo rector. Igualmente, para mí, en términos generales la experiencia y el aprendizaje resultaron positivos y enriquecedores desde el

punto de vista político. Adquirí un conocimiento más profundo de la Udelar y de su gestión en todo el país, logré un mano a mano con cientos de universitarios (participé en treinta y dos debates en todo el territorio nacional). También estoy muy agradecido por los apoyos colectivos recibidos, sobre todo en el orden docente. Fue importante que mi candidatura contribuyera a que un sector numeroso de universitarios, que en lo fundamental había acompañado el importante proceso de cambios en la Udelar llamado la *segunda reforma*, encabezado por el rector Rodrigo Arocena, tuviera una referencia electoral y no se disgregara rápidamente, además de las novedades y actualizaciones que aportamos a través de una plataforma programática propia y del sector que me acompañaba en los tres órdenes universitarios. Creo que tal finalidad se logró aún en la derrota, y con seguridad eso tuvo algo que ver cuando dicho movimiento pudo expresarse nuevamente, cuatro años después de mi intento, en las siguientes elecciones a rector.

Ahora sí, volviendo a la pregunta de ustedes sobre mi propensión a la Filosofía Política, yo les había adelantado que siempre me había interesado dentro de mi formación disciplinaria. Para simplificar, diré que ese interés remitió a un núcleo duro de temas donde estaba la reflexión sobre el poder, el Estado, las formas del cambio social, la violencia política, el autoritarismo, el tránsito de regímenes democráticos a dictatoriales, el liberalismo, y otros similares. O sea, un núcleo de temas y problemas que se repetía en el tiempo, no sé, quizás mezclado con las interrogantes que surgían de las propias vivencias y reflexiones personales y generacionales de la historia reciente en el país y la región, que fui traduciendo en un interés teórico y convirtiendo en un objeto de estudio, con una buena base empírica reconstructiva de los hechos y la lectura atenta de autores clásicos y contemporáneos que abordaron esos temas de mi interés insertos en distintas experiencias históricas vividas por la humanidad. Y, bueno, la imbricación entre Historia, Ideas y Filosofía ha sido una de las constantes en mi formación, investigaciones y docencia. No es casual que el curso de Ciencia Política del que soy responsable hace tantos años también esté estructurado en buena medida sobre la base de estos ejes. Creo que lo que permaneció «militante» de mi formación filosófica inicial fue una aspiración hacia la generalización conceptual, hacia la abstracción, salirse un poco de investigar lo coyuntural, lo contingente. Para reconstruir los hechos y acontecimientos nacionales y regionales que caracterizaron la época, sí, pero con pretensión de insertarlos en una reflexión mayor, más universalista y humanística, filosófica, en síntesis. Aunque suene pretensioso, y no lo es, fue la aspiración de insertar el pasado reciente de Uruguay en las grandes coordenadas de la historia y en las reflexiones sobre las dictaduras, el autoritarismo, la violencia, la guerra, la muerte intencional, la enemistad, las revoluciones derrotadas, etc. De alguna manera, he buscado en este periplo universitario, aunque creo que no lo he logrado siempre, pero lo he buscado, profundizar en la dimensión teórica de los fenómenos concretos desde el aporte de la Ciencia Política, la Historia de las Ideas y la Filosofía Política.

¿En qué momento te empezaste a reconocer como historiador?

Bueno, ahí hubo influencias múltiples, pero nunca me convenció una autodefinición, en solitario.

¿Pero cuándo te consideraste parte de ese campo disciplinario?

No, nunca me sentí historiador, incluso por respeto a los historiadores, que en Uruguay son una escuela de muy larga data y con referentes muy importantes. No me formé en historia, y quizás por ello nunca me apropié del término *historiador*, y si alguien por costumbre, algún periodista, me presentaba así, no me sentía muy cómodo pisando terreno ajeno.

¿Pero no te considerarás un historiador?

En realidad, capaz que no considero tan importante esa autoidentificación, tampoco me definiría como filósofo. La vocación interdisciplinaria del CIEU y las derrotas políticas en la vida me han hecho perder aquel afán de las identidades fuertes, ni que hablar de las identidades académicas, algo menor en la vida.

Resulta claro que no cultivás la Filosofía, pero es igualmente claro que has producido Historia, que tenés producción historiográfica y que tus colegas a la hora de discutir los resultados de tus investigaciones y producciones son fundamentalmente los historiadores.

Sí, aunque a veces se cruza algo de politólogo. Pero cuando era muy joven tuve una influencia grande del profesor Julio Rodríguez, en los tiempos del exilio de Moscú. Era un gran historiador, marxista, riguroso, erudito y autoexigente para todo lo que hacía. En multitud de conversaciones mano a mano con él, fue de alguna manera volcando su visión en consejos personales, y yo los fui asumiendo, me importaba seguirlos para mi formación. Luego, desde 1986, ya en la vuelta a Uruguay y trabajando en el CEU, José Pedro Barrán, sin ser yo alumno directo de él, en sus evaluaciones como director, en las reuniones de equipo que promovía, en los consejos personales que generosamente me daba al comentar el resultado de algún trabajo mío, en primer lugar transmitía su infinita modestia de buena gente, a pesar de ser el gran intelectual que era, y también resultó una influencia muy importante en este encaminamiento, digamos, hacia mi mayor interés por la Historia y en ganar más confianza en lo que hacía. José Pedro era muy exigente consigo mismo, pero no escatimaba elogios y en darte para adelante si realmente consideraba que aportabas. También Carlos Demasi, un historiador de fuste, un memorioso extraordinario de los acontecimientos, muy riguroso con los temas y formador de muchas generaciones en tantos años de docencia. Trabajar al lado de él fue una manera de continental otras inquietudes que uno tenía, variadas o más desordenadas, para encaminarlas hacia un objetivo más centrado en lo historiográfico.

Y creo que lo decisivo después fue haber trabajado en la coordinación del equipo de Presidencia, que me puso directa y exclusivamente en el logro de un objetivo —no elegido personalmente—, de mucho compromiso ciudadano, y que indudablemente me obligó a «hacerme historiador» para encarar esas investigaciones sobre las víctimas detenidas desaparecidas y asesinadas por la dictadura en Uruguay, Argentina, Chile y otros países de la región; estudiar sus organizaciones de pertenencia, los aparatos de Estado especializados en la represión, el Plan Cóndor y la revisión de profusa documentación en los archivos estatales.

Yo creo que por ahí va, aunque no sé, no me resulta del todo afín definirme como historiador, porque creo que el resultado del conjunto de mi labor, o como quiera llamársele, es más un híbrido entre aquella formación inicial y vocacional por la Filosofía, la incorporación luego de la Ciencia Política, y un interés muy vinculado a la historia del país y de la región por ser mi propia historia personal y la de mi generación, entre otras. A ello también contribuyó el trabajo conjunto durante años en un centro interdisciplinario como el CEIU y más tarde en el equipo de Presidencia con arqueólogos y médicos forenses, abogados especialistas en Derechos Humanos, archivólogos. Esas experiencias, discusiones y conocimientos compartidos me han dispuesto siempre a la apertura hacia otras disciplinas académicas y saberes no formales y hacia un intento de trabajar en un plano más cruzado y de integración que en la defensa de un oficio en particular o de una especialidad concreta o título académico. Aunque es cierto que los resultados de las investigaciones tienen más que ver, sí, con aportes concretos a la historia reciente o a la historia política del último medio siglo, más que a la Filosofía.

Hablando de la historia reciente, parece evidente que tu contribución al campo historiográfico tiene que ver con haber impulsado, en un momento en el cual eso no estaba en la agenda de la investigación, por lo menos como un eje central, el estudio de lo que entonces era pasado reciente. ¿Eso sucedió espontáneamente por las dinámicas académicas en las que te fuiste inscribiendo o fue algo que en algún momento visualizaste y decidiste que había que empujar?

Creo que fueron ambas cosas. El CEIU como relaté tenía desde su fundación una orientación muy definida respecto a su objeto de estudio central, y por lo tanto, trabajar allí era cumplir con esa directiva institucional para que el centro no se diversificara en varias líneas de investigación, sino que se concentrará en la historia reciente. Pasado el tiempo y acumulados resultados tangibles, el centro diversificó sus líneas de investigación y perfiles docentes.

¿Se usaba el término historia reciente desde el inicio?

No, se hablaba de «historia de la dictadura» o de «crisis de los años sesenta», más que un término que englobara el período histórico en su conjunto. Incluso en algún momento se criticó que usar *historia reciente* era

como no querer nombrar a la dictadura por su verdadero nombre («al pan pan...») y que por lo tanto debía llamarse «historia de la dictadura» como tal. Eso yo creo que se fue comprendiendo y superando, fue parte de debates y diferentes opiniones. Tampoco fue una pulseada exclusiva de Uruguay y la Universidad, aunque aquí siempre llegamos tarde a los grandes debates. En Humanidades no fue fácil alcanzar una legitimidad o estatus reconocido entre pares para la historia reciente como un área de conocimiento y una temporalidad específicas dentro de la historia contemporánea, incluidos los aspectos metodológicos de su abordaje, a pesar de que desde el punto de vista social, digamos, había una total aceptación de la necesidad de estudiar el período. Frente a una concepción de alguna manera más tradicional desde el punto de vista historiográfico, y muy estructurada institucionalmente desde el punto de vista de la enseñanza y de la investigación radicada en el Instituto de Historia, fue trabajoso en el inicio incorporar la dimensión reciente de la historia nacional o los estudios regionales comparados o historizar la represión o la clandestinidad, incorporar los temas de la memoria y los testimonios orales como fuentes legítimas, temas alejados de los focos de la Historia con mayúscula y las metodologías consagradas por el antiguo oficio del historiador. Más aún, porque eran estudios radicados en un centro interdisciplinario y no en un instituto. La incompreensión incluyó detalles, por ejemplo, no resultó fácil en los llamados a cargos docentes resolver cómo se evaluaba a quienes nos dedicábamos a esta rama de la Historia y participábamos en trabajos que necesariamente eran colectivos, en equipo. De alguna manera fue un abrirse paso, digamos, con producción de calidad y con repercusiones de los resultados de esas investigaciones, porque si no hubiera habido repercusiones en la opinión pública, la historia reciente, quizás, seguiría siendo marginal académicamente o considerada un apéndice del periodismo de investigación.

Por supuesto que esto coincidió también con un contexto de época, digamos, en la cual el interés por lo que había sucedido durante la dictadura, por las víctimas y por las claves de la represión, eran una demanda social, para llamarlo de alguna manera, que trascendía lo académico, que trascendía al mundo universitario, y que todo eso de alguna manera coincidió con la decisión de la Presidencia de convocar en 2005 a los equipos de investigación, historiadores y antropólogos. Pero estaba todo este proceso por detrás, por lo menos desde el año 85 en adelante, y los reacomodos con nuevas disciplinas y su legitimación en los organigramas universitarios.

La ley de Caducidad no solo había impedido la intervención de la Justicia en el juzgamiento de los delitos lesa humanidad, sino que había cancelado también las posibilidades de investigar con fuentes originales el período de la dictadura. Gerardo (Caetano) y Pepe (Rilla) publicaron en 1987 la *Breve historia...*, muy apoyados en la lectura de prensa, leyes y decretos, como fuentes fundamentales de ese libro pionero.⁷ Desde entonces el acceso a archivos del Estado y a documentos era una demanda y una necesidad que de alguna manera pudo luego canalizarse parcialmente —pero recién veinte años después de recuperada la democracia— a través del ingreso y la actuación, entre otros, del equipo universitario de historiadores en el marco del convenio con la Presidencia. Eso empujó también a que las investigaciones sobre historia reciente tuviesen otra visibilidad y otra legitimidad, que no la tenían antes. Y un paso más adelante se alcanzó con la «judicialización» de dichas investigaciones desde 2011, pero habían pasado más de dos décadas desde que se inició este proceso de cambios, en 1985, y por supuesto que también costó en la Academia como reflejo de la sociedad.

Cambiamos de tema, ¿cómo concebís la relación entre soporte documental, teorización y narrativa histórica? Tenés trabajos bien distintos en ese sentido: algunos son muy apegados a la transcripción, ya sea del testimonio o del documento, en los que, más que narrar explícitamente, exponés a través de fragmentos documentales cierta reconstrucción de los hechos. Esto se observa en muchos trabajos tuyos. Pero también hay otros, menos, que son muy teóricos, bastante despojados de «evidencia» documental. Da la impresión de que, en tu caso, en cualquiera de las dos situaciones planteadas, la narrativa, que es el principal instrumento de producción textual de los historiadores, no es el componente principal. ¿Esto es resultado de una opción deliberada de tu parte? ¿Te gusta trabajar así por algún motivo? ¿Crees que ahí está tu diferencia con «los historiadores»?

7 Caetano y Rilla (1987).

No, no es una cuestión de perfilismo o de estilo de escritura. Creo que me he ido haciendo en etapas no solamente intelectuales, sino por mi propia sensibilidad y cómo sacarla para afuera. He tenido momentos, quizás, más de reflexión teórico abstracta, o más de escritura poética, pero en el fondo me sigue influyendo, y no me aparto demasiado, de la etapa primera, la de «cronólogo», en la que había que atenerse a los hechos casi en un sentido positivista. ¿Por qué digo esto? Porque, evidentemente, hay momentos en la producción mía en la cual, yo desaparezo, no quiero que se note que estoy ahí, no quiero interpretar o que se escuche mi voz. Es indudable que eso es una ilusión. En todo caso, si estoy ahí es para ordenar los documentos o ubicar las fechas de los acontecimientos y nombres, describir el accionar de sus protagonistas. Esto tiene que ver, también, con que al comienzo de las investigaciones no había una narración dura sobre el período de la dictadura. Había textos, como decíamos del libro de Gerardo y Pepe, contruidos sobre la base de fuentes abiertas y públicas o sobre los testimonios de las víctimas en otro registro, en una clave más vinculada a la memoria y fuentes orales y no propiamente a la historia y al documento escrito. Faltaba un relato histórico documentado que relacionara los hechos materiales con las vivencias personales, los casos aislados y los fragmentos de la realidad con una visión de conjunto del período, que restableciera como objeto de estudio la clandestinidad, la huelga general, las formas de resistencia o los secretos del Estado, la solidaridad internacional y el exilio.

Yo creo que los resultados del trabajo en el marco del convenio con Presidencia, aunque ha habido otros productos académicos antes, marcó el hecho de documentar, periodizar e interrelacionar, sobre todo en los casos referidos a la historia de la represión, que es una parte importante de la historia política reciente. Y la historia de la represión, de la clandestinidad, de las resistencias a la dictadura es un escenario de fragmentación, de retazos, de aislamientos, además del tiempo transcurrido al presente que borra los detalles. Y, por lo tanto, era necesario hacer un esfuerzo muy grande de reconstrucción hasta incluso entrar en los sótanos de la dictadura, en los secretos, los centros clandestinos de detención, los sitios de enterramiento. No quiero exagerar, pero también es cierto que muchas veces encontrar o desechar una fecha o confirmar o rectificar un nombre llevó mucho tiempo, a veces tiempo inútil, porque finalmente había que desechar el dato. Lo mismo que la tarea de vincular los hechos que cronológicamente aparecían distantes en el tiempo. Por ejemplo, en la reconstrucción de las oleadas represivas o hilvanar los momentos de seguimiento y posterior detención de dirigentes. O chequear la veracidad de los datos en los documentos de la inteligencia del Estado que tenían incorporada la mentira institucional a su propia confección. O sea, no es que uno estudiara almanques donde las fechas ya estaban señaladas con los feriados y cuartos menguantes identificados. Fue un arduo trabajo historiográfico y seguirá siéndolo, porque no hay nada definitivo en estas investigaciones sobre el pasado reciente, nuevos documentos o testimonios, o libros van a completar y corregir lo que hicimos hasta ahora. Y no puede ser de otra manera, no lo es en ningún lado en que haya sucedido una dictadura.

Entonces, hay una parte que refiere más a la historia de la represión en libros como el de la historia del Partido Comunista en dictadura,⁸ o ni que hablar en las fichas de los desaparecidos,⁹ *15 días*,¹⁰ ¿Qué hacía usted el 27 de junio?,¹¹ o el de la intervención de la Universidad.¹² Yo me he sentido más cómodo y me ha resultado más honesto, entre comillas, o más objetivo, con esa manera de dejar que la historia se cuente sola. Dejar que hablan los acontecimientos y los testimonios sobre esos acontecimientos, incluso rescatar aquellos hechos que en períodos normales no tienen un rango de hecho histórico, pero que por lo excepcional

8 Rico (2021).

9 Barrán, Caetano y Rico (2007).

10 Rico (2005a).

11 Rico (1994).

12 Rico (2003).

de la situación de clandestinidad e ilegalidad lo adquieren, por ejemplo, una volanteada o una manifestación relámpago, una reunión de dirigentes, la letra de una canción o un minuto de silencio.

También creo que el mayor tiempo dedicado a toda esa producción tuvo más que ver con la escritura y no tanto con la investigación en sí misma. La escritura desgasta mucho emocionalmente, tenés que tener en cuenta muchas coordenadas importantes. ¿Cómo decir preservando la intimidad o el honor de las personas involucradas? ¿Cómo escribirlas sin herir susceptibilidades? Ustedes ahora me dicen claramente «pero en este libro hacés esto o decís esto de otra manera distinta», pero lograr esos formatos de edición y tonos narrativos no ha sido fácil y es lo que más me ha llevado: escribir, reescribir, buscar sinónimos, titular, corregir una vez y otra vez hasta quedar conforme con uno mismo y «soltar» el libro o el artículo para que deje así de pertenecerte definitivamente. Pero es un proceso desgastante. Que insume mucho tiempo y que cuando concluye casi no querés saber nada más con el libro publicado, difícilmente lo volvés a leer.

Hay que correlacionar los acontecimientos dentro de una trama narrativa a partir de la ordenación de las fechas para poder hacer inteligible en el tiempo esos acontecimientos, y además, incorporar los testimonios para aclarar o negar los hechos, para complementar o para rebajar su importancia. En el libro de la huelga de 1973 esto es notorio, en el libro del partido también es notorio. Allí hay decenas y decenas de títulos y subtítulos (más fotos) y testimonios. Por supuesto que tenés que ser totalmente honesto con las vivencias de las personas o del grupo que testimoniaron porque confiaron en el investigador y estuvieron de acuerdo en cedértelo. Y vos los hacés públicos. También te podés equivocar y cometer errores. Esto aumenta el nivel de autoexigencia del autor.

Hay otros trabajos en los cuales, por el contrario, me permito opinar abiertamente y con autoría expresa, que son los que intentan salir de esa reconstrucción cronológica y periodizada de los acontecimientos y del testimonio de las víctimas o el documento de los represores, y por lo tanto se busca una reflexión sobre la caracterización de la dictadura o sobre las lógicas represivas o la relación entre el aparato clandestino del Estado y las formas legales de su actuación, la división del trabajo entre militares y políticos, el anticomunismo, etc., etc. Es una reflexión más ensayística, más amparada en las teorías de la ciencia y la filosofía políticas para actualizar el diálogo entre la reconstrucción de nuestras peripecias nacionales específicas y los ejemplos de la gran historia contemporánea y los estudios clásicos.

Por ejemplo, en el caso del artículo sobre la dictadura cívico militar,¹³ ahí hubo un intento de dialogar con otras elaboraciones que se han hecho sobre dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, desde experiencias históricas regionales (nuevos autoritarismos) y mundiales (fascismo, nazismo). Quizás, y con modestia digamos, eso encierra un intento también de poder insertar nuestra peripecia histórica en lo que han sido las continuidades y rupturas de la historia en otros momentos de la humanidad y en otras regiones del mundo. A veces pensé que la caracterización de «nuevo autoritarismo» de Guillermo O'Donnell y otras similares, como el «Estado clandestino» de Eduardo Duhalde o el «poder desaparecedor» de Pilar Calveiro, si bien daban cuenta de la especificidad de los procesos latinoamericanos en los años 60-80 del siglo XX, nos alejaban un poco del aparato conceptual y de las experiencias históricas sistematizadas a partir del estudio de esa otra dimensión más universal, más internacional, que tuvieron los totalitarismos, autoritarismos, fascismos, las dictaduras o los gobiernos no democráticos en la historia contemporánea o los tiranos o los dictadores en la Antigua Grecia y Roma. En otro plano, esos diálogos atemporales se restablecen en la enseñanza, no solo en la investigación, y de ahí la propuesta que resumo en los programas de mis cursos de posgrado, ya sea en la Maestría de Historia Política radicada en la Facultad de Ciencias Sociales como en la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Humanidades.

13 Rico (2009).

*Ese intento también aparece en trabajos anteriores tuyos, como el del 68^a y en el capítulo de *Cómo nos domina*,¹⁵ en el que desarrollás la idea del «camino democrático a la dictadura». Tienen un enfoque reflexivo, teórico y analítico bien distinto de otros que ya mencionaste, como el de la intervención de la Universidad y el de la huelga general, entre otros, que son más bien recopilaciones ordenadas de acontecimientos, documentos y testimonios.*

Sí, unos son libros para «usar y citar». Como decía Barrán: «las cronologías son libros para que todo el mundo los transcriba y no diga de dónde sale la información». Lo mismo podría decirte de los cuatro tomos de las investigaciones históricas sobre detenidos desaparecidos para la Presidencia o sobre los tres tomos de la investigación sobre dictadura y el terrorismo de Estado para la Universidad.¹⁶ Pero es esa la función que cumplen. En otras publicaciones hubo una intención personal, digamos política en sentido amplio, porque fueron libros que salieron ex profeso en determinadas coyunturas para polemizar, con cierto sentido de la oportunidad. Sucedió con el libro de la huelga general. El contenido del libro se dedica a rescatar día a día esa épica de resistencia al golpe de Estado. Lo mismo podría decirse del libro sobre la Universidad bajo la intervención, que es una derivación del de la huelga, o del ¿Qué hacía usted el día del golpe de Estado?, que tuvo la intención de llegar a una generación más joven que no te iba a leer un libro tan voluminoso como *Los 15 días que conmovieron al Uruguay*, llegarle a esa generación en clave de videoclip, de historia en movimiento, con fotos, títulos. Tuvo ese objetivo y por eso fue escrito de esa manera.

Pero vuelvo a lo que estaba diciendo sobre la oportunidad social de determinados libros, como *Los 15 días* o *La Universidad desde el golpe a la intervención*. Resultaron, de alguna manera, parte de una polémica con los politólogos en los que traté de hacer un enfoque sociocrático y no partidocrático de la historia reciente del Uruguay, un intento de repositionar a la sociedad como sujeto político o, si se prefiere, de un sector importante de ella, como es el movimiento popular, el movimiento sindical y el movimiento estudiantil universitario, en un acontecimiento histórico límite como fue el golpe y mostrar su protagonismo en la resistencia a la dictadura y en la recuperación de la democracia. En un momento en el cual los partidos políticos, ilegalizados o suspendidos, se habían replegado o no ocupaban el escenario central, o no ejercieron la conducción del enfrentamiento en los inicios de la dictadura, sino que, fundamentalmente, solo tenían la huelga con ocupación de fábricas y facultades y la movilización de la población en los barrios y el interior iniciando la resistencia al golpe. Bueno, entonces los libros fueron oportunos, digamos, en el intento por mostrar esas resistencias de la sociedad desde el vamos y esa centralidad de lo sindical-popular-estudiantil, frente a la recomposición —en el Uruguay de la inmediata posdictadura— del relato partidocrático y del eje central asignado a los partidos políticos y sus líderes más notorios que eran mostrados de ese modo como responsables y conductores, prácticamente, de todas las expresiones antidictatoriales y prodemocráticas. Mi idea no era seguir escribiendo o leyendo la historia del Uruguay a través de la historia de los partidos políticos tradicionales.

El libro *Cómo nos domina la clase gobernante* también buscó un sentido de oportunidad en el intento de cuestionar el relato partidocrático dominante y el papel de los políticos liberales, en particular el rol del Partido Colorado y el primer gobierno del presidente Julio María Sanguinetti y su propuesta de «cambio en paz». Quise aportar una reflexión crítica que llamara la atención al proceso mediante el cual las ideas liberales en el Uruguay posdictadura devinieron el sentido dominante y único para la comprensión de la democracia como reglas de juego y la política para los políticos, institucional y sistémica. No obstante, en nuestra elaboración se intenta demostrar la continuidad entre el liberalismo conservador de la Guerra Fría en los años sesenta y el liberalismo de la impunidad de los años noventa o la dinámica de un sistema político que no se reducía al sistema de partidos y el Parlamento, sino que incluía a los movimientos sociales, por eso, en síntesis, me

¹⁴ Rico (1989).

¹⁵ Rico (2005b).

¹⁶ Rico (2008).

interesaba analizar qué tipo de liberalismo era el que se restauraba en la democracia post 1985 y la reafirmación de su carácter conservador y anticomunista; por otro lado, se restablecía con la democracia la exaltación del relato de la excepcionalidad del Uruguay, y había que cuestionarse cómo ello era posible después de doce años de dictadura. ¿Dónde estaba la excepcionalidad democrática del Uruguay tras un golpe de Estado y doce años de dictadura?

No sé si me explico. Los libros aportan nuevos conocimientos sobre todo, pero también tienen un sentido polémico o buscan llenar ausencias o contestar negaciones. En cierto modo eso sucede con la investigación sobre el Partido Comunista bajo la dictadura, porque era un sujeto político que no estaba presente en las reconstrucciones historiográficas posdictadura. Fue un protagonista cotidiano de la resistencia antifascista y clandestina dentro del país, a la vez que el centro de la represión anticomunista del régimen durante doce años, a la vez que constituyó un tipo de partido bastante diferente e interesante para analizar en tanto tal, en comparación con otros partidos comunistas en el mundo. Bueno, entonces pongamos la atención en ese fenómeno político-cultural, pongamos la atención en una reflexión sobre la clandestinidad no como anecdotario del vivir clandestino, del miedo o la zozobra, o de cómo fulano se escapó de tal o cual allanamiento, sino también preguntarse qué implica la clandestinidad como espacio para hacer política y funcionar orgánicamente durante más de una década. Así como se habla de los partidos en la legalidad y actuando públicamente en el Parlamento, ¿qué implicancias tiene el escenario de lo clandestino, de la ilegalidad, de la represión permanente para el funcionamiento de los partidos políticos?, ¿cómo se revolvieron los partidos políticos en esa circunstancia, y el comunista en particular?

Yo me acuerdo de que fue parte de la polémica con algunos compañeros del Instituto de Ciencia Política, que hicieron aquel libro colectivo sobre la política uruguaya en el siglo XX,¹⁷ que refiere en ese plano a la evolución político-institucional del país, pero sin una referencia destacada a la época de la dictadura como tal y al funcionamiento y propuestas de los partidos políticos en ese período histórico, nada menos. Entonces, ¿cómo es posible que uno quiera establecer un continuo de la historia nacional a través de la historia de los partidos políticos bajo la concepción de que la dictadura fue un «paréntesis» en la larga duración de la historia y así, de paso, te salteás doce años: del 73 al 85, o a lo sumo empezás la reconstrucción en el 82 y las elecciones internas, cuando los mismos recuperan el protagonismo luego de una década?

Finalmente, algunos libros intentaban cambiar la pisada o por lo menos llamar la atención sobre otra manera de pensar la crisis, la dictadura, o la propia democracia uruguaya. De allí el esfuerzo que pusimos en vincular el presente democrático con el pasado dictatorial del Uruguay, que es en cierto modo un contrasentido, porque sin duda el régimen político dictatorial no existe hoy (ni lo augurás ni lo promovés). Pero se trata de recuperar el pasado reciente no solamente a través de sus rupturas (el quiebre del 73), sino también en sus continuidades (desde marzo del 85), incluidas las formas políticas autoritarias, las violencias institucionales, los castigos penales y estigmatizaciones después de recuperada la democracia en el 85 y hasta el presente, digamos. Ya no está hoy la dictadura como régimen político, pero sí hay determinadas conductas autoritarias, si hay determinadas lógicas de gobierno, sobre la base de la situación de excepción o la urgente consideración de las leyes, hay castigos estatales y estigmas, principalmente carcelarios, sobre la base de improntas generadas bajo la dictadura, también hubo espionaje de los servicios en democracia y el fenómeno de las torturas y desapariciones forzadas y enterramientos clandestinos son ahora practicados por las organizaciones criminales. Entonces, en esa idea de que son democracias posdictadura, el *pos* no es un «más allá de la dictadura». Se trata de un «después» temporal, pero relacionado fenoménicamente, y también ideológicamente, a través de la impunidad, el anticomunismo y el negacionismo actual. No podemos pensar la democracia y la sociedad uruguaya sin los doce años de dictadura porque si no, no te explicarías los cambios profundos en las conductas personales y grupales, en las mentalidades, en las maneras de ser, en las violencias, en la maldad

17 Nahum y Caetano (2003).

actual. Seguir manteniendo el relato de lo excepcional de la democracia y la sociedad uruguaya, después del terrorismo de Estado, nos hace mal para poder entendernos mejor en el presente. ¿Dónde metés en ese relato de «como el Uruguay no hay» los actuales índices de suicidio, el aumento de la población carcelaria, la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y los comunes, los índices de criminalidad, la droga y la marginalidad, la violencia de género, el desempleo juvenil? En fin, la conservación del relato frustra el imaginario social, sobre todo a las nuevas generaciones, en tanto no coincide con parte de la realidad actual. A eso quiere apuntar un poco la parte más ensayística de algunos de mis trabajos.

Así que serían dos estilos de producción diferentes porque responden a objetivos distintos. ¿De allí que para vos haya que separar en forma tan notoria lo que es la reflexión más teórica de la reconstrucción más bien positivista de los hechos?

No sé. Quizás no los he logrado juntar en un solo libro.

¿Pero te lo has propuesto?

Si tuviera que preguntarme qué me falta, respondería que me está faltando un libro, que es el del «camino democrático». Y si lo logro hacer, y sobre todo pensando en los cincuenta años del golpe, respondiendo la pregunta, quisiera poder juntar la parte empírica o la parte reconstructiva, con la parte reflexiva y volcarla en la responsabilidad política y legislativa de los partidos tradicionales y de los liberales en el golpe de Estado. Esa confluencia. Es un pendiente a lo largo de los libros que ustedes sintetizaron, que la mayoría no son enteramente míos, sino trabajos en equipo. De pura casualidad en la vida, porque no fue algo planificado, más bien a veces pienso que me he boicoteado académicamente porque sobre todo desde 2010 he asumido cargos políticos y de gestión en la Universidad de la República de mucha responsabilidad, y ello me ha llevado un tiempo enorme de dedicación hasta el presente, que yo mismo he aceptado voluntariamente. Es cierto, pero naturalmente me han ido quitando tiempo de estudio y alejado de la necesaria concentración y dedicación que tiene la vida académica exigente, y entonces los resultados de mis líneas de investigación demoran mucho en finalizar (hasta diez años) o son discontinuos, así como tantos otros proyectos no los pude terminar y finalmente los abandoné.

¿Has pensado en la posibilidad de hacer una síntesis de esas obras tan voluminosas que has producido, como la última, la del Partido Comunista en dictadura?

Es imposible. Creo que la dimensión que tienen los fenómenos investigados te lleva a agregar capítulos a los libros, y no es por sumar páginas. Porque ahí siempre me decían irónicamente en facultad, sobre todo los filósofos: «Bueno, la diferencia entre el filósofo y el historiador: el historiador agrega páginas y páginas, hace anexos, pone documentos al final, no tiene límite de páginas en sus libros». Yo esa tentación no la sentí nunca, pero la complejidad de los temas de estudio, sí. Ese es el asunto. Definir el canon o el corpus, de la historia del Partido Comunista, justamente, o contar en detalles el día a día del golpe y la huelga general, o recomponer la historia de los desaparecidos y asesinados por razones políticas fueron un gran problema también debido al volumen final de las investigaciones y por consiguiente el número de páginas de sus publicaciones. Definir qué era lo importante, qué seleccionamos y jerarquizamos, si ponemos todo para que nadie se olvide. Yo creo que esa síntesis habría que hacerla, pero no se puede, es imposible abarcarla en sus detalles e infinito número de participantes y visiones encontradas, además estar a cuarenta o cincuenta años después de aquellos acontecimientos.

Hablamos de tu producción académica desde «El liberalismo conservador» hasta la historia del Partido Comunista en dictadura y anunciaste un futuro posible libro para cuando te jubiles, pero omitimos hablar hasta ahora de «Uruguay cuentas pendientes», libro que compilaste en 1995.¹⁸ ¿Qué lugar le asignás en tu producción y en tu evolución intelectual?

18 Rico (1995b).

En ese momento yo no encontraba cómo escribir lo que estaba pensando ni expresarlo a través de una narrativa coherente, por aquello de que «no hay palabras para decirlo». Entonces en mi artículo en ese libro¹⁹ busqué una especie de artilugio poético, que creo tuvo que ver más con esa imposibilidad de contar dentro de un estilo tradicional y con un estado anímico o sensibilidad personal muy particular, removida.

Esto que decís es muy interesante, porque tiene que ver con esa decisión tuya de que cuando transcribís documentos no narrás, porque para vos la narración implica poner sobre la mesa tu propia perspectiva, y ahora nos estás diciendo que en cierto momento tuviste dificultad para narrar, no encontraste la forma de narrar y tomaste otro camino.

En la época del exilio sentí la necesidad de expresarme a través de la poesía. Incluso tengo un premio.²⁰ Cuando vuelve la democracia a Uruguay, la Universidad organizó un concurso de poesía y yo me presenté. Me dieron un primer premio compartido con Silvia Guerra. Yo estaba todavía con las formas poéticas del decir la historia o la política.

Aquel artículo tiene algo de eso.

Sí, me parece que tiene que ver con esto y que buscaba bajo esa forma decir algo sin adoptar un formato tradicional de escritura.

¿Qué valoración hacés hoy de ese libro en el contexto intelectual y político del año de su publicación, 1995? Desde el título el libro puede entenderse como una interpelación a su contexto de producción. Al año siguiente se produce la primera Marcha del Silencio, bajo la consigna Verdad, Memoria y Nunca Más.

Bueno, algo de eso también comenté antes sobre la oportunidad o el momento de aparición de los libros. Esa idea la trabajé bastante después, para llegar a la conclusión de que, en realidad, eran «cuentas pendientes» de la dictadura, o herencias, resabios, legados, que quedaban para saldar en la democracia, pero no eran problemas pasajeros a superar definitivamente mediante la adopción de medidas judiciales, políticas, legislativas o educativas, sino que iban más allá en el tiempo y se convertían en rasgos estructurales, constitutivos del sistema democrático posdictadura, a la vez que en límite para su democratización futura. Así como lo son las elecciones periódicas y la renovación de los representantes y gobernantes, también pasaron a serlo la impunidad, la violencia, el negacionismo, la punición, la prisionalización, el miedo. Esto es lo que queremos llamar la atención cuando hablamos del «presente de la dictadura», lo que dejó el pasado reciente para quedarse en el presente democrático y limitar así la democratización plena de la sociedad uruguaya.

Pero sí, quiero suscribir que *Uruguay: cuentas pendientes* fue un libro que apareció en un contexto significativo, oportuno, tal como yo lo señalé para otros. La idea surgió como resultado de un seminario que organizamos en el CEIU en el 95. Los que escriben en ese libro que coordiné —Hugo (Achugar), (Marcelo) Viñar, (Roger) Mirza, Carlos Demasi— eran referentes intelectuales importantes en la etapa posdictadura. Creo que en mi artículo intenté responder a la duda sobre qué validez podía tener explicar la irracionalidad del pasado dictatorial al restituir el estatuto clásico de la palabra y de la coherencia argumental. La solución que me propuse la reconozco débil: desorganizar el relato, volverlo incoherente, parcial, barroco, a través de una transcripción de hechos contradictorios, dedicarme a sujetos precarios y comportamientos menores que no cierran en una única conclusión o en torno a un protagonista central. Así la palabra pierde en profundidad, pero abarca más, se debilitan las explicaciones, pero se avanza en asociaciones, los hechos se describen como imágenes y la inconsistencia demostrativa se compensa con la insistencia en los detalles que resaltan lo novedoso e irrepetible.

19 Rico (1995a).

20 El poemario *Entretiempos* (Rico, 1986) obtuvo el premio de la Colección Reencuentro, cuyo jurado estuvo integrado por Eduardo Galeano y Carlos Maggi.

Así que sí, fue un libro importante y oportuno. Apareció el año previo a la primera Marcha del Silencio, resultado de ese evento académico sobre el tema de la dictadura, las memorias y las desmemorias organizado por el CEIU y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Volviendo un poco más a mi capítulo en el libro, allí sostengo que en la restauración democrática la derrota política de la dictadura fue un objeto no cumplido simbólicamente, un acontecimiento traumático para la identidad nacional, la del «como el Uruguay no hay», que no pudo elaborarse colectivamente ni cerrarse desde el punto de vista de la verdad y la justicia, por tanto, tampoco pudo inscribirse en el imaginario social como «derrota» del régimen, y sí como transición pactada. El vacío de memorias y de investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos fue ocupado por un consenso político ritualizado que transformó la lucha de resistencia heroica a la dictadura en un lugar común donde todos los políticos se podían presentar como «demócratas de toda la vida», opositores por igual al régimen dictatorial, al tiempo que contribuyeron a instalar la impunidad y un no-lugar para los verdaderos responsables de los delitos de lesa humanidad tras la consigna «sin vencidos ni vencedores». La aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad inscribió la impunidad como una forma extendida de relacionamiento social entre los uruguayos, que dejó a la democracia posdictadura sin fundamento ético: ni justicia ni verdad. Su justificación se trasladó entonces al discurso político liberal, a las reglas de juego electoral, a la formalidad de la ley, al sentido, o sin sentido, elaborado por la palabra autorizada de los políticos profesionales y los gobernantes tradicionales amplificados por los medios de comunicación.

En una perspectiva más amplia, esto supuso un corrimiento del poder estatal basado en la fuerza represiva bajo la dictadura al poder de las palabras bajo la democracia. Y con ello la alteración de los sentidos de la lucha antidictatorial, la continuidad de la mentira institucional sobre lo acontecido bajo la dictadura, la simulación y ocultamiento de quienes colaboraron políticamente o se beneficiaron económicamente con el régimen, los ascensos de militares y policías implicados en los crímenes de Estado en democracia, el discurso negacionista actual. Aquello de que «la historia acontece primero como tragedia y luego se repite como farsa» se prolongaba en la etapa posdictadura como simulacro: la sustitución de lo real-acontecido en la historia reciente del país y la región por su interpretación discursiva y los sentidos dominantes en torno a un modelo liberal de democracia reducida a un procedimiento electoral, que asegurara sin sorpresas el orden estatal y el disciplinamiento ciudadano luego de la etapa optimista, participativa e ilusionada de la transición. Volver a una historia fría, de rutinas laborales, excepcionalmente alterada en su cotidianidad por el calendario electoral.

Pasemos a otro tema. Como investigador del pasado reciente, te ha tocado también officiar como perito del Poder Judicial. ¿Qué reflexión te merecen las especificidades y los cruces entre los roles del historiador y del juez?

Efectivamente, me ha tocado actuar en alrededor de diecisiete causas judiciales, acá y en Argentina, una sola en Brasil (la del expresidente João Goulart). Recuerdo una comparecencia ante tribunales muy importante que fue sobre la Operación Cóndor. Fui con tres o cuatro valijas de documentos acompañado por Fabiana Larrobla y testimoníé durante nueve horas seguidas en los tribunales federales de Buenos Aires de la Avenida Comodoro Py acerca de la participación uruguaya en el Cóndor y los uruguayos desaparecidos en Argentina. Yo creo que la judicialización de las investigaciones históricas fue una de las cosas más importantes que sucedieron en la historiografía uruguaya más reciente, y lo digo con modestia y mucho respeto a pesar de que también se ha criticado ese proceso. La judicialización fue un reconocimiento de que la historia de la dictadura —que antes existía parcialmente, o que remitía a testimonios de los protagonistas o víctimas sobre sus propias vivencias, o se apoyaba en fuentes abiertas— alcanzaba un nivel de sistematización y reconocimiento que trascendía el clásico «consenso entre pares» universitarios.

Ahora, entrando más a fondo en la pregunta, anoto algunas precisiones. Por ejemplo, el equipo universitario no trabajó por encargo del Poder Judicial, cumpliendo las directivas de un fiscal o de un juez. Hay una diferencia grande en eso. En el caso nuestro, la Justicia intervino sobre un corpus ya elaborado llamado

precisamente «investigación histórica». En todo caso se sirvió de los resultados de la investigación histórica; no es que nos condicionara previamente la orientación o determinara la búsqueda de tal o cual documento o la selección de los casos. Entonces, me parece que eso marca una diferencia.

Mi primera actuación como perito fue una sorpresa, a partir del libro sobre la huelga general de la CNT en 1973. Resultó entonces que la familia de Ramón Peré incorporó el libro que ya estaba publicado a su denuncia, como reconstrucción del contexto en el que se produjo el asesinato durante la huelga general, a poco de instalada la dictadura. Por lo tanto, cuando el juez en su momento me convocó (yo no sabía nada de los antecedentes), lo hizo para hablar de los contenidos del libro, no para encargarme una investigación de acuerdo a sus criterios metodológicos o testimonios de los denunciantes. Evidentemente, si el juez a partir de la reconstrucción que lleva a cabo el libro extrae conclusiones del contexto de violencia que significaron esos quince días de huelga, de la represión, bueno, va a encontrar, quizás, elementos que puedan servir luego para formar su opinión definitiva y solicitar el procesamiento o no de los acusados. En este caso la investigación y el libro contribuyeron en una parte del proceso judicial, porque el juez siguió indagando por sus propios medios y con los auxiliares de la Justicia, citó a testigos y consiguió nueva documentación oficial a la que nadie había podido acceder y, finalmente, con base en todos esos elementos y pruebas formó su convicción definitiva y solicitó el procesamiento del autor material del asesinato luego de treinta años de haberse cometido impunemente.

Entonces, volviendo a las investigaciones históricas para la Presidencia de la República, junto a historiadores como Barrán y Caetano diseñamos en forma autónoma el proyecto, sin exigencia o condicionamiento alguno por parte del poder político (salvo el cumplimiento de los plazos asignados), independientemente de los requerimientos de la justicia y de las demandas de los familiares de víctimas. Nuestra presencia en los juzgados resultó útil para contextualizar los acontecimientos puntuales y para explicitar las características de algún documento de la represión: dónde se encontró, su grado de autenticidad, qué atribuciones tenía determinado organismo represor mencionado dentro del organigrama estatal y militar-policial, quién firma el documento, a quién corresponden los sellos, etcétera.

Hay que agregar que muchas veces la renovación generacional de jueces y fiscales en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y naturalmente los años transcurridos desde que sucedieron aquellos hechos que se denuncian recién ahora, determinan que no todos tengan un conocimiento muy detallado de la historia reciente y de los nombres de victimarios y víctimas, y que por lo tanto haya también que aclararles varios aspectos de la historia misma. También hay que responder a las preguntas de los abogados de los acusados. Mi papel como perito no es acusatorio, inculpativo o absolutorio. Me he encontrado en Comodoro Py y en otros juzgados en el país, ante preguntas de los abogados de los represores que uno tiene que responder claramente con «no sé» o «no hay documentación» o «su defendido no aparece expresamente mencionado en ningún documento». Se trata en todo caso de proporcionar insumos y contestar preguntas puntuales, luego el juez determinará la validez.

Creo no haber perdido la perspectiva de que era un especialista que iba a proporcionar lo que ya había encontrado en un proceso de investigación anterior y que, por lo tanto, me podía sentir auténtico respondiendo a lo que me preguntaran o excusándome en lo que no estaba a mi alcance responder o no responder lo que no sabía. Máxime cuando la persona que tenés enfrente, el acusado, puede sufrir prisión u otras condenas en función de interpretaciones que se realicen a partir de lo que uno atestigua, no puede haber mala intención alguna en el proceder.

Está claro que recopilar testimonios y recopilar documentos hasta el momento inaccesibles, siempre ha sido un eje central de tu trabajo. En ese contexto se inscribe la discusión tuya con Vania Markarian sobre el tema de las condiciones de acceso a los archivos oficiales que se concretó en dos artículos que se publicaron en la revista Contemporánea.²¹ ¿Cuál fue el corazón de esa discusión?

21 Markarian (2016) y Rico (2016).

Fue una discusión importante que no terminé de dar hasta el final, por limitaciones mías. Yo distinguía tres aspectos críticos principales. Un aspecto que fue, me parece a mí y dicho con mucho respeto, un esfuerzo de Vania Markarian para defender las funciones distintivas del oficio del historiador y las reglas de la disciplina histórica, y desde ese lugar tradicional y de autoridad, concluir que las investigaciones realizadas en el marco del convenio entre la Universidad y la Presidencia no alcanzaban el estatus de investigación histórica, sino que representaban un esfuerzo social y solidario loable con la causa de los Derechos Humanos y la memoria de las víctimas. La otra línea de la crítica fue respecto al papel del historiador y del juez, antigua polémica iniciada por Carlo Guinzburg²² hace treinta años, en la medida que las investigaciones sobre desaparecidos y asesinados a partir del año 2011 se habían judicializado, y por tanto se criticaba que esa nueva función confundía los roles. Finalmente, la discusión se centró en el malestar de los investigadores por el acceso a la información y las deficiencias o inexistencia de políticas del Estado sobre los archivos de la represión, incluidos los gobiernos del Frente Amplio. Esto que señalé, de alguna manera, sintetiza para mí los tres ejes de la discusión planteada en aquel momento, aunque podrían agregarse otros que ahora no recuerdo bien.

¿Y vos, frente a ese malestar, qué decidís?

Es un malestar que nos ha acompañado todo este largo trayecto, desde que ingresamos a los archivos por decisión de la Presidencia. Pero fue, o es, un malestar expuesto que abarca a una parte importante de la ciudadanía, no es un debate entre expertos. El equipo universitario lo discutió largamente, y también lo discutimos con el poder político en la persona de Gonzalo Fernández, entonces secretario de la Presidencia, y públicamente en las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil y de familiares y víctimas, y expusimos el problema en intervenciones y entrevistas periodísticas. Esa actitud fue bien distinta a ocultar el malestar, frotarnos las manos y decir «es nuestra oportunidad, somos los investigadores consultantes de los archivos y los tenemos todos». Primero, porque no teníamos todos los archivos existentes a disposición. Tampoco se nos permitía acceder directamente a los documentos, sino a través funcionarios militares o policiales; no se nos presentaron listados o índices para saber y seleccionar previamente antes de pedirlos. Al principio de nuestro trabajo tampoco podíamos fotografiar o fotocopiar los documentos originales, sino transcribirlos.

Empezamos a investigar con un archivo solo que era el de la Comisión para la Paz, ubicado en el mismo edificio en que trabajábamos (el Palacio Estévez). Pero de entrada tampoco se nos abrió sin limitaciones esa opción. Fue todo por partes, ganando confianza de a poco, conociendo de menos a más las lógicas no escritas de procesamiento de la información en clave de inteligencia policial y militar. Me acuerdo de que la discusión que muy tempranamente se dio por una parte del equipo fue por qué aceptar esa especie de «privilegio» que representaba el acceso parcial a los archivos, que en última instancia respondía a una decisión política de la Presidencia de la República, y que nos involucraba directamente a los universitarios, y por qué no se les permitía el acceso a otros especialistas y familiares. ¿Qué hacer?, ¿irnos en señal de protesta reclamando una apertura total, reivindicando que ese acceso no debía ser resultado de una decisión presidencial hacia un núcleo de investigadores, sino que debía ser parte de una política de Estado para el conjunto de la sociedad, incluidos investigadores, periodistas, ciudadanos, familiares?

En ese momento resolvimos que íbamos a seguir, no irnos, porque entendíamos que habíamos puesto un pie para que la puerta de los archivos no se volviera a cerrar; esa misma puerta que durante veinte años del retorno a la democracia se había negado sistemáticamente, incluso afirmando que no existían tales archivos. Había que seguir empujando, aún desde la modestia y la insignificancia política que podía tener un grupo de universitarios trabajando en el marco de un convenio con la Presidencia de la República. Pero también teníamos a favor esa legitimidad. Y en ese sentido, tras haber pasado tanto tiempo, saco la conclusión que estuvo bien nuestra decisión, que se complementó con otro aspecto que voy a mencionar a continuación. ¿Por

22 Guinzburg (1993).

qué digo que estuvo bien? Porque nosotros empezamos con un solo archivo, que como dije era el generado por la Comisión para la Paz, y terminamos esa primera etapa de dos años de trabajo en 2007, conociendo y accediendo a diecinueve archivos o repositorios documentales. Y después accedimos a más.

Comprobamos también que algunos archivos solicitados por nosotros no existían como tales. Aun en esos casos resultó positivo saberlo porque antes no se sabía y se especulaba sobre su existencia. Me acuerdo de la búsqueda del repositorio documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que era importante de revisar porque allí supuestamente estaban las actas de los cónclaves cívico-militares del gobierno *de facto*, y se suponía que en alguno de esos cónclaves se pudieran haber tratado temas represivos en general, o específicos, como la desaparición de Elena Quinteros, entre otros. Bueno, se recorrió cielo y tierra, se revisó un galpón entero que era depósito de documentos y carpetas, pero no apareció nada relevante.

Otro ejemplo fue cuando fuimos al Palacio Legislativo a buscar las actas de las comisiones parlamentarias investigadoras de distintos hechos de violencia política antes del golpe de Estado, como ser el caso de la comisión que investigó sobre el Escuadrón de la Muerte. El archivo había desaparecido, no estaba. Pero nosotros insistimos y con una muy buena disposición del secretario del Senado, (Hugo Rodríguez) Filipini en aquel momento, después de varios meses de búsqueda aparecieron las actas. Yo no digo que haya sido mérito únicamente del equipo, pero me parece que su existencia y su insistencia fueron importantes para la ubicación de un archivo que después utilizó el fiscal (Ricardo) Perciballe para llevar adelante la causa contra los integrantes del Escuadrón de la Muerte y los procesamientos que le siguieron.

Después, los archivos de Sanidad Militar, que supuestamente no existían, y eran fundamentales en la causa Macarena Gelman en el intento por encontrar el acta de su nacimiento en el Hospital Militar, luego del secuestro y traslado ilegal de su madre (María Claudia García) a Montevideo. Bueno, el archivo de Sanidad Militar se decía que no existía. Por los propios militares se había negado su existencia ante solicitudes judiciales. Pero al final el archivo apareció, en el propio Hospital Militar. Y pudimos revisar alrededor de 250.000 fichas clínicas. Si bien no encontramos información sobre Macarena Gelman y su madre, pudimos revisar los libros de autopsias y necropsias que sorpresivamente un día nos dejaron al alcance del equipo, con lo que pudimos certificar las muertes ocurridas en dicho hospital y sus causas (no de personas desaparecidas, pero sí de prisioneros políticos fallecidos por enfermedades o por el no tratamiento de las mismas o por autoeliminación). En el caso de Macarena Gelman también revisamos documentación referida a diecinueve puntos de entrada y salida del país en el archivo de la Dirección Nacional de Migración, tratando de encontrar algún registro o indicio del posible traslado a Uruguay de su mamá embarazada, secuestrada en la Argentina. No lo encontramos, pero sí obtuvimos información importante de otros movimientos represivos de la dictadura y del personal militar involucrado.

Conjuntamente con el cumplimiento de nuestra tarea, contribuimos con el Ministerio del Interior a que el archivo del Departamento III de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia se digitalizara parcialmente y, que mediante un acuerdo suscrito con la Universidad de la República en 2013, parte de esa documentación digitalizada y sus índices pasaran a la Universidad y a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y luego a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue un logro, que lamentablemente se descontinuó por parte del Ministerio con el cambio de administración en 2020, pero hay una parte importante de ese archivo que está disponible para consulta del público en el CEIU.

También hicimos una solicitud informal, cosa que nadie conoce, a través del entonces embajador de Uruguay en Cuba, Ariel Bergamino, para poder localizar en el archivo del Departamento América del Partido Comunista Cubano, documentación sobre América Latina y en particular sobre Uruguay. No pudimos conseguirlo, pero se solicitó en forma verbal dos veces y se hizo un seguimiento que no resultó. Podría agregarse el trabajo durante meses que llevamos adelante en el archivo judicial del Archivo General de la Nación en la calle San Martín, donde estaban bajo custodia cientos de expedientes de la Justicia Penal Militar y del

Supremo Tribunal Militar. O la contribución al armado del listado de documentos a solicitar por Cancillería uruguaya al Departamento de Estado norteamericano por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber.

¿Qué quiero decir con estos ejemplos y otros que se podrían seguir agregando? Que lo nuestro no consistió en utilizar un lugar de privilegio para usufructuarlo en beneficio propio como investigadores, sino para seguir conociendo y abriendo, desde lo que ya se había logrado, más archivos. Y esto se complementó con otra cosa, que me parece importante para redondear el tema. Participamos como equipo de historiadores en todas las instancias previas de elaboración de la Ley sobre el Sistema Nacional de Archivos, en reuniones que se hacían en Serpaj y otras instituciones de la sociedad civil a los efectos de que el articulado contemplara nuestra experiencia y dificultades en el trabajo con archivos sensibles. Es decir, estuvimos participando en todas esas instancias públicas en las cuales se buscó, por parte del Estado, montar una política de archivos que rompiera lo discrecional, o que rompiera el secreto respecto a los documentos. Los archivos que logramos rescatar para la Universidad inmediatamente se formalizaron, se contrataron archivólogos para su cuidado y se confeccionaron protocolos de acceso responsable en consulta con Agestic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Presidencia de la República). Estos protocolos están escritos, existen y se consultan, también por parte de muchos investigadores desde el exterior.

Por último, dejé para el final otro asunto importante a comentar. En la primera etapa del trabajo, cuando teníamos el objetivo limitado por la propia Presidencia a la investigación sobre detenidos desaparecidos, investigamos más de lo que nos solicitaron. Ello después dio lugar a la publicación por parte de la Universidad de la República de los tres tomos ya mencionados sobre Dictadura y Terrorismo de Estado, que incluyeron otras víctimas que no eran desaparecidos, así como otras facetas del Terrorismo de Estado. Pero en 2011, cuando se dio la intervención de la Justicia por la ley interpretativa de la Ley de Caducidad,²³ en las versiones digitales de los libros ubicados en la web de la Secretaría de Seguimiento (de la Comisión para la Paz), incorporamos dos anexos a la investigación ya realizada. Eran lo que llamamos entonces la «cronología larga» y la «cronología corta». En ambas cronologías lo que hicimos fue una transcripción de decenas de documentos que no tenían directa relación con las fichas de detenidos desaparecidos y asesinados políticos que estaban en el corpus del libro, pero que servían para contextualizar la represión también en casos particulares dentro de las distintas oleadas de operativos contra determinadas organizaciones y caídas de militantes y organismos, la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina, los organismos intervinientes, etc.²⁴ Pero, por sobre todas las cosas, esa cronología de documentos permitía demostrar que esos documentos estaban, y pusimos en cada pie de página las referencias a ellos, la agencia productora, las fechas, etc. Postulamos además a varios proyectos concursables de la CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica) y de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) que fueron seleccionados para investigar el período, incluyendo los archivos. En este último caso se constituyó un equipo de investigación y publicamos un libro.²⁵

En resumen, yo creo que actuamos correctamente dentro de la limitación que implicó ser un equipo universitario, sin peso político, en el marco de un organismo que era de la Presidencia de la República. Recuerdo una anécdota tragicómica para mostrar otra faceta del mismo problema cuando en una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se nos hizo un pedido verbal por parte del secretario de un ministro de Defensa para obtener documentación de origen militar porque no tenían acceso a ella por canales propios. Bueno, no sé, me parece que hay elementos suficientes como para decir que si bien no se lograron avances totales, lo que estuvo al alcance del equipo se intentó y algo se logró. Sin olvidarnos que la localización, apertura, organización, consulta y preservación de archivos de la dictadura era y es una obligación del Estado uruguayo.

23 Uruguay (2011).

24 Disponible en <https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/investigacion-historica>

25 Rico y Markarian (2017).

No obstante este esfuerzo en materia de investigación, de localización de archivos y revisión de documentos, de actuaciones como peritos ante el Poder Judicial, el equipo de historiadores universitarios no fue tenido en cuenta expresamente por los redactores del proyecto de ley que transfirió a la Institución Nacional de Derechos Humanos parte de las funciones de investigación y de archivos que antes se localizaban en el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia. En ese sentido, solo permaneció el apoyo y financiamiento al equipo de arqueología, hasta el presente. Ese movimiento tuvo analogía con otro anterior, acontecido en el interior de la Universidad de la República y cuyo resultado fue, luego de discusiones muy difíciles en el mismo Consejo Directivo Central, la decisión de desvincularse del trabajo de los equipos de historiadores y antropólogos, cuyos integrantes quedaron así trabajando y dependiendo exclusivamente de la Presidencia de la República.

Hablando de polémicas, las tuviste también con los politólogos. Hace unos quince años o más mantuviste un intercambio de notas de prensa con Adolfo Garcé que partieron de tu cuestionamiento al rol de los politólogos en el debate público de aquel momento.²⁶ Planteaste que eran funcionales a la legitimación intelectual del orden de dominación existente. ¿Mantén esa visión? ¿Considerás que eso cambió durante los gobiernos del Frente Amplio?

Sí, con Fito (Garcé), yo entre discusiones serias que mantuvimos públicamente, como por ejemplo la explicitada en *Dosmil30*, siempre le decía en broma que había sido una mala decisión suya no haber mantenido su cargo como funcionario del Banco Hipotecario (yo fui durante bastante tiempo a pagarle la cuota de mi casa y a conversar con él en la ventanilla de su caja) antes de inscribirse en la Universidad para ingresar al Instituto (de Ciencia Política) y hacer su notoria carrera de politólogo. Y me acuerdo también de un artículo, creo que fue en *Brecha*, en el que criticaba a Gerardo (Caetano), titulado algo así como «La tardía crítica de Gerardo Caetano a la democracia postdictadura»,²⁷ cuando la crisis de 2002. Mi intención en aquel momento fue llamar la atención de cómo los politólogos contribuían desde la academia a recomponer el paradigma de la «excepcionalidad» de la sociedad uruguaya después de una dictadura de nada menos que doce años. Y más aún, dentro de esa excepcionalidad volvían a resaltar la función de los partidos políticos como sostén del sistema y garantía de estabilidad de la democracia recuperada, por su experiencia acumulada y capacidad negociadora como virtudes fundamentales de los políticos profesionales. Pero esos argumentos, contradecían el rol que los mismos partidos tradicionales y los políticos liberales habían jugado en los años sesenta y principios de los setenta durante el avance del autoritarismo en Uruguay. La presencia y opinión de los politólogos más conocidos en los medios de comunicación, y del mismo Instituto de Ciencia Política, eran muy influyentes en aquel tiempo.

En síntesis, como ya señalé, criticaba que desde la academia se contribuyera a una legitimación importante del *statu quo* político-partidario, a una intelectualización acrítica de las ideas liberales y a una idealización de los liderazgos tradicionales. Se decía que una democracia fuerte era una democracia de partidos y, por tanto, que la crisis de la democracia en el Uruguay, entre otras razones, había sido acelerada por el debilitamiento de los partidos políticos. Y nosotros decíamos lo contrario, que los partidos políticos tradicionales y el parlamento no habían sido las víctimas, sino parte de las causas de la crisis institucional y del sistema democrático. (Jorge) Pacheco Areco, Juan María Bordaberry, Aparicio Méndez, Esteban Cristi, Juan Carlos Blanco, el gobierno permanente bajo decreto y Medidas Prontas de Seguridad, la declaratoria del Estado de Guerra Interna, la división interna con cantidad de directorios, grupos y candidatos, ¿de dónde surgieron, quién los votó? De allí que en varios trabajos míos intenté insistir en lo que llamo «la vía democrática al autoritarismo» en Uruguay, entre 1968 y 1973. Con ello quiero decir que a la dictadura en el Uruguay se transitó desde un sistema democrático-republicano y desde un Estado de derecho vigentes, y que, por lo tanto, debían jerarquizarse esos factores en el análisis crítico de la imposición del autoritarismo y de la dictadura en el período.

26 Rico (2004a, 2004c); Garcé (2004)..

27 Rico (2004b).

Hace tiempo que ya no hay polémicas con politólogos, el Instituto se ha renovado mucho, se han diversificado las líneas de investigación, hay muchos jóvenes con una sólida formación profesional. El rol de formadores de opinión pública en los medios de comunicación se ha reducido a una comparecencia puntual e importante en el día mismo de las elecciones. Creo que los sociólogos-encuestadores de opinión pública han sustituido a los politólogos en la referencia mediática. Por lo tanto, me parece que estamos en otro momento. También estamos más viejos.

Para terminar, ya que tu última obra publicada es una historia del Partido Comunista durante la dictadura, un partido al que vos perteneciste durante ese mismo período ¿Cómo has entendido el vínculo entre militancia política y producción académica a lo largo de tu carrera?

Hay que ubicar esta respuesta en un contexto socio-político del país y la región que condicionó mucho las decisiones personales de jóvenes que, como yo, teníamos 19 o 20 años cuando comenzamos los estudios universitarios y la militancia política. Mi generación no tiene un año preciso de surgimiento, sino que se forjó entre esos dos años emblemáticos que marcan un giro político en el país: 1971 y 1973. Irrumpe a la política con el peso ganado en la juventud que tenía la generación del 68, en una época de luchas juveniles, sociales y sindicales muy intensas, así como de fuerte represión estatal. Mil novecientos setenta y dos, año de mi ingreso a la Universidad, fue el año de mayor violencia política en el Uruguay predictadura. También en ese contexto se promovieron intentos inéditos en la región, como alcanzar el socialismo por la «vía pacífica», caso del presidente Salvador Allende en Chile, o por la vía de la conformación de grandes coaliciones unitarias de fuerzas demócrata-cristianas y de izquierda tras una alternativa programática progresista y un apoyo político-electoral de masas, caso del Frente Amplio conducido por el Gral. Líber Seregni en Uruguay. También era muy fuerte la adhesión de militantes jóvenes a las organizaciones y grupos que representaban la izquierda armada, opción que se extendió en el continente con fuerza tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Personalmente siempre me incliné, aún sin demasiados fundamentos teóricos previos, por las alternativas y organizaciones que representaban la movilización popular y la vía política para alcanzar el poder y transformar el capitalismo, no por las opciones que representaban a la acción directa y la vía armada. En ese sentido, la fundación del FA marcó la elección de la vía política y de masas en sectores importantes de mi generación que nacimos a la vida política en ese momento. Y mi primera experiencia partidaria fue en el PS. En un proceso de cambios internos y crecimiento entre sectores juveniles y universitarios procesado después del período de ilegalización del PS decretado por el gobierno en 1967 y, por sobre todo, de definiciones frenteamplistas, acompañando el proceso fundacional del FA y la experiencia de masas de las elecciones en 1971. Pero esa experiencia socialista se frustró en mayo de 1973, en las vísperas del golpe de Estado, cuando se produjo la expulsión sorpresiva de miembros del Comité Central acusados de realizar «entrismo» en el PS a favor del Partido Comunista, y ello precipitó la adopción de sanciones y renuncias masivas. Como contracara a las expulsiones se procesó una salida y afiliación numerosa de militantes socialistas hacia el PC y la UJC, en plena huelga general. Poco después, en noviembre del mismo año, el PC y el PS fueron ilegalizados por la dictadura, abriéndose una nueva etapa de clandestinidad y represión por más de una década.

Ya en el Sector Universitario de la UJC ilegalizada, tuve un inicio de militancia semiclandestina que motivó que, como dije antes, asistiera en forma intermitente a los cursos de Filosofía en la Facultad de Humanidades, no obstante ir por dos años más en esa situación, hasta fines de 1975, cuando se lanza en el mes de octubre la Operación Morgan contra el PC y enseguida se desata en el mes de enero de 1976 la represión masiva concentrada en la UJC y los universitarios comunistas que se extendió por casi medio año. Encontrándome exiliado en Buenos Aires, luego del golpe de Estado encabezado por Videla en marzo de ese mismo año opté por la alternativa que me planteó el partido: que continuara y terminara mis estudios de Filosofía en la Universidad Lomonosov de Moscú. Fue una decisión que contenía la perspectiva optimista de poder volcar esa formación en un futuro no muy lejano de reconquista de la democracia en el país, contribuyendo modestamente a que el pensamiento marxista, perseguido durante más de una década

y borrado de cualquier propuesta ideológico-cultural en esa coyuntura autoritaria, tuviera condiciones y recursos humanos formados como para poder recrearse con nuevas ideas y elaboraciones en la etapa democrática en el país.

Retornado ya al Uruguay con mi familia, después de 1985 las elaboraciones teóricas giraron cada vez más en torno a la propuesta de «democracia avanzada», que incorporaba la resistencia antifascista de los comunistas y su aporte a la reconquista de la democracia en el país, en medio de una masiva participación militante, discusión y reflexión colectiva sobre el socialismo entendido como realización de la democracia, cambiando así una visión meramente instrumental y funcional, subordinada a los objetivos finalistas de la revolución socialista.

Esa mirada sobre la democracia introducida por Rodney Arismendi en sus teorizaciones de la última etapa, ocupó la centralidad de las preocupaciones en la inmediata posdictadura, asociada a la necesaria democratización de nuestras sociedades frente a los resabios de la dictadura y la cultura de la impunidad luego de la aprobación de la Ley de Caducidad; implicaban también una incorporación-revisión de las ideas liberal-democráticas y socialdemócratas, a la vez que una crítica a la visión liberal-conservadora y su gradual imposición como paradigma dominante en la etapa de la transición democrática. Muchos de los que iniciamos este proceso lo prolongamos hasta llevarlo a la tardía crítica del estalinismo y otras formas autoritarias del desarrollo del socialismo real devenido régimen estatal, proceso que se precipitó con la caída del Muro de Berlín y la consiguiente implosión de la Unión Soviética y demás países socialistas en 1989. De allí la renuncia a todo tipo de dictadura, incluida la del proletariado. Esas definiciones y cambios históricos estaban tocando la identidad, y también el techo democrático del partido, en el marco de un proceso participativo y de confrontaciones que caracterizó el intento de renovación del PC y la UJC, asociado estrechamente a las grandes transformaciones democráticas del socialismo impulsadas en la URSS por la *Perestroika* y la *Glásnost* de Mijaíl Gorbachov. El resultado electoral de 1989 y el triunfo del FA con Tabaré Vázquez en las elecciones por la Intendencia de Montevideo daban aliento al camino de cambios emprendido. Formamos parte de ese proceso de renovación desde la primera fila a partir de elaboraciones teóricas, redacción de documentos y la intervención personal en innumerables discusiones internas y preparatorias del 22º congreso del PC (1990), aunque la propuesta resultara finalmente minoritaria, resultado que agudizó la crisis interna, renunciadas y salidas.

La caída del socialismo real y la crisis y división del PC terminó por confirmar la dureza del proceso terminal de una etapa histórica, y al quedar muchos militantes a la intemperie en todo sentido se aceleró la autonomización del pensamiento de las estructuras partidarias y la búsqueda de opciones independientes, siempre dentro de un compromiso político progresista, identificado con los grandes ideales y luchas de la humanidad por alcanzar el ideal socialista a través de la justicia social, la libertad, el respeto de los Derechos Humanos y la democracia.

Debo agregar algo fundamental en este proceso intelectual y político personal. Ello refiere a mis compromisos asumidos tras el ingreso como docente en la Universidad de la República, en 1985, al regreso del exilio. Ello amplió las perspectivas teóricas, el conocimiento de autores y escuelas de pensamiento que volcaba a la enseñanza desde un enfoque que, con total honestidad personal, siempre intentó ser pluralista y cuestionador de los dogmas instalados como sentido común.

Sin duda que contribuyó enormemente a transitar la nueva etapa el trabajo docente en Humanidades y la opción temprana relacionada con mi interés por la historia reciente, tanto a nivel de la enseñanza como de la investigación y la extensión. A ello se sumó, en 2005, la convocatoria a coordinar el equipo universitario de historiadores para investigar sobre detenidos desaparecidos, el acceso parcial a los archivos del Estado y, desde 2011, una actuación como perito en causas judiciales sobre violaciones a los Derechos Humanos.

No salí para nada indemne en lo personal, en lo afectivo, del proceso de crisis partidaria y derrumbe del socialismo real, más aún en mi caso, habiéndome formando tantos años en la URSS y en Filosofía, habiendo tenido activa participación a través de diferentes artículos de prensa y polémicas públicas siempre desde una

posición de defensa del marxismo, siendo integrante de la dirección partidaria y asumiendo un rol importante en la elaboración de los documentos teóricos que se discutieron en el proceso de renovación del PC, finalmente fracasado, y las elaboraciones en torno al socialismo democrático. Transité por años de crisis intelectual desde 1991, de autocritica sincera, de negaciones y dudas de todo, de silencio público, revisión y relecturas. Podría decir que recién a partir de 2005 empecé lentamente a sanar en partes a partir de la confluencia y concreción de tres realizaciones importantes vinculadas al trabajo académico: ese año se publicaron dos libros importantes para mí, sobre los quince días de la huelga general en respuesta al golpe de Estado y sobre cómo nos domina la clase gobernante, a la vez que fue el año de la convocatoria e inicio de la coordinación del equipo de historiadores para investigar sobre detenidos desaparecidos. Al poco tiempo, la llegada de mi segundo hijo, Julián, me volvía a recordar que la vida tenía varios sentidos y continuaba a pesar de la política, eso sí, con otros desafíos, pero también más cargada de recuerdos y nostalgias a sobrellevar.

En suma. Yo creo que la práctica política, y la militancia como una de sus formas más intensas en períodos y situaciones límites como los que me tocó vivir, terminaron sedimentando y acrecentando una experiencia muy personal que también guió mis intereses en estudiar ciertos temas teóricos relacionados no solo con una experiencia mundial, sino con nuestra propia historia reciente, necesarios de desentrañar académicamente a profundidad, en honor a la verdad histórica y a la memoria de las innumerables víctimas, en recuerdo de su esfuerzo honesto por un mundo mejor, y como parte del compromiso consecuente con uno mismo y con su historia personal. Recién cumplidos mis setenta años, les confesaría que, lamentablemente, ya no podré volver a empezar.

Referencias bibliográficas

- BARRÁN, J. P., CAETANO, G., y RICO, Á. (Coords.). (2007). *Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos*. Montevideo: Presidencia de la República.
- CAETANO, G., y RILLA, J. (1987). *Breve historia de la dictadura*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- DEMASI, C. (Coord.). (1996). *La caída de la democracia. Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay (1967-1973)*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- DEMASI, C. (Coord.). (2004). *El régimen cívico-militar. Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay (1973-1980)*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- GARCÉ, A. (2004). Los politólogos en el espejo. *Dosmil30*. Recuperado de montevideo.com.uy/zzz-No-se-usa/Por-Adolfo-Garce-uc17516
- GINZBURG, C. (1993). *El juez y el historiador. Consideraciones al margen del proceso Sofri*. Madrid: Anaya y Mario Muchnik.
- MARKARIAN, V. (2016). Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo. *Contemporánea*, 7, 178-191.
- NAHUM, B., y CAETANO, G. (Coords.). (2003). *El Uruguay del siglo XX. Tomo II: La Política*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- RICO, Á. (1986). *Entretiempos*. Montevideo: Universidad de la República.
- RICO, Á. (1989). *Del liberalismo democrático al liberalismo conservador (el discurso ideológico desde el Estado en la emergencia del 68)*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- RICO, Á. (1994). ¿Qué hacía usted durante el golpe de Estado y la huelga general? Curiosidades de una épica uruguaya. Montevideo: Fin de Siglo.
- RICO, Á. (1995a). El orden de los simulacros y el orden social en la restauración democrática. En Á. Rico (Comp.), *Uruguay: cuentas pendientes. Dictadura, memorias y desmemorias* (pp. 63-120). Montevideo: Trilce.
- RICO, Á. (Comp.). (1995b). *Uruguay: cuentas pendientes. Dictadura, memorias y desmemorias*. Montevideo: Trilce.
- RICO, Á. (Coord.). (2003). *La Universidad de la República desde el golpe de Estado a la intervención. Cronología de hechos, documentos y testimonios. Junio a diciembre de 1973*. Montevideo: Universidad de la República.
- RICO, Á. (2004a). Los politólogos en el espejo (11). *Dosmil30*. Recuperado de <https://www.montevideo.com.uy/zzz-No-se-usa/Por-Alvaro-Rico-uc17505>

- Rico, Á. (2004b, agosto 13). Politólogos y democracia posdictadura. La tardía crítica de Gerardo Caetano. *Brecha*, p. 8.
- Rico, Á. (2004c, agosto 27). Poder y democracia posdictadura. *Brecha*, p. 11.
- Rico, Á. (Coord.). (2005a). *15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de junio-11 de julio de 1973*. Montevideo: Fin de Siglo.
- Rico, Á. (2005b). *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005*. Montevideo: Trilce.
- Rico, Á. (Coord.). (2008). *Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)*. Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación Científica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
- Rico, Á. (2009). La dictadura y el dictador. En C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, Á. Rico y J. Yaffé, *La dictadura cívico militar: Uruguay, 1973-1985*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Rico, Á. (2016). El actual malestar de los historiadores: entre la defensa del oficio y la responsabilidad política. Sobre archivos y repositorios documentales. *Contemporánea*, 7, 192-210.
- Rico, Á. (Coord.). (2021). *El Partido Comunista bajo la dictadura: resistencia, represión y exilio (1973-1985)*. Montevideo: Fin de Siglo.
- Rico, Á., y MARKARIAN, V. (Coords.). (2017). *Archivos y derechos humanos. Actualización del relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en el Uruguay*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental-Universidad de la República.
- URUGUAY. (2011, noviembre 1). Ley n.º 18.831: Restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1.º de marzo de 1985. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18831-2011>

«Ya es tiempo, ¿no?». Trayectorias, deudas y futuros posibles de la historia y la historiografía de la dictadura militar chilena.

Entrevista a Verónica Valdivia

Marcelo Casals¹

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate es una de las más destacadas exponentes de la historia política chilena. Su vasta producción historiográfica no es solo reflejo de trabajo metódico y sostenido por varias décadas, sino que también da cuenta de una especial habilidad a la hora de plantear preguntas historiográficas tan incómodas como pertinentes. Lejos de los consensos imperantes o las temáticas obligadas, la obra de Valdivia Ortiz de Zárate ha apuntado insistentemente hacia los puntos ciegos y los silencios forzados en la comprensión de nuestro pasado reciente. De allí que sus objetos de estudio hayan gozado siempre de una inquietante originalidad: grupos nacionalistas y corporativistas, derechas políticas moderadas y radicales, militares estatistas y otros no tanto, alcaldes derechistas y vinculados con el régimen, leyes de seguridad y represión estatal, prácticas y discursos anticomunistas desde el Estado y otros actores, etc. Como la propia Verónica reconoce, es posible que sus elecciones temáticas no le hayan granjeado simpatías entre aquellos que privilegiaban temáticas vinculadas a actores revolucionarios o populares, y sus respectivas prácticas de resistencia, que en las décadas siguientes al fin de la dictadura militar constituían la mayoría de quienes practicaban distintas variantes de historia política. La profesora Valdivia, quien no esconde su adscripción al campo político de la izquierda, no cejó en su afán de analizar actores y prácticas derechistas y autoritarias en distintos momentos del siglo XX chileno. No lo hizo por un mero afán de denuncia —tarea que no requiere el nivel de detalle e interpretación de sus investigaciones—, sino con la actitud que todo historiador debe tener: comprender, mediante un análisis sereno y ponderado, las trayectorias de actores políticos y sociales importantes en el devenir de procesos complejos de nuestra historia reciente.

Más allá de las recepciones e incomodidades que pudo haber generado la obra de Valdivia Ortiz de Zárate entre historiadores de su generación, lo cierto es que el conjunto de sus investigaciones se ha transformado en una referencia obligada para historiadores de generaciones más recientes, quizás en un grado mucho más alto de lo que la propia Verónica está dispuesta a admitir. Gracias a ella, un conjunto cada vez más amplio de historiadores jóvenes (o sub-40, para así contarme entre sus filas) hemos podido complejizar nuestra mirada de la historia reciente, cuestionar los temas e interpretaciones canónicas de distintas persuasiones y hacernos preguntas que no responden solo a la proyección de nuestras convicciones. Además, la obra de Verónica refleja el valor del libro como forma de exposición y análisis histórico, algo que lamentablemente es cada vez menos común de ver en el medio local dadas ciertas presiones y dificultades institucionales y la excesiva valoración del *paper* indexado en la academia actual. A lo largo de su carrera ha escrito cinco libros como autora única (Valdivia Ortiz de Zárate, 1992, 2003, 2008, 2017, 2021), otros cinco en colaboración

1 CIDOC, Escuela de Historia, Universidad Finis Terrae

con Julio Pinto Vallejos y otros historiadores de su equipo (Pinto Vallejos y Valdivia Ortiz de Zárate, 2001, 2009; Valdivia Ortiz de Zárate, Pinto Vallejos y Álvarez Vallejos 2006; Valdivia Ortiz de Zárate, Álvarez Vallejos y Donoso, 2012; Valdivia Ortiz de Zárate, Álvarez Vallejos, Pinto Vallejos, Donoso y Leiva, 2014),² y decenas de artículos y capítulos de libros relativos a sus sucesivos proyectos. Todos esos estudios se han transformado en referencias obligadas para el análisis y comprensión de la historia política contemporánea chilena, abarcando desde el populismo *alessandrista* de los años veinte hasta la transición democrática de los años noventa.

Una parte significativa de la obra historiográfica de Verónica Valdivia dice relación con la experiencia autoritaria de los años setenta y ochenta. Como la propia profesora Valdivia reconoce, aun cuando muchos de sus libros no aborden en forma directa el período, la inquietud política e intelectual estaba firmemente ligada a los problemas deducidos de la dictadura militar. Así, estudiar a los grupos nacionalistas, a la derecha política, a los militares o a grupos como la Milicia Republicana en distintos momentos del siglo XX tuvo relación directa con el decisorio movimiento de fuerzas ocurrido en el campo conservador en los setenta y ochenta, y la necesidad imperiosa —aunque no siempre compartida por otros historiadores— de entender de manera histórica, rigurosa y desprejuiciada esos fenómenos.

En el año del 50.º aniversario del golpe militar que destruyó el proyecto de la izquierda marxista y la democracia chilena, e instauró una violenta dictadura militar de ambiciones refundacionales, resulta necesario, creo, darles la palabra a aquellos intelectuales que han venido preguntándose de manera original y sistemática sobre las distintas dimensiones, raíces y legados del autoritarismo chileno. Verónica Valdivia encarna mejor que nadie esas características. En la conversación de las páginas siguientes —sostenida entre marzo y abril del 2023³— busqué equilibrar la conversación historiográfica con la propiamente política, dos dimensiones distintas, pero íntimamente imbricadas en las labores de cualquier historiador latinoamericano enfocado en las duras historias recientes de la región. Es un diálogo apenas introductorio de uno mucho más grande y de más voces sobre las historias e historiografías chilena y latinoamericana relativas a las distintas experiencias autoritarias y de violencia política de la Guerra Fría tardía. Cualquiera sean los caminos que la investigación histórica al respecto tome en el futuro, la obra, preguntas, inquietudes y miradas de Verónica Valdivia quedarán como referente obligado en la tarea sin fin de dotar de nuevos sentidos a los distintos pasados de nuestro presente.

Marcelo Casals (M. C.): La historiografía fue una de las últimas disciplinas en abordar la experiencia autoritaria chilena, después del periodismo, la sociología y la ciencia política. Quizás por ese afán tradicional de dejar pasar cierta cantidad de años para liberarse de las pasiones de su tiempo, o bien por las consecuencias que la represión militar tuvo en la historiografía, sus instituciones y exponentes, lo cierto es que es difícil hallar obras significativas hasta al menos inicios del siglo XXI, algo que por lo demás es coincidente con la agudización de las batallas por la memoria en el Chile de la transición desde los tiempos de la detención de Pinochet en Londres en 1998 (incluyendo en ello, por cierto, los debates disciplinarios en torno al período entre apologetas del régimen como Gonzalo Vial y sus críticos, nucleados en el Manifiesto de historiadores [Grez y Salazar, 1999]). Tú fuiste una de las primeras historiadoras en investigar de manera sistemática el período, al menos desde la época de El golpe después del golpe (Valdivia Ortiz de Zárate, 2003). ¿Cómo y por qué llegaste a la decisión de abordar ese período y de qué manera explicas ese inicio tardío de la reflexión historiográfica?

2 A ellos se le suman los tres volúmenes de reciente aparición de *Populismo en Chile. De Ibáñez a Ibáñez* (2023) escritos junto con Julio Pinto Vallejos, Sebastián Leiva, Karen Donoso y Teresa Gatica Pinto (nota de M. C.).

3 En sucesivas revisiones del texto resultante de nuestra conversación, tanto Verónica como yo agregamos algunas notas bibliográficas o clarificadoras. Cada una de ellas (empezando por la anterior) está identificada con nuestras respectivas iniciales (nota de M. C.).

Verónica Valdivia (V. V.): Me referiré a la historiografía chilena, porque entre los historiadores norteamericanos la producción comenzó antes, en los setenta y ochenta, con obras relevantes como las de Brian Loveman, *Struggle in the Countryside. Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973* (1976); Paul W. Drake, *Socialism and Populism in Chile, 1932-1952*, que fue publicado en 1978, seguido de una segunda edición extendida y en español en 1992 (1978, 1992), y Peter Winn, *Weavers of Revolution. The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism* (1986).

En el caso de las ciencias sociales, tras el golpe sobrevivió Flacso, lugar donde sociólogos y politólogos comenzaron los estudios sobre las Fuerzas Armadas y el origen del golpe, en los que participaron investigadores como Augusto Varas, Felipe Agüero, Carlos Portales, Hugo Frühling, entre otros. Ello fue posible por el patrocinio y el financiamiento externo. Las universidades, que hasta entonces eran los centros de pensamiento, estaban intervenidas por los militares y muchas carreras de humanidades y ciencias sociales se encontraban cerradas. Las carreras de Historia fueron unas de las más golpeadas por la represión con posterioridad al golpe, vistas como antros marxistas y, si bien, no todas fueron clausuradas, sí se intervino sus currículums y se exoneró y exilió a numerosos académicos. Esta situación contribuyó a la parálisis productiva y el denominado «apagón cultural» de los años setenta.

En materia historiográfica, la tardanza para abordar la historia reciente tuvo relación con el estadio de la historiografía chilena de los años ochenta, centrada en la historia social, tras el impacto de la obra de Gabriel Salazar.

No hubo represión sobre la historia reciente de antes del golpe —prácticamente no existía—, sino sobre la historia social del movimiento obrero y del capitalismo, en la pluma de los historiadores marxistas más connotados de entonces: Hernán Ramírez Necochea, Marcelo Segall, Julio César Jobet, que historiaron los orígenes del movimiento popular y obrero en el siglo XIX y principios del XX. Solo el militante comunista —en su calidad de militante— Jorge Barría abordó la historia sindical de este último siglo a ese respecto.

La historia social, inaugurada por Gabriel Salazar en *Labradores, peones y proletarios* (1985) miraba al conflicto político de Chile, originado, a su juicio, en el quiebre social del siglo XIX. Aunque no estudiaba la dictadura propiamente tal o la historia reciente, estaba debatiendo sobre ella, al rebatir el argumento derechista-dictatorial de que el origen del golpe estaba en las reformas estructurales de los años sesenta (especialmente la reforma agraria) y en la Unidad Popular. La contraofensiva de Salazar proponía que el quiebre era muy anterior, histórico. Esa mirada, focalizada en el mundo popular decimonónico, dejaba el estudio específico de la historia reciente abandonada. Hay que considerar que se trataba de generaciones formadas por historiadores colonialistas. Si bien su segundo libro, *La violencia política popular en las grandes alamedas* (1990), inquirió sobre el siglo XX, su gran impacto estuvo en la historia social, focalizada en el bajo pueblo decimonónico, que se volvió «salazariana» y capturó a las nuevas generaciones. Las otras dos figuras historiográficas de los ochenta y los noventa, Gonzalo Vial y Alfredo Jocelyn-Holt, también buscaban una respuesta para el golpe y el autoritarismo en Chile, pero, al igual que Salazar, se concentraron en el siglo XIX. Vial inició una historia general del siglo XX, pero que solo alcanzó sus primeros tomos, analizando el período 1891-1938, aunque publicó una historia del siglo XX en fascículos en la prensa derechista. Los libros más importantes de Jocelyn-Holt se referían a la Independencia y las décadas que le siguieron en el siglo XIX. Su libro sobre la historia reciente chilena, *El Chile perplejo* (1998), no tuvo secuela y luego de eso se volcó a la realización de una historia general de Chile, aunque solo ha historiado la conquista y la época colonial.

Hubo algunas salvedades respecto de esta trayectoria historiográfica, como el libro de Mario Góngora sobre el Estado y el conflicto político chileno, el *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile* (1981), y la visión panorámica del siglo XX, tipo manual, de las/os jóvenes historiadores de la Universidad Católica, titulado *Chile en el siglo XX* (Aylwin et al., 1985). Aun así, la historia reciente chilena, de estudios monográficos interesados en las izquierdas de los 1960 o el autoritarismo, la violencia política, los grupos de ultraderecha,

etc. comenzó en los 1980, aunque, en el caso de estos últimos, mirada desde los estudios de la década de 1930, época en la que aparecieron grupos fascistas y militarizados, como el de Carlos Maldonado *La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile* (1988) y los trabajos sobre las derechas de Andrés Benavente (especialmente *La derecha política en el régimen militar* [Benavente Urbina y Araya, 1981] y *La alternativa nacionalista en el régimen militar* [Benavente Urbina, 1982]), muy ligados, estos últimos, al debate interno de la Democracia Cristiana, sin repercusión historiográfica posterior. De hecho, nunca se publicaron como libro, solo quedaron como manuscritos. Igualmente, debe mencionarse la notoria excepción de Joaquín Fermandois en su obra *Chile y el mundo, 1970-1973: la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional* (1985) y de Sofía Correa sobre la derecha liberal-conservadora del siglo XX, en formato de artículos, porque su libro recién apareció muchos años después bajo el título *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX* (2005).

En mi caso, partí por estudiar la Milicia Republicana en un libro publicado con el título *La Milicia Republicana: los civiles en armas, 1932-1936* (1992) y los grupos nacionalistas y fascistas que derivaron de ella y otras vertientes. No estudiaba la dictadura, pero sí me inmiscuí, desde otro período histórico, en los acalorados debates de esos años sobre la salida de la dictadura, ya fuera por una vía pacífica o armada. La Milicia Republicana, una agrupación militarizada, creada para contraponerse a los golpes militares que ocurrieron en los años veinte y estabilizar institucionalmente al país, me servía como lente para analizar históricamente el proceso de redemocratización de ese momento e implícitamente el que vivía Chile en los años ochenta. Si bien este libro se publicó en 1992, su investigación y primera versión, como tesis de Magíster, fue de fines de los ochenta, defendida en 1989. Mis trabajos posteriores, en los años noventa, sobre los movimientos nacionalistas en el siglo XX, llegaron hasta el golpe de 1973, incursionando ya en la historia reciente, inquiriendo cómo esos grupos antidemocráticos se mantuvieron por décadas, sus vínculos con las Fuerzas Armadas y su influencia en el golpe de 1973. Fue desde esa perspectiva que llegué a estudiar la dictadura, pero antes de la detención del general Pinochet en Londres y antes de que la historia reciente comenzara a irradiar su influencia historiográfica sobre las jóvenes generaciones. Fueron mis propios estudios sobre las derechas los que me condujeron al golpe y la dictadura, porque ellos develaron una estrecha relación entre los grupos nacionalistas y franquistas con el Ejército, desde la década del cuarenta. Fueron los nacionalistas quienes argumentaron primero a favor de una función sociopolítica para las Fuerzas Armadas y todas las conspiraciones militares, entre 1938 y 1973, contaron con la participación de las derechas nacionalistas.

Mi decisión de estudiar a los grupos de ultraderecha, en parte provino de mi origen familiar, pues casi toda mi familia, tanto materna (franquistas acérrimos) como paterna, eran y son de derecha y bien a la derecha, muy anticomunistas. Aunque era una adolescente, los vi actuar en la oposición a la Unidad Popular y a favor de la dictadura, incluso colaborando con ella en las áreas sociales y plebiscitos que buscaban «legalizar y legitimar» el poder y personalismo de Pinochet. Quizá por eso desarrollé cierta sensibilidad en observarlas, detectar ciertos aspectos de su historia. Pero, sin duda, mi interés pionero por la historia reciente se relacionó con mi vivencia de la Unidad Popular, el golpe y la dictadura. Desde el comienzo de mi formación histórica en la universidad, supe que mi interés era el siglo XX y, en particular, desde los años sesenta, aunque no era esa la tónica de los currículums de las carreras de historia en la época, pero, curiosamente, logré hacerlo en la Universidad de Santiago de Chile de los años ochenta y comencé mi análisis por la década de 1930 y los grupos nacionalistas, corporativistas, primero fascistas y luego franquistas.

El Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, en los años ochenta, tuvo una trayectoria curiosa. La dictadura cerró las carreras de ciencias sociales y las pedagogías, vistas como centros marxistas; el pregrado de Historia vivió esa experiencia a comienzos de esa década. Sin embargo, bajo el rectorado del general de Ejército, Brigadier Jorge O’Ryan —exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército— llegó un grupo de la Secretaría Nacional de los Gremios, nacionalistas filofascistas, entre ellos José Ramón Molina, uno de sus exponentes, quien proyectaba un centro de estudios

humanísticos de derecha. Aprovechó la incubación de la ley de posgrados para reemplazar los pregrados por los magísteres (o maestrías). Eso les brindó la cobertura institucional a los magísteres en humanidades, dentro de los cuales se creó el de Historia. Paradójicamente, los académicos que nutrieron ese Programa eran de izquierda, algunos exiliados u otros que estudiaron en Europa, Estados Unidos y Canadá, además de importantes y reconocidas figuras del ámbito historiográfico nacional, como Rolando Mellafe, Álvaro Jara y Armando de Ramón. Estos historiadores ayudaron a legitimar un magíster en Historia en una universidad que no tenía tradición de investigación historiográfica. Esto explica que la perspectiva no fuera derechista, sino enfocada en la historia económico-social decimonónica, pero especialmente propicia a explorar nuevas temáticas, abriéndose a la historia del siglo XX, chileno y latinoamericano. Ese fue el marco que me permitió contactarme con el historiador norteamericano Paul Drake, a quien conocí en 1987, y desarrollar cursos y trabajos de investigación sobre el siglo XX chileno, cuyo punto de llegada fue mi tesis de maestría sobre la Milicia Republicana.

En ese sentido, mi historia familiar, mi trayectoria universitaria y mis propias investigaciones sobre las derechas radicales me condujeron a la dictadura. Titulé uno de esos primeros trabajos *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas* (1996), que reconstruía la última fase del acercamiento entre esos grupos franquistas y las fuerzas militares para dar el golpe.

Por otra parte, también influyeron algunos recuerdos propios del período posgolpe. Por ejemplo, la figura del general Oscar Bonilla (de las líneas estatistas, antineoliberales dentro del Ejército), seguido por las cámaras de televisión en las poblaciones de pobres urbanos, en algún sentido guiaron mi mirada en las conspiraciones militares de los años cincuenta (sobre todo en el caso de mi trabajo titulado *Nacionalismo, ibañismo, Fuerzas Armadas. Línea Recta y el ocaso del populismo* [1997]), que me llevaron directamente a mi segundo proyecto, en concurso público nacional, con financiamiento estatal (1999-2001), centrado en la dictadura, que buscaba analizar la pugna interna entre oficiales estatistas y neoliberales durante los primeros siete años en el poder para, de ese modo, rebatir la tesis derechista dictatorial de la hegemonía neoliberal y antiestatista del conjunto de las Fuerzas Armadas antes del golpe. *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980* (2003) reconstruyó la pugna en torno al proyecto dictatorial, entre quienes buscaban reponer el Estado anterior a 1973, con mayor énfasis en el mercado, pero conservando su sentido de responsabilidad social y que abogaban por mantener la Constitución de 1925, representados por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Gustavo Leigh Guzmán, y la opción neoliberal liderada por el general Pinochet, que derivaría en una nueva institucionalidad autoritaria-neoliberal, consagrada en la Constitución de 1980.

M. C.: Es cierto que la historiografía sobre la experiencia autoritaria chilena —o, de manera más amplia, el ciclo revolución/contrarrevolución, para incluir a la Unidad Popular— empezó antes en el extranjero, sobre todo en la academia norteamericana. Eso, como siempre, tuvo que ver con las condiciones en que esos estudios se desarrollaban: la solidaridad internacional y el enorme impacto global de la experiencia chilena en comparación con la difícil situación institucional de la historiografía chilena durante dictadura (exilio, intervención de las universidades, censura, «apagón cultural», etc.). Imagino que eso también tuvo que ver con las opciones de Salazar y la historia social (entre muchos otros) de retrotraer la mirada más hacia atrás, para articular una crítica histórica al autoritarismo desde espacios no tan explícitamente contingentes.

Con todo, desde principios del siglo XXI, más o menos, la historiografía al interior de Chile ha empezado a analizar de manera directa la dictadura militar. Puede que El golpe después del golpe no sea el primero en términos cronológicos —depende, por supuesto, qué entendemos por historiografía, y esos límites no son siempre claros—, pero sí me parece que fue el primer libro de una historiadora profesional en poner un cierto contrapunto a las interpretaciones y visiones más comunes sobre el período que veían a la dictadura como un solo gran bloque. Allí dejaste en claro que el régimen no tenía una idea acabada sobre su proyecto refundacional desde un principio, y que ese proceso fue parte de una lucha política intrainstitucional, que se desarrollaba en paralelo tanto a la represión a la izquierda como a lo que mucho tiempo después llamarías «guerra social» de la dictadura. ¿Crees que ese tipo de visiones que complejizan

nuestra historia reciente ha guiado la producción historiográfica posterior? ¿Cuáles crees que han sido los principales avances y vacíos de la historiografía sobre el período revolución-contrarrevolución —nuestra «historia reciente»— en Chile durante los últimos veinte años más o menos?

V. V.: Peter Winn hizo la misma apreciación respecto de mi libro *El golpe después del golpe*, durante la conmemoración de los cuarenta años del golpe en su conferencia en el GAM,⁴ como la primera historiadora profesional que historiaba la dictadura. Me parece que ese libro tiene el mérito de apostar por una mirada desprejuiciada, haber estado abierta a mirar históricamente, sin conclusiones ya preconcebidas y tratar de comprender las concepciones militares, que llevaron al golpe, la naturaleza de la represión y la vía proyectual elegida. Lxs historiadores entre los que yo circulaba las concebían solo como fuerzas represivas, sin que hubiera mucho que reflexionar y tenían la atención puesta exclusivamente —hasta hoy— en las víctimas de la dictadura, en específico el mundo popular y sus fuerzas políticas resistentes. En ese sentido, al comienzo mi apuesta fue bien marginal, sin con quien dialogar. Mi grupo inicial estaba conformado por los jóvenes historiadores Rolando Álvarez y Eduardo López, y por su cercanía, Julio Pinto, con quien siempre hemos compartido nuestros respectivos quehaceres.

Por otra parte, la historia reciente aún no se había instalado y era resistida por lxs historiadores más convencionales. Un ejemplo de ello fue la deriva de mi proyecto Fondecyt⁵ «El ocaso del populismo militar», que se transformó luego en *El golpe después del golpe*. Yo lo envié al Grupo de Estudio de Historia, sin embargo, gané por el Grupo de Estudio de Ciencia Política, porque el de Historia consideró que su temática —historia reciente— no era historia, sino ciencia política. En consecuencia, ya fuera porque la historiografía de punta en los años ochenta y noventa se concentraba en lo social-popular o porque la historia reciente no era considerada historia, el impacto de mi trabajo fue limitado. Aun así, los dos proyectos Fondecyt que gané antes de los dos mil eran de historia reciente, el primero sobre los grupos nacionalistas entre 1952 y 1973, y el ocaso del populismo militar. En otras palabras, a pesar de las dificultades a que se enfrentaba la historia reciente, el espacio comenzó a abrirse lentamente.

Pienso que mis estudios colaboraron a relegitimar la historia política en un momento de fuerte desprestigio por sus antecedentes positivistas e institucionalistas, y de hegemonía de la historia social decimonónica. Persistí en mi convicción sobre la inconveniencia de seguir las modas historiográficas y concentrarme en lo que, a mi criterio, era necesario para entender la trayectoria golpista-represiva-neoliberal a la que llegamos. Desde ese punto de vista, ayudé a refundar la historia política, como Nueva Historia Política, abriendo campo a la historia reciente, proceso continuado con las influencias extranjeras y la arremetida por las subjetividades y el testimonio.

Considerando que no me aboqué al estudio de un solo sujeto histórico, sino al amplio abanico de las derechas —radicales, institucionales, etc.— y que avancé en el tiempo hasta los gobiernos de la Concertación, inmiscuyéndome en las administraciones municipales y la «alcaldización de la política»,⁶ mis trabajos han ejercido una dilatada influencia, fundamentalmente entre las generaciones más jóvenes, las que estaban escribiendo para el Bicentenario y la década del 2010. Una gran mayoría de ellas/os se abocaron al período

4 Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). En su origen fue el edificio construido por el gobierno de Salvador Allende para la UNCTAD III, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en 1972; luego fue ocupada por las Fuerzas Armadas golpistas y bautizado como Edificio Diego Portales, nombre de un personaje histórico ligado al pensamiento autoritario. El gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) decidió recuperar el sentido original que se le daría tras el fin de la UNCTAD III, un centro cultural. Fue rebautizado como Gabriela Mistral, una poetisa chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. El GAM sintetiza parte importante de la historia reciente de Chile (nota de V. V.).

5 Fondo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología (Fondecyt), financia proyectos de investigación individual. Es parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, equivalente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas argentino (nota de V. V.).

6 Verónica se refiere a su libro escrito junto con Rolando Álvarez Vallejos y Karen Donoso titulado *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista* (2012) (nota de M. C.).

anterior al golpe 1967-1973, en especial de la izquierda armada, como también a los años de la Concertación y su carácter de posdictadura, ya fuera desde la historia sindical, educacional o de partidos, inspirándose en algunos conceptos articulados por mí. No ha habido el mismo interés por estudiar la dictadura, el proceso ha sido más lento y con un número pequeño de investigadores, y se ha focalizado en algunos temas de derechos humanos y represión, habiendo extensos ámbitos abandonados, salvo tu trabajo sobre las clases medias, una excepción (Casals, 2023).

Yo diría que esa mirada más desprejuiciada y centrada en nuestros adversarios y en diálogo entre sujetos no tuvo seguidores hasta mucho tiempo después. La historiografía sobre la izquierda explotó desde los años dos mil, especialmente entre la generación que seguía a la mía, centrada en parte en la historia del Partido Comunista, el impacto represivo tras el golpe, su reconstrucción «desde las sombras» y su historia posterior. Ese fue el caso del libro de Rolando Álvarez Vallejos *Desde las sombras. Un estudio de la clandestinidad comunista (1973-1980)* (2003). Rolando, por supuesto, estuvo influido por mis perspectivas historiográficas. Con todo, el énfasis más marcado ha estado en los estudios sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y su opción armada, fuertemente reprimido por los organismos de seguridad dictatoriales. Esos estudios estuvieron muy influidos por la lógica testimonial y los estudios de memoria. Se han escrito decenas de tesis, artículos y libros al respecto, aunque siempre desde una óptica muy endogámica, centrada en sí mismos y sus luchas, con casi nulo diálogo con los adversarios, de derecha y de izquierda, algo que también ha ocurrido respecto de la historia sobre los pobladores.⁷ Han sido los «gritos» historiográficos, en el sentido de los más estudiados.⁸ Si bien el aporte de estos trabajos es innegable, pues desenterraron el accionar militar tras el golpe, cuestionando la versión oficial pinochetista, y ha alimentado la memoria social, tiene dificultades para analizar el conflicto, dando cuenta de los demás sujetos en pugna. La historia de la izquierda no se agota en sí misma, sino en la lucha con sus oponentes, en los espacios en que se desarrolla la contienda. Ignorar al adversario tiene el efecto de mantener las imágenes caricaturescas, que poco aportan. Me parece que se han llenado importantes lagunas en materia del devenir de la izquierda surgida en los sesenta, pero quedan muchos temas aún por investigar, aunque con la relativa excepción de los estudios sobre el Partido Comunista. Esta posición, tal vez, conspiró en una aceptación más temprana de mi trabajo entre los círculos de historiadores de izquierda, de mi generación. Ella se ha producido en los últimos años, especialmente después del estallido social, cuando los debates sobre la derecha y la represión estatal se actualizaron. En la práctica, encontré a mis interlocutorxs en el exterior. Creo que 2008 representa un año bisagra en ese sentido, porque fui invitada a un gran congreso que se desarrolló en Alemania, en 2009, como conmemoración de los veinte años de la caída del Muro de Berlín: 1989 como un año expresivo de procesos de gran envergadura, como la represión en la plaza de Tiananmen o los diez años de la Revolución Iraní. Fui invitada a la mesa de América Latina, junto a Margarita López Maya, quien abordó el «Caracazo» de 1989 y Beatriz Sarlo, que ofreció una mirada cultural del período. Yo reflexioné sobre el experimento neoliberal chileno, en debate con las apreciaciones de Naomi Klein en la *Doctrina del shock* (2007). Al año siguiente me contactó Stéphane Boisard, entonces en París, para un dossier sobre las dictaduras del Cono sur que preparaba, y participé por primera vez en las Jornadas de Historia Reciente, que se realizan en Argentina, incorporándome a la red de estudios de las derechas y de la dictadura con mis colegas sudamericanos, argentinas/os, uruguayas/os, brasileñas/os, con quienes participo en los debates disciplinarios y de quienes me he nutrido para mis investigaciones de la última década. Las enriquecedoras conversaciones y los trabajos de Ernesto Bohoslavky, Magdalena

7 En Chile, los «pobladores» son los habitantes de las «poblaciones», barrios periféricos e informales, muchos de los cuales nacieron de «tomas» de terreno desde finales de los años cincuenta en adelante. Allí se concentraban tanto la pobreza y la exclusión como la organización de base (en muchas ocasiones de raigambre cristiana) y el activismo político de izquierda y de centro. El estudio paradigmático al respecto sigue siendo el de Mario Garcés (2002) (nota de M. C.).

8 Me refiero a mi artículo «Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena ante la dictadura pinochetista» (Valdivia Ortiz de Zárate, 2018) (nota de V. V.).

Broquetas, Marina Franco, Gabriela Águila, Rodrigo Patto Sá Motta, Daniel Lvovich, Aldo Marchesi, Laura Rodríguez, Gabriela Gomes, Jaime Jaffé, Enrique Serra Padrós, entre otros, han iluminado mi comprensión de la historia reciente chilena y del Cono sur.

Esta influencia relativa queda de manifiesto en el caso de los pilares de la dictadura, es decir, sus partidarios, quienes le aportaron parte sustancial de su proyecto, propaganda, proyección política y base social. El campo no ha tenido mucho desarrollo en Chile, no ha concitado interés, mientras que se insiste en una versión casi unívoca de resistencia (Bastías Saavedra, 2013). O bien, se levanta un imaginario idílico de comunión con amplios sectores sociales (como en el caso del libro de Gonzalo Rojas Sánchez, *Chile escoge la libertad. La presidencia de Augusto Pinochet*, [1998]). Tu caso es una excepción. En relación con las derechas ha habido algún desarrollo, como lo demuestra el trabajo de Carolina Pinto UDI. *La conquista de corazones populares (1983-1987)* (2006), aunque no publicó otras investigaciones después de esta.

Quizá como parte de un momento de recambio epocal y generacional, las/os jóvenes han sido más receptivas/os. Ejemplo de ello son los estudios de la política municipal, la idea de «alcaldización de la política» que articulé, pero trabajados para los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera. Esa alcaldización de la política buscó erosionar la función de los partidos y fortalecer el quehacer político local, acentuando las relaciones de clientelismo y alejando a la población de los debates proyectuales. Este tema lo estudiamos para la dictadura junto a Rolando Álvarez y Karen Donoso (2012). Posteriormente, Rolando y yo continuamos esos estudios para los años noventa y el primer lustro del siglo XXI, corroborando el carácter posdictatorial del período, a través del estudio del accionar alcaldicio de algunos municipios. Un discípulo de Rolando —y en algún grado mío—, Aníbal Pérez Contreras, lo ha continuado para los años dos mil en dos publicaciones: *Clientelismo en Chile* (2020) y *La UDI tras el telón* (2016). En este caso, en particular, es posible que se genere un pequeño campo, entre los ayudantes de este investigador. Algo también se ha avanzado en los organismos dictatoriales dirigidos hacia el mundo popular, especialmente las pobladoras, lo que en otros trabajos llamé «la guerra social de Pinochet» (Valdivia Ortiz de Zárate, 2010, 2015). Se han continuado estudiando las influencias ideológicas, especialmente del franquismo español en la Secretaría Nacional de la Mujer, aunque todavía solo a nivel de artículos (Grez-Cook, 2022). Un área que también se está desarrollando es el impacto dictatorial en la educación, tanto a nivel curricular como respecto de los profesores (Matamoros Fernández, 2017), que se han alimentado de mis trabajos. En relación con la influencia de *El golpe después del golpe*, fue bastante más limitada, por el rechazo a estudiar a las Fuerzas Armadas. Un discípulo mío analizó la comandancia en jefe del general Juan Emilio Cheyre, durante el gobierno de Ricardo Lagos y el proceso despinochetización del Ejército (Seguel Rojas, 2011, 2016), pero no continuó esta senda, porque se dedicó a temas educacionales. En la actualidad hay otro joven investigador que se está concentrando en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los primeros años de la represión dictatorial. Con él se augura con un trabajo de más largo plazo (Seguel Gutiérrez, 2022). También acaba de aparecer en español el libro de Leith Passmore *La guerra dentro de los cuarteles. Recordando el Servicio Militar durante la dictadura en Chile* (2023), aunque Leith se ha estado dirigiendo, después de esa investigación, a áreas sociales actuales. También ha habido avances en los ámbitos culturales (Albornoz, 2014; Donoso, 2019), pero no como área de trabajo permanente.

En ese sentido, la historia reciente se consolidó como campo de estudios, pero el de la dictadura ha sido más lento, con altos y bajos, con fuertes vacíos en las lógicas dictatoriales y el amplio radio en el cual se desplegó. Me parece que el mayor interés está en lo más actual, considerando la crisis política que vive el país.

M. C.: Coincido con el diagnóstico general. La dictadura es un período que inevitablemente habita en las memorias sociales, la discusión pública, las representaciones artísticas, etc., pero en el ámbito propiamente historiográfico su desarrollo ha sido desigual. A mí me sigue impresionando, por ejemplo, que aún no tengamos un libro de síntesis

sobre la dictadura hecho desde la historiografía.⁹ Lo que más se acerca a eso es *El régimen de Pinochet de Carlos Huneeus* (2000), pero no solo el texto tiene más de veinte años, sino que su impronta politológica es bien marcada. Quizás aún no hemos llenado todos los vacíos monográficos como para elaborar una síntesis, o quizás un proyecto de esa naturaleza aún implica muchos riesgos dada la fuerte presencia de la memoria del período autoritario en la política contingente, no lo sé con seguridad. Quizás sea una tarea para la generación de historiadores en la que me inscribo y de la que mencionaste muchos nombres, es decir, aquella que nació en los años ochenta y que su experiencia directa del período fue en la primera infancia.

V. V.: Me parece que su ausencia es demostrativa de nuestra historiografía, tan desequilibrada, como explicaba antes, que se concentra en algunos temas, abandonando otros tantos. En ese sentido, carecemos del conocimiento necesario para intentar una visión global. La interpretación de Huneeus, además de politológica, está muy concentrada en los temas básicos de la dictadura, los cambios estructurales y un poco la propaganda del régimen entre mujeres y jóvenes. Va por arriba.

Con Rolando intentamos, hace unos años, escribir una síntesis, desde una óptica más bien social, pero al momento de hacer el índice temático de lo que incluiríamos como capítulos, nos dimos cuenta de que no teníamos la información necesaria para trabajar. En realidad, había muchos aspectos inexplorados. Hacerlo implicaba numerosas investigaciones previas. Por eso abandonamos el proyecto. Para entonces ya estábamos trabajando los gobiernos de la Concertación, no teníamos tiempo.

Estas carencias son coherentes con el poco desarrollo que tiene el campo historiográfico de la dictadura. Por ejemplo, en materia represiva, aún solo contamos con los análisis generales que se hicieron a fines de los ochenta y durante la década del noventa, incluyendo lo aportado por el Informe Rettig, sobre detenidos desaparecidos, pero no se han desarrollado estudios sobre el sistema represivo, como los desplegados en Argentina. Hay muchos aspectos desconocidos. Como mencioné antes, un joven investigador está trabajando sobre la DINA y los agentes de la represión, pero es un caso aislado y reciente.

Respecto de este mismo tema, aparte del poco interés, hay serios problemas con las fuentes, porque los accesos a los archivos dictatoriales de la represión están vedados, se han rescatado unos pocos, como el de Colonia Dignidad, o alguna información que encontró un periodista en el Archivo de Relaciones Exteriores y que donó a una universidad —eso ocurrió hace pocos años y fue perseguido por la justicia—, o lo que han reunido las organizaciones de derechos humanos. Otra periodista logró ver los archivos del Consejo de Seguridad Nacional, pero tuvo que apelar a los tribunales y después de muchas peleas, la autorizaron. Un archivo importante es el del Museo de la Memoria. El trabajo de investigación periodística, encabezado por Mónica González, ha rendido frutos, pero su radio es limitado, en relación con las dimensiones del problema. Peor aún, la información recopilada por el Informe Valech, sobre represión política y tortura (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005) quedó con resguardo de cincuenta años y, por tanto, no se puede acceder a ella.

Algo similar ocurre con los archivos que permitirían conocer más a fondo el trabajo de la dictadura entre los pobres urbanos. Los archivos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que fue desde donde emanó el adoctrinamiento y la guerra psicológica, nunca llegaron al Archivo Nacional. Al abandonar las esferas de poder, las Fuerzas Armadas y sus colaboradores se fueron con la documentación. De igual forma, hay serios problemas con los archivos municipales. La dictadura desconcentró las políticas, radicándolas en la cúpula, y entregó solo la ejecución, parcelada, a las autoridades que dependen del Ejecutivo. Por tanto, las decisiones se toman en la cúpula del poder, siguen al ministro del Interior, el Intendente (hoy delegado presidencial), quien ejecuta una parte, de allí a gobernadores y de ahí al municipio, que despliega las políticas sociales, pero decididas arriba. Por eso la información municipal es muy útil para investigaciones en la base. No obstante, el

9 En otros países de la región es posible encontrar obras de ese tipo. Un libro reciente y especialmente bien logrado al respecto es el de Gabriela Águila (2023) para el caso argentino (nota de M. C.).

acceso al material depositado allí (documentos, informes, etc.) está entregado a la voluntad de los alcaldes o el personal municipal, que, generalmente, es adverso y niega su existencia. Cuando trabajamos con Rolando el tema municipal para la dictadura, solo accedimos a información pública y luego, cuando abordamos el período de la posdictadura, apelamos a la Ley de Transparencia y la respuesta de la mayoría de los municipios fue que los archivos habían sido destruidos, ya fuera por incendio o inundación. En el caso del municipio de Santiago, el alcalde de entonces —Pablo Zalaquett, 2008-2012— nos impidió la entrada y nos entregó un par de CD con información seleccionada por él o algún funcionario municipal.

En realidad, esta es la tónica de los archivos en Chile. Por ser un país tan centralizado, la información política depende del Ministerio del Interior y desde allí, como señalé, las intendencias y gobernaciones, todos los cuales están semiperdidos. En el caso del Ministerio del Interior, si bien ese material siempre fue purgado, hasta mediados del siglo XX se encontraba información bastante útil, conservándose informes confidenciales. Pero desde 1948 (fecha de la ley que proscribió al comunismo), la documentación se hace cada vez más intrascendente, especialmente para el período de la historia reciente. El incendio en La Moneda durante el golpe de 1973 destruyó parte importante del archivo del Ministerio del Interior y luego vino la dictadura. Peor aún, ese secretismo y ocultamiento se mantuvo como política durante los gobiernos de la Concertación. Por eso, para la historia reciente el Archivo Nacional cuenta con información limitada, a ratos irrelevante. La mayoría de los repositorios de las intendencias para el siglo XX están perdidos. Los archivos personales, como el del ex Presidente Patricio Aylwin, parece haber sido bien depurado antes de su digitalización y publicación, y lo mismo ocurre con otros archivos de dirigentes políticos.

Pero los vacíos más grandes están en la reconstrucción socioeconómica que ocurrió durante el régimen, porque abarca múltiples dimensiones. Considerando el vasto impacto de las tendencias historiográficas que ponen el acento en las subjetividades, se ha producido un énfasis en lo testimonial, en particular de la militancia de la izquierda armada, y un abandono significativo en temáticas económicas, más allá de la transformación estructural, relativa a grupos sociales que se modificaron fuertemente, por ejemplo, los comerciantes, medianos y pequeños empresarios; o el consumo, una dimensión casi en pañales. Lo mismo en áreas como la educación, la familia, la sanidad, los gremios, etc. Hay algunas investigaciones, pero muchas veces la óptica no varía, porque las preguntas tampoco lo hacen o prevalecen las preconcepciones. De este modo, plantearse una síntesis es complejo.

Obstáculo similar provocan las condicionantes que se están imponiendo a los testimonios, con el consentimiento informado. Toda investigación que emane de entrevistas, debe tener, como es lógico, el consentimiento del/la testimoniante. Sin embargo, ello se ha traducido en exigencias cada vez mayores, incluyendo no poder ser depositados en los archivos o la destrucción de los audios, luego del uso académico de ellos. En otros casos, se ha producido el retiro del testimonio, por arrepentimiento de la persona, a pesar de haber dado ya su consentimiento, u otros que pretenden decidir qué investigadores lo usarán.

Todo esto atenta contra el desarrollo del campo y la posibilidad de avanzar hacia una mirada holística.

M. C.: Como sea, al parecer las necesidades de conocimiento histórico complejo y matizado avanzan más rápido que la capacidad de producción de nuestro gremio. En unos meses se cumplirán cincuenta años del golpe de Estado y como todo aniversario «redondo» va a motivar conmemoraciones de todo tipo, desde el Estado a la sociedad civil, reavivando las luchas por la memoria que han marcado nuestro último medio siglo ¿Cómo crees tú, como historiadora, pero también como ciudadana, que debemos recordar hoy nuestra historia reciente, es decir el ciclo revolución-contrarrevolución?

V. V.: ¿Cómo separar la ciudadana de la historiadora? Desarrollé un tipo de historiografía por mi vivencia de la historia reciente.

Es complicado plantear una imagen que abarque los períodos tan marcados que conforman, para Chile, el ciclo revolución-contrarrevolución, porque fueron muy distintos. La Unidad Popular dio lugar a una

contienda que ocurrió a la luz del día, con toda la sociedad movilizada, no armada, frente a la opacidad de la noche durante la dictadura —todo lo que intentaba ocultar— y sus fanfarrias estridentes, carentes de democracia.

Como ciudadana, tal vez debiéramos recordarlo como la confrontación entre los afanes y presiones por democratizar, en oposición a un tiempo dirigido a elitizar, centralizar y excluir.

Por supuesto, esta es una opinión desde mi posición a la izquierda del espectro político. Sé muy bien que para quienes colaboraron con la dictadura fueron los años más felices de sus vidas, y están aún convencidos de que hicieron mucho por los pobres y de que las acusaciones de violencia no eran ciertas o del todo ciertas. Su memoria no está allí, pero tampoco en el alto grado de politización que experimentaron, idealizando su participación como apolítica.

Yo he sido una historiadora que dedicó su carrera a tratar de entender lo ocurrido, buscando escudriñar el pensamiento y accionar del adversario para alimentar la memoria social. Desde ese punto de vista, me parece que deben enfatizarse aspectos definitorios de esos dos períodos claves de nuestra historia.

Respecto de la Unidad Popular destacaría el constituir un proyecto de democratización, rompiendo las fronteras que la contenían, como planteó Juan Carlos Gómez Leyton en *La frontera de la democracia* (2004), y de integración real del mundo popular. Por primera vez hubo importantes grados de «plebeyización social y cultural», algo que desató las furias de quienes conservaban una mirada oligárquica de nuestra sociedad. Me parece que debe ser recordada como un período de cambio profundo, pero no alocado, sin pasado, sino como maduración de procesos de larga duración, de construcción de sujetos, proyectos y sueños en las décadas anteriores, de búsqueda de derechos para la gran mayoría. A ese prisma debe añadirse el menos grato de la guerrilla política, dañina, que se usó, más tarde, como «prueba» de delitos, enunciados solo discursivamente. Debe tenerse conciencia que se peleaba por cuestiones profundas, que involucraban la propiedad y la transferencia de poder a otros grupos subalternos. De ahí el atrincheramiento en las posiciones y las limitaciones de un diálogo fecundo.

Respecto de la dictadura, creo que debemos recordarla como un momento de quiebre profundo, por su violencia desconocida y brutal, porque, aunque hubo bastante coerción estatal durante el siglo XX, ella se mantuvo dentro de ciertos límites, en manos de la policía y con limitaciones legales y políticas. La violencia dictatorial no representó una línea de continuidad, sino una ruptura feroz, por su legitimación del uso de un tipo de fuerza ilegal, desconocedora de los derechos humanos, por su maquinaria de tortura y muerte, la arquitectura de soplaje y delación que organizó y atravesó a la sociedad, la parálisis social por miedo. En segundo lugar, rememorarla como la destrucción del Estado de todas y para todos que, con todas sus limitaciones, encarnó la fase anterior, pre-1973; el tiempo del neoliberalismo, como sinónimo de desigualdad, explotación, abuso, pobreza rayana en la indigencia de la mayoría y la riqueza exacerbada de una minoría, el endeudamiento como realidad cotidiana, la indiferencia individualista. Un disciplinamiento por terror, hambre, desempleo o, en algunos segmentos, una mejoría social que no se deseaba perder. Como su contracara, una modernización asentada —aunque no reconocida— en las transformaciones estructurales hechas por el ciclo reformista y revolucionario anterior, del que profitó, reconectando el país con los circuitos comerciales internacionales y sirviendo como experimento del neoliberalismo, pero a costa de una involución desindustrializadora y antidemocrática. Con todo, no debe olvidarse que la dictadura trabajó por ser «popular» y consiguió el apoyo de algunos sectores populares, sostenidos en la posdictadura en el clientelismo alcaldicio. Debe recordarse que fue una dictadura que modificó la cultura, naturalizando la indiferencia social como un sentimiento y una práctica común, legítima. El individualismo competitivo e indiferente como un legado persistente.

M. C.: Como dice el viejo adagio gremial, toda historia es historia presente. ¿Qué nos puede decir hoy la experiencia de la Unidad Popular y de la dictadura en tiempos de crisis, cambio, incertidumbre y confusión que ha marcado la situación de nuestro país desde el «estallido social» de 2019?

V. V.: Hoy, como ayer, estamos debatiendo acremente sobre el país que queremos. A diferencia de entonces, no tenemos proyectos, ni ellos ni nosotros. Algunas ideas de bienestar general entre la nueva izquierda, pero sin referentes, como lo fue el marxismo o el neoliberalismo para la derecha, en declinación, porque no existen. Lo que estamos viviendo son etapas de un proceso más grande: la transformación del país y por eso la incertidumbre y los cambios reiterados, con avances y retrocesos, se mantendrán hasta que se establezcan algunas líneas gruesas que permitan ir articulando un nuevo pacto social.

Las derechas, hoy, reafirman su identidad y estilo combativo, a pesar de su carencia de una plataforma programática, más allá del libre mercado. Moviliza, hace uso profuso de las redes sociales —mucho mejor que la izquierda— y las *fake news*, utilizando los métodos de guerra psicológica cuando debe encender los miedos y atraer. Están luchando con todas las armas a su mano por defender lo máximo que puedan del paraíso que les legó la dictadura. Entre ellos hay muy pocos que aspiran a un verdadero cambio, que suponga erosionar los privilegios, negocios y prebendas que les proporciona un libre mercado a ultranza, desregulado. Como en tiempos de la Unidad Popular luchan y lucharán con todo, a pesar de que no tengo claro si cuentan con todas las armas como entonces.

Las nuevas izquierdas están bien golpeadas por el fracaso en la Convención Constituyente y como siempre peleadas internamente. Debiera aprenderse de los errores de la Unidad Popular y las divisiones que entonces se produjeron.

Son urgentes algunos puntos de encuentro, en cuestiones básicas, tanto en derechos humanos, económico-sociales y culturales para avanzar y evitar los derroteros autoritarios que ya vivimos en el siglo XX.

M. C.: Volvamos a la coyuntura de los cincuenta años del golpe de Estado ¿Cuáles son los problemas que vislumbra en las narrativas más establecidas sobre nuestra historia reciente, ahora por fuera del campo propiamente historiográfico? ¿Qué esperas tú de este nuevo momento social de reflexión histórica?

El profundo quiebre social y en las memorias existentes son importantes obstáculos para salir de la crisis actual y proyectarnos a futuro. Siguen predominando dos narrativas fundamentales, la que hace hincapié en la violación de derechos humanos y la que destaca los «logros económicos» y la modernización. Ese fue el slogan de la campaña del sí, en 1988, Chile un país moderno y ganador, que nunca ha asumido los altos grados de pobreza y desigualdad que provocó.

La violación de derechos humanos debe seguir siendo una narrativa importante, precisamente por su especificidad, ruptura con el pasado y dolor. No obstante, en este tema observo dos limitantes.

En primer lugar, está la relación de las derechas y sectores de centro con esta temática. Es una realidad que nadie niega, pero, en la práctica, el rechazo a esa situación está circunscrito a la existencia de un aparato estatal dirigido a eliminar enemigos internos y desaparecer personas. Una definición bien elemental de respeto por los derechos humanos, que no ha dado lugar a una cultura de los derechos humanos, que es otra cosa, de respeto por el/lxs otra/os, independiente de cualquier otro factor. La valorización de su calidad humana más allá de cualquier diferencia y, por tanto, de una forma de convivencia con lxs otrxs, de respeto, dignidad y no solo de no maltrato, con una subyacente fraternidad, por el hecho de ser humanxs. Esto no existe en Chile. La concepción restringida y ambivalente con los derechos humanos quedó plenamente en evidencia con la reforma educacional de fines de los años noventa y el derrotero que ha seguido: el rechazo original derechista a incorporar en los currículums y en textos escolares las violaciones ocurridas en dictadura, al extremo de confeccionar sus propios libros de texto en los municipios bajo su mano para ser distribuidos en los colegios públicos, sin recibir los confeccionados por el Ministerio de Educación. Para qué vamos a decir en la enseñanza privada. Con los años ese currículum se cambió, otro ministro quiso rebajar las horas de historia, etc., imponiendo una visión relativizadora respecto de lo sucedido.

Lo anterior, me parece, se liga con la forma en que se ha asumido la defensa de los derechos humanos por los distintos gobiernos posdictatoriales, especialmente los de la Concertación. El llamado *Informe Rettig*, sobre

represión con resultado de muerte y desaparición (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991), y el *Informe Valech* sobre represión política y tortura (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004) han sido importantes para sentar la violación de derechos humanos como un hecho, negado totalmente por los pinochetistas hasta la detención del general Pinochet en Londres, en 1998, cuando empezaron a abrirse a un diálogo. En 1991 el Ejército y la Armada rechazaron el Informe Rettig, acusando desconocimiento del contexto que llevó al «pronunciamiento», o cada vez que el gobierno proponía alguna política de derechos humanos, la derecha contraponía otra, tratando de igualar los uniformados muertos con las víctimas de la represión.

Se ha hecho mucho énfasis en los sitios de memoria. A mi entender, con lo importancia que ellos revisten y su necesidad, son insuficientes, toda vez que no convencen a los no convencidos, ya sea a los partidarios de la dictadura o a los indiferentes, y solo tienen significado para los ya convencidos, sin capacidad de ayudar a generar una cultura de derechos humanos.

Este relativismo de los derechos humanos quedó plenamente de manifiesto en la represión policial durante el estallido social de 2019 con lesiones oculares a cientos de jóvenes y abuso con las jóvenes en los retenes policiales, sin que el rechazo fuera universal y categórico, sino nuevamente se argumentaba que se trataba de excepciones, de personas y no instituciones.

Esto ha ocurrido, precisamente, porque lo que no se ha desarrollado es una «cultura de derechos humanos», debido, a mi juicio, a dos factores. En primer lugar, a que los informes sobre la represión, los sitios de memoria o las políticas de reparación parecen remitir a un problema del pasado —la dictadura—, que debe cerrarse, y no a una forma de relacionarnos y considerarnos. Más importante aún, estas políticas y discursos oficiales se contraponen a la cultura individualista, consumista y de desconfianza del otro que forjó la dictadura y fue, no solo consolidada, sino amplificadas por la Concertación y la derecha. La continuidad neoliberal y del Estado subsidiario, que ocurrió, promueve el interés individual, la competitividad, la creencia en que las personas se hacen a sí mismas, individualmente, sin sentido de comunidad, provocando una atomización social. Esta cultura del «yo» fue reforzada con el discurso de la «seguridad ciudadana», que veía delincuentes en todas partes, que incitó la destrucción del barrio, cerrando las calles de rejas, para protegerse; todos los medios de comunicación desplegaron un discurso de temor, de sospecha respecto de otros, de aquellos de apariencia distinta. En la medida que la política crediticia facilitó el acceso a bienes, antes imposible, vía endeudamiento, reforzó el temor a la pérdida, a los otros y, como efecto, la indiferencia social, la defensa de lo personal. Esta cultura atenta contra una mirada más comunitaria y fraterna, donde los problemas de unos son de todos. Por eso, las violaciones de derechos humanos llevadas adelante por el gobierno de Sebastián Piñera el 2019, de violencia policial fuera de todo control, no produjeron un rechazo social unánime, porque se alimentaban de la misma indiferencia que se observaba en los años noventa respecto de la represión policial sobre estudiantes y algunos trabajadores que protestaban, o durante las manifestaciones de cada 11 de septiembre, que siempre terminaban con carros lanza aguas y bombas lacrimógenas. Finalmente, y tal como discursaba la dictadura, las personas piensan que las víctimas «algo habrán hecho», preguntándose por qué estaban allí, priorizando de manera implícita la privacidad de las vidas por sobre la acción en la esfera pública. La dictadura buscó apasionadamente destruir el tejido social y generar una sociedad de individuos, atomizados e indiferentes a los demás. La Concertación nada hizo para revertir esta política, sino al contrario, la reforzó, sin preocuparse de recuperar algún sentido de comunidad. Con todo lo importante que fueron las iniciativas como los informes Rettig y Valech, o las políticas de reparación y los sitios de memoria, han demostrado ser incapaces de revertir una cultura de la indiferencia y de aceptación de la violencia estatal tradicional, policial.

M. C.: Terminemos con la coyuntura política actual. El gobierno del presidente Boric —que reivindica abiertamente una identidad de izquierda— ya tiene ciertos lineamientos para abordar la conmemoración de los cincuenta años. Al parecer, el asunto iría por la transmisión de la memoria entre generaciones, el reconocimiento a los activistas de derechos humanos (y el juicio crítico ante sus violaciones por agentes del Estado) y la valoración de la democracia,

el diálogo y la convivencia pacífica. Algunos historiadores (desde conservadores, como Joaquín Fernandois, a «progresistas», como Manuel Gárate) han reaccionado críticamente contra lo que supuestamente sería un intento de implantar «historias oficiales». ¿Qué te parece lo que sabemos hasta el momento de la postura del gobierno? ¿Crees que debiera abstenerse de la conmemoración? ¿Cuál crees tú que es el rol de la comunidad historiográfica académica en esta coyuntura?

V. V.: Después de muchos años, este es un gobierno de izquierda, aunque haya tenido que incorporar a gente de la ex-Concertación, socialistas fundamentalmente. El presidente Gabriel Boric y el Frente Amplio representan a una nueva izquierda, en un contexto de reorganización del sistema de partidos, proceso en curso. Es una izquierda comprometida con la condena al golpe de Estado y la defensa de los derechos humanos, así como con el feminismo, la diversidad sexual y la defensa del planeta. Son generaciones formadas no solo bajo el «paraíso» neoliberal posdictatorial, con el endeudamiento estudiantil y su enorme desigualdad, sino también hijos de las reformas educacionales que, con todos sus ives y venires, incorporaron la historia reciente, cuyos profesores se formaron bajo el influjo de las nuevas corrientes historiográficas, se nutrieron de la Nueva Historia Política, la historia social y la historia reciente. El presidente Boric es un ávido lector de historia y también muchos grupos frenteamplistas. En el documento de conmemoración se definen como una generación pos Guerra Fría, formadas con las tecnologías de la información, integrante de la globalización, opositores tenaces del calentamiento global, y para quienes el género es un vector. Nacieron por fuera de los partidos que transaron con el proyecto dictatorial, con el cual no comulgan. En suma, no es extraño que deseen conmemorar los cincuenta años del golpe, al contrario, es consistente con su trayectoria. La anomalía sería abstenerse.

El argumento de que el país está demasiado tensionado para estar escarbando en viejas heridas no responde a la realidad, toda vez que estamos en pleno debate nacional, y la dictadura y su legado es lo que está en el centro. El proceso constituyente tiene como sentido poner coto a la Constitución pinochetista.

Respecto a la acusación de propender a una «historia oficial», no resiste análisis. El documento «Relato oficial de la conmemoración de los cincuenta años del golpe de estado de 1973 en Chile», emitido por el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio,¹⁰ es el resultado de una decisión del gabinete ministerial, reunido el 27 de enero pasado y apunta, como todos saben, a orientar las actividades que se desarrollarán. El documento explicita que el golpe rompió la tradición democrática del país, trayendo crímenes y crueldades, con las cuales aún hay deudas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como todos sabemos, si bien no ha habido impunidad total, aún existen numerosas lagunas sobre el paradero de muchos detenidos desaparecidos y sus responsables. El secretismo que se cierne sobre la documentación, como mencionábamos antes, es una envoltura protectora de los responsables y sus colaboradores. La violencia estatal del gobierno derechista de Sebastián Piñera contra el pueblo mapuche y durante el estallido social, ofrecen sostén a los temores de escaso compromiso con los derechos humanos y garantía de no repetición de parte de sus partidarios. La conmemoración, inevitablemente, con el gobierno o sin él, traerá el pasado de vuelta, con estallidos de memoria. Es lo que temen.

Porque, en concreto, el documento del gobierno es un llamado al compromiso con la democracia, la memoria, la creatividad y los derechos humanos. Hace una convocatoria explícita al diálogo, a todos los sectores, como un reconocimiento de quienes ayudaron a los perseguidos, defendiendo la convivencia democrática y el apoyo internacional. ¿Qué podemos criticar de esto? ¿La defensa de la democracia? ¿El llamado al diálogo? ¿Conmemorar los cincuenta años para que «de sus lecciones sea posible imaginar futuros con más justicia y democracia», como reza el documento? ¿No debe llamar a eso? ¿Cuál debería ser su narrativa? ¿el

¹⁰ N. del E.: Se trata de un documento de circulación interna del gobierno que fue filtrado a la prensa. <https://www.elmostrador.cl/destacado/2023/03/03/gobierno-difunde-internamente-relato-oficial-sobre-conmemoracion-de-los-50-anos-del-golpe-de-estado/>

silencio? Durante su mandato, Sebastián Piñera también llamó a conmemorar los cuarenta años del golpe: «¿Lo vamos a recordar? —dijo entonces—, por supuesto que sí... no podemos resucitar a los muertos ni recuperar a los desaparecidos. Pero sí tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para avanzar en materia de verdad y reconciliación»,¹¹ y él encabezó el acto oficial de conmemoración de los cuarenta años. Verdad es a lo que llama el actual presidente de la república, Gabriel Boric, no así a una reconciliación que se entienda como sinónimo de ocultamiento y silencio.

El llamado es a «las memorias», no «la memoria».

Considerando la situación que vive Chile hoy, el llamado del presidente Boric es muy atinente: «Si las fuerzas que terminaron la democracia ese 11 de septiembre de 1973 parecen ahora lejanas, diariamente constatamos la irrupción de nuevas corrientes que la acechan. Esta es, también, por tanto, una ocasión para reflexionar acerca de los riesgos y amenazas que ella sufre en la actualidad, y renovar nuestro absoluto compromiso democrático». El «relato oficial» es un recordatorio de los peligros de entregarse de lleno a la guerrilla política, la cual también pavimenta los golpes y los crímenes. Insiste en un llamado a comprometerse de verdad con la democracia.

El gremio de historiadores conmemorará los cincuenta años con un seminario, organizado por distintas universidades, que se realizará a fines del mes de agosto, ni siquiera en septiembre. Seguramente, habrá una amplia participación, con la presencia de muchas/os investigadores jóvenes. Ojalá se observe claramente el protagonismo de las nuevas generaciones y puedan ir articulando nuevas narrativas de nuestro pasado reciente, sin olvidar los elementos centrales del pasado, pero con los ojos en el futuro y los pies en el mundo en que habitan. Este debe ser el tiempo en que «otros hombres/mujeres superen ese momento gris y amargo», que fue el 11 de septiembre de 1973, como vaticinó, en su último discurso, el presidente Salvador Allende. Ya es tiempo, ¿no?

Referencias bibliográficas

- ÁGUILA, G. (2023). *Historia de la última dictadura militar. Argentina, 1976-1983*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- ALBORNOZ, C. (2014). La experiencia televisiva en el tiempo de la Unidad Popular. La caldera del diablo. En J. Pinto Vallejos (Ed.), *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, 161-192. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- ÁLVAREZ VALLEJOS, R. (2003). *Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- AYLWIN, M., BASCUÑÁN, C., CORREA, S., GAZMURI, C., SERRANO, S., y TAGLE, M. (1985). *Chile en el siglo XX*. Santiago de Chile: Emisión.
- BASTÍAS SAAVEDRA, M. (2013). *Sociedad Civil en Dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (1973-1993)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- BENAVENTE URBINA, A. (1982). *La alternativa nacionalista en el régimen militar*. Santiago de Chile: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.
- BENAVENTE URBINA, A., y ARAYA, E. (1981). *La derecha política chilena y el régimen militar*. Santiago de Chile: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.
- CASALS, M. (2023). *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991). *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. (Vol. 1-2). Santiago de Chile: Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno. <http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/170>
- Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*. Santiago de Chile: Ministerio del Interior, 2005.
- CORREA, S. (2005). *Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago de Chile: Sudamericana.

11 Piñera reflexiona... (2013).

- DONOSO, K. (2019). *Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- DRAKE, P. W. (1978). *Socialism and Populism in Chile, 1932-52*. Urbana: University of Illinois Press.
- DRAKE, P.W. (1992). *Socialismo y populismo: Chile, 1936-1973* (Trad. F. Livacic). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- FERMANDOIS, J. (1985). *Chile y el mundo: 1970-1973: la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- GARCÉS, M. (2002). *Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- GÓMEZ LEYTON, J. C. (2004). *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile, 1925-1973*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- GÓNGORA, M. (1981). *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago de Chile: La Ciudad.
- GREZ, S., y SALAZAR, G. (Eds.). (1999). *Manifiesto de los historiadores*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- GREZ-COOK, F. (2022). El hispanismo en las mujeres chilenas: las influencias franquistas en la Secretaría Nacional de la Mujer (Chile 1973-1989). *Izquierdas*, 51, 3400-3421. <https://doi.org/10.4067/S0718-50492022000100212>
- HUNEUS, C. (2000). *El régimen de Pinochet*. Santiago de Chile: Sudamericana.
- JOCELYN-HOLT, A. (1998). *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar*. Santiago de Chile: Planeta-Ariel.
- KLEIN, N. (2007). *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Barcelona: Paidós.
- LOVEMAN, B. (1976). *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*. Bloomington: Indiana University Press.
- MALDONADO, C. (1988). *La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile, 1932-1936*. Santiago de Chile: Servicio Universitario Mundial, Comité Nacional Chile.
- MATAMOROS FERNÁNDEZ, C. (2017). Profesores comunistas y sindicalismo docente en la lucha antidictatorial, Chile 1981-1987. *Izquierdas*, (32), 203-234. <https://doi.org/10.4067/S0718-50492017000100203>
- PASSMORE, L. (2023). *Las guerras dentro de los cuarteles. Recordando el servicio militar durante la dictadura en Chile*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- PÉREZ CONTRERAS, A. (2016). *La UDI tras el telón. Agitación social, lavinismo y clientelismo. El caso de Reginato en Viña del Mar*. Valparaíso: América en Movimiento.
- PÉREZ CONTRERAS, A. (2020). Clientelismo en Chile. Historia presente de una costumbre política. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- PINTO, C. (2006). *UDI. La conquista de corazones populares (1983-1987)*. Santiago de Chile: A & V.
- PINTO VALLEJOS, J., y VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2001). ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y *alesandrisismo* en la pugna por la politización pampina (1911-1932). Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- PINTO VALLEJOS, J., y VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2009). ¿Chilenos todos? *La construcción social de la nación (1810-1840)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Piñera reflexiona sobre el 40.º aniversario del golpe militar desde La Moneda. (2013, setiembre 9). *BBC News*. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130909_ultnot_chile_pinera_discurso_conmemoracion_aniversario_jrg
- ROJAS SÁNCHEZ, G. (1998). *Chile escoge la libertad. La presidencia de Augusto Pinochet* (Vols. 1-2). Santiago de Chile: Zig-Zag.
- SALAZAR, G. (1985). *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*. Santiago de Chile: Sur.
- SALAZAR, G. (1990). *La violencia política popular en las «grandes alamedas». Santiago de Chile 1947-1987: una perspectiva histórico-popular*. Santiago de Chile: Sur.
- SEGUEL GUTIÉRREZ, P. (2022). *Soldados de la represión. Anticomunismo, Seguridad Nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- SEGUEL ROJAS, F. A. (2011). *La despinochetización del Ejército de Chile. Doctrina Cheyre: profesionalismo, modernización y pensamiento político* (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile).
- SEGUEL ROJAS, F. A. (2016). Un Ejército para la paz. Las bases para el cambio doctrinario en el Ejército de Chile (2002-2006). *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 11(1), 219-238. <https://doi.org/10.18359/ries.1376>
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (1992). *La Milicia Republicana: los civiles en armas, 1932-1936*. Santiago de Chile: DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (1996). *Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas* Santiago de Chile: Dirección de Investigación - Universidad Católica Blas Cañas.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (1997). Nacionalismo, ibañismo, Fuerzas Armadas: línea recta y el ocaso del populismo. *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, 25(116), 1-41.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2003). *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2008). *Nacionales y gremialistas. El «parto» de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2010). ¡Estamos en guerra señores! El régimen militar de Pinochet y el «pueblo», 1973-1980. *Historia*, 43(1), 163-201.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2015). Pinochetismo e guerra social no Chile (1973-1989). En R. P. Sá Motta (Ed.), *Ditaduras Militares. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai*, 121-142. Belo Horizonte: Editora Universidade Federal de Minas Gerais.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2017). *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2018). Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista. *Revista Tempo e Argumento*, 10(23), 167-203.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. (2021). *Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V., ÁLVAREZ VALLEJOS, R., y DONOSO, K. (2012). *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V., ÁLVAREZ VALLEJOS, R., PINTO VALLEJOS, J., DONOSO, K., y Leiva, S. (2014). *Su revolución contra nuestra revolución. La pugna marxista-gremialista en los ochenta*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V., PINTO VALLEJOS, J., y ÁLVAREZ VALLEJOS, R. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V., PINTO VALLEJOS, J., GATICA PINTO, T., DONOSO, K., y LEIVA, S. (2023). *Populismo en Chile. De Ibáñez a Ibáñez*. (Vol. 1-3). Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- WINN, P. (1986). *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*. Oxford: Oxford University Press.

Manuscrito «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el Penal de Libertad. Montevideo diciembre de 1990». Juan Pivel Devoto. Archivo General de la Nación/ Colección y Archivo Juan Pivel Devoto

Carolina Porley¹ e Isabel Wschebor²

Introducción

En la sección Inéditos, que se inaugura en este número de la revista dedicado a los golpes de Estado y las dictaduras en Chile y Uruguay, compartimos unos apuntes manuscritos del historiador Juan Pivel Devoto (1910-1997), intelectual que durante su dilatada actuación en el Estado, entre las décadas del treinta y del noventa, alcanzó, individualmente, el mayor peso funcional en las tareas destinadas a gestionar las huellas materiales del pasado en Uruguay, incluso durante la dictadura cívico-militar (hasta 1982).

Se trata de textos escritos en ocho tarjetas apaisadas y seis hojas sueltas en las que registró informaciones e impresiones que le transmitió su hijo durante las visitas que le hizo al Penal de Libertad. Miembro del MLN-T, Juan Pablo Pivel Ranieri (1943-) estuvo preso en dos oportunidades, la segunda de las cuales se extendió entre el 28 de mayo de 1972 y el 2 de julio de 1977. Tras su liberación, se exilió en España, donde vive actualmente.

Esos apuntes fueron guardados por Pivel Devoto en un sobre que tituló «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el Penal de Libertad. Montevideo diciembre de 1990». Ingresaron al Archivo General de la Nación (AGN) en marzo de este año, como parte de una donación que realizó Juan Pablo Pivel Ranieri.

La transcripción de los apuntes que aquí publicamos fue inicialmente realizada por María Beatriz Eguren, directora de la División de documentación del AGN —quien también dispuso su exhibición en una vitrina en la institución— y revisada por nosotras en el marco de la presente publicación.

La colección Juan E. Pivel Devoto que custodia el AGN se ha ido formando en distintas etapas y a través de distintas vías. La donación realizada por Pivel Ranieri constituye el tercer hito sustantivo en ese proceso. Y cada ingreso comporta a su vez significados específicos en torno a la memoria cultural de esta figura pública.

¹ Universidad CLAEH y Universidad de la República.

² Universidad de la República.

Un primer corpus documental fue reunido y conservado por el propio Pivel Devoto en el AGN durante el último tramo de su trayectoria pública (entre 1985 y 1996). Se trata fundamentalmente, aunque no en forma exclusiva, de documentación vinculada a su actuación dentro del Estado, desde la diversidad de cargos técnicos y de confianza política que ocupó (en la enseñanza, en el Museo Histórico Nacional, en la Intendencia de Montevideo, en el Archivo General de la Nación, en la Comisión Nacional del Archivo Artigas, en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en el Ministerio de Instrucción Pública, entre otros), incluido el único cargo electivo, como miembro del Concejo departamental de Montevideo entre 1955-1959, integrando la minoría nacionalista.

Ese material fue clasificado y conservado por Pivel en cajas dentro del espacio en la planta baja del AGN que ocupó entre 1987 y 1996 aproximadamente en el marco de su trabajo como editor del Archivo Artigas.

En 2008 la División Documentación del AGN realizó el inventario de esas 320 cajas, para lo cual se optó por respetar el criterio de procedencia (ordenamiento establecido por su autor). Sobre el origen y formación de dicho acervo, se consignó que este «se generó en la institución en el transcurso de su trayectoria pública [la de Pivel Devoto]». Este inventario fue publicado bajo el título «Colección Juan Ernesto Pivel Devoto», en un extenso documento de más de cuatrocientas páginas, que incluyó también un relevamiento exhaustivo de la producción bibliográfica y de la trayectoria funcional de Pivel Devoto, así como una serie de discursos y artículos en homenaje realizados por figuras del campo político e historiográfico.³

De este conjunto inicial, el AGN se desprendió de las cajas que albergaban documentación del archivo del Partido Nacional que Pivel conservó durante la dictadura y que fue entregada a esa agrupación política en 2010. Asimismo, la colección, luego denominada «Archivo y Colección Juan Ernesto Pivel Devoto», se amplió tiempo después al incorporar una «segunda parte», así designada, de 168 cajas (numeradas de la 321 a la 489) que ingresaron como donación. En esas nuevas cajas destacan las que reúnen la correspondencia personal (cajas 321 a 335) de más de seis mil cartas. El inventario de esta segunda parte estuvo listo en 2013.

La decisión de considerar esta documentación donada por la familia como una «segunda parte» del corpus documental anterior, se debió a que el sistema de ordenamiento y hasta el tipo de cajas utilizado eran similares, pese a que dicho material no fue conservado en el AGN, sino en el domicilio del historiador. En lo que respecta al contenido, constituye documentación de naturaleza similar, propia de un archivo personal: desde manuscritos relativos a su labor como historiador y a su actuación pública (discursos, apuntes de sesiones, borradores de proyectos de ley), recortes de prensa, correspondencia, actas, expedientes y otros documentos de los organismos que integró.

El segundo hito fue la adquisición de la «Colección de documentos originales sobre la historia del Uruguay que pertenecieron al prof. Juan E. Pivel Devoto». La compra se realizó a la familia, pero a través de un intermediario en 2009. El conjunto, guardado en 83 cajas, incluye en su mayoría documentos originales (hay algunas transcripciones) de los siglos XVII al XX, que Pivel Devoto fue reuniendo y que proceden de colecciones de distintas personalidades históricas.

Esta adquisición formó parte de una política de mayor aliento por parte del AGN, entonces bajo la dirección de Alicia Casas de Barrán, asociada a incorporar colecciones y archivos privados de personalidades públicas, con el objetivo de enriquecer la diversidad de fuentes y acervos disponibles para la producción histórica en Uruguay. En este caso, se trataba de una de las principales figuras de

3 Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/publicaciones/pivel.pdf>

la historiografía nacional, por lo que la incorporación de la «Colección de documentos originales...» configura un mojón en el proceso de «patrimonialización» del personaje.

También hay que considerar la monumentalidad del acervo, fundamentalmente del «Archivo y Colección Juan E. Pivel Devoto». Se trata de un volumen de 3,52 kilómetros lineales de documentos (mientras la colección de documentos originales son 10,5 metros). Asimismo, hay que considerar la pérdida de temporalidad y de datos que permitan realizar la trazabilidad de la documentación ingresada (ya que no se cuenta con información sobre los mecanismos y tiempos de acopio y selección). Estas características le confieren al conjunto un carácter de monumento, cargado de cierta solemnidad que no facilita la problematización de la colección y que no favorece que ella misma sea objeto de estudio.

El tercer capítulo en el ingreso de documentación al AGN se debe a las gestiones realizadas por Beatriz Eguren, quien en estos años ha continuado en conexión con Juan Pablo Pivel Ranieri. El vínculo generó dos productos estimables: una serie de conversaciones vía zoom donde el hijo de Pivel Devoto ofrece su testimonio sobre distintos aspectos vinculados a la vida del historiador, a su propia vida y al Uruguay de los años sesenta a ochenta (material disponible en la web del proyecto Anáforas), y una nueva donación, concretada en marzo pasado, de diversos documentos que permanecían en la vivienda familiar de la calle Ellauri y que incluye un conjunto significativo de fotografías, postales y tarjetas, correspondencia, manuscritos, y algunos libros. Es en este marco que el manuscrito que hoy publicamos fue identificado e ingresado al AGN como un fragmento de la memoria de Pivel Devoto, preservado en los márgenes de lo que el historiador seleccionó para su conservación en el Estado.

Es solo a partir de estas actividades de rescate que aspectos subterráneos de su memoria personal han sido visibilizados. Se destaca que, previo a esta publicación, y como se mencionó, el AGN exhibió estos apuntes manuscritos, junto a un conjunto de fotografías y de cartas, en las vitrinas del espacio previo al acceso a la sala de consulta. Estamos así ante distintas operaciones que actúan en un proceso de patrimonialización, que abarca distintos hitos, empezando por su identificación y singularización, su posterior donación e ingreso al AGN, su exhibición, y finalmente su publicación.

Para reflexionar sobre la importancia del sostenimiento del vínculo institucional con las familias, basta recordar que una parte de la biblioteca de Pivel Devoto fue donada en 2010 por los hijos del historiador al Partido Nacional, que por su parte la cedió en régimen de transferencia de derecho de uso al Centro de Documentación y Estudios Iberoamericanos (CEDEI) de la Universidad de Montevideo, y que el CEDEI recibió en abril de 2023 por donación del mismo Juan Pablo Pivel Ranieri el archivo personal de su madre, la historiadora y abogada Alcira Ranieri (1914-2006).

En tanto manuscritos de carácter personal escritos desde su rol de padre, el documento que publicamos pone en contraste las miradas públicas sobre el accionar de Pivel Devoto en el Estado y su producción historiográfica, con una labor menos conocida, de carácter personal y testimonial, destinada a aportar al rescate de la memoria sobre el pasado reciente, y a la identificación y denuncia de los responsables de los hechos narrados.

Si bien Pivel Devoto no abordó en sus trabajos una perspectiva historiográfica del pasado reciente, sí existen en la documentación de su archivo, que custodia el AGN, materiales útiles para el estudio del período, incluso episodios que lo tienen como protagonista. Tal el caso de la documentación relativa a su actuación esos años en el Museo Histórico Nacional, en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en la Comisión de Nomenclatura de Montevideo y en la Academia Nacional de Letras, entre otros organismos públicos que integró o a los que asesoró en el período. Con respecto al primero de los mencionados, Pivel conservó distintos documentos (correspondencia, notas oficiales y expedientes, recortes de prensa, actas del Consejo de Estado) que permiten reconstruir sus

últimos años de gestión y las circunstancias en las que se dio su separación del cargo como director del MHN en abril de 1982, así como las repercusiones del hecho.

Con respecto al vínculo con su hijo cuando este estuvo preso, Pivel conservó en su archivo una caja con recibos comerciales (de librerías, papelerías, restaurantes) en la que incluyó los que le dieron en el Penal de Libertad como comprobantes del dinero que dejaba a nombre de su hijo, y de otros dos reclusos, para compras de estos en el centro de reclusión.

Resulta interesante llamar la atención sobre el momento de ingreso del manuscrito que publicamos al Estado. El material no fue incluido en las cajas que Pivel organizó en vida y que conservó en el AGN, ni tampoco en las que tenía en su casa como parte de su archivo personal, luego incorporadas a la institución. Parece probable que creyera que esos apuntes escritos por él, le pertenecían a su hijo. Documentación que describe el encierro y denuncia torturadores, a quienes identifica y califica con epítetos que muchos lectores probablemente no reconozcan como propios de la pluma del historiador. Documentación que Pivel guardó en un sobre que tituló «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el Penal de Libertad», y que fechó en diciembre de 1990, un año después de la ratificación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la cual apoyó desde su aprobación en 1986. Es en ese contexto histórico de «dar vuelta la página», que Pivel padre (¿Pivel historiador?) nombró y guardó los apuntes con el testimonio de su hijo en el Penal de Libertad, documento que en marzo de 2023 ingresó, por donación de ese hijo, al Archivo General de la Nación.

Transcripción del documento

Nota aclaratoria: Apuntes escritos por Juan Pivel Devoto en ocho fichas apaisadas numeradas y seis hojas sueltas numeradas, y conservados en un sobre bajo el título: «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el penal de Libertad. Montevideo Diciembre de 1990». Documentación donada al Archivo General de la Nación en marzo de 2023 por Juan Pablo Pivel Ranieri. María Beatriz Eguren, directora de la División de Documentación del AGN, realizó la transcripción, revisada por Carolina Porley e Isabel Wschebor.

Transcripción de hojas apaisadas

El cuartel en el Penal

A las 6 de la mañana —Timbre que suena en las galerías de cada uno de los 5 pisos—

Los soldados pasan celda por celda y golpean con violencia las ventanitas de las puertas de hierro pintadas de gris. Recogían cartas o manualidades. Los reclusos tendían sus camas. Pasaje de lista por el cabo de cada sector. El recluso contestaba sin salir de la celda. Desayuno en la celda. Café con leche o avena y un croisante hecho por los presos que trabajaban en la cocina. El recluso permanecerá en la

2

celda. Esta situación era la de los reclusos en el piso segundo. Cada piso se caracterizaba por un distintivo: El I negro; el II rojo, el III azul; el IV verde; el V amarillo. En cada celda se alojaban los presos. En el sector II B la prisión era individual. Ello significaba 23 horas de soledad en la celda. Para todos los reclusos una hora de recreo por día. A distintas horas: sector por sector. Nunca todos juntos. Los reclusos ignoraban el texto del reglamento. Nunca sabían cuando estaban recurriendo en falta. Eran sancionados sin saber por qué.

3

Almorzaban y cenaban en la celda. Comunicación con el mundo exterior: una carta semanal sujeta a censura; informativo mediante altavoces preparado por la dirección mediante la ayuda de presos colaboradores. Visitas: 1 cada 15 días. Lecturas de obras no censuradas. Se formó una biblioteca con envíos y donaciones de la familia. 20000 volúmenes fueron quemados. En los censores puede mencionarse al psicólogo Britos Puig y el psiquiatra Dr. Martín Gutiérrez. Los militares no se consideraban capacitados para esa tarea, en las que colaboraban los presos colaboracionistas.

4

El recluso no podía estar acostado, salvo los autorizados por enfermedad. Hábitos del cuartel trasladados al penal: al despertar golpe en la celda al grito de «Vamoarriba» (era la primera vez que un soldado podía levantar la voz a alguien). El soldado cuando se refería a los presos, les llamaba «los pichis».

Excepto los presos ubicados en el piso II B. Los demás estaban ajustados a tareas fijas o eventuales que cumplían bajo el contralor de un cabo ayudado por un preso fajinero. Este en primer tiempo fue designado por los presos en función de la confianza que

5

inspiraba al aparato político. Al sobrevenir las divisiones políticas entre los tupamaros marxistas-leninistas y no marxistas, vino el doble control: el del ejército y el del fajinero si militaba en la tendencia opuesta. Las tareas eran de dos tipos: permanentes o eventuales. Dentro de las primeras, las centrales o de los pisos. Centrales S.I: administración: I, seguridad de los presos, al comienzo a cargo de la marina, después del ejército (a esta tarea fueron afectados los presos colaboracionistas o traidores). S.II Contacto con el exterior: visitas, cartas, paquetes. Los presos realizaban tareas de clasificación y distribución. Otras tareas: cocina, (tercer piso, luego el cuarto) jabonería, herrería, cría de cerdos,

6

panales de abejas, panadería, incineración de residuos, tareas a cargo de profesionales (médicos, odontólogos, ingenieros, abogados), otras tareas: albañilería, construcción de bloques; biblioteca central, cantina de reclusos etc. Al tiempo que el penal se fue poblando por reclusos, las autoridades del penal —engatusados por los presos— accedieron a crear las comisiones de trabajo que posibilitaron el funcionamiento del penal y la creación —dentro del penal— de un aparato político integrado por presos seleccionados por la dirección. Posibilitó esta conmixtión un hecho: la presencia en el penal de unos 150 reclusos veteranos de vida y experiencia carcelaria que había permitido la fuga de p. Carretas.

7

Los militares se avinieron al sistema por: falta de experiencia como carceleros y por necesidad. Tareas del sector fijas: fajinero, encargado de manualidades y correspondencia, de ajedrez, biblioteca, medicinas de cada sector etc. En la primera etapa de la puesta en marcha, este sistema fue controlado por el aparato político de los presos. Cuando los militares después de un año (en la época del Mayor Maciel-Jefe del celdario) se dieron cuenta que las comisiones estaban en manos del aparato político integrado por los presos y que respondía a las consignas de esto, reaccionaron. No cortaron las comisiones de golpe. Las dejaron como forma de detectar quienes eran los integrantes del aparato político y de individualizar las distintas

8

corrientes internas que en el existían.

Puede anotarse como hecho importante que a mediados de 1973 nueve reclusos de la dirección del MLN fueron alejados del penal y enviados a los cuarteles: Sendic, Marenales, Manera, Huidobro, José Mujica, R. Zabalza, M. Rosencof, Engler y Wasen. La Dirección del Penal reaccionó designando para las comisiones a presos de su confianza o a presos no tupamaros, provenientes de organizaciones menores como FARO o FRT (Fuerzas armadas revolucionarias orientales y Frente revolucionario de Trabajadores).

Transcripción de lista de temas escrita en una hoja adjunta con cambio de tipografía y bolígrafo, e incluida en el sobre

FAENA DEL CUARTEL

VIDA EN EL PENAL

ALIMENTACIÓN

OCUPACIÓN DEL TIEMPO

CABOS Y SARGENTOS

SALIDAS DEL PENAL

LA ISLA

LAS BARRACAS

LA CENSURA

LOS SUICIDIOS

IDENTIFICACIÓN DE MILITARES

INTERROGATORIOS

MATICES IDEOLÓGICOS ENTRE LOS RECLUSOS

Transcripción de hojas sueltas contenidas en el mismo sobre

Nota aclaratoria: se respetó en lo que fue posible la gráfica del texto (ubicación de las palabras en la hoja, tachados, subrayados y otros resaltados) así como la escritura (algunos nombres están escritos de distintas formas a lo largo del texto). Las transcripciones que presentan dudas están entre paréntesis rectos.

1

N.13 Infantería y Blindados

TC. Zerpa

Mayor Mario Aguerrondo

Cap.º Almandós

Teniente Cala

Garmendia

Frachelli (El captor) junto con el Tortuga

Cap. Sumariante –Irigoin

Tc Roberto Marcelo Fabregat

Tº El Tortuga

Cabo Cruz

Lamboglia

Olivera

Villanueva

Durazno Caballería motorizada

T Ballestrino ++

« Blanco++

Melo 8º

T Cnel Alemán (fue al Penal)

Colonia Infantería

Mayor Perdomo (puto) torturaba en presencia de su mujer. (lo peor)

Sargento Carlos Yakimenko

Cuartel de Minas

Tte Arbiza

2

Barracas del Penal

Myor Rivarola (Mejóro)

Monge + Borracho

Glastornich= uno de los oscuros

Perez Monje (Malones= Romper todo)

Conti Siniestro

Jefes de los Reclusos = La Marina en la primera época. 2 época = el ejército

Marinos:

C. de T Costa (E de la Muerte) (golpista) febrero-paso después a fusileros navales.

C de T Sanches (correcto, dominado por Perdomo)

C de T Laporta – Borracho perdido

Figoli (Bien. «Aguanten como puedan muchachos») (intentó oponerse a Elgue).

Militares:

Carretilla de Plata (Jefe de Reclusos en la etapa del ejército) Su apellido : alemán/ Ten 1
Cl Gomez Estuvo en el Viet nam

3

Montevideo

La Boyada Grupo de Artillería = [ilegible]:

T^{es} Pomoli

T^{es} Rebollo

T Cnel. Gavazzo+++++(Oscar1º) [ilegible]

Cap.º Silveira++++(alias siete sierras)

Mayor Glastornich (oscar 2 o 3)

B Florida

Cap Varela

Caubarrere(puto) Entró al parlamento

Libertad

Director [ilegible] –Arancio Olsina

Sub «Sala de actos»

S Dr Aleman T coronel – Comand te en melo Despues fue al Penal «Yo no se como hacen para aguantar tanto tiempo presos»

[Ilegible]

Celdario

Mayores Coronel (afanó en Indagro)

Perdomo(puto) Herrera (torturador de Flores (Mierda)

Elgue + Conti

Maciel ++ Gonzalez

Gallardo

4

Mercedes

[Segamdal]

Cap Leon +

T^e García puto+

Sargentos Ruiz (Estuvieron en Libertad)

Wenceslao Bueno " "

D. Martín Gutierrez

Dr Gori

Psicólogo Britos

Enfermero Costa+ (puto)

5

Libertad

Capitanes Ayudantes

Vazquez

Lopez

Caubarrere (puto)

Warchun interrogó a los procesados que fueron a Cuba

Fabregal (el del 13)

Arbiza (Vino de Minas)

[Georgetan] (Asesino)

6

T^{en} Farias de Salto (puto) Ahora están en Montevideo

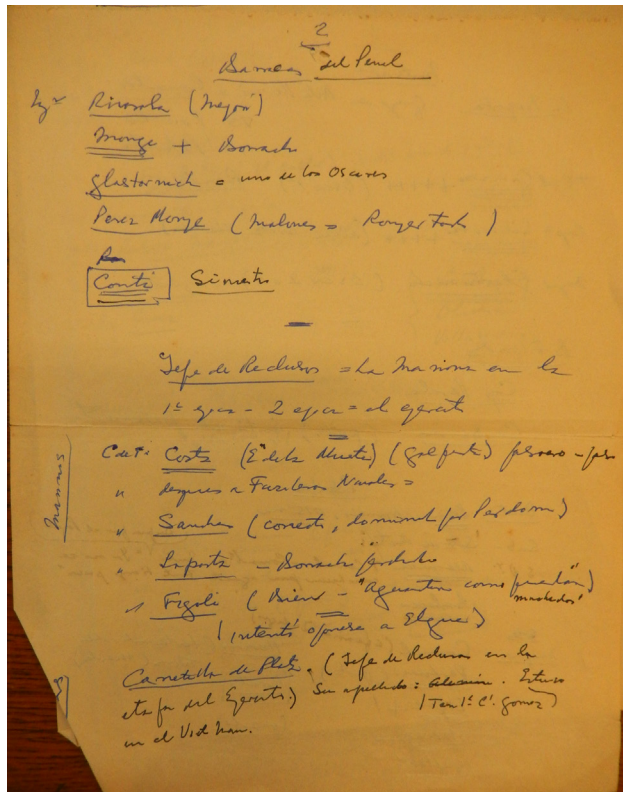
T^{en} Piume- En Libertad organizaron un motín con los soldados para imponerles castigos a los presos.

Jefe de P. Rieles

T^e Coronel Medeiros

Después Albornoz debutó en Pando en P de R. se humanizó un poco.

Hoja suelta 2 del manuscrito de Juan Pivel Devoto ensobrado como «Historia del Uruguay. Información dictada por Juan Pablo Pivel Ranieri para la Historia por él vivida en el Penal de Libertad. Montevideo diciembre de 1990»



AGN, donación Juan Pablo Pivel Ranieri, marzo de 2023, sin inventariar.

Recibo por entrega de dinero realizada por Juan Pivel Devoto a favor de su hijo en el Penal de Libertad, 27 de abril de 1974.

ESTABLECIMIENTO MILITAR DE RECLUSION N.º 1 N.º 16454 ¹⁰⁰


Recibi de: JUAN PIVEL

C. I. 178.809 Dpto. MONTEVIDEO la cantidad de \$ 30.000
(VEIENTE MIL PESOS. MIL)

Por depósito de gastos del Recluso: JUAN PIVEL 107

Grado de parentesco con el Recluso: PADRE

Domicilio del depositante: F. YAVAR 482, MONTEVIDEO
Mojón 301, 27 de A de 19 74

El Habilitado del E. Mil. R. N.º 1 

AGN, Archivo y Colección Juan Pivel Devoto, caja 447, carpeta 1842.

En apoyo a la Revolución: imágenes de solidaridad y prácticas vinculadas al cine entre Uruguay y Cuba (1960-1964)

Cecilia Lacruz^{1,2}

Resumen

Este artículo explora las relaciones de Uruguay y Cuba a través de las imágenes y las prácticas relacionadas con el quehacer cinematográfico al inicio de los años sesenta. En la primera parte, se analizan los registros de los uruguayos manifestándose en apoyo a la Revolución en las ediciones del *Noticiero Latinoamericano del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Noticiero ICAIC Latinoamericano)* entre 1960 y 1964 para mostrar la visibilidad que tuvieron en el noticiero las expresiones de apoyo y las manifestaciones del movimiento de Solidaridad con Cuba en Uruguay. Este movimiento se expresó cotidianamente para defender el derecho de autodeterminación de la isla, denunciar agresiones y concientizar al pueblo uruguayo de que la

Revolución era «una parte inseparable del proceso liberador latinoamericano» (Solidaridad de la clase obrera..., 1960, p. 10). En la segunda parte, el artículo recupera y reflexiona sobre el lugar que ocuparon las producciones del ICAIC (documentales y noticieros) en las acciones de esa militancia durante el mismo período.

Palabras clave: Cuba, cine, noticieros, solidaridad.

Abstract

This article explores the relations between Uruguay and Cuba through the images and practices related to filmmaking in the early 1960s. In the first part, I analyze the records of

¹ Grupo de Estudios Audiovisuales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República cecila.lacruz@gmail.com

² Esta investigación se enmarcó en el Proyecto I+D (CSIC GRUPOS) «Legados visibles. Patrimonio y cine en Uruguay» del Grupo de Estudios Audiovisuales, GEStA. Mis agradecimientos a: Lorena Pérez (Archivo Fílmico de Cinemateca Uruguaya, AFCU), Guillermina Martín Doi (Centro de Documentación Cinematográfica de Cinemateca Uruguaya, CDC-CU), Luciano Castillo (Cinemateca de Cuba, CU), Camila Arêas, Loyda González, Jimena Alonso, Mariana Villaça, Glauber Brito Mato y Gerardo Leibner. Agradezco también a los revisores de este artículo por sus valiosos comentarios.

Uruguayans demonstrating their support for the Revolution in the editions of the *Noticiero Latinoamericano* of the Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (*Noticiero ICAIC Latinoamericano*) between 1960 and 1964 to show the visibility that the expressions of support and demonstrations of the Solidarity with Cuba movement in Uruguay had in the newsreel. This movement expressed itself on a daily basis to defend the island's right to self-determination, denounce aggression and make

Uruguayan people aware that the Revolution was “an inseparable part of the Latin American liberating process” (*Solidaridad de la clase obrera...*, 1960, p. 10). In the second part, I recover and reflect on the place occupied by ICAIC productions (documentaries and newsreels) in the actions of this militancy during the same period.

Keywords: Cuba, cinema, newsreel, solidarity.

Introducción

Cuando en febrero de 1959 un periodista le preguntó a Fidel Castro frente a las cámaras de televisión si el Gobierno Revolucionario estudiaba algún plan para fomentar la industria cinematográfica, respondió que sí, que con leyes y medidas económicas adecuadas Cuba tenía posibilidades de desarrollar la industria del cine (Giroud, 2021, p. 46). Un mes después, el 24 de marzo, se sancionó la ley 169, que establecía que el cine era un instrumento de «opinión y formación de la conciencia individual y colectiva» capaz de profundizar «el espíritu revolucionario y sostener su aliento creador» (p. 28). Se creaba así el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y Alfredo Guevara sería designado su director. Al año de su creación, y bajo la responsabilidad de Santiago Álvarez, el Instituto inició el *Noticiero ICAIC Latinoamericano (NIL)*, una experiencia posteriormente considerada por la historiografía como una verdadera escuela que formó camarógrafos, montajistas, técnicos y animadores, y que, según Alfredo Guevara, fue «la base del movimiento artístico del ICAIC» (Álvarez Díaz, 2012, p. 59). Tanto el noticiero como las películas del Instituto de los años posrevolucionarios abordaron temas y ofrecieron discursos funcionales a las necesidades del gobierno y sus medidas, y a partir de 1960, fueron varios los títulos cubanos que recibieron el reconocimiento internacional de la crítica en festivales de cine europeos, lo que ayudó «a promover la imagen de la Revolución fuera de Cuba» (Chanan, 2004, p. 131).

Como parte de un interés general en la historia del cine y la política en los sesenta uruguayos, este trabajo indaga en las relaciones de Uruguay y Cuba a través de las imágenes y prácticas relacionadas con el quehacer cinematográfico al inicio de los años sesenta. En esta oportunidad, la estrategia metodológica (y narrativa) hace hincapié en la apertura del objeto de estudio y la estructura de este artículo refleja, en cierta medida, el itinerario de la investigación. En la primera sección, desarrollo lo que constituyó el punto de partida: la presencia de imágenes de los uruguayos manifestándose en apoyo a la Revolución en sucesivas ediciones del *NIL* entre 1960 y 1964, una periodización que abarca desde el noticiero n.º 1 hasta el año en que Uruguay rompe relaciones con Cuba.³ Allí muestro la visibilidad que tuvieron en el noticiero las expresiones de apoyo y las manifestaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Uruguay. Este Movimiento, que tuvo como plataforma al Comité Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana (1960), se expresó cotidianamente para defender el derecho de autodeterminación de la isla, denunciar agresiones, y concientizar al pueblo uruguayo de que la Revolución era «una parte inseparable del proceso liberador latinoamericano» (Solidaridad de la clase obrera..., 1960, p. 10).⁴ Según las investigaciones de Roberto García Ferreira y Martín Girona, los diplomáticos cubanos en Uruguay consideraron ese movimiento como uno de los más influyentes de la región (García Ferreira, 2018; García Ferreira y Girona, 2020).⁵ Junto con las oratorias, los debates

3 Esto no quiere decir que la ruptura de las relaciones de Uruguay con Cuba haya implicado la clausura de noticias sobre Uruguay en el noticiero, sino que se trata de un recorte para esta investigación (en ediciones posteriores, el Noticiero ICAIC Latinoamericano sí aborda noticias sobre Uruguay).

4 Como es sabido, la solidaridad internacionalista en los años sesenta se configuraba en torno a las luchas contra el imperialismo y el colonialismo, tanto en América Latina como en el Tercer Mundo, pero sin olvidar también la solidaridad de clase del internacionalismo previo. Véase el reciente trabajo de Garland Mahler (2022) sobre del «antimperialismo internacionalista», su revisión del internacionalismo de la posguerra y las raíces del antimperialismo global latinoamericano.

5 Véase el «Informe sobre el Comité Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana», del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, del 7 de setiembre de 1962, citado en García Ferreira y Girona (2020). Otro ejemplo que sintoniza con esta apreciación es el artículo sobre el Movimiento uruguayo que difunde la revista cubana *Verde Olivo* en agosto de 1961. Allí se lo califica como una plataforma «inmensa» que había llegado a organizar 160 actos en apoyo a Cuba entre el 12 de abril y el 20 de mayo de 1961 (Pereira Cabrera, 2011, p.118). Agradezco a Jimena Alonso por señalarme este artículo cubano.

y las diversas actividades que difundían la cultura cubana, las producciones del ICAIC (documentales y noticieros) tuvieron una presencia relevante en las acciones de esa militancia, y la segunda sección de este artículo se focaliza en el uso político de esos títulos durante ese mismo período.

El estudio sobre el impacto de la Revolución cubana en Uruguay se ha dinamizado con eventos académicos recientes y con la aparición de artículos que abordan el período de este trabajo y que incluso examinan el Movimiento de Solidaridad al que voy a referirme (García Ferreira y Girona, 2020; Alonso, 2022; De León, 2022; Girona, 2022; García Ferreira, 2022).⁶ Mi interés es aportar a esta producción desde los estudios de cine y mediante el uso de archivos cinematográficos nacionales e internacionales, el relevamiento de prensa uruguaya y cubana, y la revisión de programas y críticas cinematográficas en Uruguay. Por otra parte, conocíamos la presencia de la producción del ICAIC en Uruguay (noticieros, cortometrajes y largometrajes, tanto del cine de ficción como de no ficción) en torno al 68 y sus años posteriores: en las funciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba, en los festivales de cine del semanario *Marcha* (1967, 1968, 1969), en los programas del Cine Renacimiento y del Cine Lutecia, así como en las exhibiciones que organizó la Cinemateca del Tercer Mundo (Jacob, 1969; Lacruz, 2020 y 2021a; Villaça, 2017), pero poco sabíamos de su presencia en la primera mitad de los sesenta. Este vacío dejaba a Cuba fuera de los films latinoamericanos que llegaron a Uruguay a fines de 1950 e inicios de 1960. Me refiero a los programados en los Festivales de Cine Documental y Experimental del SODRE, aunque también en los Cine Clubes. Películas como *Tire Dié* (Escuela Documental de Santa Fe, 1958-1960) las del peruano Manuel Chambí, el boliviano Jorge Ruiz, la venezolana Margot Benacerraf o el brasileño Nelson Pereira dos Santos, por mencionar solo algunas, fueron en ese momento reveladoras de realidades y problemáticas comunes de América Latina (Amieva, 2022, Mestman y Ortega, 2018; Paranguá, 2003). En este sentido, esta investigación actualiza —parcialmente— la cartografía del cine latinoamericano en Uruguay, aporta al conocimiento de su circulación en la región y sugiere líneas de trabajo para indagar a futuro.

En los últimos años, los estudios sobre el cine latinoamericano han utilizado conceptos y herramientas para poner énfasis en la complejidad transnacional y la interconectividad, atendiendo, entre otras cosas, al estudio de la formación de redes, las colaboraciones, los viajes, las interacciones y transferencias culturales en la región. De ese modo, estos enfoques, además de explorar las apropiaciones, desplazamientos de sentido, e hibridaciones que caracterizaron cada recepción local en su respectiva coyuntura, han repensado las dicotomías centro-periferia, las influencias, así como la idea misma de América Latina y su construcción de lo común (Del Valle Dávila, 2015; Del Valle Dávila, Gil Mariño y Maia, 2019, entre otros).⁷ En sintonía con esta tendencia, este trabajo, además de inscribirse en la línea de los flujos culturales y los objetos de circulación internacional que trascienden los marcos nacionales, adopta múltiples perspectivas desde donde reconstruir el cine y las prácticas solidarias con la Revolución en Uruguay para subrayar así, la multidireccionalidad de lo que reconstruye.

6 Además de las secciones sobre la Revolución Cubana que dedican los conocidos estudios de Eduardo Rey Tristán (2006) y Gerardo Leibner (2012). Respecto de los eventos, destaco la Jornada Internacional «A instantes de la destrucción. Geopolítica latinoamericana, cultura e imaginarios bélicos a 60 años de la “Crisis de los Misiles”, octubre 2022 (virtual), Universidad de la República-Universidad Nacional de San Martín; las Jornadas «Cuba y la izquierda latinoamericana. Una historia de encuentros y desencuentros», organizado por el Grupo de Estudios sobre las Izquierdas (GEI), en FHCE, Universidad de la República, noviembre, 2022, y el «El internacionalismo tercermundista del Noticiero ICAIC Latinoamericano y del cine cubano: intercambios, redes e imaginarios», Mesa del IV Coloquio de Estudios de Cine y Audiovisual Latinoamericano de Montevideo, Grupo de Estudios Audiovisuales (GEstA), setiembre 2022, Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo.

7 Ejemplos de este giro historiográfico en clave regional pueden verse también en los artículos que conforman el dossier coordinado por Georgina Torello y Cecilia Lacruz (2020).

Uruguay en el *Noticiero ICAIC Latinoamericano*

A contramano de la tendencia mundial, el *NIL* apareció cuando los noticieros cinematográficos disminuían su presencia en el mundo y, aun así, permanecería por treinta años. La primera edición se estrenó en junio de 1960 y la última en julio de 1990, 1493 ediciones en total. En una sociedad posrevolucionaria con una numerosa población analfabeta, el cine era un medio de comunicación efectivo, por su alcance y rapidez, y el noticiero asumió un lugar clave a la hora de informar a los cubanos sobre las posturas políticas del gobierno, los asuntos internacionales, los planes económicos de la Revolución, o las actividades culturales. Cada edición semanal tenía una duración de nueve a diez minutos y una estructura narrativa que alcanzaba de cuatro a ocho notas, pero en varias ocasiones una edición especial estaba dedicada a cubrir un solo tema.⁸ En Cuba, cerca de cuarenta copias de cada edición del noticiero circulaban durante tres semanas. Si bien generalmente se programó junto con un título de ficción y otro documental, con el tiempo, el noticiero se convirtió en el atractivo principal de las funciones en sala. Aunque ya había sido el centro de interés de la historiografía del cine cubano (Chanan, 2004; Villaça, 2010; Álvarez Díaz, 2012; Malitsky, 2013; Del Valle Dávila, 2014 y 2015), la posibilidad de analizar un corpus tan numeroso con nuevas tecnologías se abrió cuando las ediciones del *NIL* fueron digitalizadas en alta definición en el marco de un proyecto de 2012 entre el ICAIC y el Institut National de l'Audiovisuel, de Francia.⁹ Varias investigaciones se han puesto en marcha desde entonces (Arêas, 2019 y 2021; Amaral, 2019; De Sousa e Silva, 2019; Lacerda, 2019; Berthier y Arêas, 2022; Villaça y Silva, 2022) y hasta se organizó un evento específico sobre el *NIL* en octubre de 2021. El trabajo que realicé con este archivo —y para ese encuentro— es el punto de partida de esta primera sección (Lacruz, 2021b).

Curiosamente, Uruguay está presente en la edición inaugural del noticiero titulada «¡Extra! Dorticós en la Argentina y Uruguay» (n.º 1, 6/6/1960).¹⁰ Se trata de la primera escala de la misión cubana que llevaba «el mensaje de Cuba revolucionaria» a Argentina y Uruguay, pero también a Brasil, Perú, Venezuela y México. Como explica Joshua Malitsky (2013), en esta coyuntura, el noticiero trataba de mostrar a los cubanos los «nuevos amigos» de la Revolución, las «nuevas alianzas internacionales» (p. 77).¹¹ Es decir, el alineamiento de la Revolución en el escenario internacional fue uno de los aspectos centrales de los primeros años del *NIL*. Y esta primera edición es un buen ejemplo del énfasis puesto en mostrar el apoyo popular, las expresiones de simpatía y de entusiasmo que provocaban los representantes de la Cuba revolucionaria fuera de la isla. Por ejemplo, tras presentar a la multitud que lo recibe en el aeropuerto de Buenos Aires, esta edición muestra al presidente cubano Osvaldo Dorticós en sus reuniones protocolares, ojeando libros en la conocida librería Ateneo, firmando autógrafos en la calle y hablando a un auditorio repleto en la Universidad, marcando así también el contraste entre la diplomacia convencional y el carisma de la delegación cubana. Luego, tras la visita a la capital porteña, otro aeropuerto atiborrado de gente lo espera con banderas y carteles. Dice el comentarista: «Al pisar tierra uruguaya, la multitud aclama el

8 Varias ediciones del noticiero se convirtieron en monográficos o documentales posteriores, como fue el caso de las películas de Santiago Álvarez, *Ciclón* (1963) o *Now* (1965). Véanse las proporciones de monográficos, noticias asiladas y más datos cuantitativos con relación al corpus total del *NIL* en Inés Barja, Dolores Calviño y Agnès Magnien (2022).

9 La recuperación de este imponente patrimonio de imágenes del siglo XX tuvo su origen en la gestión que llevó adelante en 2009 la Cinemateca de Cuba frente a la Unesco solicitando la inscripción de los negativos originales del *NIL* como parte del programa *Memoria del Mundo*. Los noticieros se encuentran disponibles con acceso limitado a través de la plataforma www.inamediapro.com.

10 Las fechas de cada edición del *NIL* corresponden a su estreno en Cuba y fueron tomadas de Pablo Pacheco (2018).

11 Según el autor, en el inicio hubo una mayor concentración en las relaciones con el bloque soviético (Bulgaria, China, Serbia, Riga, Latvia) y, a partir de la mitad de la década, las noticias del Caribe y América Latina en el *NIL* se incrementaron (Malitsky, 2013, p. 77).

nombre de Cuba, su revolución y sus líderes». Con la melodía del himno nacional de Uruguay de fondo, vemos a Dorticós en conferencia de prensa y en la reunión de recibimiento que le ofrece el gobierno. El locutor comenta que la recepción de los uruguayos había sido superior a todo lo que el presidente cubano esperaba, una apreciación sustentada en las imágenes de las manifestaciones de apoyo que al cierre añaden la «ola humana» que rodeó a Dorticós en la Plaza Independencia de Montevideo.

Figura 1. Capturas de pantalla del noticiero n.º 1, 6/6/1960



De las ocho ediciones que incluyen noticias sobre Uruguay entre 1960 y 1964, seis contienen demostraciones de solidaridad de los uruguayos con Cuba.¹² Dos acontecimientos clave para la isla que tuvieron lugar en Punta del Este explican, en su mayor parte, la presencia de estos registros en el *NIL*: el lanzamiento de la Alianza para el Progreso en 1961 y la reunión de cancilleres de 1962 en la que las delegaciones expulsan a Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Bajo el título «Solidaridad continental», por ejemplo, un fragmento del noticiero n.º 49 (15/5/1961) muestra un acto en la explanada de la Universidad. «Obreros, profesionales, artistas, todo un pueblo que demuestra su firme decisión de respaldar a la primera Revolución socialista de América», explica el comentarista sobre las imágenes. Más movilizaciones de apoyo a Cuba pueden verse en la noticia «Estafa en Punta del Este» del noticiero n.º 64 (28/8/1961), que informa sobre la visita del Che Guevara a Uruguay y su participación en la Conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, CIES, frente al lanzamiento de la Alianza para el Progreso. Altoparlantes, volantes, carteles, afiches anti-Kennedy, anuncios del acto del 26 de julio, ilustran el clima de apoyo que lo espera. «Como toda América Latina —aclara el comentarista—, el pueblo del Uruguay expresa su solidaridad con nuestra Revolución socialista». Al igual que a Dorticós en 1960, al Che lo recibe otro aeropuerto desbordado y una enorme pancarta en la fachada de la Universidad lo aclama con un «Bienvenido, Che Guevara». Allí, la conferencia del ministro de Industrias de Cuba en el Paraninfo está repleta de público.¹³ Luego, en Punta del Este, y según narra el noticiero, tras la revelación de documentación secreta norteamericana, el Che no firma los acuerdos y finaliza así «la mascarada» de la conferencia. «Una vez más, el imperialismo ha sido derrotado y la farsa de Punta del Este, puesta al descubierto», dice el comentarista. Nótese que las imágenes de las expresiones del Movimiento de Solidaridad con Cuba del *NIL* ayudan a construir un discurso que, como mencionaba, reafirma la lucha del pueblo cubano, siempre en relación con el apoyo a la Revolución fuera de la isla.¹⁴

12 Junto a estas notas, otros dos noticieros incluyen noticias sobre Uruguay: el reportaje «Libertad para España» del noticiero n.º 40 (7/3/1961), que informa sobre la Conferencia Continental por la Amnistía de los Presos Políticos de España y de Portugal celebrada en Montevideo en contra de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y la de Francisco Franco, por un lado, y, por otro lado, la cobertura del «Concierto homenaje a la República del Uruguay en la Casa de las Américas» del n.º 184 (16/12/1963).

13 Se trató de la «Conferencia popular antimperialista» organizada por el coordinador de apoyo a la Revolución y contó con la presencia de Salvador Allende y del periodista argentino Gregorio Selser (Leibner, 2012, p. 395).

14 Y este es un aspecto que podemos asociar fácilmente a la omisión que hace esta edición (n.º 64) del tiroteo que, a la salida de la conferencia del Che en la Universidad, culminó con el asesinato del profesor Arbelio Ramírez, y que se suponía era una bala para el comandante. No hay que olvidar que, paralelamente a las movilizaciones, y

Prosigo con las tres ediciones continuadas del noticiero de enero de 1962 que, además de resignificar la expulsión de Cuba de la OEA en clave de Victoria, se destacan por el uso de los registros específicos de la Marcha Patriótica de la Juventud, la novedosa movilización que, en esos días (el 17 de enero) había partido desde Montevideo hacia Punta del Este llevando un mensaje de los jóvenes en apoyo a Cuba y contra la OEA.¹⁵ Comienzo por el recibimiento de los uruguayos a Dorticós que aparece en una sección de la edición n.º 86 (29/1/1962), titulada «Todos los pueblos con Cuba». Contra la baranda del mirador del aeropuerto, la gente saluda con sus pañuelos mientras otros, desde el interior del edificio, agitan sus brazos en las ventanas ubicadas más arriba. Los planos contrapicados de mujeres y niños en la primera fila sugieren un ambiente pacífico y festivo que continúa más allá de Carrasco: una cámara en movimiento —el punto de vista del vehículo de la delegación cubana— registra a los uruguayos sobre la ruta y a los que lo acompañan en caravana. Aunque el comentarista del noticiero no la menciona, en esta secuencia de bienvenida se incluyen imágenes de la Marcha Patriótica de la Juventud que el comentarista proyecta hacia un imaginario más amplio: «Podemos sentirnos verdaderamente satisfechos del movimiento de solidaridad que hay en toda la América con la Revolución con Cuba, con el derecho de Cuba a hacer su Revolución». En los dos números siguientes, las imágenes de los jóvenes caminando hacia el Este también encarnan esa solidaridad de identidad oscilante, entre uruguaya y latinoamericana, podríamos decir.

En la edición titulada «Punta del Este: nueva derrota del imperialismo» (n.º 87, 5/2/1962), mientras el comentarista aclara que la delegación cubana acusa a la OEA de ser «un instrumento político-militar al servicio del imperialismo yanqui», las consignas callejeras de los muros de Montevideo refuerzan la idea de que, en esa denuncia, «Cuba no está sola». Tras sentenciar con sarcasmo que «Mr. Rusk» (David D. Rusk, secretario de Estado de J. F. Kennedy) «puede comprar cancilleres, pero no puede comprar pueblos», el noticiero construye esa dignidad popular e incorruptible a la que alude con una serie de postales de los uruguayos en acción: un camión colmado de manifestantes, una multitud en la explanada de la Universidad, una pancarta que dice «con Cuba y con Fidel» frente al edificio de Canal 4 Televisión, un vendedor de banderas cubanas y uruguayas. De hecho, este noticiero muestra imágenes de un acto donde según el comentarista, «cuarenta mil» ciudadanos, «rompiendo todos los récords», expresan su simpatía por la Revolución en Montevideo. Más adelante, cuando las delegaciones deliberan sus posiciones respecto de la expulsión de Cuba, la cámara recorre las butacas y escritorios vacíos, mientras en el plano sonoro, y como contrapunto, se escucha un cántico: «Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo, que Cuba va p'adelante, que Cuba va p'adelante, y la OEA para abajo...».¹⁶ Seguido de esto, y sobre las imágenes de los jóvenes caminando, el comentarista presenta, ahora sí, la marcha que ha salido de Montevideo y la describe como «una muestra evidente del apoyo que el país hermano presta a lucha contra el enemigo común». El noticiero vuelve sobre los escritorios vacíos de la reunión en Punta del Este mientras que otro cántico emotivo, el de «Viva Cuba y viva Fidel, viva el pueblo, estamos con él...», construye otra vez el

junto con el aumento de la injerencia norteamericana en la economía y la política financiera del país, organizaciones de derecha se radicalizaron en su lucha contra el avance del comunismo, y a partir de 1961, contra el peligro que representaba la Revolución caribeña (Broquetas, 2015). Dicho esto, si bien no hay mención al episodio en este noticiero, el Che Guevara sí hizo referencia al asesinato en el programa de la televisión cubana dedicado a la Conferencia de Punta del Este del 23 de agosto de 1961 (Pereira Cabrera, 2011, p. 830).

15 Según Leibner (2012) se trató de «una nueva modalidad de militancia solidaria por Cuba» de gran impacto mediático, que involucró a una gran cantidad de organizaciones juveniles (en la que eran mayoría los militantes de la UJC). Véase más sobre la marcha en Leibner (2012, pp. 397-398).

16 Se trata de la melodía y parte de la arenga compuesta por Nobel Valentini y Álvaro Gestido para la selección uruguaya de Fútbol en la Olimpiada de 1928, previo a la final contra Argentina.

contrapunto moral y popular a la votación de los delegados en contra de la Revolución. Más imágenes de esta marcha refuerzan este contraste con planos contrapicados que enaltecen a los marchistas; un *travelling* los acompaña mientras caminan a buen ritmo reafirmando la entrega de la protesta, en particular, cuando la cámara muestra a una joven desde muy cerca mientras canta con la mirada hacia adelante, transmitiendo determinación y compromiso. Planos fijos y abiertos construyen la longitud de la fila de militantes en un paisaje semirural, descampado, que contrasta las manifestaciones urbanas de Uruguay que hasta esa edición había mostrado el noticiero.

Pocos días después, en el reportaje especial del *NIL* «II Declaración de La Habana» (n.º 88, 12/2/1962), Fidel Castro y Dorticós hablan frente a medio millón de personas en la Asamblea General, y tras el contraplano del presidente cubano frente a la impactante plaza llena, las imágenes de la marcha a Punta del Este aparecen para construir una victoria colectiva: la de Cuba y la de la solidaridad latinoamericana. Sobre el canto «Vayan pelando las chauchas» y los registros de los jóvenes uruguayos, el comentarista recurre a la mística de la solidaridad para explicar lo ocurrido:

Desde el anuncio mismo de la convocatoria a Punta del Este, no fue solo la decisión de combate de nuestro pueblo, sino también el gran movimiento de solidaridad de América Latina quienes propiciaron la frustración anticipada de los propósitos del gobierno imperialista de los Estados Unidos.¹⁷

Aunque no fueron los únicos registros de las expresiones de la solidaridad uruguaya, los de la Marcha de la Juventud se destacan de ese repertorio de imágenes más amplio y necesario que el noticiero desplegó en estos años; el de las solidaridades con la Revolución, imágenes que cumplían con la urgencia política de Cuba de mostrar a los cubanos el apoyo internacional, fundamentalmente latinoamericano. No resulta menor destacar la importancia de estas dos ediciones en el marco de la Guerra Fría, y aunque todavía no conocemos lo suficiente sobre la circulación internacional del *NIL*, es muy probable —es una hipótesis— que estos noticieros fueron proyectados e, incluso, subtítulos o doblados en más de un idioma, en otras partes del mundo (principalmente, en el bloque socialista). Tampoco dejaría de mencionar que las imágenes de la marcha fueron reutilizadas después en el marco de la «práctica conmemorativa» del noticiero que, a lo largo de la década, recordaba a los cubanos los logros de la Revolución.¹⁸ Incluso, habría que tomar en cuenta la estética de esta movilización en ese marco más amplio de las protestas uruguayas, ya que comparada con el registro de una reunión o un acto, resultaba cinematográficamente más atractiva para motivar al público cubano, y además construía una solidaridad más allá de oradores o liderazgos.

Pero dicho todo esto, importa revisar estos aspectos —en los que me detuve con cierto detalle para dar cuenta de su alcance— por otra razón. A tan solo dos meses del acontecimiento, las imágenes de esta marcha llegaron a Uruguay. Como nuestro en la siguiente sección, el noticiero n.º 87 sobre la reunión en Punta del Este circuló en el marco de la militancia del Movimiento de Solidaridad con Cuba en una proyección que, entre otras cosas, confirmaba a los uruguayos que a los cubanos les había llegado algo más que una declaración escrita: habían visto aquella muestra de entrega y sacrificio y escuchado sus arengas en apoyo a la Revolución (Aviso del Movimiento de Solidaridad con Cuba, 1962). Por último, antes de cerrar esta primera parte, quisiera mencionar las dos noticias sobre Uruguay que aparecen en el *NIL* en 1964. Por un lado, el fragmento «Manifestaciones en Uruguay en favor de Cuba» del noticiero n.º 218 (10/8/1964) anuncia la reunión de las delegaciones de Argentina,

17 Véase la cobertura en la prensa cubana de la Marcha de la Juventud y las crónicas de otras manifestaciones en Montevideo, Chile y Argentina contra la OEA en «Queremos ver a Cuba triunfante...» (1962).

18 Más precisamente, los registros aparecieron en abril de 1967, en el fragmento «Archivos de la OEA en 1962» del noticiero n.º 356 (17/4/1967). Agrego también que imágenes de las movilizaciones por Cuba en Uruguay aparecen en la película dedicada a la Campaña de Alfabetización *Historia de una batalla* (Gómez, 1962).

Paraguay, Brasil y Uruguay en Montevideo en el Encuentro Rioplatense de la Solidaridad e incluye registros de las manifestaciones por el aniversario del 26 de julio. Por otro lado, la sección «Protestas del pueblo uruguayo» del n.º 224 (21/9/1964) cubre la ruptura de las relaciones entre el gobierno de Uruguay y Cuba y muestra la violenta acción del gobierno contra los manifestantes que se concentraron en el aeropuerto para despedir a la delegación cubana.¹⁹ Al inicio de esta edición, al mostrar la represión a una protesta estudiantil en apoyo a la isla, el comentarista aclara que las imágenes son «vistas» (registros cinematográficos) que el *NIL* recibió a través de Prensa Latina, la agencia de noticias cubana creada en 1959. Sabemos que las delegaciones del gobierno cubano viajaban con camarógrafos del ICAIC, pero hubo otras noticias, como estos dos ejemplos (así como el noticiero n.º 49 que detallé antes), que posiblemente hayan sido filmadas (tal vez incluso para Prensa Latina) por uruguayos. Quiénes fueron y cómo se enviaban a Cuba estos registros cinematográficos son algunas de las interrogantes que resultan de esta investigación. Habrá que indagar en esta circulación como parte de una red o redes de comunicación a reconstruir, y como otra práctica solidaria de los uruguayos: la de concretar una ayuda material a Cuba con el envío de imágenes políticas.²⁰

Figura 2. Capturas de pantalla del noticiero n.º 87, 5/2/1962



Proyección de cine cubano en apoyo a Cuba

Que la Revolución Cubana se interesó por el cine es un hecho bien mencionado en la bibliografía no solamente en relación con la ley que creó el ICAIC. Podría ilustrarse, por ejemplo, recordando que, en abril de 1959, Fidel, en su viaje a Estados Unidos, estableció un acuerdo con la 20th Century Fox para hacer una película sobre la Revolución que se filmaría en Cuba (Giroud, 2021, pp. 51-52). En el mes de julio, Alfredo Guevara, ya director del ICAIC, viajó a México con Guillermo Cabrera Infante para discutir sobre la producción de ese proyecto, decidir quién sería el actor que interpretaría a Fidel, que en ese momento se pensaba podría ser Marlon Brando, y quién dirigiría la película, un rol que los cubanos querían que lo ocupara Orson Welles, entre otros posibles cineastas. Asimismo, otro hecho citado con frecuencia para argumentar la importancia del cine para el gobierno revolucionario es que, en su viaje a Tokio en busca de acuerdos comerciales, el Che confesó que aunque ni hablaba inglés ni entendía de cine, investigó la compra de equipos para el ICAIC y adelantó a los japoneses el interés de Cuba de intercambiar y distribuir películas (García Borrero, 2007, pp. 42-43). Habría que aclarar también que no había pasado un mes de la toma del poder, cuando a fines de enero de 1959 se creó la sección cinematográfica de la Dirección de Cultural del Ejército Rebelde de la que surgieron los documentales *Esta tierra nuestra* (Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, 1959), que aborda

19 Sobre la represión durante las protestas contra la ruptura de relaciones con Cuba, véase Magdalena Broquetas (2021). Sobre la ruptura de las relaciones con Cuba véase García Ferreira y Girona (2020).

20 La necesidad de imágenes políticas de este período excede este artículo, pero para el caso del *NIL* en un período posterior, véase el trabajo de Aréas (2019) sobre la cobertura de las dictaduras del Cono Sur donde la autora muestra un giro respecto del estilo formal del noticiero cubano vinculado con la escasez de registros cinematográficos.

la reforma agraria, y *La vivienda* (García Espinosa, 1959), que narra el hacinamiento de las clases populares a través de la historia de la amistad de un niño blanco y otro negro.²¹ Asimismo, no hay que olvidar que este interés debe leerse también como una preocupación por el uso de los medios de comunicación, rasgo central de la acción del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, con su periódico *Revolución* y su emisora Radio Rebelde (Chanan, 2004).

Cuando Alfredo Guevara a mitad de 1960 presentó en La Habana los siete nuevos documentos del ICAIC, destacó que habían sido proyectados «con éxito en Montevideo y en Pekín, en Moscú y en Buenos Aires, en París, en México y en Berlín y Karlovy-Vary, en el marco de respectivos festivales cinematográficos los han recibido con respeto y aplauso, y aun con premio [...]» (citado en Giroud, 2021, p. 51). En efecto, en Montevideo, las primeras películas del ICAIC, *La vivienda*, *Esta tierra nuestra* y *Sexto aniversario* (García Espinosa, 1959), el cortometraje sobre el aniversario del ataque al cuartel de Moncada que muestra los 500 mil campesinos en la Plaza de la Revolución, fueron bien recibidas desde que las programó Cine Club Universitario en diciembre de 1959.²² Según una nota de Homero Alsina Thevenet, los films habían llegado al país gracias a un delegado que asistió al seminario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El crítico agregaba: «Es natural que la divulgación de estos films haya sido procurada por el Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba» (Alsina Thevenet, 1959). En abril de 1960, una función titulada «Formas del cortometraje cubano» de Cine Club del Uruguay incluyó *Cooperativas Agropecuarias* (Canel, 1959), una película que explicaba a los campesinos las ventajas de la creación y organización de una cooperativa que podía ser agrícola y de ganado, *Sexto aniversario*, *La vivienda*, y *Esta tierra nuestra*.²³ Al ver los cortometrajes en esa ocasión, el crítico Carlos Álvarez (1960) señaló que esos títulos «ratifican el surgimiento de una nueva cinematografía latinoamericana comprometida en la realización de temas sociales, hecha con más entusiasmo que medios técnicos, con más talento que recursos económicos». Poco después, en julio y agosto, el IV Festival Internacional de Cine Documental y Experimental del SODRE seleccionó en su programa *Esta tierra nuestra*, *La vivienda* y otro cortometraje cubano producido por el Municipio de La Habana titulado *Ahorre agua* (Municipio de la Habana, 1960).²⁴

Uno de los factores que podría explicar esta temprana circulación de las primeras películas del ICAIC en Uruguay es el lugar que aparentemente asignaba a Montevideo la política cultural de la Revolución. En julio de 1960, una nota en el Suplemento de Cultura de *El Popular* comentaba que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Revolucionario había puesto en marcha «un nuevo sistema de servicio cultural en el extranjero». Diez «distritos culturales» con sus respectivos «Centros» y «Consejeros Culturales», habían sido creados. Montevideo era el centro de la región

21 Como explica Juan Antonio García Borrero (2007), tanto la sección cinematográfica del Ejército Rebelde (enero) que formaba parte de la Dirección Nacional de Cultura del Ejército Rebelde como el ICAIC (marzo) se originaron como acciones paralelas que en ese mismo año terminarían confluyendo. Más precisamente, entre mayo y junio, cuando los integrantes de la sección fílmica de la Dirección de Cultura se incorporaron al ICAIC (García Borrero, 2007, pp. 35 y 36).

22 *Sexto aniversario* es la primera película realizada totalmente por el ICAIC (García Borrero, 2007, p. 36).

23 La función estuvo acompañada por una charla que ofreció la crítica y agregada cultural de la Embajada de Cuba en Uruguay en ese momento, Fornarina Fornaris (Programa de Cine Club del Uruguay, abril 1960, CDC-CU), quien, por otra parte, escribía sobre la cultura uruguaya en la publicación cubana *Revolución* (Fornaris, 1961). Agradezco a Mariana Amieva por esta valiosa fuente.

24 En el programa, una cita de Tomás Gutiérrez Alea presenta *Esta tierra nuestra* señalando que «ha querido dar a conocer, en primer lugar, las condiciones de miseria y explotación en que siempre ha vivido el campesino cubano. Y al mismo tiempo presentar dramáticamente la forma en que este habría de organizarse e integrarse en su lucha contra la tiranía». Para el caso de *La vivienda*, el programa señala: «*La vivienda* enfoca el hasta hoy dramático problema de la habitación en Cuba y no el modo de resolverlo por la Revolución».

de Sudamérica, salvo los países bolivarianos y Guayanas (que tendrían su centro en Caracas) (La cultura cubana en el mundo, 1960). Si bien esto da cuenta de la importancia oficial que se le otorgaba, también es cierto que los films viajaban en las valijas de quienes cumplían un favor, como lo aclara el mismo Homero Alsina Thevenet en su nota mencionada arriba. Dicho esto, las películas solas no hacen mucho: es necesario enmarcarlas en un contexto y un marco de prácticas para que su potencial político pueda desplegarse. Ese marco lo ofreció el Movimiento de Solidaridad con Cuba. Según el relevamiento que realicé en el semanario *Marcha*, y teniendo en cuenta que a fines de 1959 ya circulan en Uruguay las primeras películas del ICAIC, el uso político del cine cubano por el Movimiento se hizo más frecuente a partir de 1961.²⁵ En 1963, los avisos en *Marcha* de cine cubano en actos y actividades de la militancia, disminuyen.

Las proyecciones fueron en la calle, plazas públicas, teatros, locales de comités de solidaridad barriales, clubes y salas de cine. Si bien en su mayor parte los avisos no detallan los títulos, sino «cine cubano» o «películas cubanas», algunos de ellos sí lo hacen, pero sin mencionar más datos, ni su temática ni su año, y menos aún su director. Para este trabajo, y con ayuda de otras fuentes, identifiqué el título original del film que no siempre coincide, el año, su director y su tema y elaboré un mapa de las producciones que detallo a lo largo de esta segunda parte. Los primeros que aparecen en 1961 son *Patria o muerte* (Julio García Espinosa, 1960), cortometraje sobre el 1 de mayo de 1960 que incluye reportajes a campesinos, niños, obreros, intelectuales; *Asamblea general* (Tomás Gutiérrez Alea, 1960), sobre la concentración del 2 de setiembre de 1960 y la aprobación de la I Declaración de La Habana; *Congreso de Juventudes* (Fernando Villaverde, 1960), que aborda el Primer Congreso de Juventudes Latinoamericano celebrado en La Habana durante julio y agosto de 1960; *Escuela rural* (Néstor Almendros, 1960, también conocido como *Escuelas Rurales*), una película sobre la nueva enseñanza rural y la creación de una cooperativa escolar; *Los tiempos del joven Martí* (José Massip, 1960), *Tierra olvidada* (Alberto Roldán, 1960), la película sobre los carboneros de la Ciénaga de Zapata, y un último título que no he podido identificar todavía con precisión que aparece como *Epopéya estudiantil*.²⁶

En junio de 1961 circulaba «la película documental sobre la reciente invasión a Cuba».²⁷ No es posible establecer con certeza si se trata del *NIL* n.º 47 (30/4/1961, «¡Muerte al Invasor! Reportaje especial sobre la agresión imperialista al pueblo de Cuba») o si los anuncios corresponden a la proyección de una reedición de ese noticiero que poco después, con el título *Muerte al invasor* (Álvarez y Gutiérrez Alea, 1961), recorrió festivales de cine internacionales (Leipzig RDA y Londres) como denuncia del episodio. También podría manejarse la hipótesis de que tanto el noticiero como la película hayan circulado al mismo tiempo en Uruguay. Para otro evento organizado en esos días en el Paraninfo de la Universidad, convocado como «La mujer habla», se anticipa: «Películas sobre la Invasión a Playa Girón».²⁸ En agosto de 1961, en una exhibición en Casa España se la nombra como *Muerte al invasor*.²⁹ Habría que prestar atención a la circulación de este título, no solo por su rasgo contrainformativo en relación con los medios de comunicación locales, lo cual puede ser un aspecto evidente, no solo de este film, de todo el cine cubano, sino como un discurso potente a la hora de

25 Aunque no he revisado otras fuentes que lo confirmen, considero la hipótesis de que esa producción inaugural del ICAIC probablemente se difundió en ese período (fines de 1959 y 1960) en las actividades de la militancia en apoyo a la Revolución. 1961, por otra parte, es el año en que el gobierno uruguayo echó al embajador cubano, Mario García Incháustegui, declarándolo *persona non grata*.

26 *Marcha*, 17/3/1961, p. 20; *Marcha* 12/5/61 p. 17.

27 *Marcha*, 30/6/1961, p. 2.

28 *Marcha*, 30/6/1961, p. 2.

29 *Marcha*, 28/7/1961, p. 2.

activar una fuerte emotividad, y una responsabilidad política de defender a la Revolución. Es decir, de defender de forma urgente eso que el cine testificaba en distintos cortometrajes documentales: las políticas (y la ideología) que llevaba a cabo el gobierno revolucionario para cambiar el orden social (alfabetizar, repartir tierras, etc.). Pero resulta que, con *Muerte al invasor*, el cine documentaba también cómo los bombardeaban. El ICAIC y la televisión cubana habían filmado los registros que se utilizaron en la película: los enfrentamientos militares, las tropas movilizándose para el campo de batalla, las madres llorando sobre los ataúdes, los muertos; imágenes que testimoniaban y condenaban la «inmoralidad», como señala Malitsky (2013, p. 78), de la matanza de civiles que habían llevado a cabo los norteamericanos. Gerardo Leibner (2012) ha destacado la manera en la que la invasión de abril alertó sobre el peligro que corría la Revolución, impulsó la militancia de apoyo a Cuba, y ha señalado que la definición de una Revolución Socialista tras este acontecimiento, profundizó el sentimiento de identificación (p. 29). De este modo, se podría plantear el rol que tuvo para jugar el cine en ese proceso, la forma en la que esas narrativas de la Revolución profundizaron tanto los lazos afectivos con Cuba como la indignación contra el enemigo común.

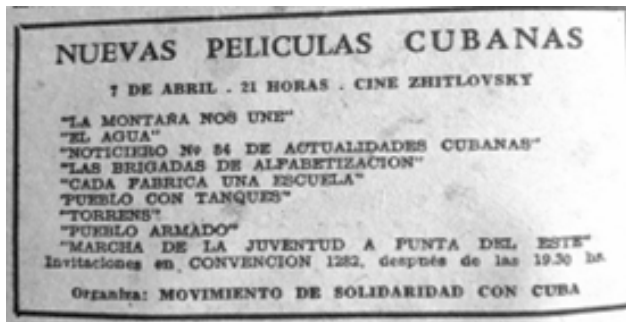
En abril de 1962, el Movimiento organizó una función en el Cine Zhitlovsky que anunció como «Nuevas películas cubanas». En esa oportunidad, las novedades incluyeron: *La montaña nos une* (Jorge Fraga, 1961), cortometraje sobre una maestra rural voluntaria en la Sierra Maestra, *El agua* (Manuel Octavio Gómez, 1960), documental didáctico que enseña a los campesinos sobre los riesgos del agua no potable; el noticiero n.º 84 (15/1/1962) que informaba, entre otras cosas, sobre el protocolo comercial entre Cuba y la URSS, el homenaje al líder antimperialista cubano Julio Antonio Mella, e incluía entrevistas al presidente de Brasil, João Goulart y al gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola; *Las brigadas de alfabetización*, título que probablemente correspondía a la edición del *NIL* n.º 82 (1/1/1962) que cubre el cierre de la Campaña Nacional de Alfabetización con el acto en la Plaza de la Revolución en el que se declaró a Cuba territorio libre de analfabetismo; *Cada fábrica, una escuela* (Ildefonso Ramos, 1961), sobre las brigadas de alfabetización; *Torrens* (Fausto Canel, 1960), sobre la reconversión de un antiguo reclusorio para delincuentes juveniles; *Cuba, Pueblo armado* (1961), del reconocido documentalista holandés Joris Ivens, que retrata la formación de las milicias y la derrota de un grupo de contrarrevolucionarios en las montañas; y por último, *Marcha de la Juventud a Punta del Este*, probablemente, la edición completa o parcial del noticiero n.º 87 mencionado antes («Punta del Este: nueva derrota del imperialismo»).³⁰ Como adelanté en la primera parte, en esta función en el Zhitlovsky, la reciente movilización juvenil se incorporaba simbólicamente a las narrativas de entrega y sacrificio por la Revolución de las películas cubanas de ese programa, activando, posiblemente, un sentido de pertenencia y participación de los uruguayos en el imaginario del Proyecto revolucionario Cubano, incluso, latinoamericano. Salvo una función en 1964, no he encontrado más fuentes sobre la circulación de este noticiero en este período, pero consideraría muy probable que su proyección haya sido frecuente.³¹ Lo que intento destacar, conectando ahora las dos partes de este artículo, es

30 De este programa, el único título que no he llegado a identificar al cierre de este artículo es el que aparece como *Pueblo con tanques*, *Marcha*, 30/3/1962, p. 4.

31 La función a la que me refiero pertenece a un programa del Cine Club de la Juventud Comunista de 1964, una experiencia de la que sabemos muy poco todavía. Con el título «Punta del Este: nueva derrota del imperialismo» y un paréntesis que aclaraba «Filmada en el Uruguay por realizadores cubanos, incluyéndose la “marcha de la juventud”», el noticiero se programó a fines de setiembre de ese año —y esto es, en plena ruptura de las relaciones de Uruguay con Cuba—, en el Cine Renacimiento y junto con otras películas: el cortometraje uruguayo *Como el Uruguay no hay* (Ulive, 1960), el documental *Por qué nació el ejército rebelde* (José Massip, 1960) sobre los campesinos antes de la Revolución; *Adelante* (Santiago Álvarez, 1961), sobre las milicias reorganizadas tras la amenaza de invasión, y *Muerte al invasor*, entre otras películas. Archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la policía uruguaya, p. 19. (agradezco a Vania Markarian por este documento).

que al interpretar el uso político de este noticiero en Uruguay —o, en el caso de encontrar otro de los noticieros que, como he mostrado, ofrezca registros de las manifestaciones de los uruguayos por Cuba— no solo habría que atender a su discurso antimperialista y prorrrevolucionario, o su cobertura de los hechos, sino también, a la manera en la que funcionan estas imágenes de solidaridad y militancia para los propios uruguayos. Me refiero a considerar, por ejemplo, su posible resignificación como parte del repertorio de la propia memoria política del Movimiento.

Figura 3. Aviso en *Marcha*, 30/3/1962, p. 4



Cierro esta segunda parte con una trama que conecta el cine con la militancia por Cuba desde otra práctica cinematográfica, la de filmar. Se trata de un colectivo autodenominado Grupo 4 que habría intentado concretar una realización sistemática de películas en apoyo a Cuba en esa coyuntura pos revolucionaria (Domínguez, 2013). Sus integrantes eran Walther Dassori, director de la Cinemateca Uruguaya, cuyas críticas se publicaban en esos años en *El Popular* y luego en *Época*; el fotógrafo, realizador, cineclubista José Bouzas, que había viajado a Praga gracias a una beca para perfeccionarse como camarógrafo en 1960; el crítico de cine de *El Popular* (desde 1957) Oribe Irigoyen, que, en febrero de 1961, había ofrecido una conferencia en la casa de la Juventud Comunista titulada «El cine cubano», y otro realizador y crítico, Omero Capozzoli (Bouzas, 1960).³² En una crónica aparecida en el Suplemento de Cultura de *El Popular*, Dassori (1962) detalla, en primer lugar, la filmación de un documental sin sonido en 16 mm de la marcha de los obreros (en huelga) de los frigoríficos de Fray Bentos a Montevideo; en segundo lugar, la realización de un cortometraje con sonido óptico de propaganda política de la nueva agrupación de izquierda Frente de Izquierda de Liberación (FIDEL) para las elecciones de ese año que se llamaría *Y en eso llegó el F.I.DEL.*, y en tercer lugar, otra película «ya casi completada» sobre la marcha de la juventud uruguaya desde Montevideo a Punta del Este. Este último «documental» incluía recientes actos de apoyo a la Revolución (Dassori, 1962). Estas realizaciones, aclara Dassori, están «destinadas al Movimiento Nacional de Apoyo a la Revolución Cubana», y cierra el párrafo sembrando misterio: «Hay alguna cosa más. No cabe aquí». Si bien he visto los dos primeros cortometrajes, todavía no he encontrado más fuentes que amplíen la información de esta última película sobre la marcha.³³ Inspeccioné fotogramas en 16 mm de la colección Dassori (Archivo Fílmico de Cinemateca Uruguaya) que muestran una actividad concreta: el Acto Manifiesto del Comité de

32 Bouzas trabajó para la distribuidora de películas soviéticas en Uruguay Artkino Pictures en los años sesenta, pero al cierre de este trabajo no he confirmado que, en ese momento, 1962, estuviera haciéndolo. Sobre la crítica de cine cubano de Irigoyen (1961). La dirección postal del Grupo 4 era la de Cinemateca Uruguaya.

33 Sostengo la hipótesis de que la película fue finalizada y que una copia posiblemente se envió a Cuba, aunque la Cinemateca de Cuba no la tiene (L. Castillo, comunicación personal, abril, 2022).

intelectuales y artistas en apoyo a Cuba que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el 2 de diciembre de 1960.³⁴ De continuar con esta línea de investigación con el archivo, es probable localizar más imágenes de las actividades del Movimiento. A su vez, y como hipótesis sobre el interrogante planteado en la primera parte de este trabajo, Bouzas y Dassori (este último tenía su propia cámara de cine) podrían ser quienes registraban los actos y enviaban las imágenes a Cuba.³⁵

Figura 4. Capturas de fotogramas /negativos con cámara de celular



Archivo Fílmico Walther Dassori (Archivo Fílmico de Cinemateca Uruguaya)

Algunas reflexiones finales

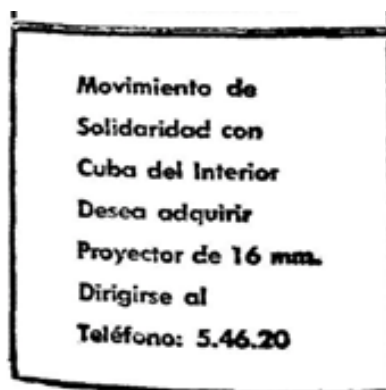
Al estudiar la presencia de noticias sobre Uruguay en el *NIL* durante la primera mitad de los años sesenta, como hice en la primera parte de este artículo, no solo intento aportar a la historia del cine en Uruguay, sino también señalar el valor del noticiero cubano como fuente para la historia del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Uruguay (de sus repertorios, consignas, ilustraciones, afiches, pancartas, cantos u oradores); un Movimiento que durante ese período tuvo una importante presencia y visibilidad en el espacio público con demostraciones masivas. Dicho esto, del mismo modo que en estos años fue evaluado, como mencionaba en la introducción, como uno de los

34 Así fue anunciado este acto: «¿Por qué los intelectuales uruguayos defienden la Revolución Cubana? Hablarán: Luis Gil Salguero y Luis P. Bonavita, y Sergio Benvenuto» (*Marcha*, 2/12/1960, p. 17). Los registros cinematográficos no están digitalizados todavía.

35 Otras trayectorias de uruguayos vinculados al cine merecen ser mencionadas en este período por sus vínculos con Cuba. Por ejemplo, tanto en la delegación que acompañó al Che en su visita a Uruguay en 1961 como en la que viajó con Dorticós a la Conferencia de Punta del Este en 1962, viajaba un camarógrafo uruguayo como parte del equipo del noticiero: Rodolfo López. López había incursionado en la fotografía, en la publicidad, y había llegado a La Habana en mayo de ese año invitado a trabajar en el ICAIC («Rodolfo López Rodríguez, director de Fotografía. Datos biográficos», documentos personales, gentileza de Damián López y Loyda González). Su amigo, Ugo Olive, había arribado unos meses antes, en diciembre de 1960, y es muy probable que fuera este el promotor de su invitación al instituto. Ambos habían sido cofundadores de El Galpón (1949) y habían trabajado juntos en la iluminación de obras teatrales y otros proyectos, como la película *Un vintén pa'l Judas* (Olive, 1959). Olive había sido invitado a dirigir el Teatro Nacional de Cuba y trabajar en la Escuela Nacional de Artes Dramáticas, pero tal como lo había hecho en Uruguay durante los años cincuenta, alternó su actividad entre el teatro y el cine y compartió varios proyectos con López como director de fotografía e iluminador. Mientras que Olive retornaría a Uruguay en 1966, López se quedaría a vivir en Cuba, donde desarrollaría su carrera como iluminador de teatro, director de fotografía de largometrajes e importantes documentales, camarógrafo, y docente (Lacosta Alverich, 2010; Castillo, L., 2021). Si bien este no es el lugar para explayarme sobre la actividad en el cine de ambos en Cuba, destaco la manera en la que sus trayectorias conectan la historia cultural uruguayana con la historia cultural cubana, una línea para indagar a futuro en la perspectiva de las historias conectadas-cruzadas.

Movimientos de Solidaridad con Cuba más importantes de la región, también podría analizarse si el uruguayo fue el que tuvo mayor visibilidad en el *NIL* durante los primeros años sesenta a partir de un estudio comparativo (cuantitativo y cualitativo) con otros movimientos latinoamericanos de apoyo a la revolución presentes en el noticiero.³⁶ En cualquier caso, estas ediciones muestran un momento de la historia uruguaya del que no tenemos tantos registros cinematográficos si lo comparamos con el final de los años sesenta, y en ese sentido, contribuyen a la memoria colectiva de la solidaridad antimperialista en Uruguay a principios de la década. Asimismo, en la segunda parte, he mostrado el papel relevante del uso de las producciones del ICAIC por parte del Movimiento por Cuba durante el mismo período. Aunque algunas de estas actividades se desarrollaron en salas de cine, el uso de films en espacios públicos o locales más informales posiblemente demandó el aprendizaje de la práctica de proyección y la adquisición o préstamos de aparatos. Lejos de sugerir que era una novedad en la política, podría pensarse la hipótesis de que la circulación de estas películas del ICAIC, especialmente en 1961, dinamizó la incorporación de esta tecnología en la militancia, modernizando los medios de comunicación y propaganda.

Figura 5. *Marcha 29/9/1961 p. 23*



Por otra parte, apropiándome de una de las críticas del historiador Juan Antonio García Borrero (2007), el mapeo del cine cubano que mostré en este artículo contrarresta la frecuente «simplificación» de evaluar la importante influencia del ICAIC en América Latina a partir de sus películas más recordadas. Para el caso de Uruguay, pienso por ejemplo en el éxito de *Norw* (Santiago Álvarez, 1965) en los festivales de cine de *Marcha* de 1968, o en la llegada a Montevideo de las películas de Humberto Solás, *Manuela* (1966) y *Lucía* (1968), o *La primera carga del machete* (Octavio Gómez, 1968), una producción más experimental y vanguardista que la que circuló en este período con predominio de estrategias narrativas que reforzaron la misión informativa-educativa de la Revolución (García Borrero, 2007, pp. 94-95). Claro que, en el futuro, el relevamiento de nuevas fuentes podrá ampliar este mapa de las producciones cubanas en Uruguay e incluso, no solo en lo que respecta a sus usos, sino también a sus apropiaciones en esa misma coyuntura histórica. En el cortometraje *Y en eso llegó el F.I.DEL.*, mencionado antes, además de imágenes del film cubano *Sexto Aniversario*, hay registros del noticiero n.º 1., la edición inaugural que cubre la visita de Dorticós a Montevideo. Su presencia en este film uruguayo

36 Como referencia al tipo de estudio que me refero, véase el análisis cuantitativo de las noticias del *NIL* de Chile, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay y la cobertura de los golpes de estado en el Cono Sur en Aréas, 2021.

de propaganda electoral da cuenta de que sí llegó a Uruguay (aunque no lo he localizado aun en otra fuente), y es probable que circulara junto con otros títulos bajo el anuncio de «películas cubanas». Menciono este ejemplo para subrayar, además de la práctica de apropiación de los uruguayos, el rasgo provisorio de esta cartografía, aunque suficiente para destacar que, en el marco del Movimiento por Cuba, las películas constituyeron intercambios materiales concretos entre Uruguay y la isla.

Los films mostraban y evaluaban los avances de las medidas para la educación, la propiedad privada, la vivienda, el trabajo, narrativas muchas veces contrastadas con el pasado de explotación y de inequidad que reforzaban la moral de la Revolución. Es decir, en el marco del Movimiento, el cine fue una herramienta que además de explicar de qué se trataba la causa que había que defender (el incentivo moral) con acciones solidarias (movilizaciones, actos, etc.) concientizaba al espectador sobre las injusticias del imperialismo y el capitalismo. Junto con las oratorias, los panfletos, los programas de radio, los testimonios de los que visitaban la isla, las películas formaron parte de una red de discursos e imaginarios sobre la Revolución y sobre Cuba que, además de cumplir una función informativa, reforzaban lo común entre los cubanos y los uruguayos: el deseo del cambio social, el anticapitalismo, el antimperialismo, la reforma agraria, la justicia social, la libertad revolucionaria.

Por esta razón, a la agenda ya instalada en la academia sobre el estudio de los diferentes alineamientos de la política uruguaya (especialmente de la izquierda) con relación a la Revolución cubana, habría que añadir otra exploración que distinguiera con mayor especificidad las prácticas culturales que desató. Dinamizado por la circulación internacional de objetos como las películas que aquí he mostrado, aunque también por las publicaciones, los testimonios de los viajeros, la música, etc., este proceso podría analizarse ahondando en las apropiaciones y las resignificaciones de estas transferencias culturales.³⁷ Incluso, en un estudio más extenso se podría pensar en momentos de mayor o menor condensación de estas transferencias. De este modo, ya desde los inicios de la década, se visibilizaría la dimensión cultural de un proceso que amplificó una sensibilidad revolucionaria, antimperialista y latinoamericanista, clave para la articulación política-cultural regional de los años posteriores. Asimismo, este trabajo, podría funcionar como un puntapié inicial para estudiar el uso político del cine cubano por la militancia en apoyo a Cuba en otros países de la región en esos años. Una investigación a mayor escala podría corroborar una sincronidad de esta circulación material e indagar aún más en el potencial político de estas solidaridades organizadas y en el cine como un amplificador de sensibilidades.

Referencias bibliográficas

- ALONSO, J. (2022). Las anchas fronteras de la solidaridad: la campaña de alfabetización cubana desde los comunistas uruguayos (1961). *Cuban Studies*, 51, 86-105.
- ALSINA THEVENET, H. (1959, diciembre 3). Cine de Cuba Nueva. *El País*.
- ÁLVAREZ, C. (1960). Cortometrajes cubanos, S/D. Centro de Documentación de Cinemateca Uruguaya.
- ÁLVAREZ DÍAZ, M. (2012). *El Noticiero ICAIC y sus voces*. La Habana: Ediciones La Memoria.
- AMARAL, C. (2019). O golpe de Estado no Chile e o cinema documental no ICAIC. *DOC online. Revista Digital de Cinema Documentário: n.º extraordinario. Revolução Cubana e Documentário-60 Anos*, 182-200.
- AMIEVA, M. (2022). *La conformación del campo cinematográfico en Uruguay 1944-1963: Políticas públicas, cineclubismo y la emergencia del movimiento de realizadores*. (Tesis doctoral. Universidad de la Plata). Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137016>.
- ARÉAS, C. (2019). Noticiero ICAIC: um olhar cubano experimental e performático sobre as ditaduras latino-americanas. *DOC online. Revista Digital de Cinema Documentário: n.º extraordinario. Revolução Cubana e Documentário-60 Anos*, 137-159.

37 Véase, por ejemplo, el concepto de transferencias de Espagne (2013).

- ARÊAS, C. (2021). *Noticiero ICAIC: les images des Amériques dans les actualités cinématographiques cubaines (1960-1990)*. *ILCEA*, 43. Recuperado de <https://journals.openedition.org/ilcea/13389>
- Aviso del Movimiento de Solidaridad con Cuba. (1962, marzo 30). *Marcha*, p. 4.
- BARJA, I., CALVIÑO, D., y MAGNIEN, A. (2022). L'ICAIC et l'INA mian dans la main. En N. Berthier y C. Arêas (Dirs.), *Noticiero ICAIC: 30 ans d'actualités cinématographiques à Cuba* (pp. 61-76). Bry-sur-Marne: Institut National de l'Audiovisuel.
- BERTHIER, N., y ARÊAS, C. (Dirs.). (2022). *Noticiero ICAIC: 30 ans d'actualités cinématographiques à Cuba*. Bry-sur-Marne: Institut National de l'Audiovisuel.
- BOUZAS, J. (1960, noviembre 25), Un día de trabajo en un atelier de grabación. *El Popular*, Suplemento de Cultura, p. 1.
- BROQUETAS, M. (2015). Una lucha sin fronteras: la derecha «demócrata» y la embestida anticomunista en Uruguay de finales de la década de 1950. *Cahiers des Amériques Latines*, (79), 75-96.
- BROQUETAS, M. (2021). Conservadurismo social y anticomunismo durante los «colegiados blancos» (1959-1967). En M. Broquetas y G. Gaetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra fría, reacción y dictadura* (pp. 153-169). Montevideo: Ediciones de Banda Oriental.
- CASTILLO, L. (2021, mayo 11). Rodolfo López, un uruguayo «aplatanado» en el cine cubano. *Habana Radio*. Recuperado de <http://www.habana radio.cu/articulos/rodolfo-lopez-un-uruguayo-aplatanado-en-el-cine-cubano/>
- CHANAN, M. (2004). *Cuban cinema*. Mineápolis: University of Minnesota Press.
- DASSORI, W. (1962, marzo 23). Cine uruguayo 1961 y cine extranjero que consume el país. *El Popular*, Suplemento de Cultura, p. 7.
- DE LEÓN, J. (2022). Uruguay en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Punta del Este, 1962. *Revista Encuentros: vol. 15, n.º 1. Dossier: Uruguay y la «cuestión cubana». Diplomacia, movilización política y radicalización anticomunista en los sesenta*, 63-89.
- DE SOUSA E SILVA, A. (2019). Os olhos da revolução «internacionalista» os corresponsales de guerra cubanos na África, 1959-1989. *DOC online. Revista Digital de Cinema Documentário: n.º extraordinario. Revolução Cubana e Documentário-60 Anos*, 201-220.
- DEL VALLE DÁVILA, I. (2014). *Cámaras en trance. El nuevo cine latinoamericano. Un proyecto cinematográfico subcontinental*. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio.
- DEL VALLE DÁVILA, I. (2015). *Le nouveau cinéma latino-américain (1960-1974)*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- DEL VALLE DÁVILA, I., GIL MARIÑO, C., y MAIA, G. (2019). Apresentação: Foco no Sul. Estudos comparados e História conectada nos casos do cinema argentino e brasileiro. *Contemporanea. Revista de Comunicação e Cultura*, 17(3), 386-391.
- DOMÍNGUEZ, C. (2013). *24 ilusiones por segundo. La historia de Cinemateca Uruguaya*. Montevideo: Cinemateca Uruguaya.
- ESPAGNE, M. (2013). «La notion de transfert culturel». *Revue Sciences/Lettres*, n.º 1, pp. 1-9.
- FORNARIS, F. (1961, diciembre 2). El teatro de Cuba revolucionaria. *El Popular*, Suplemento de Cultura, p. 3.
- GARCÍA BORRERO, J. A. (2007). *Cine cubano de los sesenta: mito y realidad*. Madrid: Ocho y Medio Libros de Cine.
- GARCÍA FERREIRA, R. (2018, febrero 26). The Cuban Embassy in Uruguay, 1959-1964. *Oxford Research Encyclopedia of Latin American History*. Recuperado de <https://oxfordre.com/latinamericanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-476>
- GARCÍA FERREIRA, R. (2022). «Fuera el imperialismo yanqui de América Latina. Viva la Revolución Cubana»: Uruguayan Anti-Imperialist Students and Eisenhower's Visit in 1960. En P. A. Baisotti (Ed.), *A New Struggle for Independence in Modern Latin America* (pp. 184-211). Nueva York: Routledge.
- GARCÍA FERREIRA, R., y GIRONA, M. (2020). Una «inmensa potencia explosiva». Uruguay y la ruptura de relaciones con Cuba en 1964. En M. C. Míguez y L. Morgenfeld (Coords.), *Los condicionantes internos de la política exterior. Entramados de las relaciones internacionales y transnacionales* (pp. 109-140). Buenos Aires: Teseo Pres.
- GIRONA, M. (2022). «No tocar a Cuba». El movimiento de solidaridad con la Revolución cubana en Uruguay, 1960. *Revista Encuentros: vol. 15, n.º 1. Dossier: Uruguay y la «cuestión cubana». Diplomacia, movilización política y radicalización anticomunista en los sesenta*, 33-62.
- GIROUD, I. (2021). *La historia en un sobre amarillo. El cine en Cuba (1948-1964)*. La Habana: Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano-Ediciones ICAIC.
- IRIGOYEN, O. (1961, febrero 24). El cine cubano. Suplemento de Cultura de *El Popular*, pp. 4-5.

- JACOB, M. (1969). Difusión del cine cubano en Uruguay. En *10 años de Cine Cubano* (pp. 22-23). Montevideo: Departamento de Cine de Marcha.
- LACERDA, G. (2019). Internacionalismo e mimésis política. A voz de Fidel Castro na edição 291 do *Noticiero ICAIC Latinoamericano*. *DOC online. Revista Digital de Cinema Documentário: n.º extraordinario. Revolução Cubana e Documentário-60 Anos*, 119-136.
- LACOSTA ALVERICH, L. (2010) Los que hicieron, hacen y harán posible el cine cubano. *Lacosta Audiovisuales*. Recuperado de <http://lacosta-cine.blogspot.com.ar/2010/09/rodolfo-lopez.html>
- LACRUZ, C. (2016). Uruguay: la coñezón por el intercambio. En M. Mestman (Coord.), *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina* (pp. 311-351). Buenos Aires: Akal.
- LACRUZ, C. (2020). La Cinemateca del Tercer Mundo en diálogo con la región: películas, visitas, colaboraciones. *Encuentros Latinoamericanos*, 4(2), 137-162.
- LACRUZ, C. (2021a). *Prácticas colaborativas e imaginarios contraculturales en el cine social y político (Uruguay 1958-1973)*. (Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires). Recuperado de <http://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/2787>.
- LACRUZ, C. (2021b). El Noticiero del ICAIC en Uruguay: circuitos y conexiones. En *Colloque Le Noticiero ICAIC: une source El sur/de/pour l'histoire*, Facultad de Letras, Universidad de la Sorbona, París.
- La cultura cubana en el mundo. (1960, julio 15). *El Popular*, Suplemento de Cultura, p. 2.
- LEIBNER, G. (2012). *Camaradas y Compañeros: una historia política de los comunistas del Uruguay*. Montevideo: Trilce.
- MAHLER, A. (2022). Global Solidarity before the Tricontinental Conference: Latin America and the League against Imperialism. En R. Parrott y M. Lawrence (Eds.), *The Tricontinental Revolution: Third World Radicalism and the Cold War* (pp. 43-68). Cambridge: Cambridge University Press.
- MALITSKY, J. (2013). *Post-Revolution Nonfiction Film. Building the Soviet and Cuban Nations*. Bloomington: Indiana University Press.
- MESTMAN, M., y ORTEGA M. A. (2018). Cruces de miradas en la transición del cine documental. John Grierson en Sudamérica. *Revista Cine Documental*, 18, 172-204.
- PACHECO, P. (2018). *Bitácora de cine cubano. Tomo III (Noticiero)*. Madrid: AECID-Ediciones La Palma-Cinemateca de Cuba.
- PARANAGUÁ, P. A. (Ed.). (2003). *Cine documental en América Latina*. Madrid: Cátedra.
- PEREIRA CABRERA, A. (2011). *1961 / Ernesto Che Guevara en Uruguay. Para dar vuelta el mate*. Montevideo: Rumbo Editorial.
- Queremos ver a Cuba triunfante y a todos los cipayos metidos en un cajón (Grito de las Juventudes del Uruguay). (1962, enero 28). *Bohemia*, pp. 58-65 y p. 71.
- REY TRISTÁN, E. (2006). *A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya (1955-1973)*. Montevideo: Fin de Siglo.
- Solidaridad de la clase obrera y el pueblo uruguayo con la Revolución cubana (1960). *Revista Estudios*, 17, 8 -10.
- TORRELO, G., y LACRUZ, C. (2020). Introducción. Cine en América Latina: dinámicas de un intercambio histórico. *Encuentros Latinoamericanos*, 4(2), 1-7.
- VILLAÇA, M. (2010). *Cinema Cubano: Revolução e Política Cultural*. San Pablo: Alameda.
- VILLAÇA, M. (2017). Os Festivais de Cinema de Marcha e seu papel na constituição de um circuito cultural de resistência política (Uruguai, 1967 e 1968). En C. Amaral de Aguiar, D. Crepaldi Carvalho, E. Morettin, L. Ramos Monteiro y M. M. Adamatti (Orgs.), *Cinema e História: circularidades, arquivos e experiência estética* (pp. 275-301). Porto Alegre: Editora Sulina.
- VILLAÇA, M. y SILVA, A. (2022). Escolas internacionalistas da Ilha da Juventude: Formação revolucionária de jovens africanos em Cuba (anos 1970 e 1980), *Varia Historia*, 38(76), 195-225.